

Iván LLAMAZARES VALDUVIECO

Periferias conservadoras. Un análisis comparativo de la
evolución del conservadurismo argentino.

Director: Manuel Alcántara Sáez

Tesis doctoral presentada en el Departamento de Ciencia
Política y de la Administración

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Universidad Complutense de Madrid

1994

Iván LLAMAZARES VALDUVIECO

Periferias conservadoras. Un análisis comparativo de la
evolución del conservadurismo argentino.

Director: Manuel Alcántara Sáez

Tesis doctoral presentada en el Instituto Universitario
Ortega y Gasset

Universidad Complutense de Madrid

1994

INDICE

Preámbulo	v
Introducción	1
1.Introducción metodológica. Las comparaciones sincrónicas y diacrónicas en el análisis de los fenómenos sociales	9
1.1.La comparación en el análisis de los fenómenos sociales.....	10
1.2.Algunas características de los análisis desarrollados en esta investigación.....	15
1.3.Aplicación de técnicas basadas en el álgebra booleana en el estudio de procesos sociopolíticos complejos.....	21
2.Antecedentes históricos e institucionales de la formación de los partidos políticos en la Argentina	25
2.1.Algunas notas generales sobre el sistema institucional argentino.....	26
2.2.Antecedentes históricos del proceso de formación de los partidos políticos en la Argentina: el orden conservador y su crisis (1880-1916).....	30
3.Representación política de las clases altas y formación de las fracturas políticas en la Argentina (1890-1930)	36
3.1.El radicalismo y la emergencia de la política de masas.....	41
3.1.1.La emergencia del radicalismo.....	41
3.1.2.Clases medias y radicalismo.....	44
3.1.3.Las características de la fractura política y la apertura del sistema político.....	47
3.2.Burguesía pampeana y conflicto político durante las Presidencias radicales (1916-1930).....	48
3.2.1.La representación de los intereses de las clases altas.....	48
3.2.2.El golpe militar de 1930.....	54
3.3.Conflictos socio-políticos, burguesía y partidos políticos.....	60
3.3.1.Partidos políticos y fracturas socio-políticas en la Argentina.....	60
3.3.2.Factores socio-económicos afectando a la naturaleza de las fracturas políticas.....	64
3.3.3.Algunos efectos de la primera fractura política en el proceso de incorporación de la clase obrera.....	71
3.3.3.1.Algunas diferencias entre la emergencia del	

radicalismo y la del peronismo.....	72
3.3.3.2.La movilización de la clase obrera.....	73
3.3.3.3.La articulación política de la burguesía.....	75
3.3.4.Representación de las clases altas y quiebra democrática.....	78
3.4.Conclusiones.....	83
4.El conservadurismo en las elecciones de 1916 y 1928. Estructuras sociales, diferencias regionales y conflictos políticos.....	89
4.1.La fallida articulación de una coalición antiradical en las elecciones presidenciales de 1916...	90
4.1.1.El desafío radical tras la reforma electoral de Sáenz Peña.....	90
4.1.2.La articulación de la coalición antiradical.....	91
4.1.3.La configuración territorial de los resultados de las presidenciales de 1916.....	96
4.2.Las elecciones presidenciales de 1928.....	99
4.2.1.La formación de la candidatura antiyrigoyenista..	99
4.3.La relevancia general de las elecciones presidenciales de 1928.....	103
4.2.3.Los resultados de la elección de 1928.....	104
4.3.Algunos condicionantes de la debilidad del conservadurismo argentino. Una comparación interprovincial.....	106
4.3.1.El análisis de los factores relacionados con el vigor del conservadurismo argentino.....	106
4.3.3.Las elecciones presidenciales de 1916.....	117
4.3.4.Las elecciones presidenciales de 1928.....	122
4.4.Algunas observaciones comparativas: los factores estructurales y su contexto político.....	131
5.La transformaciones ideológicas del discurso liberal-conservador.....	138
5.1.Introducción.....	139
5.2.Pinedo y Alsogaray: algunos detalles biográficos..	140
5.3.Liberalismo, economía y política en Federico Pinedo y Alvaro Alsogaray.....	147
5.3.1.Liberalismo y economía.....	148
5.3.2.Política criolla.....	155
5.3.3.Orden republicano y liberalismo.....	164
5.4.Liberalismo y crisis social.....	167
5.4.1.Orden social y crítica conservadora del liberalismo.....	171
6.La derecha liberal-conservadora a la salida de la dictadura militar.....	183
6.1.Radicalismo, peronismo y derecha en la Argentina..	184
6.2.Características comunes de los partidos de derecha en Argentina.....	186

6.3.La articulación de las opciones liberal-conservadoras tras la conclusión de la primera experiencia peronista.....	189
6.3.1.Intentos de articulación política liberal-conservadora anteriores al "Proceso de Reconstrucción Nacional" (1955-1976).....	189
6.3.1.1.Iniciativas lideradas por Alvaro Alsogaray....	189
6.3.1.2.Otras iniciativas de construcción de una coalición conservadora.....	192
6.4.La Alianza Popular Federalista como antecedente de la Alianza del Centro.....	195
6.5.Las características principales de la articulación de las fuerzas de la derecha tras la primera experiencia peronista. Los principales factores de sus divisiones.....	197
6.6.Las relaciones de las fuerzas políticas de la derecha con el gobierno militar (1976-1983).....	200
6.7.La formación de la Unión del Centro Democrático....	201
6.8.Las elecciones de 1983 y sus factores políticos determinantes.....	204
6.9.La recreación de la alternativa liberal conservadora.....	206
6.9.1.La crisis del modelo económico y el fortalecimiento de la derecha durante los años ochenta.....	206
6.9.2.La conformación de las alianzas nacionales conservadoras.....	211
6.9.3.Los ejes de la intervención política de la UCEDE.....	213
6.9.3.1.Economía.....	213
6.9.3.2.La cuestión militar.....	216
7.La élite de la UCEDE. Una mirada a sus parlamentarios.....	222
8.Neoliberalismo y periferización territorial. El conservadurismo en las elecciones parlamentarias de 1989.....	235
8.1.Factores políticos y organizativos.....	239
8.1.1.Continuidad en la organización del centro-derecha.....	239
8.1.2.Fuerza conservadora durante la primera fase democrática (1916-1930) y en la emergencia del peronismo.....	247
8.2.Condición territorialmente periférica de las provincias.....	250
8.3.Factores socioeconómicos.....	253
8.3.1.Desarrollo socioeconómico de las provincias	
8.3.2.Nivel cultural de las poblaciones periféricas....	259
8.4.Políticas públicas durante los gobiernos militares.....	262
8.5.El análisis booleano de la fuerza electoral de	

la derecha en las elecciones de 1989.....	266
8.6.Conclusiones.....	278
9.Conclusiones: la periferización del conservadurismo argentino.....	285
9.1.La derecha argentina y los conflictos en torno al modelo socio-económico.....	287
9.2.Territorio y derecha a lo largo del siglo: del conservadurismo de las periferias al conservadurismo regionalista.....	291
9.2.1.Una interpretación de las fracturas territoriales dentro del conservadurismo.....	293
9.2.2.La periferización del conservadurismo tras el surgimiento del peronismo.....	296
9.3.La fallida recreación de un liberal- conservadurismo de ámbito nacional y las perspectivas de la derecha argentina.....	299
Obras citadas.....	305

PREAMBULO

Esta tesis aspira a aportar alguna luz a una de las características más sorprendentes de la política argentina de este siglo: la debilidad de las organizaciones políticas conservadoras. Con este fin, esta investigación analiza la forma en que se conformaron los conflictos políticos en la Argentina y como tales conflictos se reflejaron en las pugnas entre partidos. Más específicamente, esta tesis pretende determinar las razones fundamentales que impidieron la formación de una alternativa conservadora estable a principios de siglo y explicar algunos de los rasgos fundamentales de las transformaciones del conservadurismo en aquel país. Pese a circunscribirse a la Argentina, su orientación no es sólo histórica sino también comparativa, en la medida en que analiza determinados patrones de la inserción política del vector conservador en diferentes fases de este siglo y en que apunta ciertos contrastes significativos entre las distintas provincias argentinas en este terreno.

La relevancia de la debilidad de los partidos conservadores para la evolución política argentina no es cuestión que admita demasiadas dudas, a juzgar por las observaciones a este respecto de buena parte de los estudios sobre aquel país. La inestabilidad de los distintos regímenes políticos que sucedieron a la primera fase peronista se relacionaba sin duda con las constricciones y desajustes generados por una sociedad con características sociales y económicas bien específicas (O'Donnell 1978). Esa inestabilidad no era ajena, además, a las peculiaridades del sistema argentino de partidos y a la

articulación y representación política de los intereses de las capas sociales altas en aquel país. Esta es una de las razones básicas por las cuales la comprensión de la inestabilidad argentina de las épocas recientes requiere de una explicación satisfactoria sobre la incapacidad de ciertos grupos sociales para crear partidos políticos estables. Con este fin, esta tesis pretende explicitar algunos de los factores que impidieron la conformación de una fuerza política conservadora y mostrar ciertos patrones generales de la evolución de este vector en la vida política argentina.

Mi interés por la política argentina se remonta (pero no precede) a la lectura de la obra de Guillermo O'Donnell El Estado Burocrático Autoritario. De la lectura de aquel libro, prácticamente el primero con que me enfrenté sobre la política de aquel país, y de mi curiosidad por la fase democrática abierta en 1983, nació la idea de analizar, comparativamente, algunos aspectos de los procesos transicionales español y argentino. Aquella idea dió lugar luego a un proyecto de investigación sobre transiciones políticas. La ayuda que me otorgó la Comisión Nacional Quinto Centenario me permitió viajar a Buenos Aires en septiembre de 1989 y familiarizarme con la realidad política argentina.

Dicha ayuda me permitió también conocer al Profesor Manuel Alcántara. Manuel Alcántara me alentó a trabajar sobre la vida política argentina y me orientó en mis primeros pasos en este terreno. Los cursos impartidos en el programa de doctorado sobre América Latina Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset

(especialmente los de Manuel Alcántara, Ezequiel Gallo y Marcelo Cavarozzi), me estimularon a indagar en los procesos históricos que determinaron algunas de las características especiales del conservadurismo argentino.

Sucesivas becas de AIETI y de la Universidad Complutense me permitieron iniciar dicha investigación y viajar a Buenos Aires en septiembre de 1990. Como en el viaje anterior, en Buenos Aires pude contar con la generosa ayuda de Vicente Palermo y Mercedes Azoratti. Los ángulos de análisis elegidos para la realización de esta tesis son, sin embargo, posteriores a esa fase, y tienen su origen en mis estudios de doctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estudios que han sido posibilitados por la obtención de una beca Fulbright/MEC en 1991.

Esta investigación no habría sido posible sin la ayuda de ciertas personas. Entre ellas quiero destacar, en primer lugar, a mi director de tesis, Manuel Alcántara. Sin su apoyo y su estímulo intelectual esta tesis habría sido difícilmente posible. El marco analítico que se halla en la misma debe bastante al sesgo comparativista que él ha estimulado entre sus alumnos de doctorado. Asimismo, sus observaciones específicas, fundamentadas en un conocimiento detallado de este y otros muchos casos, han ayudado a salvar algunas de las deficiencias teóricas y empíricas de esta tesis.

Mi deuda intelectual se extiende a otras personas. Ezequiel Gallo en Madrid y Evelyne Huber Stephens, Lars Schoultz y Jonathan Hartlyn en Chapel Hill, han leído distintas partes de

esta investigación. Entre ellas se encuentra mi tesis de Master en UNC (de la cual el capítulo tercero constituye una versión aumentada), premiada por el Institute of Latin American Studies de UNC. Todos ellos han realizado críticas altamente valiosas a algunos de los argumentos desarrollados en esta tesis. En especial, Jonathan Hartlyn ha revisado, de forma paciente y rigurosa, un buen número de sus capítulos. Sus críticas han sido siempre de la mayor utilidad a la hora de definir, cribar y clarificar los argumentos que he desarrollado en esta investigación. Como las otras, estas críticas no han sido necesariamente correspondidas por reelaboraciones afortunadas.

Introducción

A diferencia de lo que sucediera en otras sociedades, tanto europeas como latinoamericanas (piénsese, por ejemplo, en los casos de Chile o Colombia), los grupos conservadores argentinos no encontraron una forma estable de organizarse políticamente y de obtener un apoyo electoral suficientemente importante. Esta incapacidad es tanto más notable cuando se tienen en cuenta el vigor económico de la burguesía pampeana y las dificultades que la misma experimentó, especialmente a partir del surgimiento del peronismo, para definir en su favor el modelo socio-económico argentino (ver especialmente O'Donnell 1978). Como consecuencia de tal debilidad organizativa, se ha argumentado a menudo (Di Tella 1971), tales sectores sociales apoyaron, cíclicamente, el establecimiento de regímenes autoritarios a partir de 1930.

Esta tesis intenta arrojar algo más de luz sobre la debilidad histórica, en el terreno político y electoral, del conservadurismo argentino, así como mostrar algunos trazos centrales de su evolución política. Una respuesta enteramente satisfactoria a esta pregunta queda fuera del alcance de esta investigación, tanto por las limitaciones de su autor como por la complejidad que caracteriza a este objeto de estudio. A pesar de ello, esta tesis doctoral intenta proporcionar, a través del análisis de aspectos y singladuras históricas de carácter crítico, ciertas claves que ayuden a la comprensión de la naturaleza y evolución del conservadurismo argentino.

Para desarrollar esta tarea he analizado, de un modo comparativo, la conformación y evolución del vector político

liberal-conservador durante la etapa formativa de los partidos políticos argentinos, primero, y durante la fase democrática abierta en 1983, después. He decidido establecer esos dos marcos temporales de comparación por diversos motivos. En primer lugar, porque he entendido que el proceso de gestación de los conflictos y partidos políticos en la Argentina tuvo efectos decisivos en fases históricas posteriores, como se intentará mostrar en la primera parte de esta tesis doctoral. En segundo lugar, he optado por tratar la fase abierta por el peronismo sólo en relación a los fenómenos que la precedieron y a aquellos que la sucedieron. La importancia crucial del peronismo y de los procesos socio-económicos a él vinculados no puede ser en ninguna medida minusvalorada. Sin embargo, esta importancia ha favorecido precisamente la producción de análisis sobre tal fase cuya relevancia analítica ha desbordado con mucho el caso argentino (O'Donnell 1978; Collier y Collier 1991). Antes que por responder a todas las preguntas relevantes referidas a la historia del conservadurismo argentino, esta investigación ha optado por investigar las vertientes menos exploradas de este fenómeno. Es por estos motivos que el impacto de la primera fase peronista sobre el conservadurismo no es objeto de investigación específica en esta tesis doctoral.

En el desarrollo de esta investigación, he intentado articular, comparativamente, el análisis de los conflictos políticos del primer tercio de siglo con el de la presencia conservadora en la fase democrática abierta en 1983. Sólo

recientemente han empezado a aparecer estudios que aborden la evolución histórica del conservadurismo argentino (Gibson 1992). Esta investigación presta especial atención a la dimensión temporal de este fenómeno, pero lo hace con una orientación distinta, en la medida en que pretende evaluar, comparativamente, como se han articulado algunas de las secuencias evolutivas del conservadurismo argentino y como esa articulación ha ido dando lugar a mutaciones parciales en la naturaleza de este fenómeno político. A fin de mostrar algunos de los rasgos básicos de estas transformaciones, he comparado la distinta inserción territorial de los conservadores dentro de la Argentina. A tal objeto, he aplicado técnicas de análisis booleano a las elecciones de 1916, 1928 y 1989. Tales técnicas pueden permitir sopesar la influencia de ciertos factores (políticos y estructurales) en el distinto peso electoral del conservadurismo argentino. Además, estos análisis intentan resaltar los cambios más relevantes que han tenido lugar dentro de la escena política del conservadurismo argentino. Las técnicas booleanas no están orientadas a la elaboración de un modelo que explique, de manera cuantitativa, el caudal específico del voto conservador. Su utilidad reside, más bien, en mostrar qué factores se han combinado en la manifestación (o no manifestación) de un determinado fenómeno en cada uno de los casos estudiados, entendidos éstos últimos a su vez (cada una de las provincias argentinas) como unidades de análisis significativas.

Esta investigación se centra especialmente en los

componentes político-organizativos del liberalismo conservador argentino. Es por esto que se ha optado por no dar una definición ideológica precisa del conservadurismo salvo cuando se ha analizado la transformación neoliberal de este vector político, en la segunda parte de esta investigación. Sólo en ese ámbito se han discutido de manera específica las diferencias entre unas y otras variantes ideológicas dentro del ámbito de la derecha (básicamente, entre el liberalismo clásico y el conservadurismo). En el resto de esta investigación, se ha adoptado una visión situacional (aunque con algunas especificaciones) del fenómeno conservador (Huntington: 1957). En esa visión, el conservadurismo es caracterizado por su carácter socialmente reactivo. En el caso argentino, la reacción conservadora se generó, en primer lugar, frente a las demandas de apertura política emanadas del radicalismo y, en segundo lugar, frente a las constricciones que el modelo socio-económico inaugurado por el peronismo imponía sobre la autoridad social y los recursos económicos de las clases altas.

Esta definición toma a las clases altas, siguiendo el sugerente trabajo de Gibson (1992), como grupo social de referencia del polo conservador. A diferencia de éste, sin embargo, la vinculación central entre conservadurismo y clases altas está planteada en el contexto (en la "situación") de los retos específicos confrontados por los conservadores. En ese terreno, como se señalará en distintos momentos de esta tesis, el solo énfasis en el vínculo entre clases sociales y organizaciones políticas impide tomar en cuenta dos aspectos

fundamentales. Por un lado, la importancia de los retos específicos confrontados por esos actores y su habilidad, por tanto, para articular coaliciones sociales conservadoras. Por otro, en relación directa con este último punto, el impacto de de la propuesta político-ideológica desarrollada dentro del ámbito conservador sobre la amplitud de las coaliciones de este signo. Uno de los contrastes más significativos entre la situación del conservadurismo a principios y fines de siglo reside, precisamente, en su diferente capacidad de articular proyectos de actuación política y económica socialmente atractivos en cada uno de estos contextos.

Esta investigación se abre con una introducción metodológica general acerca de la utilidad analítica de las comparaciones sincrónicas y diacrónicas. Tal introducción incluye una descripción de los principios básicos del método booleano, así como una indicación de sus ventajas en una investigación de este tipo. Seguidamente (capítulo segundo), se presentan algunas claves, institucionales e históricas, del sistema político argentino, necesarias a fin de evaluar algunos de los argumentos desarrollados en la primera parte de esta investigación.

En la primera parte de esta tesis doctoral, se aborda la posición del conservadurismo argentino durante el proceso de emergencia de los primeros partidos políticos modernos. En el capítulo tercero se analizan las características de los conflictos políticos en la primera fase democrática y las razones de la no conformación de un partido político

conservador. Este capítulo presenta algunas hipótesis básicas sobre los efectos históricos de los tipos de fractura política que emergieron entonces. El capítulo cuarto analiza, mediante una comparación interprovincial realizada con técnicas booleanas, los factores que afectaron a la fuerza electoral de los conservadores en las elecciones presidenciales de 1916 y 1929.

El capítulo quinto aborda la trayectoria ideológica del liberalismo-conservador argentino y su progresiva evolución hacia posicionamientos neoliberales. Con este objeto, he revisado la obra y actuación política de las dos figuras fundamentales de esta tendencia político-ideológica durante las fases anteriores (Federico Pinedo) y posteriores (Alvaro Alsogaray) al surgimiento del fenómeno peronista.

La tercera parte de esta investigación se centra en las características actuales del liberalismo-conservador argentino. Más específicamente, el capítulo sexto analiza la historia reciente de las organizaciones políticas de la derecha argentina, sus características comunes, divisiones internas e intentos de reconstitución durante la Presidencia de Alfonsín. El capítulo séptimo presenta un análisis de las características sociales y políticas de los diputados del partido neoliberal argentino, la UCEDE. Finalmente, el capítulo noveno analiza los condicionantes de la pujanza electoral de la derecha a partir de una comparación interprovincial de las elecciones parlamentarias de 1989. Este capítulo muestra cuales son los caracteres socio-políticos específicos del conservadurismo

argentino en la actualidad y permite discernir el alcance de las transformaciones experimentadas por este vector político desde su surgimiento.

1.Introducción metodológica. Las comparaciones sincrónicas y diacrónicas en el análisis de los fenómenos sociales.

Este apartado pretende fundamentar la adopción de una aproximación comparativa al estudio del conservadurismo argentino. Estas páginas hacen una breve presentación de las ventajas generales aportadas por el análisis comparado de los fenómenos sociales. A fin de explicitar los fundamentos metodológicos de esta investigación, he prestado particular atención a la diferencia entre las comparaciones sincrónicas y diacrónicas, y, dentro de las primeras, a las comparaciones intranacionales. Finalmente, este apartado describe algunas de las características de las técnicas booleanas aplicadas a la comparación entre las provincias argentinas.

1.1. La comparación en el análisis de los fenómenos políticos.

Como han indicado ya numerosos estudios (Lijphart 1971; Collier 1991), las ciencias sociales confrontan dilemas metodológicos específicos como consecuencia de las peculiaridades de su objeto. En primer lugar, puesto que los fenómenos sociales no son construidos a modo de experimento por el investigador. Este debe, por el contrario, partir de los casos reales (históricos) en los que determinados fenómenos se han presentado. No existe aquí la posibilidad de definir, a partir de las combinaciones de fenómenos que vayan asociadas a aquellas variables que nos interesen, los casos reales en los que se testarán las propias hipótesis. Pues tales casos están ya dados históricamente. Una forma de confrontar esta

dificultad consiste en el empleo de técnicas estadísticas. Las mismas permiten controlar el impacto de las variables que se suponen más relevantes para la explicación de un fenómeno (Lijphart 1971; Lijphart 1975).

Ahora bien, existen razones por las que este tipo de análisis es a menudo de utilidad limitada. En primer lugar, en numerosas ocasiones es difícil contar con el número suficiente de casos requerido por determinadas técnicas estadísticas. Como señaló Lijphart (1971), en las ciencias sociales son frecuentes las situaciones caracterizadas por englobar un número limitado de casos y un número muy alto de variables.

En segundo lugar, las técnicas estadísticas son inútiles cuando las variables que se consideran relevantes no pueden ser cuantificadas por el investigador de manera precisa. En estos casos, la investigación debe descansar en descripciones generales, no pudiendo evaluarse cuantitativamente la interacción entre unos y otros elementos.

En tercer lugar, los métodos estadísticos presentan dificultades cuando se trata de evaluar las forma peculiares en que interactúan las variables. Como indica Ragin (1987), "In multivariate statistical models... the model of causation is typically additive, not conjunctural" (p.64). Este tipo de análisis no puede dar cuenta de aquellos casos en que los efectos de la presencia de una determinada magnitud de la variable x varían radicalmente dependiendo de la presencia o ausencia de otras variables. Por poner un ejemplo relacionado con esta investigación, se podría argumentar que la orientación

partidista de los gobiernos provinciales argentinos puede haber tenido efectos muy diferentes dependiendo de las tasas de analfabetismo existentes en cada ámbito de análisis, e incluso, que las dos variables anteriores pueden haber interactuado de manera muy distinta en presencia de diferentes sistemas de propiedad rural o de niveles de desarrollo económico distintos. Un análisis estadístico de estos fenómenos es simplemente imposible cuando se aborda un número reducido de casos (Evans y Stephens 1988: 730).

Finalmente, buena parte de los análisis científico-sociales no están orientados a la elaboración de hipótesis susceptibles de ser testadas estadísticamente, sino a la explicación de todos y cada uno de los casos (o unidades de análisis) que se consideran teóricamente significativos (sean éstos países, regiones, o instituciones políticas) en relación a la presencia o ausencia de un determinado fenómeno.

El enfoque comparativo es una forma de salvar las constricciones que el objeto estudiado por las ciencias sociales plantea al análisis científico. Pues aquel hace posible el tránsito desde la presentación de las combinaciones únicas que van asociadas a la presencia de un acontecimiento o fenómeno (explicaciones ideográficas, en sentido estricto) (Nagel 1960: 373-74) a la intelección de los vínculos generales (en marcos históricos determinados) que existen entre ciertos fenómenos (explicación nomotética según Nagel). Cuando los casos que se analizan han sido escogidos adecuadamente, la comparación permite establecer que conexiones causales (aunque

probabilísticas) existen entre diferentes fenómenos.

Ese tránsito puede realizarse a través de varios mecanismos. En primer lugar, a través del estudio de las similitudes entre aquellos casos en los que se presenta un idéntico resultado (Stuart Mill 1967; Ragin 1987: 36). Cuando estamos ante dos fenómenos idénticos en casos distintos, son las condiciones comunes a ambos casos las que explican la presencia del fenómeno investigado. Como observa Ragin (1987: 37-38), la limitada utilidad de esta forma de análisis tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que a menudo un mismo fenómeno puede ser resultado de causas muy diversas. En segundo lugar, este método de análisis no permite tener en cuenta la complejidad que puede presentar la interacción entre variables.

Una segunda forma de análisis consiste en comparar tanto casos en los que un fenómeno ocurre como casos en los que no ocurre. Esta comparación permite localizar aquellas características que son comunes a la producción de un fenómeno. Además, este método (denominado método indirecto de la diferencia) tiene en cuenta aquellos casos en los que algunas de esas características, comunes a los casos en los que se presenta el fenómeno analizado, no van sin embargo acompañadas de la producción tal fenómeno. Este tipo de técnica de análisis es susceptible de sufrir la crítica de Ragin antes recogida, relativa a los distintos efectos de fenómenos similares dependiendo de cual sea el contexto en que tienen lugar. De tal modo que, el hecho de que en ciertos casos los fenómenos x e y se presenten conjuntamente, y en otros casos se presente x y no

y, no indica que no exista una relación causal entre la presencia x y la de y cuando otras circunstancias están presentes.

En el contexto metodológico contemporáneo, el primer tipo de análisis equivale a lo que se denomina un diseño basado en los sistemas más semejantes ("most similar systems design"), mientras que el método de la diferencia se aproxima al diseño, defendido por Przeworski y Teune (1970), basado en los sistemas más diferentes ("most different systems design") (Collier 1991: 17 y 29). Mientras que el primer tipo de análisis consiste en seleccionar los casos de tal modo que sea posible "maximizar la varianza de la variable independiente y minimizar la de las dependientes" (Lijphart 1975: 164), este último gira en torno a resultados semejantes producidos por fenómenos muy diferentes. Lijphart ha argumentado (Ibidem.) que el sistema que maximiza la varianza de las variables dependientes no es propiamente comparativo, sino estadístico. Más allá de la justeza de otras críticas a este último tipo de análisis (una de las cuales se recoge más abajo), no parece posible, sin embargo, discutir el carácter comparativo de un estudio como el desarrollado por Przeworski en Democracy and the Market, en el que se analizan los procesos económicos y políticos semejantes seguidos por las sociedades europeas postcomunistas y las sociedades latinoamericanas a partir de contextos previos obviamente distintos. El hecho de que casos muy diferentes produzcan ciertos resultados idénticos sugiere que puede haber algún factor semejante (un "universal") (Teune

1975: 197) explicando tales similitudes. Como ha explicitado Teune, una asunción central en este tipo de análisis es que los casos analizados son independientes (que sus varianzas varían independientemente). Pues en otro caso, lo que explicaría su variación semejante no sería ese factor genérico idéntico afectando a cada unidad, sino el carácter de la relación entre los distintos casos. En terminos generales, como justamente ha reconocido Teune (1975: 196), cuando tal análisis se centra en los integrantes de un mismo sistema, tal asunción es insostenible.

1.2. Algunas características de los análisis desarrollados en esta investigación.

Para analizar la emergencia, formación y evolución de las opciones conservadoras en la política argentina se ha optado por aplicar algunos mecanismos comparativos que mejorasen la formación de hipótesis explicativas y que proporcionasen información suficiente para iniciar la comprobación de dichas hipótesis. En palabras de George y McKeown, "Testing a model against the same data that inspired it at least supplies a reasonably precise idea of how well the model fits the data set" (1985: 40). Este análisis comparativo intenta ir más allá del comentario de algunos de los factores que pueden haber afectado al destino de los partidos conservadores mediante la explicitación, en términos teóricos e históricos, de las vinculaciones que pueden existir entre tales factores y la

variable dependiente. En este sentido, el análisis no se limita a mostrar la combinación de determinados antecedentes y resultados, sino que discute las posibles formas en las que aquellos se han transformado, a través de la toma de decisiones, en éstos (Chilcote 1981: 35).

En especial, el presente análisis pretende superar obstáculos ya mencionados mediante el desarrollo de comparaciones sincrónicas y diacrónicas. Ambas son alternativas orientadas, como señaló Lijphart (1971: 686-87), a aumentar el número de casos tratados por la investigación. La comparación sincrónica tiene lugar aquí mediante la descomposición del objeto de estudio en sus unidades político-territoriales. Como ha sido ya mostrado en numerosos casos (ver especialmente Linz y De Miguel 1966) las comparaciones intranacionales poseen enormes ventajas en la medida en que mantienen constantes buena parte de los factores contextuales (cultura, instituciones políticas, etc.) y permiten abordar el impacto de determinadas variables.

La comparación diacrónica o longitudinal tiene aparentemente motivaciones semejantes, en la medida en que, al estudiar las mismas unidades en momentos distintos, aumenta el número de casos. Sin embargo, como es obvio, esas unidades territoriales experimentan transformaciones que no sólo afectan a las variables específicas cuyo impacto evaluamos, sino también a otras consideradas contextuales. Como señala Lijphart, "the same country is really not the same at different times" (1971: 689).

Además, el hecho de que la variable tiempo sea central en este tipo de comparación afecta a aspectos centrales del análisis. Ello es así en la medida en que los casos se ordenan entre sí como anteriores y posteriores los unos a los otros. Estos últimos no sólo están "determinados" por las variables básicas de nuestro modelo (incluyendo aquí también las contextuales), sino también, en muy diversos modos, por las características de los casos anteriores. A efectos metodológicos, el incremento en el número de casos logrado por las comparaciones diacrónicas es sólo parcial. Las relaciones de continuidad existentes entre casos anteriores y posteriores no consisten sólo en las similitudes de los unos y los otros, sino también en la dependencia de los momentos posteriores respecto a los anteriores. Esta dependencia se revela de formas múltiples. Lo que Stinchombe denominó causación histórica es claramente una de ellas. La misma alude a los efectos de un fenómeno sobre otro mucho después de que aquel haya desaparecido, en la medida en que haya creado patrones de comportamiento que tienden a reproducirse por sí mismos.

Este aspecto secuencial (Bartolini 1990: 556) es central en el análisis diacrónico. Sus efectos sobre la capacidad de análisis son complejos. Por una parte, impiden que se considere como simple aumento del número de casos la introducción de las mismas unidades de análisis en otros momentos del tiempo. Por otro, enriquece en distintos modos la investigación. En primer lugar, porque al introducir la dimensión temporal permite evaluar hipótesis sobre los efectos de una determinada

situación en otras posteriores. Expresado técnicamente, este tipo de análisis permite evaluar la presencia de causas históricas y constantes afectando al objeto de estudio. De este modo, aquellos conceptos del análisis sociopolítico que giran, de un modo u otro, en torno a la categoría de tiempo (como los de coyunturas críticas, equilibrio puntuado, legados históricos, congelamiento, etc.) (Lipset y Rokkan 1967; Bartolini y Mair 1990; Collier y Collier 1991; Krasner 1988), pueden ser revisados a la luz de las revelaciones aportadas por el análisis diacrónico. En segundo lugar, el análisis diacrónico no se limita sólo a determinar los elementos del pasado que inciden en la forma de los presentes, sino que también, a través de lo que se puede denominar análisis hacia atrás, da cuenta de cuales eran las características de las situaciones precedentes, al modo de lo que en la literatura ajedrecística se denomina "retrograde analysis" (Hooper y Whyld 1984: 280). Las ciencias sociales no pueden acceder, por razones varias que se relacionan esencialmente con la extraordinaria variedad de los actores y las acciones sociales, a la elegante simplicidad que este tipo de análisis en el terreno ajedrecístico. Ello no obstante, el análisis histórico se atiene a menudo a las características de esta aproximación, en la medida en que indica que escenarios previos al fenómeno que se estudia están vedados (habida cuenta de la naturaleza de tal evento) y cuales son más probables en la producción de éste último.

En este caso, se ha considerado que la integración de

estos dos tipos de investigación permitía afrontar problemas centrales en la configuración de la posición política conservadora en la Argentina. Las comparaciones sincrónicas, proporcionaban mecanismos claros para testar la importancia de unos y otros factores en la gestación (y persistencia) de opciones conservadoras. Tales comparaciones han sido posibles sobre la base de la desagregación provincial. La misma ha permitido evaluar la posible incidencia (de una manera no estadística, pues el número de casos no lo permitía) de factores de naturaleza estructural e institucional en la mayor o menor fuerza electoral del conservadurismo argentino. Este análisis comparativo se ha centrado en tres procesos electorales: las elecciones presidenciales de 1916 y 1928 y las elecciones al Congreso de 1989.

Por su parte, las comparaciones diacrónicas permitían evaluar la incidencia de las transformaciones sociales y políticas argentinas sobre la evolución de las fuerzas conservadoras. Como señala Skocpol (1984: 383), "the unities of time and place must be broken for the purposes of drawing comparisons and testing hypothesis". En este caso, se ha entendido que, la ruptura de la continuidad histórica era sobradamente compensada por el interés de analizar los fenómenos variantes e invariantes en la evolución de las fuerzas conservadoras argentinas. La utilidad de la comparación diacrónica es también subrayada por Bartolini, quien señala que "per controllare la validita delle generalizzazioni empiriche la combinazione di varianza temporale e spaziale costituisce il

modo piu sicuro di procedere e i disegni della ricerca devone dunque mirare ad esplicitarle entrambi" (1990: 564).

En este sentido, esta investigación ha intentado evaluar en que formas ha afectado la secuencia formativa de los conflictos sociales y políticos a las perspectivas de los partidos conservadores. Es por ello que esta tesis doctoral no toma cada fase histórica como una unidad de análisis enteramente independiente, sino que intenta descifrar cuales son los posibles vínculos entre la una y la otra.

Debido al carácter secuencial de la comparación diacrónica, no sería riguroso presentar este tipo de análisis como fundado en un diseño de los sistemas más diferentes (muy diversas condiciones socioeconómicas e igual debilidad del conservadurismo) por contraposición a una comparación sincrónica, basada en casos muy semejantes. Pues el primer tipo de investigación hipotetiza una cierta relación de dependencia (debido a las características de la variable tiempo) entre uno y otro momento. La relación secuencial de los casos que se investigan se refleja en la interdependencia y multicolinearidad de las variables analizadas (Bartolini 1990: 560). Una característica que, como indica Teune, no es consistente con asunciones centrales en el diseño de los sistemas más diferentes.

En una vena similar, esta investigación intenta combinar métodos comparativos con aproximaciones orientadas al análisis específico de alguna de las variables que afectan a los procesos aquí considerados. Esto es así a fin de combinar las

ventajas de aproximaciones teóricas e históricas respectivamente en el análisis de fenómenos que engloban causación múltiple combinada (Ragin 1987). A mi juicio, esta aproximación es coherente con la importancia que autores como George y McKeown (1985) confieren a lo que ellos denominan "rastreo de procesos" ("process-tracing"). De ahí que esta tesis doctoral incorpore análisis sobre aspectos específicos del sistema político, como es el caso de las transformaciones del vector ideológico liberal-conservador. En vez de aplicar una sola técnica analítica homogénea, esta investigación intentado explotar las distintas posibilidades ínsitas en las aproximaciones convencionalmente aplicadas en ciencias sociales. En el contexto de un estudio particular, esta posición es similar a la defendida por Ragin en su intento de superar dicotomías poco fructíferas entre las estrategias de investigación cualitativas y cuantitativas.

1.3. Aplicación de técnicas basadas en el álgebra booleana en el estudio de fenómenos sociopolíticos complejos.

La necesidad de utilizar un enfoque comparativo por un lado, y la necesidad también de superar los inconvenientes que presentan las técnicas de comparación más convencionales ha llevado a algunos autores a intentar articular técnicas comparativas capaces de dar cuenta de la interacción compleja entre variables (propia de los estudios de caso) sin perder el carácter analítico y parsimonioso presente en los métodos

experimental y estadístico

Con estas miras, Charles Ragin (1987) ha desarrollado técnicas que, aplicando a la comparación reglas derivadas del álgebra booleana, permiten desarrollar análisis comparativos. A diferencia de los estadísticos, estos análisis pueden afrontar situaciones en las que los casos son escasos y en las que se estipulan relaciones causales múltiples y complejas entre las variables independientes. Al mismo tiempo, estas técnicas hacen posible presentar las variables seleccionadas con un grado suficiente de simplicidad analítica.

El método desarrollado por Ragin toma en cuenta todas las combinaciones de aquellos fenómenos que, en los casos a analizar, se estipulan como relevantes en la determinación de la presencia o ausencia de un resultado. En principio, tanto las variables dependientes como la independiente son dicotómicas (están presentes o ausentes), si bien, como indica Ragin, es también posible aplicar este tipo de técnica a variables de intervalo (1987: 86). Tales combinaciones son estudiadas siguiendo técnicas derivadas del álgebra booleana. Para ello es necesario presentar los valores de cada variable en una matriz denominada, como en el caso de la lógica (García Bacca 1936: 72 y ss.), esquema o tabla de verdad. Cuando los datos incluidos en tal matriz son manipulados siguiendo técnicas booleanas, es posible acceder a las combinaciones de fenómenos necesarios y/o suficientes en la producción del resultado que se pretende explicar.

Como señala Ragin (1987: 89), el álgebra booleana presenta

grandes similitudes con la lógica formal. Esto es patente en el caso de las reglas que rigen la transformación de los datos presentes en la matriz. Las principales operaciones realizadas en este tipo de análisis son la adición y la multiplicación. En el primer caso (equivalente a la cláusula "o" en lógica), $A+B=Y$ indica que si A es igual a 1 o si B es igual a 1 entonces Y es igual a 1. La multiplicación (equivalente a la cláusula "y" en lógica) indica una combinación de causas (tomando en cuenta tanto presencias como ausencias) que va asociada a la producción de un fenómeno, de tal forma que, por ejemplo, el producto $ABC=Y$ indica que cuando A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 0, entonces Y es igual a 1 (téngase en cuenta que los valores de la variable son consignados con letra mayúscula cuando el fenómeno de que se trate está presente [1] y con letra minúscula cuando está ausente [0]). Un aspecto crítico del trabajo con el método booleano consiste en el proceso de minimización que conduce a expresiones simplificadas de las causas de un fenómeno. Este proceso es mostrado con más detalle al hilo de la comparación interprovincial de los resultados electorales del conservadurismo argentino en las elecciones presidenciales de 1916 y 1928.

La primera parte de esta tesis incluye una aplicación de las técnicas booleanas a las elecciones presidenciales de 1916 y 1928. La segunda parte de esta investigación aplica la misma técnica a las elecciones al Congreso de 1989. La utilización del mismo tipo de análisis a dos fases históricas diferentes permite calibrar la naturaleza de las transformaciones

políticas, sociales y territoriales del vector político conservador. En especial, esta comparación intenta mostrar como han jugado ciertos elementos estructurales, políticos e institucionales en la conformación del conservadurismo argentino. Estos elementos serán, fundamentalmente, la estructura de propiedad agraria, el nivel de desarrollo económico, las continuidades organizativas de la derecha y la posición territorialmente periférica de las provincias.

La utilización de estas técnicas no está orientada a la producción de un modelo causal que explique las características del conservadurismo argentino, sino al establecimiento de un sistema de contrastes que informe sistemáticamente acerca de las distintas provincias, entendidas como unidades de análisis críticas en un estudio de este tipo. Como se intentará mostrar a lo largo de esta investigación, la incidencia de los factores que se han tenido en cuenta en las comparaciones interprovinciales sólo es entendible en el contexto de los conflictos socio-políticos y territoriales que han caracterizado a cada fase histórica argentina y a partir del conocimiento de la articulación histórica entre los sucesivos patrones de conflicto y oposición política.

2. Antecedentes históricos e institucionales de la formación de los conflictos políticos en la Argentina.

2.1. Algunas notas generales sobre el sistema institucional argentino.

La comprensión de los conflictos políticos que acompañaron a la emergencia de los partidos políticos modernos en la Argentina exige tener en cuenta algunas de las características del sistema institucional de aquel país. Ello es así porque estas últimas modelaron los comportamientos de los actores políticos, determinaron algunos de sus objetivos y métodos de lucha y constriñeron los triunfos y las derrotas de los distintos vectores políticos.

En particular, cualquier análisis de los conflictos políticos argentinos ha de tomar en consideración las formas en que se constituyen instituciones como la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado (prestando especial atención al sistema electoral establecido para la formación de cada una de estas instituciones), así como las competencias de las mismas y las reglas que modulan la relación del presidente de la República con los otros centros de poder político, y en especial con las dos cámaras del Parlamento y los gobiernos provinciales¹.

Uno de los rasgos más característicos del sistema institucional argentino reside en el papel central que atribuye al presidente de la República. Además de controlar el poder ejecutivo nacional, el presidente nombra, con el acuerdo del Senado, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, puede presentar proyectos de ley (Art. 68 de la

Constitución de la Nación Argentina) y tiene la capacidad de vetar las leyes aprobadas por el parlamento (que sólo pueden ser aprobadas contra la negativa presidencial cuando cuenten con dos tercios de los votos de las cámaras parlamentarias a su favor) (Art. 72). Además, el presidente puede arrogarse algunas de las capacidades del Congreso fuera de los períodos de sesiones de éste. Es decisiva, a este respecto, su capacidad para "intervenir" las provincias, esto es, suspender temporalmente la autonomía política de las mismas destituyendo a su gobernador y nombrando otro, generalmente más afecto que el anterior al presidente de la República. Si bien durante los períodos de sesiones la intervención de los gobiernos provinciales precisa de la aprobación del Senado, durante los recesos legislativos el presidente puede disponer discrecionalmente la intervención de los gobiernos provinciales. Como ha mostrado Natalio Botana en su estudio sobre el orden conservador, el recurso a las intervenciones permitió al gobierno nacional favorecer a sus aliados en los ámbitos provinciales y, en general, controlar el orden político en estos últimos. La importancia del control de las situaciones políticas provinciales se percibe mejor si se tiene en cuenta que los gobiernos provinciales tenían, en el surgimiento de la democracia argentina, un papel central en la preparación de las elecciones legislativas y presidenciales. Además, el hecho de que los miembros del Senado fuesen elegidos por las legislaturas provinciales convertía a las provincias, en el caso de que existiese oposición entre el presidente y

esta última cámara, en espacios sobre los que el poder ejecutivo tenía que obtener control. A estos fines sirvieron, por ejemplo, las 93 intervenciones federales realizadas desde 1862 a 1930 (con una media de 1.36 por año) (Rosendo Gómez 1947). La inclinación a intervenir los gobiernos provinciales no era patrimonio de las fuerzas conservadoras, como lo prueba el hecho de que de esas 93 intervenciones 34 se produjeran durante Presidencias radicales (Smith 1974: 75). Ciertamente, estas prácticas fueron posibles también a causa de los patrones no formalizados (o no institucionales) que regían el comportamiento de la clase política². Como luego se verá la combinación de algunos de estos rasgos institucionales con los conflictos sociopolíticos que se fueron generando en la Argentina creó un marco político altamente inestable. Por lo que se refiere a la estructura general del Estado, la intervención consistió, como ha indicado Botana (1977: 125), en el arma que permitiría revertir el aparente triunfo de la periferia sobre el centro.

En general, este diseño institucional otorga a la Presidencia una importancia central en el sistema político argentino. De ahí que las elecciones presidenciales se conviertan en el eje de la política argentina. Un aspecto de ciertas implicaciones de la elección presidencial consiste en su carácter indirecto. La Constitución argentina señala que cada una de las provincias y la capital federal formarán juntas de electores mediante voto directo (cuyo número será el doble de la suma de senadores y diputados que las provincias envían

al Congreso nacional). Las juntas se reunirán cuatro meses antes de concluir el mandato del presidente saliente en las respectivas capitales provinciales y en capital federal, a fin de votar al presidente y vicepresidente (Art. 81). Es de especial relevancia el hecho de que los electores puedan cambiar el sentido de su voto cuando se reúnan las juntas electorales. En primer lugar, porque permite la existencia de maniobras en el colegio electoral. Como luego se verá, tales maniobras fueron decisivas en el caso de la primera elección de Yrigoyen, en tanto que afectaron de antemano los cálculos de los actores políticos y también porque formaron parte del triunfo de Yrigoyen al obtener este los votos, en última instancia, de una facción radical disidente. En segundo lugar, este proceso electoral no exige aparentemente la conformación de alternativas políticas articuladas nacionalmente. Puesto que los electores pueden orientar su voto en el colegio en función de sus preferencias finales, las fuerzas políticas de presencia provincial no están en la obligación de apoyar desde el primer momento candidaturas nacionales, ni tienen porque perder parte de su personalidad en la conformación de una fuerza política nacional, como sucedió en buena medida en las elecciones de 1916 y 1928.

De extrema importancia para el tipo de conflicto generado entre el gobierno y la oposición fueron también los mecanismos a través de los cuales se elegía al Congreso nacional y, dentro de éste, al Senado. Pues esta cámara otorgaba a cada provincia y a la capital federal una

representación de dos senadores, a elegir por las legislaturas en el caso de las provincias. Por consiguiente, el Senado argentino sobrerrepresentaba claramente a las provincias más despobladas del país en detrimento de las áreas más populosas, como la capital federal o la provincia de Buenos Aires. Habida cuenta de la diferente naturaleza sociopolítica de las áreas más desarrolladas y pobladas y de las más atrasadas, y de los conflictos que habían tenido lugar tradicionalmente entre Buenos Aires y el interior, existía la posibilidad de que la fuerza más votada para aquellas instituciones en las que los criterios proporcionales eran más fuertes (la Presidencia y la Cámara de Diputados) no obtuviese mayoría en el Senado (como sucedió en todo momento bajo los mandatos de Yrigoyen). Una combinación de factores institucionales y político-territoriales creaba por tanto unas condiciones muy favorables para que los conflictos políticos se transformasen en conflictos institucionales, reproduciendo los riesgos apuntados por Juan Linz a propósito del presidencialismo en general (Linz 1978: 72-74).

2.2. Antecedentes históricos del proceso de formación de los partidos políticos en la Argentina: el orden conservador y su crisis (1880-1916).

Con la ascension del general J.A.Roca a la presidencia, se inicia un periodo caracterizado por el predominio conservador y la expansion economica. La que ha sido denominada "república

conservadora" (Botana 1977) encuentra su fundamento político en el pacto entre las oligarquías provinciales y un sector de la oligarquía bonaerense (Botana 1977: 156), realizado por la doble vía del Partido Autonomista Nacional y de las instituciones representativas. En efecto, estas últimas, con la Presidencia, el Senado y las gobernaciones provinciales a la cabeza, llegaron a conformar una suerte de cuerpo electoral que, valiéndose de procedimientos fraudulentos, hizo y deshizo en el terreno político, como ha mostrado prolijamente Natalio Botana (1977: 178 y ss.). En cuanto al sistema electoral para la elección de diputados, éste era de carácter mayoritario: la primera lista obtenía todas las actas en distritos plurinominales cuyos límites correspondían a los de las provincias (Botana 1977: 254).

Durante esta fase, las tendencias económicas esbozadas en el periodo precedente cobraron mayor fuerza. La inmigración, mayormente italiana y española, multiplicó rápidamente la población del país³, mientras que la economía, aunque sometida a crisis periódicas (que afectaban directamente a la estabilidad del sistema político, como en el caso de 1890) conocía altas tasas de crecimiento, fundamentalmente por razón del comercio con Gran Bretaña y de las inversiones procedentes de aquel país, en ascenso hasta la primera guerra mundial⁴.

A la presidencia de Roca, caracterizada por la estabilidad política, sucedió, en 1886, la de su cuñado M. Juárez Celman (1886-1890), exgobernador de Córdoba. Durante la misma, y favorecido por la crisis económica del 90, se produjo una

importante crisis del orden conservador. Agrupados bajo la etiqueta de Unión Cívica, grupos provenientes de la tradición del autonomismo bonaerense, del catolicismo político, hostil al PAN a causa de la introducción por este de reformas laicizadoras de la educación en los 80, y otros sectores de ideología democrática protagonizaron, en julio de 1890 la "revolución del parque", saldada con la derrota sangrienta de esta última y con la renuncia de Juárez Celman, quien fue sustituido por Carlos Pellegrini, un aliado de Roca (quien continuó siendo, en la sombra, personaje decisivo de la vida política).

Durante la presidencia de Pellegrini, cristalizó un acuerdo entre los sectores moderados de la revuelta del 90 y el Partido Autonomista Nacional, acuerdo se expresaría en la fórmula (triunfadora) L.Sáenz Peña-J.E.Uriburu para las presidenciales del 92. De tal arreglo se desmarcó, sin embargo, un sector de la Unión Cívica, el cual dió lugar a la formación de la Unión Cívica Radical. Esta última organización se mantuvo en una línea de oposición frontal al orden conservador, exigiendo constantemente la igualdad ciudadana y el sufragio libre. Para llevar a cabo tales fines, radicales solo en un sentido político, la UCR recurrió intermitentemente a la revuelta violenta y al intento de golpe de estado (en 1893, 1904 y 1905), embates éstos que, pese a sus fracasos, pusieron en la vía de la descomposición a la república oligárquica (Cortés Conde 1972: 195-211).

Hasta 1910, los cambios en la Presidencia no fueron

acompañados de cambios políticos sustantivos. A la presidencia de Sáenz Peña sucedió, tras su dimisión en 1895, la de Uriburu, que se prolongó hasta 1898. En ese año, Roca , gracias al fraude y a la abstención radical, retornó a la Presidencia. Durante la misma, la desarticulación del orden oligárquico, expresada a través de las querellas internas (por ejemplo, la de Roca con Pellegrini) y del auge de la oposición radical, se convierten en la cuestión política decisiva.

Por otra parte, bajo su mandato se produjo una reforma constitucional (que elevó el número de ministerios a ocho) y se dieron los primeros pasos, efímeros, hacia la reforma del sistema electoral. A Roca le sucedió, en 1904, M. Quintana, quien tuvo que afrontar ya en 1905 una revuelta radical (con participación de militares). Quintana preparó el camino de la reforma electoral con la que los grupos políticos dominantes, intentaban encarar las demandas democratizadoras. Fue el sucesor de Quintana, Roque Sáenz Peña, quien llevó adelante una completa reforma del sistema electoral, a la que, en cualquier caso, el orden político oligárquico pensaba sobrevivir sin problemas. La reforma electoral de 1912, directamente inspirada en la que el político conservador Antonio Maura implementó en España en 1907, preveía la división del país en tantos distritos como provincias, en los cuales cada votante elegiría un número de candidatos inferior (dos tercios) al de diputados

a elegir (sobre la reforma electoral, Botana 1977: 272 y ss.). La reforma Sáenz Peña incluía también la utilización del padrón militar como censo electoral y la obligatoriedad del voto, medidas estas orientadas a dificultar el fraude. Tanto a través de sus dispositivos contra este último, como del espacio político reconocido a las minorías (mediante la lista incompleta), la ley perseguía asentar y legitimar el régimen político existente. El hecho de que los reformadores consideraran inevitable el triunfo de las élites políticas tradicionales facilitó el desarrollo e implementación de la reforma (Botana 1977: 296-97).

NOTAS

1.Un análisis detallado de la configuración histórica de las instituciones argentinas puede encontrarse en la Historia institucional de la Argentina, de Carlos Sánchez Viamonte. Para un análisis actualizado del sistema político e institucional argentino, ver Alcántara Sáez 1989a.

2.Sobre la articulación general entre de roles formales e informales y su impacto en el comportamiento político ver Searing 1991.

3.En 1890 la Argentina poseía algo más de tres millones de habitantes. En 1895 esa cifra era de 4 millones, y en 1914 se acercaba a los 8 millones (Cortés Conde 1972: 166). En esa última fecha, un tercio de la población del país había nacido fuera del mismo (Rock 1987: 153,165 y 166).

4.En 1889 el Reino Unido suplía el 41% de las importaciones argentinas. En 1887, las islas británicas recibían el 20% de las exportaciones argentinas. En 1907 ese porcentaje ascendía al 40% (Rock 1987: 154-55 y 168). En cuanto a las inversiones británicas, en 1913 estas constituían más del 60% de las inversiones extranjeras en la Argentina (Rock 1987: 169).

3.Representación política de las clases altas y formación de las fracturas políticas en Argentina (1890-1930).

Este capítulo analiza la situación de las clases altas argentinas (básicamente la burguesía pampeana) en la arena política desde la emergencia del radicalismo al golpe militar de 1930. En él se intenta mostrar la naturaleza de los conflictos políticos en que tomaron parte estos sectores sociales, así como seguir los efectos de tales conflictos sobre la evolución política de la Argentina.

Para analizar estas cuestiones, he intentado definir, en primer lugar, cual fue la naturaleza de la coyuntura crítica ("critical juncture") que dió lugar al primer partido moderno de la Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR). Esa coyuntura crítica moldeó los conflictos políticos, así como a los actores que tomaron parte en los mismos. En especial, tal coyuntura definió las características de los partidos políticos argentinos, así como sus vínculos con los grupos sociales. En el desarrollo de este análisis, he tomado como referencias básicas los estudios sobre coyunturas críticas y fracturas políticas ("cleavages") elaborados por Lipset y Rokkan (1967) y por Collier y Collier (1991). La distinción entre fracturas funcionales y culturales elaborada por Lipset y Rokkan (1967) está presente en mi comparación entre el surgimiento del radicalismo y el del peronismo. Sin embargo, he evitado deliberadamente los fundamentos teóricos (básicamente funcionalistas) de los análisis de Lipset y Rokkan. A este respecto, este capítulo pretende mostrar que, a diferencia de

la estructura de conflictos políticos que emergió con el peronismo, la que surgió con el radicalismo no giró en torno a conflictos socioeconómicos. Esta diferencia es crítica a la hora de entender las dinámicas políticas y sociales generadas por estos dos movimientos políticos.

En segundo lugar, este capítulo intenta definir los efectos de aquella coyuntura crítica sobre el sistema argentino de partidos por lo que se refiere a la situación de las clases altas. Collier y Collier (1991) han analizado exclusivamente la integración política de la clase obrera en su estudio sobre la formación de los sistemas de partidos en Latinoamérica. El estudio que sigue analiza las estructuras de conflicto político que precedieron a la incorporación de la clase obrera en el sistema político. Como Karen Remmer (1984) y Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens (1992) han mostrado, los conflictos que dieron lugar a los primeros partidos políticos tuvieron efectos significativos sobre las dinámicas políticas posteriores. En este sentido, he desarrollado un tipo de análisis que mantiene fuertes semejanzas con el que Timothy Scully (1992) ha elaborado a propósito de Chile¹.

A este respecto, he intentado definir algunos de los efectos de la estructura de conflictos políticos de 1890 a 1930 sobre las dinámicas políticas posteriores a 1930. En el desarrollo de este análisis, he comparado las constricciones e implicaciones de este proceso inicial de formación de partidos políticos con la emergencia del peronismo. En palabras de Weber (1971: 85), he intentado mostrar, en el contexto de esta

comparación, por qué estos procesos fueron así y no de otro modo.

En primer lugar he explorado como el modo en que la burguesía pampeana se insertó en el sistema político afectó su capacidad para afrontar el reto peronista durante la década de 1940. En especial, este capítulo sostiene que el hecho de que los conflictos socioeconómicos no fuesen reflejados por el sistema de partidos afectó negativamente la fuerza política de la burguesía pampeana en el largo plazo. Este grupo social no se vió en la necesidad de crear organizaciones políticas estables a fin de confrontar amenazas a sus intereses socio-económicos fundamentales. Como consecuencia, ninguna organización política articuló la defensa de los intereses capitalistas y del modelo económico agro-exportador bajo una identidad de partido. Esto es, no emergió un campo estable en términos electorales e identitarios para la burguesía y, como resultado, este grupo social careció de la preparación necesaria para transformar su preponderancia económica en hegemonía política. A causa de ello, la posición política e ideológica de la burguesía pampeana fue extremadamente frágil a partir de la década de 1940. Cuando las élites estatales, en una situación de crisis política, empezaron a articular coaliciones basadas en conflictos socioeconómicos y centradas alrededor de programas económicos, la burguesía pampeana fue incapaz de defender el modelo económico agro-exportador. Esta situación puede considerarse el efecto "perverso" de un insuficiente grado de conflicto socioeconómico en el sistema de

partidos. En la misma, la lucha política de las clases altas tuvo lugar fuera de la arena electoral, favoreciendo la emergencia de lo que ha sido llamado un sistema político dual (Cavarozzi 1986: 19-21).

En segundo lugar, la forma en que se reflejaron los conflictos socioeconómicos en el sistema de partido puede haber afectado otras dinámicas políticas posteriores, en la medida en que el radicalismo fue incapaz de organizar a las clases bajas de una forma estable. La falta de organización política de tales sectores permitió a un sector de las élites estatales movilizar a esos mismos sectores sociales en la década de 1940, en una nueva coyuntura crítica.

Finalmente, he intentado analizar las relaciones entre la representación de las clases altas en el sistema político y la quiebra democrática de 1930 a la luz de las conclusiones del análisis desarrollado por Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens (1992). Sin cuestionar la importancia general de la representación de los intereses capitalistas para la estabilidad democrática, este capítulo sostiene, a diferencia de estos autores, que esta cuestión no fue decisiva en la crisis argentina de 1930.

3.1.El radicalismo y la emergencia de la política de masas (1889-1930).

3.1.1.La emergencia del radicalismo.

La emergencia de la política de masas en la Argentina está directamente ligada al nacimiento de la Unión Cívica Radical (UCR). Sólo a partir de este momento es posible hablar del reflejo de conflictos sociopolíticos por partidos de masas. Si el argumento que desarrollo en estas páginas es correcto, las características de aquel breve periodo de cambio (o coyuntura crítica) afectaron de forma significativa a la evolución posterior de la política argentina.

El antecedente político inmediato del radicalismo, la Unión Cívica, fue creado en 1889 por políticos y estudiantes que ocupaban posiciones periféricas en el sistema político argentino (Rock 1975: 42). Ciertos sectores estudiantiles, básicamente de origen patricio, se encontraban descontentos con el creciente reclutamiento de cargos políticos procedentes de áreas distintas de Buenos Aires (especialmente de Córdoba), lo que percibían como un obstáculo para sus carreras políticas. Otros tres grupos cooperaron en el surgimiento del radicalismo. El primero estaba compuesto por políticos católicos que se movilizaron contra la élite gobernante debido a su oposición a las leyes sobre matrimonio civil y educación, las cuales eran consideradas antirreligiosas por estos grupos. El segundo grupo englobaba políticos de Buenos Aires que intentaban hacer posible la reelección de Bartolome Mitre como Presidente de la

República. Finalmente, otros políticos de Buenos Aires (Leandro Alem y Aristóbulo del Valle) también se unieron a la coalición cívica. Estos pequeños grupos políticos estaban estrechamente ligados a las élites comerciales (Mitre) y terratenientes (Alem) (Rock 1975: 43).

Estos grupos se rebelaron contra el régimen político oligárquico. Tal régimen, que se asentó definitivamente después de la victoria electoral de Roca en 1880, se basaba en un pacto entre las oligarquías regionales y un sector de la élite de Buenos Aires (Botana 1977: 156). La élite dirigente que participaba en este pacto decidía, a través del Partido Autonomista Nacional (una laxa confederación de notables) y de las instituciones representativas, sobre los candidatos que ocuparían la Presidencia. En especial, el Presidente del Senado y los gobernadores regionales constituían una suerte de cuerpo electoral capacitado para elegir al Presidente de la República. Los acuerdos alcanzados por ese cuerpo electoral eran llevados a la práctica a través del fraude electoral. Estos acuerdos requerían también la exclusión de importantes sectores de la población.

En 1890, la Unión Cívica organizó una intentona revolucionaria fallida (la "revolución del parque"). A pesar de su fracaso, este alzamiento revolucionario consiguió derribar al Presidente Juárez Celman. Asimismo, esta revuelta preparó el camino para un acuerdo entre la élite gobernante y un sector de las fuerzas insurgentes a propósito de los candidatos en las elecciones presidenciales de 1892 (L.Saénz Peña y

J.E.Uriburu). Un sector de la Unión Cívica, liderado por Leandro Alem, rechazó ese acuerdo político, dando origen, de este modo, a la Unión Cívica Radical (UCR). Las principales armas políticas del radicalismo fueron la abstención electoral y los levantamientos revolucionarios, en los cuales participaron ciertos sectores de las Fuerzas Armadas (1893, 1904 y 1905). Estas rebeliones fueron igualmente fallidas, pero contribuyeron al deterioro del régimen oligárquico y a la implicación de los militares en las luchas políticas, un fenómeno que tendría implicaciones negativas para la viabilidad democrática (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 195-196).

Por consiguiente, la emergencia del radicalismo supone la primera coyuntura crítica en la historia argentina, en la medida en que con ella surgió una estructura de conflictos canalizada por partidos políticos. Esta coyuntura crítica se produjo en el periodo que va de 1889 a 1891, año en que una parte de la Unión Cívica rechazó el acuerdo con el orden político prevaeciente. En este periodo, la UCR definió su programa, ciertas tácticas políticas y sus características sociales.

Estas características sociales se relacionaban en parte con los orígenes de la la primera élite dirigente radical en la burguesía rural y comercial (como en los casos de Mitre y Alem) (Rock 1975: 43; Rock 1987: 159-60; Jackisch 1990: 53). La posición social de los líderes radicales era, en los momentos iniciales, incluso mejor que la de los representantes del orden

político prevaleciente (Gallo y Sigal 1965: 163, 167-68; también Cornblitt 1975: 619). Esa posición económica privilegiada no se reflejaba, sin embargo, en el terreno político. A este respecto, la inconsistencia entre el status político y económico era una de las características más llamativas de la élite radical (Gallo y Sigal 1965: 169). Ello indica que la emergencia del radicalismo no fue la expresión de conflictos socioeconómicos latentes sino, más bien, el producto de la incapacidad de la élite gobernante para establecer una relación estable entre los distintos sectores de la élite política (Rock 1975: 42).

Tampoco en el terreno ideológico era el radicalismo una fuerza amenazadora. Su élite mantenía actitudes conservadoras respecto a cuestiones como la jerarquía y la armonía social (Rock 1975: 59); Cornblitt 1975: 606-607; Gallo y Sigal 1965: 129) y en ningún caso cuestionaba el modelo económico agro-exportador.

3.1.2. Clases medias y radicalismo.

A pesar de que tanto los radicales como sus adversarios conservadores tenían inicialmente orígenes sociales similares, el radicalismo consiguió obtener un apoyo creciente de las clases medias, en especial a partir de 1906 (Rock 1975: 48-52). Esta orientación hacia las clases medias y el carácter intransigente de su oposición distinguen al radicalismo de otros grupos políticos argentinos que surgieron durante la

década de 1890 (como los "cívicos" y los "modernistas") (Gallo 1980). La UCR fue el único grupo que vinculó sus demandas políticas a una fractura social subyacente.

La lucha por la apertura del sistema político que surgió de las divisiones internas de la élite política favoreció la creación de una alianza entre la élite radical y unas clases medias cuyo tamaño no cesaba de crecer. Estos últimos sectores sociales no habían sido integrados en el sistema político oligárquico. Debido a ello, la creación de algunos canales de representación (especialmente en situaciones de crisis económica), era un objetivo obvio para estos grupos sociales (Rock 1975: 44). El radicalismo, que proponía democratización y limpieza electoral, surgió como la única alternativa al régimen político oligárquico, capaz por tanto de capitalizar las demandas de representación política originadas en las clases medias. A su vez, los grupos de la élite que dieron lugar al radicalismo se hallaban ante una estructura de oportunidades que los inducía a movilizar a las clases medias, las cuales aparecían como un potencial aliado en la lucha contra la élite gobernante. En este sentido, el radicalismo fue empujado, a través de lo que Collier y Collier (1991: 11) denominan la lógica política, hacia un pacto con las clases medias entonces emergentes.

La creciente presencia política de las clases medias tuvo importantes implicaciones, en la medida en que proporcionó una fuerte base de apoyo a Hipólito Yrigoyen en la lucha de éste con otros sectores del partido (Rock 1975: 61). Sin embargo,

esta transformación social no puso en cuestión el papel dirigente del "sector patricio" del radicalismo (aquel compuesto por miembros de las clases altas y poseedores de un status privilegiado) salvo, de una manera limitada, durante la segunda Presidencia de Yrigoyen.

Esta tendencia hacia la creciente presencia política de las clases medias afectó también a otras fuerzas políticas (Walter 1985: 15; Rock 1975: 55). En las organizaciones políticas rivales, los orígenes de los activistas políticos no eran tampoco elitistas. Incluso dentro del partido conservador, los grandes terratenientes "preferían no involucrarse directamente en política, sino trabajar detras del escenario a traves de intermediarios" (Walter 1985: 16 y 21). Esto es, el periodo en el que el radicalismo surgió se caracterizaba por la transición hacia la política de masas y por la creciente presencia política de las clases medias. Al igual que en otros casos (Weber 1990: 35) esta transformación sería el resultado, al menos en parte, de la obtención de derechos electorales por la gran mayoría de la población masculina adulta.

Por lo tanto, una división en el seno de la élite política nacional promovió la emergencia de la UCR. En sus orígenes, el conflicto entre radicales y conservadores carecía de connotaciones de clase. Tanto en el terreno socioeconómico como en el ideológico, radicales y conservadores eran básicamente similares. Ambos grupos tenían vínculos privilegiados con los grupos económicamente dominantes (en los cuales se reclutaban sus principales líderes) y mantenían semejantes concepciones

económicas. A causa de su posición políticamente marginal y de su programa democrático, la élite de la UCR inició la creación de una coalición social con las clases medias (especialmente de 1905 en adelante). Esa coalición transformó de manera significativa las dinámicas internas del radicalismo, así como la competición con fuerzas políticas rivales. Sin embargo, no creó una amenaza a los intereses económicos de la burguesía pampeana, en la medida en que la UCR no propuso ninguna transformación sustancial del modelo económico vigente.

3.1.3. Las características de la fractura política y la apertura del sistema político.

La élite y el programa de la UCR no generaban ninguna amenaza al predominio social y económico de la burguesía pampeana. Este hecho facilitó la apertura democrática en la Argentina, un proceso que fue conducido por una parte de la élite conservadora y que cristalizó en las reformas electorales de Sáenz Peña (1912), orientadas a suprimir el fraude y a aumentar la participación electoral.

La limitada amenaza planteada por el radicalismo al modelo socioeconómico ayuda a explicar también las continuas disputas internas en el seno del conservadurismo (Cornblitt 1975). Los conservadores no fueron capaces de articular una alternativa unificada a Yrigoyen antes de las elecciones de 1916. Líderes importantes del conservadurismo bonaerense y del régimen

oligárquico se negaron a cooperar en la creación de una alianza antiradical nacional. Más aún, estos sectores conservadores intentaron evitar el triunfo antiradical (Cornblitt 1975: 625-627; Botana 1977: 326) a fin de fortalecer su posición dentro del campo conservador. Si se acepta el argumento de O'Donnell de que el grado de amenaza percibido por una coalición social dominante tendrá un impacto positivo en la unidad de esa misma coalición, entonces las dinámicas organizativas y electorales de la coalición conservadora (baja articulación nacional y continuas querellas internas) (Cornblitt 1975: 617; Botana 1977: 314-315) indican que el radicalismo no era percibido como una grave amenaza social. Es en este contexto donde hay que situar la inexistencia de un partido político conservador, estrechamente vinculado a las clases altas y con capacidad para obtener un apoyo suficiente entre las clases medias.

3.2. Burquesía pampeana y conflicto político durante las Presidencias radicales (1916-1930).

3.2.1. La representación de los intereses de las clases altas.

Dos importantes aspectos de la relación entre el radicalismo en el poder y las clases altas argentinas deben ser tenidos en cuenta. Uno se relaciona con la representación de las clases altas en el sistema político, incluyendo aquí tanto partidos como instituciones. El otro se refiere a la influencia de las clases altas en la producción de políticas de los

gobiernos radicales.

En ambos aspectos, P.H. Smith (1969) ha mostrado la naturaleza cooperativa de los vínculos entre el radicalismo y las élites económicas. Según Smith, la Sociedad Rural Argentina (la organización mas importante de la élite económica) "estuvo fuertemente representada antes, durante y después de las administraciones radicales de 1916-1930" (Smith 1969: 48). En términos de las políticas desarrolladas, los gobiernos radicales defendieron los intereses de los rancheros y ganaderos argentinos (Smith 1969: 130-31). Más aún, "cuando confrontaron un dilema, los gobiernos radicales, Yrigoyen inclusive, apoyaron a los rancheros en vez de a las clases bajas urbanas" (Smith 1969: 134; Cavarozzi: 1976: 15).

En cuanto al creciente peso de las clases medias dentro del radicalismo, esta tendencia social afectó a los intereses económicos de la burguesía pampeana de una manera muy limitada. Como muestra el análisis de Remmer sobre las políticas públicas de los gobiernos radicales (1984), los incrementos en gasto público se relacionaron con la expansión de la enseñanza y la administración y no con ningún tipo de veleidades económicas intervencionistas (Remmer 1984: 156-159). En cuanto a aspectos tales como impuestos y tarifas, es posible que las políticas radicales beneficiasen ligeramente a las clases bajas (Remmer 1984: 168). Sin embargo, la evidencia en este respecto está lejos de ser concluyente.

El hecho de que las políticas públicas del radicalismo no intentasen atacar los intereses de la élite económica a fin de

beneficiar a las clases medias no es sorprendente, pues estos sectores sociales percibían que sus intereses estaban directamente vinculados a los de las élites económicas. Es por esto que los intereses capitalistas estaban bien protegidos contra demandas reformistas. Ello no significa, sin embargo, que las políticas radicales fuesen completamente funcionales a los intereses capitalistas. Este es el caso de la segunda Presidencia de Yrigoyen (1928-1930), durante la cual los ingresos estatales disminuyeron al mismo tiempo que aumentaba el gasto público. La respuesta del gobierno a la crisis económica fue tardía y no muy consistente (Rock 1975: 254-56). Consiguientemente, las élites económicas se convirtieron en uno de los vectores que coadyuvaron al triunfo del golpe de 1930.

En cuanto a la representación de estos grupos en las luchas de partido y en las instituciones políticas, los años de dominio radical muestran una tendencia general hacia el fortalecimiento del peso de las clases medias en el sistema político. Esta tendencia puede seguirse en la presencia decreciente de los grandes propietarios de tierras en las instituciones políticas. Los análisis de Smith (1978) sobre la Cámara de Diputados muestran que la participación de los que él denomina "aristócratas" (básicamente, poseedores de poder económico y prestigio social) (Smith 1969: 117) decreció continuamente de 1916 a 1928. Así, mientras que el porcentaje de este grupo social en esa Cámara llegaba al 55,9% en 1916, en 1928 tal cifra había caído al 26,2%. Esa tendencia es aún más clara en el caso de los diputados radicales. En este caso, la

presencia de "aristócratas" pasó del 48% en 1916 al 19.8% en 1928.

Dos factores explican el descenso en la participación de aristócratas en la Cámara de Diputados. En primer lugar, el desarrollo de la política de masas se caracterizaba por un aumento sustancial en el número de políticos profesionales. Ese fue el caso no sólo del radicalismo, sino también del bloque conservador (si bien de un modo más moderado) y de las restantes fuerzas políticas (Smith 1978: 14). La misma tendencia modernizante puede ser percibida en el hecho de que durante las presidencias radicales (y después de ellas) la defensa de los intereses agrarios fue asumida por abogados en cada vez mayor medida (Smith 1969: 251). Ese proceso fue paralelo al papel creciente de la élite no patricia dentro del radicalismo. Ambos desarrollos reflejaban una tendencia hacia la diferenciación profesional característica de la política moderna. Sin embargo, pueden haber facilitado algún tipo de alienación de las élites económicas respecto al radicalismo (Rock 1975: 240-43; Smith: 1978; James 1993).

En segundo lugar, ese desplazamiento fue particularmente importante en el caso del radicalismo debido al triunfo de los yrigoyenistas sobre los antipersonalistas. La división entre estos dos grupos radicales a partir de 1924 tenía claras connotaciones sociales, en la medida en que los antipersonalistas representaban a los sectores patricios dentro del partido (Rock 1974: 228-232). Los antipersonalistas tenían vínculos más estrechos con la élite conservadora, y se

caracterizaban también por una visión más "cooperativa" o consensual de la lucha política.

Es también significativo que los antipersonalistas nunca desarrollasen un sistema de patronaje estatal, aparentemente a causa de la aversión del Presidente Alvear hacia el déficit público. Yrigoyen empleó los recursos del Estado sistemáticamente a fin de integrar sectores de clase media en el partido radical. Por contra, la actitud de Alvear en este terreno perjudicó la capacidad de los antipersonalistas de articular un movimiento de masas (Rock 1975: 229-230).

Estas tendencias pueden ser seguidas también si analizamos la evolución de la presencia de miembros de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la organización más elitista de la burguesía pampeana, en los gobiernos inaugurales de cada uno de los presidentes (siempre compuestos por nueve o diez integrantes) (Smith 1969: 48).

Miembros de la SRA en gobiernos inaugurales.

Saénz Peña (1910-14)	8
De la Plaza (1914-16)	3
Yrigoyen (1916-22)	5
Alvear (1922-28)	5
Yrigoyen (1928-30)	2
Uriburu (1930-32)	5
Justo (1932-38)	5
Ortiz (1938-41)	2
Castillo (1941-43)	1

Número medio de miembros de la SRA en gabinetes inaugurales durante los principales periodos políticos.

Régimen oligárquico (1910-16)	5,7
Gobiernos radicales (1916-30)	4
Restauración conservadora (1930-43)	3,2

En primer lugar, estas tablas reflejan la fuerte representación de la SRA en los gabinetes radicales. En segundo lugar, muestran que el número de miembros de la SRA declinó fuertemente en la segunda Presidencia de Yrigoyen y se incrementó tras el golpe de 1930. Y finalmente, si observamos la evolución de estas cifras a lo largo de todo este periodo, la tendencia a la disminución de la participación de miembros de la SRA en los gobiernos argentinos se aprecia claramente.

Como resultado de esta tendencia, la percepción del Radicalismo por las clases altas cambió a lo largo de la experiencia de gobierno radical (ver por ejemplo Alen Lascano 1986: 10). Sin embargo, las élites económicas permanecieron bien representadas en el proceso de producción de políticas, incluso durante la segunda Presidencia de Yrigoyen. Así, según Smith (1969: 131), el origen de las iniciativas legislativas en favor de los ganaderos, de 1916 a 1930, fue radical en un 60% de las ocasiones y conservador en un 29% de ellas. Es revelador que durante el segundo mandato de Yrigoyen el origen de las iniciativas pro-ganaderas fue radical en un 75% y conservador sólo en un 17%. Es también significativo que la mayor parte de las propuestas radicales en favor de los ganaderos procediesen de integrantes de las clases medias (en un 60%). Ello muestra que la proporción decreciente del número de parlamentarios de origen elitista no afectó negativamente la representación de los intereses económicos de las élites.

Por estos motivos, el análisis desarrollado por Smith (1978) sobre las causas de la quiebra democrática en 1930

subraya la crisis de legitimidad del gobierno de Yrigoyen y rechaza la tesis de que el radicalismo supusiese una amenaza a los intereses de la burguesía argentina. Ni la transformación del modelo económico ni la implementación de un programa de profundas reformas sociales estaban en juego en la lucha entre Yrigoyen y la oposición conservadora.

3.2.2.El golpe militar de 1930.

El golpe contra Yrigoyen fue precedido por un debilitamiento relativo de la posición de las clases altas en el sistema político. Sin embargo, tal golpe no fue inducido por conflictos de tipo socioeconómico entre la burguesía por un lado y las clases medias y bajas, representadas por Yrigoyen, por otro. Si bien una investigación más exhaustiva es necesaria en este respecto, los estudios existentes indican que la segunda administración de Yrigoyen fue tan conservadora en el terreno económico como la primera (Walter 1985: 82). Ya en octubre de 1929, la Review of the River Plate definía las relaciones entre el Presidente y los ejecutivos de importantes firmas comerciales e industriales como excelentes (citado en Rock 1975: 251).

El golpe militar no se deriva de una tendencia a la polarización social, sino de la creciente tensión entre las fuerzas de la oposición (conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes) y el radicalismo en un contexto de incertidumbre económica (Cantón

y Moreno 1972: 106-112). El fracaso relativo del radicalismo en las elecciones parlamentarias de 1930 sirvió para polarizar aún más las luchas políticas. En tal elección (que tuvo lugar en marzo de 1930) los radicales obtuvieron un 41,6% de los votos, mientras que en las presidenciales de 1928 habían obtenido un 57,4% de los votos (Cantón y Moreno 1970: 460). Aunque la UCR yrigoyenista continuó siendo el primer partido argentino, fue derrotada en Capital Federal, donde fue sobrepasada no sólo por una coalición antiyrigoyenista liderada por los socialistas independientes, sino también por el Partido Socialista (Areces 1969: 15). Como señala Potash (1969: 41), los yrigoyenistas fueron desplazados como el primer partido en Capital Federal por primera vez en catorce años. El radicalismo fue derrotado también en Córdoba y obtuvo una corta victoria en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Finalmente, en junio de 1930, el radicalismo fue derrotado en Entre Ríos y San Luis (Areces 1969: 21).

El carácter dramático de los conflictos de partido se aprecia en las intervenciones federales de los gobiernos regionales (Allub 1980: 1130-31) y en el hecho de que ni el Senado ni la Cámara de Diputados funcionaron durante 1930 (Ibarguren 1969: 355). Este hecho se debió al deseo radical de neutralizar a la oposición en las instituciones legislativas. A su vez, la paralización de la actividad parlamentaria agravó los conflictos políticos y movió a los principales partidos políticos a desarrollar una estrategia orientada al derrocamiento de Yrigoyen (Areces 1969: 15). Finalmente, el

impacto de estas tensiones puede haber sido agravado por el diseño presidencialista del régimen democrático (en especial por la tendencia de este régimen hacia los conflictos de sumacero; Linz 1990), el estilo de Yrigoyen (completamente hostil a cualquier tipo de acuerdo con la oposición) e incluso la mala salud de Yrigoyen en 1930². En cuanto a las Fuerzas Armadas, su intervención en el golpe fue facilitada por la reacción corporativa desencadenada por la intervención de Yrigoyen en asuntos militares (Rock 1975: 244; Smith 1978: 17)³. Dos vectores político-ideológicos, representados por los generales Justo y Uriburu, convergieron en la preparación del golpe. El primero, que representaba al ala liberal-conservadora del golpe, estaba liderado por el general Justo y consideraba el derrocamiento de Yrigoyen como un paso preliminar hacia el retorno a un sistema representativo en el que las élites conservadoras ocuparían las posiciones dominantes. Uriburu, el líder del golpe y veterano de antiguas rebeliones pro-radicales, representaba al ala corporativista y nacionalista del golpe. Esta ala, que actuó como fuerza de choque principal en el desarrollo del golpe (Arecas 1969: 26; Allub 1980: 1136) perseguía el establecimiento de un régimen abiertamente autoritario. Este régimen debería neutralizar la amenaza revolucionaria organizando a la clase obrera bajo control estatal, atenuando la pobreza de las clases bajas e interviniendo en las relaciones laborales (Ibarguren 1969: 325). Curiosamente, el ala nacionalista del golpe criticaba a Yrigoyen por no haber desarrollado políticas sociales que

pudiesen prevenir el descontento de la clase obrera.

En este sentido, el golpe militar no puede ser entendido sin tomar en cuenta el desplazamiento hacia posiciones nacionalistas y autoritarias que tuvo lugar tras la radicalización de las luchas sociales que acompañó a la revolución bolchevique. A pesar de su reducido número, los activistas nacionalistas fueron capaces de transformar radicalmente el clima ideológico en favor de una solución autoritaria. Asimismo, este sector proporcionó la principal fuerza operativa para el desarrollo del golpe de 1930.

Carlos Escudé (1992) ha mostrado cuan exitosa fue la difusión de valores autoritarios y nacionalistas en el sistema educativo a partir del siglo XX. En especial, Escudé ha mostrado que esta transformación afectó las estrategias de los actores políticos, en la medida en que definió algunos de sus valores y de sus "menús de opciones", los cuales incluían alternativas tales como golpes de Estado y regímenes autoritarios. Este argumento es enteramente convincente a pesar de estar expresado en un marco teórico fuertemente culturalista, un marco que infravalora los factores sociopolíticos que afectaron las estrategias de los actores sociales y que, consecuentemente, tiende a tildar de "irracional" el comportamiento de tales actores.

Por otra parte, Carlos Waisman (1987) ha subrayado la importancia de las transformaciones ideológicas en la dinámica política argentina. Además, Waisman ha situado los fundamentos cognitivos de tales transformaciones (que él reduce a "efectos

cognitivos de tales transformaciones (que él reduce a "efectos de demostración"). Más específicamente, Waisman ha mostrado que las élites estatales (en especial el Ejército) desarrollaron un diagnóstico de la crisis política que alentaba las intervenciones militares preventivas. Si bien Waisman vincula tal análisis básicamente al proyecto corporativista del peronismo, no hay ningún motivo para disminuir el papel de tales cambios ideológicos⁴ en los acontecimientos que condujeron al golpe de 1930.

Estos desarrollos tuvieron lugar en el contexto de una crisis económica cuyos efectos eran ya claros en la Argentina (Rock 1987: 212; Allub 1980: 1131-32). Como indica el estudio de Merx (1976) sobre las relaciones entre recesiones económicas y rebeliones militares en la Argentina, no es posible infravalorar el papel facilitador de las crisis económicas en los golpes militares argentinos. Sin embargo, el hecho de que la crisis económica facilitase el desarrollo del golpe de 1930 no indica que este fuese el resultado de la crisis económica.

A este respecto, Smith (1978: 5-8) ha mostrado que los efectos de la crisis sobre la oligarquía económica fueron muy limitados (particularmente sobre su sector más importante, cuyas actividades se centraban en el ganado y no en los cereales).

El impacto limitado de la crisis se puede percibir también en las declaraciones de líderes políticos y economistas. En enero de 1930 Federico Pinedo, un diputado que jugó un papel

finanzas en la Presidencia de Justo, afirmaba que Yrigoyen estaba sobrerreaccionando a problemas económicos menores (Brailovski 1982: 97). De forma similar, la Revista Económica del Banco de la Nación señalaba en 1930 que se había entrado, a lo largo de 1929, en una fase recesiva del ciclo económico y que la misma sería un fenómeno pasajero en el país (citado en Villanueva 1975: 62). Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el impacto de la crisis económica no se sintió en Argentina hasta febrero de 1930 (Villanueva 1975: 62). Sin embargo, es muy probable que las preparaciones para el golpe se hubiesen iniciado antes de 1929 (Alen Lascano 1986: 17-19). Ciertamente, tales preparaciones ya estaban avanzadas a finales de 1929 (Ibarguren 1969: 364). Finalmente, las tensiones políticas e institucionales eran muy fuertes e independientes de conflictos económicos. Por estas razones, difícilmente se puede achacar a la crisis económica el ser un factor causal básico en el advenimiento del golpe militar.

Por último, no existe evidencia que apoye la hipótesis de que, en el contexto de una crisis económica, las élites dominantes decidiesen deshacerse del gobierno a fin de prevenir un eventual giro hacia la transformación de algunos rasgos básicos del modelo agro-exportador. Como se ha visto, en el contexto de la crisis económica Yrigoyen no dió ningún paso significativo orientado a la transformación del modelo económico. Esto se aprecia con nitidez en el acuerdo alcanzado por los gobiernos británico y argentino en 1929, en virtud del cual la economía argentina mantenía las características

centrales del modelo agro-exportador. De hecho, los términos del acuerdo aceptados por el gobierno de Yrigoyen fueron tan favorables para la parte británica que el enviado del Reino Unido los consideró "not only satisfactory but astonishing" (citado en Villanueva 1975: 61).

3.3.Conflictos socio-políticos, burguesía y partidos políticos.

3.3.1.Partidos políticos y fracturas socio-políticas en Argentina.

Es preciso prestar atención al tipo de fracturas (o **cleavages**) que permitieron el surgimiento de los primeros partidos políticos argentinos a fin de valorar la posición de las élites económicas en el sistema político. En términos socio-económicos, la fractura que permitió el surgimiento de la UCR se relaciona con las características del proceso de modernización argentino desde finales del siglo XIX. El desarrollo económico produjo un rápido crecimiento de las clases medias. A su vez, estos sectores acabaron convirtiéndose en aliados de los sectores de la élite que habían sido previamente excluidos del gobierno argentino. La alianza entre las clases medias y un sector de la burguesía fue posible debido a que no existía ningún conflicto crucial de intereses entre estos dos grupos.

En los términos de Lipset y Rokkan (1967), la movilización de las clases medias por la élite radical constituye una

coyuntura crítica. La misma engloba un conjunto de decisiones, por parte de un sector de la élite política, decisiones que no sólo implican alianzas con grupos sociales e instituciones sino que también definen algunas de las arenas en las que los conflictos políticos tendrán lugar (Rokkan 1990: 140). En este caso, las clases medias, así como algunos sectores de las Fuerzas Armadas, se convirtieron en el principal objetivo de la movilización radical, en parte como resultado de sus metas (limpieza electoral y apertura política) y en parte como resultado de sus tácticas, las cuales incluían la construcción de un partido político de masas y la instigación de rebeliones militares. Estas decisiones fueron críticas en la medida en que transformaron una división social subyacente en un conflicto estructurado, de una forma específica, por partidos políticos modernos.

Los partidos políticos no se limitan a reflejar las divisiones socio-políticas en conflictos de partidos⁵. Como Scully señala en su estudio sobre la generación del sistema de partidos en Chile, los partidos transforman la naturaleza y las implicaciones de tales fracturas, reforzándolas unas veces y atenuándolas otras (1992: 1 y 15).

Por lo que se refiere al caso argentino, la emergencia del radicalismo no se tradujo en ningún tipo de conflicto abierto entre las clases sociales (Cavarozzi 1976: 12-14 y 24). Las cuestiones ideológicas y programáticas afectaban a la apertura del sistema político (Gallo y Sigal 1965: 137), así como abarcaban importantes connotaciones simbólicas (Schoultz 1983;

James 1993). Sin embargo, los radicales no cuestionaron los aspectos centrales del modelo económico agro-exportador (Allub 1974: 265-67; Smith 1974: 92). En este sentido, las características del radicalismo en el momento de su emergencia pueden haber tenido efectos significativos en las características posteriores de la competición interpartidista. Como resultado de esta coyuntura crítica, los conflictos interpartidistas no se desarrollaron fundamentalmente en el terreno socio-económico, sino que también se desarrollaron en el seno de las clases altas. Como Remmer indica, este es uno de los factores que ayudan a explicar el predominio electoral del radicalismo (1984: 100).

El principal motivo por el cual los aspectos sociales presentes en la oposición entre el radicalismo y el conservadurismo no se tradujeron en un abierto conflicto de clases radican, en primer lugar, en el peso de la burguesía dentro de los gobiernos y el partido radicales y, en segundo lugar, en las características del modelo agro-exportador (Smith 1974: 134; Remmer 1984: 45). Sin embargo, la radicalización de las tendencias democratizadoras dentro del radicalismo, así como el sistema de clientelismo estatal desarrollado por los radicales fortaleció la desconfianza de las clases altas hacia el yrigoyenismo, cuya base social se encontró cada vez más en las clases bajas (Cantón y Moreno 1970). Sin embargo, el radicalismo no se convirtió en una amenaza para un modelo económico que permaneció incuestionado. Como resultado de ello, el sistema político argentino carecía de un incentivo

fundamental para la formación de un partido conservador estable.

La polarización social creció notablemente a principios de siglo (Collier y Collier 1991: 146-47), pero la misma no se tradujo en la competición interpartidista. Tal polarización favoreció la emergencia de organizaciones como la Legión Cívica Argentina, que centró su programa en la defensa del orden y la nacionalidad (Deutsch 1986). Estas organizaciones reactivas favorecieron la represión de la actividad sindical, pero no funcionaron como partidos políticos.

Como he señalado más arriba, la oposición entre el radicalismo y el conservadurismo se reflejó en un terreno en el cual los aspectos simbólicos eran más relevantes que las diferencias en las políticas sociales y económicas. Ello es también consistente con lo que se sabe acerca de las dinámicas de los grupos políticos. En sus momentos iniciales, las identidades colectivas se orientan más hacia las acciones expresivas que hacia las instrumentales (Pizzorno 1977:293). Este patrón de comportamiento puede ser alentado por la exclusión del poder, puesto que el reforzamiento de la solidaridad colectiva se convierte en objetivo político central en los casos en los que las organizaciones políticas carecen de la posibilidad de recompensar a sus miembros a través de políticas (Pizzorno 1988: 311-313). Este fue el caso del radicalismo hasta 1916. Cuando el radicalismo fue expulsado del poder en 1930, sus tradiciones políticas experimentaron una suerte de congelamiento. El radicalismo se inclinó de nuevo

hacia la abstención electoral hasta 1935, y fue incapaz de vincular su oposición a demandas de tipo socio-económico. Esto es consistente con el hecho de que, como muestra Rock, "Radicalism functioned best in times of prosperity, but during the depression it flundered constantly, strong on moral imperatives but usually weak in content" (Rock 1987: 219).

Finalmente, tras el golpe militar (en 1931), Alvear pasó a controlar el partido y eliminó cualquier tipo de connotaciones sociales en el conflicto entre radicales y conservadores (Calviño 1968: 185; también Rock 1987: 219). No es sorprendente, por tanto, que doce años después de la proscripción del radicalismo, la UCR mantuviese cierta capacidad de atracción entre las clases altas y continuase siendo un partido centrista y multclasista (Schoultz 1983: 23-24).

3.3.2. Factores socio-económicos afectando a la naturaleza de las fracturas políticas.

Las limitadas implicaciones socio-económicas de las fracturas políticas argentinas estaban relacionadas también con las características del proceso de modernización. En Argentina, el desarrollo económico se fundó en las exportaciones proveídas por una agricultura no intensiva en trabajo. Esto tuvo tres consecuencias importantes. En primer lugar, no surgió una burguesía industrial autónoma (ver Allub 1974). En segundo lugar, no existieron masas de trabajadores rurales asalariados,

sino más bien una elevada proporción de arrendatarios. Y, finalmente, el crecimiento y riqueza de las clases medias estuvo directamente vinculado a las características del proceso de modernización económica. A causa de ello, estos sectores medios se convirtieron en una suerte de "clase media dependiente" (Allub 1974: 262; Smith 1969: 131-34). Como resultado de este patrón de desarrollo, la burguesía no confrontó ninguna fuerza social amenazante, y sólo pequeños grupos se encontraron alienados respecto al sistema socio-económico y deseosos por tanto de alterar sus principales características (Gallo y Sigal 1965: 170; Waisman 1987: 83-84; Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 175).

Un segundo resultado de este patrón de desarrollo radica en la ausencia de poblaciones campesinas controladas políticamente por los terratenientes. Si bien algunos desarrollos históricos ayudan a explicar este hecho (en especial el papel central de la élite política de Buenos Aires durante y después de la independencia)⁶, las características de las explotaciones rurales pampeanas pueden haber dificultado también el éxito electoral de los grupos conservadores. Esto tiene que ver con el hecho de que el tamaño de la población directamente controlada por los terratenientes era, debido a las características del sistema productivo, muy limitado, y claramente insuficiente para proporcionar un apoyo electoral masivo para los candidatos de las clases terratenientes. En palabras de Halperin Donghi, "Only a small -and diminishing-fraction of the rural population was still integrated into the

tightening social order of the modernized estancia" (Halperin Donghi 1993: 46). Esto tiene que ver con el hecho de que en la Pampa, en las áreas en que el trigo y el ganado eran dominantes, el porcentaje de arrendatarios era muy alto (Taylor 1988: 236).

En este sentido, es llamativo que la UCR, en especial su fracción yrigoyenista, obtuviera mucho mejores resultados en las provincias en las que los propietarios superaban en número a los arrendatarios, como se apreciará luego en el análisis de las elecciones de 1916 y 1928. Así, los grupos antiyrigoyenistas obtuvieron éxitos electorales en provincias como Corrientes, San Juan y Mendoza. Según el censo de 1914, tales provincias se encontraban entre aquellas en las que el porcentaje de propietarios agrícolas era mayor (Taylor 1988: 237; ver también Rock 1975: 248).

En el terreno teórico, hay buenos motivos para sostener que los arrendatarios pampeanos tenderían a sostener sólo moderados niveles de conflicto con los terratenientes (ver Paige 1975: 18-40). Debido a un conjunto de razones, las confrontaciones entre arrendatarios y terratenientes no favorecían el radicalismo social. La privilegiada posición económica de los terratenientes pampeanos no residía en sus privilegios sociales, sino en su posición comercial y financieramente superior. Debido a ello, los conflictos entre arrendatarios y terratenientes no afectaron a la propiedad de la tierra sino que se ciñeron básicamente a cuestiones redistributivas. En cuanto a los arrendatarios, el hecho de que

su situación económica estuviese ligada a la tierra antes que a los salarios (a diferencia de lo que sucedía con los trabajadores rurales), no los alentaba a adoptar doctrinas radicales ni a iniciar una movilización política de ese signo (Paige 1975: 29). Sin embargo, los vínculos de los arrendatarios con la tierra eran sustancialmente menores que los de los pequeños propietarios, lo que favorecía las posibilidades de un nivel moderado de conflicto. Esta situación intermedia evitó la emergencia de movimientos genuinamente conservadores entre los arrendatarios pampeanos.

Finalmente, la inmigración jugó un papel importante en el proceso de formación de los partidos. La exclusión de los inmigrantes del proceso electoral transformó la adquisición de derechos electorales en un objetivo político central. Al mismo tiempo, el hecho de que la mayoría de los inmigrantes no tuvieran la posibilidad de votar aún después de la democratización del sistema debe haber suavizado la posición antidemocrática de las élites. La exclusión de los extranjeros hizo mucho más difícil el éxito electoral de los grupos de izquierda, los cuales eran más populares entre los trabajadores de origen europeo.

Ciertamente, la Argentina experimentó importantes transformaciones económicas desde la emergencia del radicalismo al golpe militar de 1930. Estas transformaciones promovieron el desarrollo del movimiento obrero más pujante de toda Latinoamérica (Collier y Collier 1991: 92). Esos cambios económicos se reflejaron en el continuo crecimiento de los

sectores industriales, como reflejan las tablas siguientes.

Producto Nacional Bruto. Porcentaje de los sectores rural y manufacturero (extraído de Javier Villanueva 1975: 70).

<u>Periodo</u>	<u>Sector rural</u>	<u>Sector industrial</u>
1910-14	25,2	16
1915-19	31	16
1920-24	28,3	17,1
1925-29	25,7	18,4
1930-34	25,1	19,3

Estructura ocupacional de la sociedad argentina (extraído de Carl Taylor 1948: 121).

<u>OCUPACION</u>	<u>1914</u>	<u>1933</u>
INDUSTRIA	38,7	43,0
AGRICULTURA	23,6	22,7
COMMERCIO	10,8	12,0
TRANSPORTE	3,4	3,0
OTROS	23,5	19,3

Estas cifras muestran que tuvo lugar un aumento del 2,4% en el tamaño relativo del sector industrial en el lapso de tiempo que va del periodo 1910-14 al periodo 1925-29. Por tanto, desde la primera victoria de la UCR en 1916 al final de la década de 1920 se desarrollaron cambios perceptibles en la estructura económica de la Argentina. Además, la composición del sector industrial experimentó transformaciones significativas. En especial, sectores como el químico, el de productos eléctricos y el metálico se convirtieron en importantes por primera vez en la historia argentina (Villanueva 1975: 71).

A pesar de estas transformaciones, ciertos rasgos de la

vida social y económica argentina permanecieron relativamente constantes. Como las cifras anteriores muestran, el crecimiento industrial fue significativo pero no fue impresionante en términos relativos. El tamaño de la clase obrera creció ciertamente (pasando de 293.000 trabajadores en 1917 a 421.000 en 1926 en la ciudad de Buenos Aires) (Cantón y Moreno 1972: 59). Pero en términos relativos, el tamaño de la clase obrera no varió sustancialmente. Las estimaciones de Germani subrayan que las clases medias crecieron incluso más de prisa que la clase obrera en aquel periodo. Según Germani, las clases obreras de la ciudad de Buenos Aires pasaron de representar el 62% de la población de aquella urbe en 1914 al 54% de la misma en 1936. En el mismo periodo, las clases medias pasaron del 38 al 46% (Cantón y Moreno 1972: 54). El crecimiento de las clases medias, tanto en términos relativos como en términos absolutos, era también perceptible en el ámbito nacional, en el cual estas clases pasaron del 33% en 1914 al 40% en 1936.

En segundo lugar, el incremento en el tamaño de la clase obrera no significó que los conflictos socio-económicos fueran crecientemente importantes durante la década de 1920. En la ciudad de Buenos Aires, el número de huelguistas pasó de 136.062 en 1917 a 15.880 en 1926 (Cantón y Moreno 1972: 59). De 1925 en adelante el número de huelguistas por año permaneció siempre por debajo de 40.000 (y por debajo de 30.000 de 1928 a 1930) (Cantón y Moreno 1972: 59).

Estos datos sugieren que no se debe sobreestimar el impacto político del desarrollo económico en el primer tercio del siglo XX. El creciente tamaño de la clase obrera no transformó algunas características fundamentales de la sociedad argentina antes de 1930. Además, si bien las clases altas pudieron percibir la importancia política del movimiento obrero (especialmente en el periodo 1917-1919), la década de 1920 no trajo consigo una fuerte amenaza de parte de la clase obrera, como revela el moderado número de huelguistas en la ciudad de Buenos Aires (a pesar del rápido crecimiento del número de trabajadores). Ello muestra que, como ha indicado Waisman (1987), los conflictos sociales no explican por sí solos el giro autoritario de la política argentina.

En general, la sociedad argentina experimentó importantes transformaciones desde la emergencia del radicalismo. Estos cambios incluyeron la emergencia de la clase obrera y el continuo crecimiento de las clases medias. El modelo socio-económico permaneció estable durante este periodo y los grupos sociales que apoyaban al radicalismo no disminuyeron en importancia. En este sentido, la persistencia de algunos rasgos del radicalismo se relaciona con las continuidades del desarrollo argentino más que con los acontecimientos que tuvieron lugar durante 1889 y 1890. Por otra parte, el hecho de que el radicalismo no afrontase con cierto éxito la integración de la clase obrera en el sistema político puede haber tenido

que ver con las características que se originaron en el momento de su fundación. En este sentido, parece razonable sostener que tanto causas históricas como causas constantes jugaron un papel importante en la evolución de los conflictos políticos argentinos.

En suma, algunas de las características de la estructura social argentina afectaron decisivamente el alcance y los límites de la fractura en la que el radicalismo se posicionó. En especial, tales fracturas ayudan a explicar por qué el radicalismo no trascendió su naturaleza clientelar con el paso del tiempo (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 178). No es casual tampoco que transformaciones socio-económicas fundamentales que afectaron a la inserción de la economía argentina en el mundo fuesen decisivas en la generación de una nueva coyuntura crítica en la década de 1940.

3.3.3. Algunos efectos de la primera fractura política en el proceso de incorporación de la clase obrera.

Como se ha señalado, la naturaleza de la economía argentina en el periodo de 1890 a 1930 favoreció que la fractura política central tuviera limitadas implicaciones socio-económicas. En mi opinión, este hecho tuvo efectos significativos en las características del proceso de incorporación de la clase obrera analizado por Collier y

Collier (1991). En este respecto, la comparación entre la coyuntura crítica que dió origen al radicalismo y aquella de la que surgió el peronismo puede proporcionar algunas claves analíticas para el análisis de la forma en que un proceso afectó al desarrollo del otro.

3.3.3.1. Algunas diferencias entre la emergencia del radicalismo y la del peronismo.

Hay algunas similitudes entre la coyuntura crítica cuyos efectos rastrea este capítulo y el proceso de incorporación de la clase obrera analizada por los Collier (1991). En ambos casos, sectores de la élite política se vieron obligados a buscar aliados en la sociedad a fin de mejorar sus posiciones de poder, obedeciendo lo que Collier y Collier han denominado la "lógica política" (1991: 11). De este modo, los grupos de la élite política siguieron uno de los patrones más comunes en la incorporación política de nuevos grupos sociales (Rustow 1970: 352). Los grupos sociales movilizados eran en ambos casos el producto de rápidos cambios socio-económicos (crecimiento económico agro-exportador primero y primera industrialización sustitutiva de importaciones después) que no habían sido integrados previamente en el sistema político.

Sin embargo, una diferencia crítica relativa al "intercambio político" debe ser tomada en cuenta. Mientras que

el radicalismo pudo relacionarse con las clases medias e integrarlas políticamente a un bajo costo social, Perón tuvo que negociar con una clase obrera que ya había desarrollado formas de acción colectiva (principalmente sindicatos, pero también partidos de izquierda). A causa de ello, Perón pudo obtener el apoyo de los trabajadores sólo a cambio de un ambicioso programa de reforma social (ver Torre 1989; también Collier y Collier 1991: 349). Consiguientemente, el proceso de incorporación obrera dió lugar a una fractura política que se desarrolló alrededor de programas socio-económicos divergentes y que puso a las clases sociales en conflicto⁷. A su vez, las características específicas de la fractura peronista estaban estrechamente relacionadas con las de la emergencia del radicalismo. Antes se ha avanzado que uno de los aspectos más importantes de esa vinculación radica en la relación entre grupos sociales. Las líneas siguientes abordan la forma en que la clase obrera y la burguesía pampeana estaban situadas en la arena política antes de la emergencia del peronismo.

3.3.3.2. La movilización de la clase obrera.

El hecho de que la oposición entre radicales y conservadores se desarrollase en un plano no económico impidió a la UCR articular las demandas de la clase obrera emergente, cuyo apoyo al yrigoyenismo se fundaba en la hostilidad a la

élite conservadora más que en un apoyo específico al programa yrigoyenista (ver por ejemplo Ibarguren 1969: 349).

Esta actitud ambigua hacia la clase obrera de parte del radicalismo puede ser seguida en la combinación entre reformas moderadas (establecimiento de las ocho horas de trabajo diarias y de la semana laboral de 48 horas en 1929: Collier y Collier 1991: 149) y represión abierta (especialmente tras la semana trágica de 1919) que caracterizó el periodo radical. Estos elementos contradictorios impidieron al radicalismo integrar a la clase obrera⁸.

Además, la exclusión del radicalismo del poder en 1930 perjudicó su capacidad para intentar cooptar de algún modo a la clase obrera. Al aumentar la intervención económica del Estado después de 1930, sólo aquellas organizaciones y grupos capaces de incidir sobre el proceso de creación de políticas estaban bien situados para obtener el apoyo de los trabajadores. Como resultado de su posición durante la década de 1930 y de su oposición a la participación electoral, los radicales no pudieron sacar partido de la deficiente representación política de la clase obrera.

Finalmente, el hecho de que el sector "patricio" del radicalismo tomase control del partido tras la caída de Yrigoyen cerró definitivamente la posibilidad de que la UCR organizase a la clase obrera. Este control oligárquico durante la década de 1930 fue posible gracias a la naturaleza inicial

de la oposición entre radicales y conservadores. Tal oposición, moldeada por la coyuntura crítica que tuvo lugar a partir de 1889, permitió a las élites económicas mantener importantes posiciones dentro de la UCR. Esta persistencia fue posible también porque las metas y la ideología del radicalismo no alienaron a las clases altas. En este sentido, la coyuntura crítica de finales del siglo XIX puede ser considerada una causa histórica afectando dinámicas políticas posteriores⁹.

La movilización de la clase obrera por ciertas élites estatales durante la década de 1940 difícilmente puede ser entendida sin tener en cuenta que "las masas populares argentinas no fueron representadas consistentemente por ningún partido nacional" (Smith 1974: 87). Ello se debió a la posición del radicalismo en los conflictos socio-económicos, en parte como resultado de la naturaleza de la oposición de la que surgió la UCR¹⁰.

3.3.3.3. La articulación política de la burguesía.

Finalmente, la forma que tomó la primera coyuntura crítica puede haber afectado la futura posición política de la burguesía pampeana. El hecho de que ninguna fractura política apareciese en torno al modelo económico antes de 1946 puede haber impedido la emergencia de organizaciones políticas para las cuales el modelo económico agro-exportador fuera un

elemento central en su programa e identidad.

Algunos autores han argumentado que el carácter de los actores políticos sólo surge en virtud de los conflictos y oposiciones en los que toman parte (Rustow 1970: 322). En este caso, ninguna lucha política favoreció la emergencia de fuerzas políticas con programas ideológicos diferenciados que girasen alrededor del modelo económico o de la defensa de los intereses económicos de la burguesía¹¹. A causa de esto, la burguesía agro-exportadora estaba pobremente pertrechada para luchar con proyectos socio-económicos alternativos. Y estaba mal equipada precisamente porque no desarrolló las organizaciones políticas e ideológicas necesarias para articular la defensa de su posición económica en las "trincheras" de la sociedad civil y en el conflicto por la hegemonía, por emplear dos metáforas gramscianas, y no a causa de su incapacidad para transformar sus demandas en políticas. Como resultado de ello, tras la emergencia del peronismo en la década de 1940, los sectores agro-exportadores no pudieron recurrir a un conjunto de identidades y organizaciones políticas listas para defender sus intereses.

Más que en la debilidad electoral del antiperonismo, esta situación se reflejó en la incapacidad de la burguesía pampeana para defender el modelo agroexportador en las luchas partidistas. El legado de esta falta de articulación política se percibe en el hecho de que ninguna fuerza política

significativa se desarrolló en torno a la defensa de dicho modelo económico. Por el contrario, la burguesía pampeana tuvo que apoyar a un partido clientelístico (la UCR) cuyas relaciones con tal modelo fueron, a partir de la década de 1940, al menos ambiguas.

Esta cuestión debe ser claramente distinguida de las constricciones sociales que operaban sobre la fuerza electoral de los conservadores, un tema que se aborda en capítulos posteriores. El primer problema confrontado por los conservadores era organizativo, no de éxito electoral. La unificación de los grupos conservadores era un requisito imprescindible para una exitosa intervención en las luchas electorales. El hecho de que esta unificación no tuviese nunca lugar (siendo incluso resistida por los mismos conservadores, por motivos que se abordan más adelante) indica que factores diferentes del tamaño de los grupos sociales afectaron decisivamente la evolución política argentina.

En segundo lugar, los conservadores obtuvieron relativamente buenos resultados electorales en algunas áreas urbanas¹². Es revelador que los resultados radicales fuesen mejores en las áreas más rurales de la Pampa húmeda y de los suburbios de Buenos Aires que en las áreas exclusivamente urbanas (González 1985: 58-59; Walter 1985: 42).

Ciertamente, sería necesario desarrollar un análisis comparativo detallado (dentro de las provincias y entre ellas)

a fin de evaluar el papel de las constricciones sociales sobre el éxito electoral de los conservadores. Sin embargo, independientemente de los resultados de tal análisis (un primer desarrollo del cual se puede encontrar en los capítulos que siguen), las observaciones previas indican que el fracaso de la burguesía pampeana se relacionó estrechamente con el tipo de conflicto que surgió con el radicalismo.

3.3.4. Representación de las clases altas y quiebra democrática.

Por lo que se refiere a las élites económicas, la explicación que he resumido arriba permite afrontar algunas cuestiones de interés teórico. Un estudio reciente (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992) ha intentado vincular argumentos estructurales e institucionales a fin de explicar el desarrollo de los regímenes democráticos. La evolución argentina confirma alguno de los hallazgos de estos autores, como es el caso del papel positivo que las economías agro-exportadoras sin uso intensivo de trabajo jugaron en el desarrollo de la democracia (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 178).

La ausencia de una numerosa población de trabajadores rurales (asalariados o no) favoreció la adopción de una actitud relativamente flexible por parte de la élite política hacia la

apertura democrática. Además, el desarrollo de las clases medias dió lugar a presiones desde abajo que hicieron extensivas las demandas democráticas. Según estos autores,

"El prerrequisito para la protección de los intereses de las élites residía en la existencia de dos o más partidos fuertes. al menos uno de los cuales promoviese efectivamente los intereses de sectores significativos de tales élites económicas y/o que ambos (o todos ellos) permitiesen el acceso directo de las élites económicas a los centros de decisión política en el aparato del Estado" (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 169).

Cuando no se presentaron estas condiciones, la percepción de una inadecuada representación de sus intereses económicos dentro del sistema de partidos habría conducido a las élites económicas a posiciones antidemocráticas. En condiciones de crisis económica, esta situación habría favorecido los golpes militares. Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens ven en la Argentina de 1930 una ilustración de este proceso (1992: 169).

Sin embargo, según la mayoría de las fuentes, el caso argentino está más cercano al primer escenario (aquel en el que los intereses de las élites tuvieron acceso directo a los centros de decisión y estuvieron protegidos por el sistema de partidos) que al segundo. Las clases altas estuvieron continuamente representadas en el seno de las dos fuerzas políticas principales (radicales y conservadores) antes y después del golpe de 1930, lo que se reflejó en la alta sensibilidad del Congreso y de los gobiernos radicales a las

demandas de las clases altas. El sistema argentino de partidos se caracterizó por la existencia de fuerte partido multiclasista y clintelístico (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 287). En especial, el radicalismo no intentó en ningún caso ni transformar el modelo económico ni iniciar ningún ambicioso programa de reforma social.

Además, el impacto del Partido Socialista en la percepción de amenaza de las élites conservadoras fue muy limitado. Ciertamente, una escisión del partido socialista (los socialistas independientes) se hizo con la mayoría en las elecciones de 1930 en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este grupo fue apoyado por votos conservadores y antipersonalistas. Los socialistas independientes llegaron a jugar un importante papel en la creación de un ambiente favorable al golpe. Los diputados de esta orientación firmaron el "Manifiesto de los 44" en el que se llamaba a la resistencia popular contra Yrigoyen (Pinedo 1946: 74), y después de 1930 favorecieron la creación de una alianza con conservadores y antipersonalistas (Pinedo 1946: 86). Dos de sus principales líderes (Pinedo y De Tomaso) fueron ministros del Presidente Justo.

El Partido Socialista mantuvo una posición reformista y, en ese sentido, las élites políticas y económicas pudieron percibirlo como una fuerza amenazadora. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este partido nunca consiguió convertirse

en una alternativa nacional y quedó prácticamente circunscrito a la capital federal. En un país como la Argentina, en el que las provincias del interior podían vetar incluso las políticas de Yrigoyen a través del Senado, las posibilidades de un partido de esa implantación eran muy limitadas.

Por estas razones, el sistema de partidos argentino era muy favorable a la existencia de una baja percepción de amenaza por las clases altas. La aparentemente débil representación de los intereses burgueses no es sino un resultado de la ausencia de importantes partidos obreros. Puesto que las fracturas "verticales" se reflejaron de una forma limitada en el sistema de partidos, es difícil descubrir "el partido de la burguesía". A la postre, tal sector social estuvo representado no sólo en el conservadurismo sino también en el radicalismo.

No es sorprendente, por tanto, que los líderes conservadores no se sintieran suficientemente amenazados por la perspectiva de una victoria radical (con anterioridad a las elecciones de 1930) como para organizar un partido conservador estable. La segunda presidencia de Yrigoyen incrementó la animosidad conservadora hacia el radicalismo, pero las causas de ello no radicaron en sus políticas socio-económicas (James 1993).

Ciertamente, es posible sostener que, si bien el gobierno de Yrigoyen no fue anti-burgués, sí se había convertido en muy poco fiable a causa de su incapacidad para afrontar la crisis

económica. Pero incluso en el caso de que esta descripción fuese adecuada, la misma diferiría del análisis que se discute aquí. Tal explicación se centraba en partidos y canales de representación, no en el rendimiento de un presidente específico. En mi opinión, no es posible introducir las deficiencias de la gestión presidencial o el nivel de tensión existente entre los partidos de oposición y el gobierno entre las cláusulas antecedentes relativas a la promoción de los intereses de las élites económicas.

Los principales factores que promovieron el golpe (fuerte oposición entre el radicalismo yrigoyenista y los partidos de oposición, parálisis decisoria, desarrollo de las orientaciones autoritarias en ciertos grupos sociales después de la Revolución Soviética y conflictos de orden simbólico-político) se relacionan con el carácter autónomo de los procesos políticos e ideológicos más que con luchas de tipo socio-económico. Esa autonomía de la política no fue eliminada por el golpe de 1930. Por el contrario, el golpe reforzó, a largo plazo y en el contexto de una crisis económica, la autonomía del Estado respecto a las élites económicas (Palermo 1990a).

3.4. Conclusiones.

En las páginas anteriores he explorado las características de la coyuntura crítica que dió lugar al radicalismo, prestando particular atención a la posición de la burguesía pampeana en la estructura resultante de conflictos políticos. Los resultados de esa exploración, complementada por análisis electorales en el siguiente capítulo, pueden sumarse del modo que sigue.

La primera fractura en la política argentina resultó de la interacción entre variables políticas y socio-económicas. En primer lugar, un sector de las élites situado en posiciones políticamente periféricas se movilizó en contra de la oligarquía gobernante. En segundo lugar, tal grupo (o más bien una parte de él) integró, en el seno de una coalición político-social, a unas clases medias deseosas de participar políticamente, pero cuya intervención era bloqueada por el carácter oligárquico del sistema. La convergencia de estos dos grupos (o más exactamente la movilización del segundo por el primero) dio lugar al radicalismo.

El resultado de esta coyuntura crítica fue un conflicto entre radicales y conservadores que giró básicamente en torno a cuestiones políticas y simbólicas. El conflicto político no careció de implicaciones sociales (como muestran las disputas entre yirigoyenistas y antipersonalistas), pero las luchas

socio-económicas no se reflejaron claramente en conflictos de partido. En este sentido, la luchas entre partidos no tendieron a reforzar fracturas económicas subyacentes.

En esta situación, la burguesía rural mantuvo una posición política prominente. Esa clase mantuvo adecuados canales de representación dentro del conservadurismo y el radicalismo. Además, sus conexiones con los centros de decisión política continuaron desarrollándose como en el pasado. En ningún caso tuvo que afrontar este grupo una amenaza socio-económica articulada por el radicalismo.

Aunque es necesario analizar de manera más detallada las relaciones entre el gobierno de Yrigoyen y la burguesía en el contexto de la crisis de 1930, la naturaleza de los conflictos políticos que tuvieron lugar durante la década previa sugiere que el golpe no fue el producto de conflictos socio-económicos. En este sentido, como José Nun ha señalado, "aunque oligárquico de contenido, el movimiento militar se desarrollo con la aquiescencia de las clases medias, cuyos representantes hicieron poco para modificar su desarrollo" (1969: 39). Más que como el resultado de algún tipo de lucha de clases, el golpe puede ser considerado como la culminación de un periodo de fuertes conflictos políticos en una situación de crisis económica. La intensidad del conflicto político, escasamente limitado por las convicciones democráticas de los actores, favoreció la implementación del golpe en un contexto de

indiferencia pública (Areces 1969: 32).

Finalmente, la posición de la burguesía pampeana en esta fractura política puede haber tenido, en el contexto de la estructura económica argentina, resultados importantes y en cierta medida inesperados. En primer lugar, tal posición impidió al radicalismo conducir (o presionar en favor de) el proceso de incorporación política de la clase obrera. Este hecho, más que la fuerza de la burguesía pampeana, favoreció lo que Collier y Collier llaman incorporación obrera tardía y polarizada (1991: 131 y 349). En segundo lugar, como resultado de la relevancia secundaria de los conflictos en torno a programas socio-económicos, la burguesía pampeana careció de la preparación ideológica y política necesaria para afrontar, con mayores posibilidades de éxito, el reto populista en la década de 1940.

En este sentido, las características de los conflictos socio-políticos en el primer tercio de siglo en la Argentina afectaron las dinámicas subsiguientes de cambio político y moldearon posteriores coyunturas críticas. En el capítulo que sigue se exploran con más detalle las características sociales y territoriales de tales conflictos a través de un análisis booleano de la fuerza electoral del conservadurismo en las elecciones de 1916 y 1928. Tal análisis, en el contexto de la descripción de los patrones de conflicto socio-político que se ha intentado esbozar aquí, puede ayudar a comprender mejor la

evolución de la corriente política conservadora a lo largo de la historia argentina.

NOTAS

1. Sobre la importancia de los momentos fundacionales en los procesos políticos ver March y Olsen 1984: 745.

2. Los caracteres extramadamente personalistas del liderazgo de Yrigoyen pueden haber reforzado la importancia de estos factores. En sus propias palabras, "nunca he necesitado sabidurías a mi lado, pues siempre me he creído poseyéndolas por mí mismo, de tal manera que jamás he tenido que consultar a nadie en el desempeño de mis labores" (discurso citado en Pinedo 1983: 195). El estilo político de Yrigoyen condicionó igualmente la actitud favorable del Partido Socialista, en un primer momento, hacia el golpe de 1930. Cuatro días después del golpe, una nota emitida por este partido indicaba que:

"La UCR personificada en su jefe...estimuló con su desprecio por la opinión pública la acción de la violencia. Los anhelos civiles de rectificación política impostergable encontraron en la fuerza armada de la Nación, formada en su totalidad por ciudadanos y en gran mayoría por las conscripciones que se reclutan en la entraña de la clase trabajadora, la cooperación eficiente que ha terminado con un estado social, cuya prolongación... era imposible" (citado en Pinedo 1946: 79).

3. Sobre las características sociales de los militares en aquel periodo, ver Goldwert 1968: 198-99; Potash 1969: 21-22 y Nun 1969: 17.

4. Sobre estos últimos ver Gallo 1986: 22-23 y Floria y Belsunce 1988: 115 y ss.).

5. Sobre la transformación de las fracturas en sistemas de partidos ver Lipset y Rokkan 1967: 26 y ss..

6. Sobre estas cuestiones ver Halperin Donghi 1993.

7. Sobre este punto ver O'Donnell 1978.

8. Según Federico Pinedo, Yrigoyen no introdujo ninguna transformación significativa en el sistema impositivo en favor de las clases trabajadoras. Pinedo subrayaba que fue precisamente el régimen conservador de la década de 1930 el primero en establecer impuestos sobre la renta, inmediatamente después del golpe (Pinedo 1983: 201).

9. Sobre la diferencia entre causas históricas y constantes ver Collier y Collier 1991: 35-36 y Scully 1992: 11-12.

10.El único partido que intentó integrar a la clase obrera en el sistema político fue el socialista. Sin embargo, debido a un conjunto de constricciones tal partido no pudo obtener éxitos nacionales significativos (ver Schoultz 1983: 24-25).

11.Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens (1992: 209) muestran que los partidos ideológicos de masas pueden tener consecuencias ambiguas para la evolución de los regímenes políticos. Tales partidos van a menudo ligados a intensos conflictos políticos en torno a cuestiones socio-económicas. A su vez, este tipo de conflicto puede promover inestabilidad política. Por otro lado, estos conflictos pueden favorecer la emergencia de futuros acuerdos sobre regímenes políticos (Rueschemeyer, Huber Stephens y Stephens 1992: 209) cuando ambos polos son fuertes y, por tanto, cuando los conflictos son "prolongados y no concluyentes" (Rustow 1970: 352). En el caso argentino, muchos factores conspiraban para erosionar la viabilidad de la democracia. En el largo plazo, y a la luz de los argumentos previos, uno de ellos puede haber consistido en la ausencia de partidos de masas de base ideológica.

12.Como indica Halperin Dongui "their hopes were now pinned on on the industrial suburbs of the ... city of Buenos Aires" (1993: 46).

4.El conservadurismo en las elecciones de 1916 y 1928.
Estructuras sociales, diferencias regionales y conflictos
políticos.

4.1. La fallida articulación de una coalición antiradical en las elecciones presidenciales de 1916.

4.1.1. El desafío radical tras la reforma electoral de Sáenz Peña.

Las reformas electorales introducidas por Sáenz Peña abrían el sistema político a la competición entre radicales y conservadores, en la medida en que las distintas posibilidades de fraude electoral patrocinadas por las fuerzas gobernantes, en los niveles nacional y provincial, eran reducidas decisivamente. Tales reformas establecían el sufragio universal para los varones mayores de dieciocho años (basado en el censo militar) y un sistema electoral en el cual dos tercios de los cargos electos eran obtenidos por la primera fuerza política y el tercio siguiente por la segunda opción electoral. Esta última característica tenía el objetivo de asegurar la presencia de las fuerzas políticas derrotadas en el Congreso. Inicialmente, se suponía que los radicales se beneficiarían del sistema de lista incompleta en tanto en cuanto sus resultados (que las élites gobernantes anticipaban inferiores a los de los conservadores), no les impedirían obtener representación política. En este sentido, las reformas de Sáenz Peña tenían el objeto de integrar a la oposición radical en el sistema político, poniendo fin a la oposición constante de esta formación al orden político vigente. Las primeras contiendas electorales celebradas en provincias bajo el nuevo sistema comenzaron a mostrar cuales eran los

riesgos de tal transformación para el mantenimiento en el poder de las élites gobernantes (Cornblitt 1975: 625). En 1912, los radicales vencieron en las elecciones a diputados nacionales en Santa Fe y Capital Federal. En las elecciones de marzo de 1914 a diputados nacionales, los radicales vencieron en Entre Ríos (Reula 1969: 236 y ss.) y Santa Fe, y, aunque derrotados, obtuvieron porcentajes inquietantes para las fuerzas oficialistas en provincias tan importantes como Buenos Aires (47.4% de los conservadores por 41.9 de los radicales) y Córdoba (40.7% de los conservadores por 35.6% de los radicales).

4.1.2.La articulación de la coalición antiradical.

Ante esa situación, importantes fuerzas conservadoras empezaron a articular, a partir de noviembre de 1914, una coalición antiradical "que uniera a los partidarios de opciones liberales de todo el país y que pudiera enfrentarse con opciones de triunfo al populismo yrigoyenista" (Malamud 1992: 5). El fruto directo de tales esfuerzos sería la formación, en convención constituyente que tuvo lugar en diciembre del mismo año, del Partido Demócrata Progresista (PDP), organización que presidiría Lisandro de la Torre, su máximo impulsor. Personalidades como Joaquín V. González, Indalecio Gómez y el futuro general José Félix Uriburu tomaron parte, de un modo u otro, en la gestación del PDP. A ellas se sumarían posteriormente Carlos Ibarguren, Julio Roca (h) y Robustiano Patrón Costas (Malamud 1992: 5; Martínez Raymonda 1983: 45-46).

Las fuerzas que participaron en este proceso de organización política fueron los partidos Autonomista y Liberal de Corrientes, el Partido Popular de Mendoza, la Unión Conservadora de Entre Ríos, la Liga de Sur de Santa Fe, el Demócrata de Córdoba, el Demócrata Progresista de San Luis y la Unión Provincial de Salta (Cornblitt 1975: 625). Es significativo que el nuevo partido no surgiese de resultas de la fusión de distintas fuerzas de carácter nacional, sino que fuese el fruto de la agregación de partidos de ámbito provincial. Este factor tiene cierta relevancia a la hora de explicar la forma en que la coalición anti-radical se disgregó tras 1916 y los patrones de funcionamiento de la política conservadora tras el triunfo de Yrigoyen.

Desde la formación del PDP, ciertos grupos conservadores que ya habían quedado fuera de tal proceso constituyente (con Marcelino Ugarte, líder de los conservadores de Buenos Aires, a la cabeza), mostraron su oposición a que De la Torre liderase la candidatura anti-radical en las presidenciales de 1916 (González Arrili 1940: 102; Cornblitt 1975: 625). Esta oposición venía motivada por el deseo de Ugarte de postular su candidatura a Presidente en 1916.

Los movimientos políticos que Ugarte articuló en contra de De la Torre movieron a éste a dimitir de su cargo de presidente del PDP en la convención que este partido celebró en diciembre de 1915. Es revelador que Julio A. Roca apoyase a De la Torre en ese instante a fin de evitar la disolución del tal partido (González Arrili 1940: 107), consciente tal vez de la necesidad

de articular una fuerza antiradical estable.

Tal consciencia está, por lo demás, en el pensamiento de De la Torre, para el cual la lucha contra "las finalidades confusas y los procedimientos contradictorios" del radicalismo (González Arrili 1940: 108) exigía organizar un partido democrático. De la Torre percibía con agudeza casi premonitoria, que tal fuerza no podía ser construida ni a partir de una simple "liga de oficialismos", que "habría desencadenado en el acto la borrasca popular, ni con la influencia oculta de un presidente omnímodo" (González Arrili: 109). De ahí que fuese necesario articular una fuerza con nuevas estructuras y propuestas democráticas capaz de derrotar al yrigoyenismo. Sin embargo, en su esfuerzo de construcción partidaria, De la Torre hubo de contar, necesariamente, con fuerzas ligadas al viejo régimen y a las viejas prácticas políticas.

La convención reunida en diciembre de 1915 apoyó la candidatura formada por Lisandro de la Torre y Alejandro Carbó a presidente y vicepresidente respectivamente, a cuyo éxito contribuyó la intervención de Julio A. Roca (h). A pesar de ello, continuó habiendo intentos de articular candidaturas de compromiso, cuyo único efecto fue tal vez debilitar la posición de De la Torre dentro del Radicalismo (González Arrili 1940: 107-8).

Como se indica más arriba, la resistencia de Ugarte venía motivada por las ambiciones políticas del caudillo conservador bonaerense. Además, la trayectoria política de De la Torre, su hostilidad a las viejas prácticas de los oficialismos, así como

los elementos democratizantes que éste pretendía insuflar al conservadurismo, jugaron algún papel en el grado de hostilidad que los ugartistas sentían hacia De la Torre, en parte, por haber sido este último militante radical y adversario de Roca y de Pellegrini (González Arrili 1940: 115; Walter 1985: 38).

En cualquier caso, las actuaciones de Ugarte tenían como objetivo evitar que el colegio electoral se volcase a favor de Lisandro de la Torre en las presidenciales de 1916. Lo cual tiene que ver con la percepción de que Yrigoyen sería incapaz de obtener la mayoría en el dicho colegio. Por lo demás, este cálculo no podía parecer estrafalario en su momento. Como Oscar Cornblitt ha mostrado, las previsiones del mismo De la Torre apuntaban que una coalición de "fuerzas moderadas" podría obtener una cómoda mayoría contra el yrigoyenismo (Cornblitt 1975: 627). Esta previsión no es desmentida por los resultados electorales, una vez tenemos en cuenta la división de los conservadores, el papel de las maniobras ugartistas contra De la Torre y aun el apretado carácter de la situación generada en el colegio electoral.

En el caso de que Yrigoyen y De la Torre hubiesen llegado a una situación de empate en el colegio electoral, Ugarte y sus aliados podrían haber obtenido de los antiradicales el apoyo necesario para llevar a éste a la presidencia de la República. En ciertas interpretaciones, Ugarte habría preferido incluso la victoria del radicalismo a la de De la Torre. De este modo, sus posibilidades futuras de liderar a las fuerzas conservadoras no quedaban bloqueadas (Cornblitt 1975: 628).

Con este objeto, los conservadores bonaerenses y sus aliados (los conservadores de Santiago del Estero y Tucumán, fundamentalmente) actuaron para debilitar la candidatura de De la Torre (trabajando a veces en favor del voto para Yrigoyen, como en el caso de la misma capital federal) (Cornblitt 1975: 626-27; González Arrili 1940: 113- 15) y para articular una segunda alternativa anti-radical (Walter 1985: 39).

Los cálculos de Ugarte fueron parcialmente correctos, en la medida en que las fuerzas en el colegio electoral resultaron ser extraordinariamente parejas. Ello no le ayudó, sin embargo, a obtener el apoyo de sus rivales antiradicales. Ya De la Torre había señalado, a este respecto, que la candidatura de Ugarte era inviable por encarnar éste los aspectos más odiosos del régimen oligárquico (González Arrili 1940: 102). Por otra parte, la postura anti-cooperativa de los ugartistas se manifestó igualmente en la negativa a apoyar candidaturas de compromiso con los demócrata-progresistas (en las personas de Bermejo y Dragó). Por último, la votación final revelaría el alcance de las fracturas internas del antiradicalismo al dividirse el voto de los electores del Partido Demócrata Progresista entre la fórmulas Angel Rojas-Juán Serú (apoyada por el sector más conservador) y Alejandro Carbó-Carlos Ibarguren (Cantón y Moreno 1972: 87).

Así pues, las pugnas que tuvieron lugar dentro del campo anti-radical allanaron decisivamente el camino a la victoria de Yrigoyen en las presidenciales de 1916. En el colegio electoral Yrigoyen obtuvo 152 votos. Exáctamente uno más de los necesarios

para ser elegido presidente.

4.1.3. La configuración territorial de los resultados de las presidenciales de 1916.

Al analizar los resultados electorales provinciales se aprecia, en primer lugar, que la Unión Cívica Radical es la única fuerza que está articulada nacionalmente. A diferencia de ésta, los grupos conservadores o "moderados" adolecen de una descoordinación sorprendente. No sólo los demócrata-progresistas son incapaces de obtener resultados significativos en la mayoría de las provincias, sino que las restantes fuerzas de orientación conservadora (que aquí se han consignado simplemente como conservadoras para simplificar esta discusión) se caracterizan por su adscripción netamente provincial.

Ahora bien, una vez se toma en cuenta la patente descoordinación de los conservadores argentinos, la fuerza provincial de los mismos en las presidenciales de 1916 se revela como un hecho igualmente llamativo. Los conservadores obtienen las posiciones más votadas en ocho de las quince áreas electorales (catorce provincias y capital federal).

Tabla 1. Porcentaje de votos para cada partido político en las elecciones presidenciales de 1916. (Se incluyen sólo aquellas fuerzas que obtuvieron al menos un cinco por ciento de los sufragios).

	<u>UCR</u>	<u>RD</u>	<u>PDP</u>	<u>CON</u>	<u>AUT</u>	<u>PART</u>
Corrientes	29		40		23	48.7
Salta	37		60			59.2
Jujuy	39			58		61.9
Catamarca	38			57		68.8
La Rioja	44			54		68.5
San Juan	47			52		75.9
Buenos Aires	45			48		63.7
Santiago del Estero	44			44		56.3
Entre Ríos	53			43		61.6
Capital Federal	48		41			76.2
Mendoza	55			38		59.7
San Luis	17			36		67.4
Tucumán	59		35			55.1
Córdoba	67		29			48.7
Santa Fe	31	28	28			63.4

Participación en el total nacional: 62.7%

(Fuente: Cantón 1968: 85-86).

UCR: Unión Cívica Radical.

R.DIS.: Radicales disidentes de Santa Fe.

PDP: Partido Demócrata Progresista.

CON.: Agrupaciones provinciales de corte conservador. Incluye a los partidos conservadores de La Rioja y Buenos Aires, la Concentración de San Juan y Catamarca, el partido autonomista de Entre Ríos, el partido provincial de Jujuy, el popular de Mendoza, la Unión Democrática de Santiago del Estero y el partido demócrata de San Luis.

AUT.: Partido Autonomista de Corrientes.

Tabla 2. Orientación de la fuerza política más votada en cada área.

	<u>Conservadores</u>	<u>Radicales</u>
Capital Federal		x
Buenos Aires	x	
Catamarca	x	
Córdoba		x
Corrientes	x	
Entre Ríos		x
Jujuy	x	
La Rioja	x	
Mendoza		x
Salta	x	
San Juan	x	
San Luis	x	
Santa Fe		x
Santiago del Estero		x
Tucumán		x

Más específicamente, los radicales se imponen en Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, las fuerzas "moderadas" y conservadoras triunfan en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis y San Juan. Las organizaciones conservadoras triunfantes en cada provincia varían ampliamente, como se mencionó arriba. El Partido Demócrata Progresista obtiene el mayor número de votos en Corrientes y Salta, y es la segunda fuerza más votada en Córdoba y Tucumán. En La Rioja, Buenos Aires, Catamarca (Concentración) y San Juan (Concentración), partidos que se presentaron bajo la etiqueta conservadora derrotan a la U.C.R.. En San Luis vence el partido Demócrata, y, en Jujuy, el partido Provincial.

Otro aspecto significativo de la competición electoral se

refiere la claridad con que se producen las victorias radicales. En este sentido, es interesante que en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, así como en la capital, los radicales superasen a los conservadores en menos de un 10% de los votos. Este hecho resalta que, aun en ciertas de las áreas en las que los radicales triunfaron, la resistencia de los conservadores frente a sus antagonistas fué bien notable. Este hecho tiene alguna importancia a la hora de valorar cual era el electorado potencial de una agrupación de contenido conservador.

Por tanto, que fuerzas que mantenían un fuerte contenido provincial eran las que protagonizaban la resistencia electoral frente a la alternativa radical, estando esta última mucho más sólidamente articulada en todo el territorio argentino. Ese equilibrio entre radicales y conservadores al nivel provincial se reflejó en lo apretado de la victoria de Yrigoyen en el Colegio Electoral. No revirtió, sin embargo, en la construcción de una alternativa unificada frente al radicalismo.

4.2. Las elecciones presidenciales de 1928.

4.2.1. La formación de la candidatura anti-yrigoyenista.

En abril de 1927, una convención del radicalismo antipersonalista reunida en Buenos Aires acordó presentar a Leopoldo Melo y Vicente Gallo como candidatos a presidente y vicepresidente de la república respectivamente. La fórmula, que pretendía cerrar el paso a Yrigoyen a la presidencia, contaba

con el apoyo de la mayor parte de los gobiernos provinciales así como con el del presidente Alvear (Del Mazo 1955: 82-83; Alonso 1983: 124). En 1927, sólo los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Tucumán se decantaban a favor de Yrigoyen.

Las fuerzas conservadoras habían iniciado ese mismo año los preparativos de las elecciones de 1928. A tal efecto, también en abril de 1927, una reunión de políticos conservadores que tuvo lugar en Córdoba urgía a la tarea de construir "un partido nacional" en el propósito de "salvar a la nación de la siniestra amenaza del personalismo" (Alonso 1983: 123). En agosto de 1928, la Confederación de Partidos de Derecha, reunida en Córdoba bajo la presidencia de Julio A. Roca (hijo) acordaba prestar su apoyo a la candidatura de los radicales antipersonalistas, liderada por Melo y Gallo. A pesar de ello, los conservadores decidieron presentarse como una tendencia política distinta del antipersonalismo. A esa convención asistieron el Partido Conservador de Buenos Aires, el Partido Demócrata de Córdoba, el Liberal de Tucumán, el Autonomista de Corrientes, el Liberal de Corrientes, la Unión Provincia de Salta, la Unión Liberal de San Luis, el Partido Liberal de Santiago del Estero, la Concentración de Catamarca y la Concentración de La Rioja (Del Mazo 1955: 85-87).

Al apoyo que los conservadores optaron por prestar a los radicales antipersonalistas no era ajeno el éxito que los yrigoyenistas habían venido obteniendo en elecciones provinciales de forma consecutiva en 1928 en Salta, Tucumán, Santa Fé y, posteriormente, en Córdoba, considerada

tradicionalmente un baluarte del conservadurismo (Alonso 1983: 132 y ss.).

En vísperas de las elecciones, el mapa político se caracterizaba por el giro de las élites económicas hacia posiciones anti-yrigoyenistas (Del Mazo 1955: 85 y ss.) y por el apoyo que la mayoría de los poderes provinciales otorgaba a la fórmula antipersonalista (en particular de los de Santa Fe, Corrientes, Mendoza, San Juan, Córdoba, Salta y La Rioja). A pesar de las iniciativas de antipersonalistas, conservadores y, por diferentes motivos, socialistas, el gobierno de Buenos Aires permaneció favorable a los yrigoyenistas. Decisiva en este resultado fue la actitud de Alvear, quien, pese a sus simpatías antipersonalistas, vetó la intervención de Buenos Aires, aprobada por el Senado con el voto a favor de conservadores y antipersonalistas (Walter 1985: 71-79).

Por lo que respecta a los partidos conservadores y antiradicales, lo más significativo reside en su apuesta por la coalición antipersonalista. Este hecho, como bien percibió el político conservador Sánchez Sorondo, situaba a los conservadores "a la zaga de los radicales", mezclando, a juicio de éste, "dos tendencias históricas y socialmente antagónicas" (Sánchez Sorondo en La Nación, 31-3-1928, en Cantón y Moreno 1972: 105). La unión de antipersonalistas y conservadores con los radicales lencinistas (Mendoza) y cantonistas (San Juan) es indicativa de la heterogenidad de la coalición antiyrigoyenista. Pues estos últimos grupos se caracterizaban por un estilo de gobierno y una concepción de la democracia mucho más cercanos a

los del yrigoyenismo que a los del antiyrigoyenismo (Pinedo 1946: 70). Este hecho adquiere relevancia una vez se tiene en cuenta que el conflicto entre yrigoyenistas y antipersonalistas puede ser concebido, al menos parcialmente, como un conflicto entre el centro y la periferia. Los dos casos antes citados son la mejor expresión de este hecho. Ciertamente, en el conflicto entre antiyrigoyenistas e yrigoyenistas juegan connotaciones sociopolíticas (con mayor peso de los sectores populares en el yrigoyenismo y de los sectores burgueses en el conservadurismo y el antipersonalismo) e ideológicas distintas, en este caso pese a su escaso grado de articulación (con una concepción populista de la democracia en el caso de los yrigoyenistas y un concepción de corte más bien "madisoniano" en el caso de los antiyrigoyenistas, utilizando la contraposición desarrollada por Dahl) (1956). Además, los conservadurismos provinciales pueden ser vistos como fenómenos de resistencia de las élites periféricas frente a los intentos por parte del centro de profundizar el proceso de centralización política a costa de algunas características constitutivas del viejo orden político y, en especial, del peso extraordinario de las élites provinciales en la vida política nacional a través de la sobrerrepresentación que el Senado les proporcionaba. En este sentido, no es sorprendente que los conservadores no superaran sus viejas estructuras provinciales en la construcción de una fuerza política integrada nacionalmente.

4.2.2. La relevancia general de las elecciones presidenciales de 1928.

Es en este punto, expresado por Sánchez Sorondo, dónde reside uno de los aspectos más significativos de las elecciones de 1928. A diferencia de lo que sucedió en las dos presidenciales precedentes (1916 y 1922), los partidarios del orden político tradicional debían afrontar una amenaza de contornos mucho más claros en el terreno político, en parte por haber sido sentidos ya los efectos de la política de Yrigoyen en lo que se refería a la persistencia de las élites políticas conservadoras en sus posiciones de poder, tanto en los ámbitos provinciales como en el nacional. El alcance político de un eventual triunfo del radicalismo yrigoyenista se percibía en los mismos rumores sobre los riesgos de un golpe de Estado caso de que Yrigoyen venciese en las elecciones. El principal implicado en la conspiración, el general Agustín Justo, negó taxativamente la existencia de una intentona golpista encabezada por él. Ello no obstante, el general Justo fue uno de los principales líderes (junto a Uriburu) del golpe que en 1930 derrocó a Yrigoyen.

A pesar de las tensiones políticas asociadas con las presidenciales de 1928, es en ese momento cuando se consolida definitivamente un patrón de intervención política de los sectores conservadores caracterizado por la no articulación nacional de partidos de este signo político. Así, en primer lugar, en las elecciones de 1928, los sectores sociales que perciben como inquietante el dominio del populismo yrigoyenista

han de fiar sus posibilidades electorales en el triunfo de una candidatura de origen radical (aunque antipersonalista). En segundo lugar, a diferencia de lo que sucede con el radicalismo yrigoyenista, los sectores anti-yrigoyenistas y conservadores concurren bajo distintas etiquetas, a menudo de ámbito exclusivamente provincial a las elecciones presidenciales. Al margen de los factores institucionales que permitieron la continuación de prácticas de este tipo (como el que los electores elegidos al colegio electoral pudieran decidir libremente que candidatura a la presidencia votarían), estas prácticas competitivas informan de las tendencias disgregadoras que subyacían a los proyectos conservadores.

4.2.3. Los resultados de la elección de 1928.

Los elecciones de 1928 confirman al radicalismo yrigoyenista como partido predominante (Sartori 1976: 247-258), otorgándoles la victoria en todas las circunscripciones a excepción de San Juan, en la que el bloquismo, con el apoyo de los conservadores, se impone a la lista de Yrigoyen. A pesar de ello, el grado de competitividad entre las candidaturas de Yrigoyen y las de los anti-yrigoyenistas es bastante notable en algunas provincias. En particular, los porcentajes de los anti-yrigoyenistas reflejaron la existencia de una efectiva competición electoral en Catamarca (47%), San Luis (47%), Corrientes (43%), Entre Ríos (40%), La Rioja (39%) y, más limitadamente, Jujuy (34%) y Salta (32%). Más adelante, se

intentará dilucidar que aspectos estructurales y políticos han podido tener importancia en la determinación del potencial conservador en las distintas provincias argentinas.

Tabla 4. Los resultados de las elecciones presidenciales de 1928

	UCR	R-C	FU	CON	PS	PARTICIP
San Juan(*)	21	57			12	86.9
Catamarca	49		47			84.9
San Luis	51		47			81.0
Santiago del Estero	50	47				73.8
Corrientes	49		43			80.5
Entre Ríos	54		40			90.9
La Rioja	60		39			80.8
Mendoza	50	37				88.1
Jujuy	61		34			80.7
Salta	65		32			77.3
Buenos Aires	59		6	20		75.5
Santa Fe	63		25			85.3
Córdoba	69		24			71.4
Tucumán	67		23		5	71.6
Capital Federal	55		22		12	91.6

(*)Las provincias que sobrepasaron la media provincial de voto para opciones conservadoras figuran en negrita.

UCR: Unión Cívica Radical.

FU: Frente Unico.

CON: Conservadores de Buenos Aires.

R-C.: Alianza de grupos de origen radical con conservadores y radicales antipersonalistas.

Media provincia para las opciones antiyrigoyenistas: 36.2%.

Participación en el ámbito nacional: 80.85%.

(Fuente: Cantón 1968: 101).

4.3. Algunos condicionantes de la debilidad del conservadurismo argentino. Una comparación interprovincial.

4.3.1. El análisis de los factores relacionados con el vigor del conservadurismo argentino.

Es posible indagar en las causas de la mayor o menor fortaleza de anti-yrigoyenistas y conservadores mediante la consideración comparativa de algunas variables estructurales y políticas. Entre las estructurales, el nivel de desarrollo económico, las formas de uso de la tierra y el grado de analfabetismo pueden haber afectado los resultados de la competición electoral entre conservadores y radicales. Entre las políticas, la orientación de los gobiernos provinciales parece de especial relevancia. Al menos, eso es lo que podría deducirse de la importancia que unos y otros conferían a la orientación de los gobiernos provinciales, ostensibles en las denuncias de fraude de los unos contra los otros y en las demandas en favor o en contra de la intervención federal de las provincias, a menudo con el deseo de neutralizar o mantener el papel de los gobernadores provinciales en los procesos electorales.

Como se mencionó antes, el análisis booleano permite sopesar la incidencia, sobre el fenómeno que se pretende explicar, de aquellos factores considerados más relevantes a partir de la información y las elaboraciones teóricas existentes. Ciertamente, este tipo de análisis no permite tomar en cuenta las magnitudes con que se presentan los distintos

fenómenos más que en una manera sumaria. Esto es así porque tal método analítico impone la tarea de establecer, con una cierta dosis de arbitrariedad, umbrales a partir de los cuales la intensidad con que un fenómeno se presenta queda simplificada en las categorías de ausente o presente. Ello no obstante, es claro, a mi juicio, que la presentación y análisis de los datos en esta forma clarifica la influencia, directa o combinada, de las variables que se presumen independientes sobre el fenómeno que se pretende explicar. Un análisis de este tipo presenta problemas adicionales cuando la variables cuyo comportamiento se pretende explicar en dos puntos específicos de la evolución temporal (1916 y 1928) son, aunque muy semejantes, diferentes. Pues, como luego se verá, consisten primero en triunfos conservadores y después en un cierto grado de presencia conservadora. Entre otras cosas, esta diferencia explica que haya optado por variar los umbrales a partir de los cuales la variables independientes se consideran presentes o ausentes. Estos cambios, por tanto, no responden a la hipótesis de que las variables que se consideran poseían efectos políticos determinados sólo en términos relativos, esto es, dependiendo de cuales fuesen sus características en otras provincias. Aunque esta hipótesis no es desdeñable, como se verá luego al considerar la posibilidad de que conflictos entre el centro y la periferia hayan sido reflejados de alguna manera en la tensión entre conservadores y radicales, es la transformación de las variables independientes el factor que me ha movido a alterar los umbrales estipulados en cada una de las elecciones.

En este caso, se intenta desentrañar la importancia de algunos factores de tipo económico, social y político que pudieron afectar al menor o mayor éxito de las opciones conservadoras en las elecciones presidenciales de 1916 y 1928. En las primeras elecciones el fenómeno cuya presencia se pretende entender es obviamente el de los triunfos conservadores. En el sistema booleano, los eventos de tal tipo han sido catalogados por tanto como 1, mientras que los triunfos radicales significan la ausencia del resultado que se pretende explicar.

En el caso de las elecciones de 1928 no se produjeron triunfos conservadores con la excepción parcial de San Juan, en la que el bloquismo, unido a conservadores y antipersonalistas, derrotó a Yrigoyen. Se ha tenido que optar, por tanto, por determinar un umbral a partir del cual se considera que las fuerzas anti-yrigoyenistas tenían una presencia estimable y significativa. En este caso, he optado por considerar que aquellas provincias en las que las fuerzas anti-yrigoyenistas (básicamente conservadoras y radicales antipersonalistas) obtienen resultados superiores a la media provincial obtenida por conservadores y antiyrigoyenistas, esto es, al 36.2% de los votos válidos, revelan una presencia estimable de las alternativas políticas conservadoras. Por el contrario, aquellas en las que tal porcentaje se sitúa por debajo de la media provincial, consideradas como provincias en las que el conservadurismo es débil. En los términos del "esquema de verdad", el primer grupo de provincias sería aquel en el que el

fenómeno a explicar está presente (1) y el segundo aquel en el que tal fenómeno está ausente (0).

Entre las variables intervinientes en la determinación de las preferencias electorales se ha tenido en cuenta, en primer lugar, la que se refiere al nivel de desarrollo o, más precisamente, al atraso económico. Son múltiples las maneras en las que tal variable puede afectar a los conflictos políticos, sea por el tamaño y características de los grupos sociales, sea por el tipo de demandas que los mismos ejercen sobre el sistema político. En particular, existen fundamentos deductivos e inductivos que hacen presumir una mayor fortaleza de los partidos conservadores en las zonas más atrasadas. Tales partidos tenían una estructura más laxa (o de notables) que la del radicalismo. Este último aparece como un movimiento políticamente modernizador orientado a integrar a las masas en el sistema político. Como ya se manifestó, una de las motivaciones fundadoras del mismo remite a la consecución de lo que Marshall (1965) denominó la ciudadanía política (p.88 y ss.).

Por contra, la fuerza conservadora estaba basada en el control que los caudillos locales ejercían sobre los votantes (Mustapic 1987: 17-18). Este tipo de control estaba presente en las áreas más desarrolladas del país, como la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, como resultado de la fuerza de organizaciones alternativas (especialmente la radical), y de las dificultades que una sociedad urbana y moderna imponían a tales controles políticos, es muy probable que las redes

clientelísticas fuesen bastante más fuertes en las áreas menos desarrolladas¹.

No es extraño, por todo ello, que las posibilidades de los conservadores pudiesen ser consideradas como más vigorosas en las provincias en las que los mecanismos clientelísticos tradicionales y de exclusión eran facilitados por un menor nivel de desarrollo económico.

En este caso, se ha tomado como umbral a partir del cual se considera a las provincias como atrasadas la media provincial (447.7). Por tanto en este tipo de áreas la variable económica es igual a 1, mientras que en aquellas que superan dicho umbral, la variable atraso económico se considera inexistente. Las áreas económicamente avanzadas incluyen Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Mendoza, esto es, el centro económico del país y la relativamente próspera provincia de Mendoza.

Tabla 5. Capacidad económica per capita (base: Gran Buenos Aires=1,000) (1935-37) (Fuente: Bunge 1940: 217).

CAPITAL FEDERAL	1.052.1
BUENOS AIRES	906.9
SANTA FE	745.1
CORDOBA	680.2
MENDOZA	615.0
ENTRE RIOS (*)	446.6
JUJUY	441.1
TUCUMAN	399.7
SALTA	397.1
SAN JUAN	323.8
CORRIENTES	214.2
SAN LUIS	180.1
LA RIOJA	121.0
S. ESTERO	96.8
CATAMARCA	94.6

(*) En negrita figuran las provincias que se consideran atrasadas en esta clasificación.

Media provincial: 447.7

La participación en el debate público y la movilización en conflictos políticos es ciertamente posible para aquellos individuos cuyos recursos educativos son muy escasos. Sin embargo, los obstáculos que estos individuos deben vencer a la hora de articular sus demandas son ciertamente superiores a los que juegan para otros grupos sociales. El acceso a la información sobre cuestiones políticas y sociales y a las arenas de discusión sobre estas cuestiones puede ser ampliamente facilitado por recursos como el alfabetismo. Es por esto que es posible que en aquellas provincias con muy altas tasas de analfabetismo la movilización electoral de los grupos sociales subordinados haya sido mucho más difícil y que, en consecuencia, los conservadores hayan podido afrontar en mejores condiciones el reto impuesto por el radicalismo. Para las elecciones de 1916 se han considerado como regiones de alto se han considerado a aquellas en las que al menos el 42.5% por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo electoral eran analfabetos (la media provincial). Para las elecciones de 1928 se ha tomado como umbral la media provincial de ese momento: el 29.3%.

Tabla 6. Porcentaje de varones analfabetos en 1914 según el censo electoral (Cantón y Moreno 1972: 55).

Sant. Estero	61.6
Tucumán	53.4
Corrientes	51.7
La Rioja	48.6
Jujuy	47.5
Salta	47.4
San Juan	45.6
Córdoba	44.3
Entre Ríos	44.2
Catamarca	44.1
Mendoza	42.5
San Luis	37.9
Santa Fe	30.9
Buenos Aires	34.2
Capital Federal	3.9

Media provincial: 45.5%

Tabla 7. Porcentaje de varones analfabetos según el censo electoral en 1928 (Cantón y Moreno 1972: 55) .

Corrientes	42.8
Tucumán	37.1
Sant. del Estero	36.5
Entre Ríos	35.4
La Rioja	35.3
Catamarca	34.2
Salta	33.7
San Luis	31.4
San Juan	30.8
Córdoba	28.8
Mendoza	28.0
Jujuy	27.4
Santa Fe	19.2
Buenos Aires	16.0
Capital Federal	2.5

Media provincial: 29.3

En cuanto a la variable referida a la presencia en grado significativo del uso de la tierra por arrendatarios, para las elecciones de 1930 se ha tomado como umbral la media provincial

según el censo de 1914 (el 27.8%). Para las elecciones de 1928, ese umbral se ha fijado en la media provincial según el censo de 1937 (el 34.3%).el 40%. A partir de estas cifras, se ha considerado que el porcentaje de arrendatarios en cada provincia es significativo y puede tener un efecto en la suerte de las opciones conservadoras. Tiene ello que ver con el hecho de que la situación de los arrendatarios se caracterizaba al mismo tiempo por su precariedad económica y contractual frente a los propietarios (Cantón y Moreno 1972: 72- 76) y por la dificultad para estos últimos de controlar las orientaciones políticas y electorales de los arrendatarios, a diferencia de lo que sucedía tradicionalmente con los trabajadores de las estancias latinoamericanas (Halperin Donghi 1993). Por lo tanto, el potencial para que los conflictos socioeconómicos se transformasen en conflictos políticos y electorales parecería más fuerte en aquellos contextos en los que los arrendatarios fuesen más abundantes en términos relativos.

Por otro lado, algunas de las características de la economía pampeana pueden ser ligadas con una cierta debilidad política de los cultivadores directos, en los términos utilizados por Jeffrey Paige. Según éste, en los casos en que, por un lado, los no cultivadores (o clases altas rurales) basan su poderío económico y social en sus superiores recursos financieros y monetarios y no sólo en su propiedad sobre la tierra, y por otro, en los que los cultivadores directos se encuentran ligados a la tierra (sea a través de la propiedad o del arrendamiento) y no sólo a rentas de tipo salarial, los

cultivadores no llegarán a generar movimientos políticos izquierdistas y los conflictos sociales no afectarán a la estructura de propiedad existente (Paige: 26-29 y 32). Por el contrario, cuando esa combinación está presente, ciertas tendencias al conservadurismo de los cultivadores directos tenderán a imponerse. Siguiendo el argumento de Paige, se podría aventurar que las mismas serán superiores cuando el vínculo de los cultivadores con la tierra sea mayor (caso de la propiedad sobre ella) e inferiores cuando tal vínculo (como en el caso de los arrendatarios) sea menor. En este sentido, la economía pampeana parecería poseer características adecuadas para un nivel moderado de conflicto social. Un tipo de conflicto caracterizado por una limitada autonomía política de los arrendatarios salvo en lo que se refiere al terreno electoral. El voto a un partido como la Unión Cívica Radical y por consiguiente la debilidad del conservadurismo podrían conjugarse fácilmente con las posición que ocupaban los arrendatarios argentinos².

Para las elecciones de 1916, se ha utilizado como umbral la media provincial de granjas operadas por arrendatarios según el censo de 1914 (27,8%). Para las elecciones de 1928 me he basado en la misma media según los datos accesibles más cercanos a tal fecha (los del censo de 1937, posterior en nueve años a las elecciones): 34,3%.

Tabla 8. Tanto por ciento de granjas operadas por arrendatarios en 1914 (Taylor 1948: 191).

Jujuy	58,9
Salta	57,7
Santa Fe	54,6
Buenos Aires	38,4
Entre Ríos	36,8
Córdoba	32,1
Corrientes	27,6
Mendoza	15,6
Tucumán	15,1
San Juan	13,9
Sant. Estero	12,7
San Luis	11,1
Catamarca	10,4
La Rioja	5,1

Media provincial: 27.8

Tabla 9. Porcentaje de granjas operadas por arrendatarios en 1937. (Taylor 1948: 191).

Buenos Aires	65,2
Santa Fe	62,8
Jujuy	62,1
Entre Ríos	48,9
Córdoba	47,7
Salta	46,3
Sant. del Estero	28,6
Mendoza	25,1
Corrientes	23,2
Tucumán	19,3
San Luis	16,0
San Juan	14,2
Catamarca	13,6
La Rioja	6,6

Media provincial: 34,3%

Finalmente, la orientación de los gobiernos provinciales ha sido considerada un aspecto crítico en los conflictos entre conservadores y radicales, como las luchas en torno a las intervenciones federales indican. Aparte de otras

consideraciones, la importancia del control de los gobiernos provinciales se relacionaba con la utilización de los mismos por las autoridades locales a fin de controlar, fraudulentamente, el resultado de los procesos electorales. Así, algunos estudios de caso han mostrado (Mustapic 1987) como el control de las instituciones locales fue decisivo para la suerte electoral de los conservadores. En este caso, intento evaluar el impacto de la orientación de los gobiernos provinciales en un marco comparativo. Para las elecciones de 1916 se han considerado proconservadores todos aquellos gobiernos que no estaban ocupados por los radicales. En las elecciones de 1928 he considerado antiyrigoyenistas aquellos gobiernos que adoptaron posiciones militantemente antiyrigoyenistas (esto es, los de San Juan, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, y Córdoba) (Alonso 1983: 128).

Por cierto que si bien los indicadores que se recogen aquí han sido introducidos en el análisis de manera deductiva, los umbrales que determinan la presencia o ausencia de un fenómeno se han fijado de forma inductiva, a partir de criterios que pretendían maximizar la capacidad discriminadora de las variables consideradas al comparar exclusivamente cada variable independiente con la variable dependiente. Finalmente, a fin de entender en su justo sentido la fijación de umbrales, conviene tener en cuenta que la consideración como presente o ausente de un fenómeno histórico suele implicar de manera más o menos explícita juicios acerca de los fronteras a partir de los cuales ese fenómeno (consista éste en revoluciones campesinas o en el

arraigo de partidos ultraderechistas, por poner dos ejemplos) se considera relevante.

4.3.3. Las elecciones presidenciales de 1916.

Esquema de verdad que incluye algunos de los factores que pueden haber tenido alguna incidencia en la fuerza del antiradicalismo en las elecciones presidenciales de 1916.

	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>G</u>	<u>P</u>	<u>R</u>
CORRIENTES	1	1	1	0	1
SALTA	1	1	1	0	1
JUJUY	1	0	1	1	1
CATAMARCA	1	1	1	0	1
LA RIOJA	1	1	1	0	1
SAN JUAN	1	1	1	0	1
BUENOS AIRES	0	0	1	1	1
S. ESTERO	1	1	0	0	0
ENTRE RIOS	1	1	0	1	0
CAPITAL FEDERAL	0	0	1	0	0
MENDOZA	1	1	1	0	0
SAN LUIS	1	0	1	0	1
TUCUMAN	1	1	1	0	0
CORDOBA	0	1	1	0	0
SANTA FE	0	0	0	1	0

- E: Atraso económico, donde 1 indica atraso y 0 inexistencia de atraso.
- A: Nivel de analfabetismo, donde 1 señala la existencia de un alto porcentaje de analfabetos y 0 la inexistencia de un alto nivel de analfabetismo. Si más del 45% de inscriptos en el censo son analfabetos, entonces A=1. Si menos del 45% son analfabetos, entonces A=0 (Vid. Cantón y Moreno 1972: 55).
- G: Gobierno provincial, dónde 1 indica que el gobierno provincial era anti-yrigoyenista y 0 que no lo era (Azaretto: 65).
- P: Presencia de arrendatarios, dónde 1 indica una alta presencia comparativamente alta (más del 27.8%) y 0 una baja presencia según el censo nacional de 1914 (Taylor 1948: 191).
- R: Resultado electoral, dónde 1 indica triunfos conservadores y 0 triunfos radicales.

La tabla anterior muestra las combinaciones de factores que van asociadas a los triunfos conservadores son las siguientes:

eaGP

EAGp

eagP

EaGp

EaGP

Si se simplifican las combinaciones de factores usando el método booleano, (Ragin 1987: 86-92) se llega a una expresión que da cuenta de las combinaciones de factores que dan lugar a triunfos conservadores: $EGp+EaG+aGP$. Tal proceso de simplificación se produce combinando aquellas combinaciones iniciales que difieren en uno sólo de sus factores. Así, por ejemplo, EAGp y EaGp se combinan para producir la expresión EGp, que cubre o implica las dos expresiones previas. Puesto que, asociadas a tal expresión tanto A como a han van asociadas a la producción del resultado final 1, se presume, en este proceso de minimización lógica que esta variable es irrelevante en presencia de la combinación EGp (Ragin 1987: 93). En este caso,

eaGP combinada con EaGP da a aGP

EAGp combinada con EaGp da EGp

EaGp combinada con EaGP da EaG

Por lo tanto, la expresión $EGp+EaG+aGP$ a la que ha conducido el análisis booleano indica que se producen triunfos

conservadores en los casos en que se combinan bajo nivel económico, gobiernos antirradicales y bajo presencia de arrendatarios (EGp); bajo nivel económico, bajo analfabetismo y gobiernos antirradicales (EaG); y bajo analfabetismo, gobiernos antirradicales y alta presencia de arrendatarios (aGP).

Es posible dar un paso más en el proceso de simplificación de los factores causales a través del método booleano. Tal paso consiste en la determinación del número mínimo de implicantes básicos ("prime implicants") que permite cubrir todas las expresiones asociadas con la presencia del fenómeno considerado (en este caso, triunfos conservadores) (Ragin 1987: 97). La tabla de implicantes básicos que figura a continuación indica que hay dos primeros implicantes que implican o cubren todas las expresiones asociadas a los triunfos conservadores. Los mismos son EGp y aGP, y vienen a expresar que los triunfos conservadores iban asociados con los siguientes tipos de combinación: bajo nivel económico, gobiernos antirradicales y bajo número de arrendatarios por un lado o bajo analfabetismo, gobiernos antirradicales y alto número de arrendatarios por otro. Estas expresiones indican que la existencia de gobiernos antirradicales es una condición necesaria, aunque no suficiente, de los triunfos conservadores. Y no es suficiente porque, como luego veremos, también se dan triunfos radicales en provincias gobernadas por los conservadores.

En segundo lugar, tales expresiones indican que los triunfos conservadores tienen lugar en la presencia de estas dos combinaciones (siempre en presencia de gobiernos conservadores):

cuando el bajo nivel económico va acompañado de una baja proporción de arrendatarios y cuando a un nivel bajo de analfabetismo lo acompaña un alto porcentaje de arrendatarios. La primera combinación remite a provincias atrasadas y con mayor control directo de sus explotaciones por parte de los propietarios. Esta combinación es la más frecuente, ya que cubre seis de los ocho casos en los que se producen triunfos conservadores. De ella se pueden derivar, por lo demás, reflexiones de alcance sociopolítico referidas a los condicionantes estructurales de los triunfos conservadores. Ahora bien, la segunda expresión presenta también algún interés. Ello es así en la medida en que asocia bajo analfabetismo y alta presencia de arrendatarios. En las dos provincias en que un bajo nivel de analfabetismo, una alta presencia de arrendatarios y gobiernos antiradicales estuvieron presentes (Buenos Aires y Jujuy) los conservadores consiguieron imponerse. Por consiguiente, al menos en las elecciones de 1916, cuando se combinaban con la existencia de gobiernos conservadores, el nivel bajo de analfabetismo y la alta presencia de arrendatarios no constituían obstáculos insuperables al triunfo de los conservadores. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los triunfos conservadores tienen lugar en provincias de bajo desarrollo económico (y periféricas económicamente por tanto) con la sola excepción de la provincia de Buenos Aires.

Estas características de los triunfos conservadores refuerzan la importancia que se le ha asignado al nivel de

desarrollo económico en la determinación de los triunfos conservadores, así como a la orientación de las gobernaciones provinciales en 1916. Por otro lado, variables referidas a la estructura agraria como la proporción de arrendatarios parecen tener un papel más restringido en la determinación de los triunfos conservadores en 1916. La importancia de estas variables podrá ser calibrada con mayor precisión cuando se analicen los resultados de las elecciones de 1928.

Es también revelador que seis de los ocho casos en los que se producen victorias conservadoras sean agrupables dentro de la combinación EGp. Esto es, se trata de provincias de nivel económico bajo, con gobernadores antiradicales y un bajo porcentaje de arrendatarios. Por otra parte, ninguna de las combinaciones da lugar a productos en los que el nivel económico es alto. Más bien, el único resultado relativamente problemático es el que combina bajo nivel de analfabetismo, gobiernos antiradicales y presencia de arrendatarios. Estas características resultan de la combinación de los factores de dos provincias (Buenos Aires y Jujuy). Teóricamente, se podría argumentar que no hay nada que haga suponer que un alto nivel de arrendatarios y un bajo nivel de analfabetismo favorecen las victorias conservadoras. En estos casos, podría continuar el argumento, lo que sucede es que ciertos factores políticos (en particular la orientación de los gobiernos provinciales) han podido jugar más que otras variables socioeconómicas. La comprobación de esta hipótesis requeriría, por tanto, el desarrollo de investigaciones orientadas a estos dos casos

provinciales y a compararlos con otros en los que el peso de las gobiernos antiradicales no ha eliminado la importancia de factores estructurales.

4.3.4 Las elecciones presidenciales de 1928.

Esquema de verdad referido a algunos de los factores relacionados con la fortaleza de las opciones conservadoras en las elecciones presidenciales de 1928.

	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>R</u>
San Juan	1	1	0	1	1
Catamarca	1	0	0	1	1
San Luis	1	0	0	1	1
Santiago del Estero	1	0	0	1	1
Corrientes	1	1	0	1	1
Entre Ríos	1	0	1	1	1
La Rioja	1	1	0	1	1
Mendoza	0	1	0	0	1
Jujuy	1	0	1	0	0
Salta	1	1	1	1	0
Buenos Aires	0	0	1	0	0
Santa Fe	0	1	1	0	0
Córdoba	0	1	1	0	0
Tucumán	1	0	0	1	0
Capital Federal	0	0	0	0	0

- E: Atraso económico, donde 1 indica atraso económico y 0 la inexistencia de atraso (Taylor: 120).
- G: Gobierno provincial, dónde 1 indica que el gobierno provincial era anti-yrigoyenista y 0 que no lo era.
- P: Presencia de arrendatarios, dónde 1 indica una alta presencia (más de un 34.3%) y 0 una baja presencia según el censo agrícola de 1937 (Taylor 1948: 191).
- A: Nivel de analfabetismo, donde 1 señala la existencia de un alto porcentaje de analfabetos (más del 30% de inscritos en el censo son analfabetos) y 0 la inexistencia de un alto nivel de analfabetismo (menos del 30% del censo electoral) (ver Cantón y Moreno 1972: 55).
- R: Resultado electoral. Si el porcentaje de votos de las opciones anti-yrigoyenistas supera la media provincial, entonces R=1. En otro caso, R=0.

Explicando la fuerza antiyrigoyenista.

Las expresiones que cubren las áreas en las que el antiyrigoyenismo se mostró fuerte son las siguientes

EGpA (San Juan y Corrientes)
 eGpa (Mendoza)
 EgPA (Entre Ríos)
 EgpA (Catamarca, San Luis, Santiago del Estero y La
 Rioja)

Es posible simplificar estas expresiones combinando EGpA con EgpA.

El resultado de esta combinación es EpA (seis casos).

Por lo tanto, la expresión EpA+eGpa+EgPA da cuenta de aquellos casos en los que se dió una notable presencia de las fuerzas antiyrigoyenistas en las elecciones presidenciales de 1928.

La expresión EpA describe aquellas áreas económicamente atrasadas, con bajos porcentajes de arrendatarios y altas tasas de analfabetismo. Es significativo el que esta expresión cubra seis de los ocho casos en los que se los antiyrigoyenistas se mostraron electoralmente fuertes. Además, estas seis provincias se caracterizaron por un porcentaje de voto conservador especialmente alto (una media del 46,7%). Es revelador también que de las ocho provincias en que los antiyrigoyenistas fueron fuertes, las dos provincias que reunían estas características (Mendoza, cuyo nivel económico era superior al de la media

nacional, y Entre Ríos, en la cual se encontraba un alto porcentaje de arrendatarios, se caracterizasen por porcentajes de voto conservador claramente inferiores (una media del 38.5%).

Estos dos últimos distritos poseían diferentes características (eGpa EgPA, ésto es, Mendoza y Entre Ríos). Mendoza se caracterizaba por un nivel relativamente alto de desarrollo económico, un bajo porcentaje de arrendatarios y la presencia de un gobierno provincial antiyrigoyenista.

La orientación del gobierno provincial puede ayudar a explicar el porcentaje relativamente alto de votos conservadores en Mendoza, pero hay otros dos factores cuya importancia no puede ser minusvalorada: el bajo porcentaje de arrendatarios y el carácter antiyrigoyenista del radicalismo de Lencinas. En cuanto a Entre Ríos, se caracterizaba por un relativamente bajo nivel de desarrollo económico. La característica que marca la diferencia entre esta provincia y las otras donde los conservadores son fuertes reside en su alto porcentaje de arrendatarios.

En general, estos datos indican con claridad que los mejores resultados de la coalición conservadora y antiyrigoyenista tuvieron lugar en provincias caracterizadas por un bajo nivel de desarrollo socioeconómico (expresado tanto por su nivel económico como por sus tasas de analfabetismo) y por un baja presencia de arrendatarios (y, simétricamente, por su alto porcentaje de propietarios). Por contra, al menos entre estas provincias, la orientación de los gobiernos provinciales no parece haber sido decisiva. Sólo en tres de estos ocho casos fueron los gobiernos provinciales militantemente

antiyrigoyenistas. Además, en los seis casos cubiertos por la expresión EpA, los antiyrigoyenistas fueron fuertes independientemente de la orientación del gobierno provincial. Esta variable parece haber jugado un papel importante sólo en Mendoza (Gpa), si bien los resultados electorales de esta provincia pueden ser explicados también a partir de la alta proporción de propietarios agrícolas y de los duros conflictos entre Yrigoyen y Lencinas, el líder radical mendocino.

Explicando la debilidad antiyrigoyenista.

Si se consideran ahora las áreas en que los antiyrigoyenistas no alcanzaron la media provincial, las combinaciones lógicas presentes son las siguientes:

EgPa	Jujuy
EGPA	Salta
egPa	Buenos Aires,
eGPa	Córdoba y Santa Fe
EgpA	Tucumán
egpa	Capital Federal

Se pueden simplificar estas expresiones combinando:

egPa con eGPa, lo que da ePa (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe)

EgPa con egPa, lo que da gPa (Buenos Aires y Jujuy)

y egPa con egpa, lo que da ega (Buenos Aires y Capital Federal).

Por lo tanto, la ecuación final es $ePa+gPa+ega+EGPA+EgpA$. En la primera expresión, que cubre tres casos, la debilidad conservadora iba asociada con un desarrollo económico comparativamente alto, un alto porcentaje de arrendatarios y bajas tasas de analfabetismo. Por tanto, esta expresión combina todas las características que son consideradas negativas para la

fuerza conservadora. En la segunda expresión, que cubre dos casos, la debilidad conservadora iba asociada con gobiernos regionales antiyrigoyenistas, altos porcentajes de arrendatarios y bajas tasas de analfabetismo. En esta combinación, necesaria para cubrir el caso de Jujuy, un factor estructural favorable a la debilidad conservadora está ausente, pero ello puede tal vez ser compensado por la orientación del gobierno regional. La tercera combinación, que abarca a Buenos Aires y Capital Federal, se refiere a áreas de alto desarrollo socioeconómico y a la ausencia de un gobierno local antiyrigoyenista. La cuarta combinación (Salta) remite a situaciones de bajo desarrollo socioeconómico, gobierno provincial antiyrigoyenista y un alto porcentaje de arrendatarios. En este caso parece que la abundancia de arrendatarios compensó por el resto de características negativas. Finalmente, la última expresión se refiere al Tucumán, provincia que se caracterizaba por un bajo desarrollo socioeconómico, su gobierno no antiyrigoyenista y su bajo porcentaje de arrendatarios. En este caso, todas las características parecerían apuntar a una fuerte presencia conservadora. No es posible explicar las razones de esa débil presencia antiyrigoyenista en Tucumán, aunque siempre es posible que el indicador de desarrollo económico no dé una idea fidedigna de la importancia de la industria tucumana, donde la producción azucarera era tan significativa. Es interesante recordar que según Bunge (1940: 220) Tucumán era la sexta provincia en cantidad de capital invertido en la industria. El capital invertido en la industria tucumana era al menos el doble

del invertido en el resto de las provincias que he considerado atrasadas. Este desarrollo de las actividades industriales puede explicar porqué Tucumán fue la única provincia atrasada en la que el Partido Socialista obtuvo resultados electorales significativos. was the only backward province (in this classification) that had an important socialist party. Así, en 1922, el Partido Socialista alcanzó sus terceros mejores resultados provinciales en Tucumán (7,9%), mejorados sólo por los que obtuvo en Capital Federal (30,2%) y Mendoza (10,6%). Sus resultados fueron excepcionalmente altos también en 1924 (8,1%) y 1926 (7,1%), sólo sobrepasados por los que obtuvo en Capital Federal, Mendoza, y, en 1926, in Buenos Aires.

A pesar de tales características económicas, es difícil explicar el bajo rendimiento de los conservadores en Tucumán. Sólo es posible añadir que los conflictos dentro del campo conservador pueden ayudar a explicar la debilidad del antiyrigoyenismo. In 1920 los conservadores se escindieron y surgió el partido provincial Defensa Provincial Bandera Blanca. El principal líder del mismo, el industrial azucarero Juan Luis Nougués, fue elegido alcalde de Tucumán en dos elecciones sucesivas durante los años veinte (Balestra and Ossona 1983: 132-33). Sin embargo, las disputas internas pueden haber sido características de otros grupos conservadores en la Argentina.

Aparte del caso de Tucumán, parece existir una clara conexión entre la debilidad de los conservadores y dos factores: primero, el desarrollo socioeconómico y, segundo, la alta presencia de arrendatarios. Con la sola excepción de Tucumán y,

por obvias razones, de Capital Federal, todas estas provincias poseían altos porcentajes de arrendatarios.

Es también significativo que las provincias en las que se combinan bajo desarrollo socioeconómico y alta presencia de arrendatarios proporcionan los menores porcentajes de voto conservador. Por otra parte, las provincias que están caracterizadas, dentro de este subgrupo, por un bajo nivel de desarrollo económico (Jujuy y Salta) muestran porcentajes de voto conservador significativamente superiores (más del 30%) a los de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal. Con todo, sería necesario desarrollar un análisis estadístico a fin de evaluar el impacto relativo de la estructura rural y el desarrollo socioeconómico en los resultados electorales.

El vínculo que existe entre nivel económico y voto conservador aparece con claridad al usar una técnica estadística. La correlación simple entre estas dos variables es -0,76.

Explicando las diferencias en el rendimiento electoral de los conservadores.

El análisis previo ha indicado que existen claros vínculos entre la fuerza antiyrigoyenista y ciertos factores sociales y estructurales. Así, el nivel económico, la tasa de analfabetismo y la presencia de arrendatarios afectan considerablemente la fuerza electoral de los conservadores. Por contra, la orientación de los gobiernos provinciales jugó un papel secundario en el resultado electoral. A fin de mostrar los vínculos entre estas variables con mayor precisión, he introducido los mismos datos en una tabla que toma en cuenta las diferencias cuantitativas dentro de los dos subgrupos que definí más arriba.

Como muestra el esquema de verdad de la página siguiente, la fuerza antiyrigoyenista estaba vinculada al desarrollo socioeconómico y al tipo de estructura agraria. Los mejores resultados de la coalición conservadora tuvieron lugar donde el desarrollo socioeconómico era bajo y los arrendatarios no eran muy numerosos, independientemente de la orientación del gobierno provincial. Simétricamente, los peores resultados de la coalición conservadora se dieron en áreas con alto desarrollo socioeconómico y alta presencia de arrendatarios, con la sola excepción de Tucumán.

En medio de la tabla las combinaciones son más heterogéneas. En el caso de provincias con antiyrigoyenismo débil pero significativo (Jujuy y Salta), algunas características

son favorables al conservadurismo, mientras que otras son negativas para éste. En cuanto a las provincias con fuerte voto antiyrigoyenista (36-45%), dos de ellas reproducen el patrón de las áreas en que el conservadurismo es muy fuerte (aunque con un gobierno provincial antiyrigoyenista), mientras que las otras dos combinaciones cambian. En Entre Ríos, un bajo desarrollo y un alto porcentaje de arrendatarios están presentes. En Mendoza, sólo la orientación del gobierno regional parece favorable al antiyrigoyenismo, si bien, como el análisis ha mostrado, esta característica no ha sido decisiva en otros casos en 1928.

Esquema de verdad de la fuerza electoral del antiyrigoyenismo en las elecciones presidenciales del 1928.

	<u>E</u>	<u>G</u>	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>R</u>
Muy fuerte antiyrigoyenismo (más del 45%)					
San Juan	1	1	0	1	1
Catamarca	1	0	0	1	1
San Luis	1	0	0	1	1
Santiago del Estero	1	0	0	1	1
Fuerte antiyrigoyenismo (36-44%)					
Corrientes	1	1	0	1	1
Entre Ríos	1	0	1	1	1
La Rioja	1	1	0	1	1
Mendoza	0	1	0	0	1
Antiyrigoyenismo significativo (30-35%)					
Jujuy	1	0	1	0	0
Salta	1	1	1	1	0
Muy débil antiyrigoyenismo (menos del 30%)					
Buenos Aires	0	0	1	0	0
Santa Fe	0	1	1	0	0
Córdoba	0	1	1	0	0
Tucumán	1	0	0	1	0
Capital Federal	0	0	-	0	0

Puede ser interesante, por último, establecer una comparación entre los resultados de 1916 y de 1928. En las primeras elecciones, seis de los ocho casos en que se producían victorias conservadoras se agrupaban dentro de la combinación EGp, esto es, se caracterizaban por su subdesarrollo económico, la orientación antirradical de sus gobiernos provinciales y su bajo porcentaje de arrendatarios. Estos datos son consistentes con el análisis de las elecciones de 1928, indicando, sin embargo, que el peso de los gobiernos provinciales puede haber sido mayor en el inicio de la experiencia democrática. Hay que añadir, sin embargo, que sólo tres de los gobiernos provinciales de 1914 no estaban orientados en contra del radicalismo.

4.4. Algunas observaciones comparativas: los factores estructurales y su contexto político.

Los resultados de 1928 muestran con especial claridad que dos tipos de variables socioeconómicas (desarrollo y estructura rural) afectaron el rendimiento electoral de los conservadores en aquellas elecciones presidenciales. La existencia de estos vínculos indica que los conservadores fueron menos capaces de confrontar la amenaza del radicalismo yrigoyenista en la áreas más desarrolladas del país. El número de arrendatarios, el tamaño de la clase obrera y sus recursos educativos pueden haber afectado decisivamente la suerte de los conservadores en este periodo. Sin embargo, es difícil precisar la importancia

relativa de cada uno de estos factores. Esto se debe en parte al hecho de que alta productividad y riqueza iban asociadas a una economía caracterizada por el alto porcentaje de arrendatarios. Se necesitaría un análisis más detallado de estos factores y, en particular, de su impacto en pequeños distritos. Este tipo de análisis permitiría averiguar además si estas variables tuvieron un impacto similar en todas las provincias o si su incidencia dependió también del contexto provincial.

Estos datos muestran algunas de las causas de los diferentes resultados provinciales del conservadurismo. No prueban, sin embargo, que la estructura social argentina y el desarrollo económico condenasen a los conservadores a convertirse en una fuerza política irrelevante. No olvidemos que en las elecciones de 1930 que precedieron al golpe de Estado, los conservadores derrotaron a Yrigoyen no sólo en Entre Ríos y San Luis, sino también en Córdoba y Capital Federal, y que el radicalismo obtuvo una estrecha victoria en Santa Fe y Buenos Aires. En un sistema presidencial, el bajo rendimiento de un presidente puede favorecer muy fácilmente la victoria del segundo partido por muy débil que este pareciese en las elecciones precedentes.

Aún más relevante es el hecho de que el desarrollo socioeconómico y la abundancia de arrendatarios afectaron las posibilidades electorales del conservadurismo a causa de la estructura de los conflictos políticos en la Argentina. El radicalismo, y muy especialmente el yrigoyenismo, tenían importantes connotaciones de clase. En especial, este último

movimiento político redefinió la asignación de "capital simbólico" en una forma que erosionaba el status de las élites política y económicamente dominantes (ver James 1993: 20-21). Además, los conflictos entre Yrigoyen y las élites atrincheradas en el Senado y las instituciones provinciales sugieren la existencia de dos concepciones opuestas del sistema político, una "populista" que enfatizaría el dominio de la mayoría y otra "elitista" o madisoniana (representada por los radicales antipersonalistas y por algunos conservadores) que enfatizaría las limitaciones a la voluntad de la mayoría³.

Sin embargo, el radicalismo no intentó transformar el sistema socioeconómico. Ni el abandono del modelo agroexportador, ni la amenaza a la posición económica de la burguesía o la redistribución de la riqueza formaron parte del programa radical. El radicalismo tampoco entró en conflicto con una fuerte Iglesia Católica. Y finalmente, no intentó deslegitimar el proceso de construcción nacional iniciado antes de su acceso al poder.

Los análisis histórico-comparativos han mostrado que estas amenazas (articuladas en los países europeos a principios de siglo por la izquierda) fueron decisivas en la creación de coaliciones y partidos conservadores. En particular, tales amenazas fueron decisivas a la hora de determinar la posición conservadora, en términos políticos y simbólicos, de las clases medias. De hecho, la misma existencia de estas últimas se definió en el contexto de las luchas políticas entre las organizaciones obreras y la burguesía⁴.

Por contra, en la Argentina, la ausencia de amenazas revolucionarias en el sistema de partidos⁵ limitó decisivamente las posibilidades electorales del conservadurismo. En primer lugar, dicha ausencia eliminó los incentivos necesarios para la construcción de un partido conservador unificado, como se pudo apreciar en las elecciones de 1916. En segundo lugar, hizo más difícil para los conservadores (aunque no imposible, como las elecciones de 1930 muestran) la obtención de un apoyo de masas entre las clases medias. Este es uno de los factores que explican los pobres resultados conservadores en las regiones económicamente centrales de la Argentina.

Finalmente, la debilidad de la dimensión "revolución-contrarrevolución" en el sistema de partidos puede haber favorecido la relevancia de los conflictos territoriales. Las provincias en las que el antiyrigoyenismo era muy débil constituyen el centro económico de la Argentina (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba). Es importante recordar que el sistema institucional establecido a finales del siglo XIX consagraba la sobrerrepresentación de las élites provinciales en la política nacional (en parte a través de su papel en el Senado, en el cual las áreas atrasadas estaban claramente sobrerrepresentadas) (ver Botana 1977; también Caro Figuroa 1970: 182-84). Los conservadores eran los herederos de tal sistema de acuerdo entre las élites provinciales, mientras que el yrigoyenismo, como ha mostrado Peter Smith (1978), actuaba de forma mayoritaria y no consensual. Las intervenciones federales, a veces forzadas por el congreso yrigoyenista en

contra de gobiernos provinciales radicales, fueron muy comunes de 1916 en adelante. Así, Mendoza y San Juan fueron intervenidas en cuatro ocasiones cada una entre 1916 y 1928 (tres veces durante la primera presidencia de Yrigoyen) (Cantón y Moreno 1972: 90). No es sorprendente, por tanto, que estos conflictos permitiesen a las élites provinciales articular coaliciones sociales más amplias en las áreas periféricas. La alianza de los conservadores con los bloquistas de San Juan y los lencinistas de Mendoza muestra la importancia de los conflictos territoriales en aquella coyuntura. Además, tal alianza explica los altos resultados electorales obtenidos por el antiyrigoyenismo en aquellas dos provincias (muy superiores a los de otras provincias con similares características socioeconómicas). Esto sugiere que los factores sociales y estructurales pueden haber tenido distinta relevancia en las diferentes provincias.

Por otra parte, la fuerza del conservadurismo en las regiones periféricas indica que sería erróneo vincular, en las sociedades hispanoamericanas, conservadurismo con cercanía al centro sociopolítico estatal y liberalismo con posiciones política y territorialmente periféricas. Frank Safford (1985: 405 y ss.) ha presentado una dicotomía de este tipo para dar cuenta de la orientación conservadora o liberal de las élites políticas en los países latinoamericanos (y especialmente en México y Perú). Los datos analizados aquí indican que no fue ese el caso de la Argentina.

Finalmente, la relevancia de los conflictos territoriales

muestra una de las fuentes de debilidad de la coalición conservadora. Pues esta coalición no fue nunca capaz de superar la tendencia a desarticulación provincial. Y esto es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que, tradicionalmente, la inserción de las élites provinciales en la política nacional (en el modelo conservador y consensual) se fundaba en la autonomía de las élites provinciales (también en lo que se refiere la manipulación de las elecciones). De tal forma que conservadurismo y resistencia de parte de las élites periféricas a la nacionalización de la política (en parte a través de un partido nacional, el radicalismo) fueron de la mano de 1916 en adelante. Estos objetivos políticos no incentivaron la tarea de construir un partido conservador nacional.

En suma, estos datos sugieren que existen importantes vínculos entre las características sociales de las provincias argentinas y la fuerza electoral del conservadurismo. Sin embargo, la naturaleza de esos vínculos sólo puede ser adecuadamente comprendida en el contexto de los conflictos políticos que caracterizaban a la sociedad argentina a principios de siglo.

NOTAS

1. Sobre la orientación conservadora de las sociedades atrasadas, ver Lipset (1981: 273-74).
2. Un estudio de caso sobre las relaciones entre conflicto rural y radicalismo puede encontrarse en Gallo (1976).
3. Sobre estas dos concepciones de la democracia, ver Dahl 1956.
4. Sobre las condiciones que facilitaron la creación de partidos conservadores y la movilización de las clases medias por estos últimos ver Linz (1976: 26). Para un análisis de la posición política de las clases medias ver Wacquant (1993: 51-52).
5. Las luchas sociales, muy importantes en la Argentina de principios de siglo, no fueron nunca articuladas por partidos políticos nacionales. Como resultado, la respuesta contrarrevolucionaria obtuvo apoyo tanto entre sectores del radicalismo como del conservadurismo. No es casualidad que la expresión más acabada de tal respuesta, la Liga Patriótica Argentina, fue apoyada tanto por radicales como por conservadores. En cuanto a los conflictos en torno a la posición de la Iglesia, su importancia fue siempre muy secundaria en la Argentina, en parte como resultado de la debilidad de la Iglesia (Safford 1985). Ello proporciona un interesante contraste con el caso chileno. En este último, los conflictos religiosos precipitaron la emergencia de un partido conservador en el siglo XIX. Más adelante, la articulación de conflictos sociales y religiosos por Alessandri favoreció la creación de una nueva coalición conservadora en los años veinte de este siglo (Scully 1992: 79-83). Tal articulación de conflictos estuvo también ausente en la Argentina.

5.Las transformaciones ideológicas del discurso liberal-conservador.

5.1. Introducción.

El presente apartado pretende señalar algunos de los rasgos principales de la evolución de la ideología liberal-conservadora durante en el presente siglo. A este fin, presenta algunos rasgos básicos del pensamiento político de Federico Pinedo y Alvaro Alsogaray, dos políticos liberal-conservadores que representan muy bien las características principales del liberalismo conservador antes y después del surgimiento del peronismo.

En las paginas siguientes me detendré en la configuración específica que adquiere, en el discurso de los autores mencionados, el liberalismo argentino. Por supuesto, tal configuración va estrechamente ligada a la evolución política de aquel país, pero esta sólo será aquí apuntada a fin de hacer inteligibles algunas de las variaciones de la ideología liberal. En primer lugar, refiero los rasgos que he considerado más significativos en las respectivas trayectorias vitales de Pinedo y Alsogaray. En segundo término, presento los análisis que ambos autores realizan de la realidad política y económica argentina. En tal análisis he dejado de lado la tarea de valorar las relaciones entre las enunciaciones de estos autores y las distintas corrientes del liberalismo. En último término, me detengo en la forma en que aparecen en Pinedo los problemas relativos a la crisis social. He entendido que esa cuestión tenía importancia por dos razones. En primer lugar, porque es muy indicativa de las diferencias entre el conservadurismo y el

liberalismo. En segundo lugar, porque creo que ayuda a entender los problemas por los que atravesó el liberalismo durante los años treinta de este siglo. Finalmente, he intentado articular esa discusión a algunas reflexiones, de carácter más general, acerca de las diferencias entre los discursos ideológicos liberal y conservador a propósito de estas cuestiones. A mi juicio, las mismas pueden ayudar a entender las características específicas del conservadurismo argentino y la forma contradictoria en que las élites políticas de esta orientación se vieron afectadas por el surgimiento del peronismo.

5.2. Pinedo y Alsogaray: algunos detalles biográficos.

Federico Pinedo nace en 1895 en el seno de una familia perteneciente a los estratos dirigentes argentinos, de clara adscripción liberal-conservadora. Se incorpora a la vida política durante su período de estudiante universitario, y lo hace abrazando el ideario socialista y enrolándose en el partido del mismo nombre (en 1913, aproximadamente a los dieciocho años). Se trata de un socialismo marcado por aquellos componentes más científicistas y evolucionistas del marxismo: por una parte, Pinedo señala que accedió a éste "por un proceso intelectual más que por razones sentimentales" (Pinedo 1946: 11); por otra, se refiere al impacto que le causó la obra de Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (Pinedo 1946: 11). En términos generales, se trata de un autor en el que los rasgos de tipo evolucionista y científicista

priman con más contundencia que en Marx sobre las derivaciones izquierdistas de la dialéctica hegeliana. Además, la obra citada supone uno de los pasos más definidos de los orígenes del socialismo en el intento de englobar la teoría marxista del capitalismo en un marco de filosofía científica de la historia (lo que pretendía ser el materialismo histórico), en la cual los rasgos más generales de esta última eran dilucidados a partir de un análisis de las condiciones de la producción material (las fuerzas productivas y las relaciones de producción correspondientes al grado de desarrollo de aquellas). Una de las características de tal aproximación es que pretende presentar una versión objetiva y científica de la realidad social y de las condiciones necesarias de la superación (progresiva) de cada fase histórica. Tal vez sea esa perspectiva específica la que permitirá luego a Pinedo acceder a campos ideológicos de adscripción genérica igualmente progresista y evolucionista sin graves quebrantos ideológicos.

Más interesante, a los efectos de este análisis comparativo, es la posibilidad de que el tránsito al liberalismo desde el socialismo (paulatino, en vez de traumático) haya podido dotar a tal autor de una perspectiva más abierta a la hora de enjuiciar otras doctrinas y perspectivas políticas¹. Por otra parte, la adscripción inicial al socialismo de Justo lo será también a un proyecto económico técnicamente ortodoxo y antiautarquizante. Esas dos características servirán también de engarce con el liberalismo económico (Pinedo 1971: 537).

El acceso de Pinedo a la política activa se realizará en la

propia vida universitaria, en el marco del debate político presente en ella y durante el mismo período conservador. Muy tempranamente Pinedo adquirirá la condición de diputado por el Partido Socialista (a partir de 1920, pues su elección como tal en 1919 fue invalidada por razones de edad), tomando parte activa en la política argentina previa al golpe del 30. En ese sentido, el marco político inicial será el de la erosión del viejo régimen republicano a causa de las tensiones entre el radicalismo gobernante y los partidos opositores. Por otra parte, no está de más recordar que en el año en que Hipólito Yrigoyen fue elegido Presidente de la República por primera vez (1916), Pinedo contaba 21 años, 25 al ser elegido diputado (en 1920) y entre 33 y 35 en la segunda Presidencia de Yrigoyen. Es por lo tanto razonable pensar que la conformación de las actitudes y posicionamientos políticos de Pinedo diferirán significativamente de los de aquellos que accedan a la vida política sólo unos lustros después. Sobre todo si se tiene en cuenta la altísima volatilidad política de esos decenios y las "mutaciones" que aún estaban por llegar (Pinedo 1971:111).

Téngase en cuenta además, que fue Federico Pinedo, nombrado Ministro de Economía en 1933 por el Presidente Justo, quien introdujo reformas económicas tan importantes como el impuesto sobre la renta, el aumento de la discreción gubernamental en relación con el control de cambios y quien puso en marcha el Banco Central en 1934 (Rock 1987: 222-23). Más aún, Pinedo diseñó un plan económico (luego conocido como Plan Pinedo) orientado a estimular la producción económica (agraria y, en

segundo término, industrial) y a reactivar la demanda (Rock 1987: 239-42). Esto es, a Pinedo le correspondió el papel de dotar al Estado argentino con un conjunto de mecanismos económicos diseñados con vocación anti-cíclica pero destinados a permanecer en el escenario económico argentino. En este sentido, sus primeras armas económicas no pudieron ser más extrañas a los principios ideológicos del liberalismo económico. Su decantamiento hacia posiciones económicas de esta orientación sólo tuvo lugar con el paso del tiempo. Todavía en la época de Frondizi su actitud respecto al intervencionismo económico del Estado no era precisamente de hostilidad². En este sentido, la evolución intelectual de Pinedo es representativa de la crisis progresiva del modelo económico establecido a partir del peronismo.

En cuanto a Alvaro Alsogaray, éste nace en la provincia de Santa Fe en 1913. En 1929 (es decir, a los dieciseis años, aproximadamente) ingresa en el Colegio Militar de la Nación, del cual sale en 1932 con el grado de subteniente de infantería. Posteriormente cursará estudios de ingeniería militar en la Escuela Superior Técnica del Ejercito y de ingeniería mecánica aeronáutica en la Universidad de Córdoba. En 1946 (rondando los 33 años) abandonará el Ejercito, poseyendo en ese momento el grado de capitán (Mansilla 1983: 132 y ss.).

Tal vez sea oportuno retener, de entre estos sumarios datos biográficos, dos aspectos. El primero se refiere a la formación de Alsogaray, militar por un lado y técnica por otro. Entre los dieciseis y los treinta y tres años, el que será después

político liberal, desarrolló su carrera profesional en el seno de las Fuerzas Armadas, esto es, sin intervenir abiertamente en lizas partidarias. Por otra parte, las disciplinas intelectuales en las que se formará tendrían un carácter netamente técnico (y dentro de este campo, aguzando más la mirada, mecánico).

El segundo aspecto que pudiera ser interesante se refiere a los acontecimientos políticos que envuelven su paso por la vida militar, que es también el del acceso común a la conciencia política, digámoslo así. Lo relevante es que la mayor parte de tal carrera militar se realiza durante el período de la "República conservadora". No es fácil encontrar datos acerca de las inclinaciones políticas de Alvaro Alsogaray durante su paso por las Fuerzas Armadas, y a la luz de la actuación posterior de algunos de sus compañeros de armas, su retirada de las mismas en 1946 no es, en sí misma, ningún dato indicativo.

En cualquier caso, las primeras diferencias con Pinedo saltan a la vista. Por un lado, una activísima y precoz carrera política en la que el socialismo marxista es el punto de partida. Por el otro, el desarrollo de una ordenada carrera militar a la que se ensamblan disciplinas técnicas. En términos políticos, mientras Pinedo se curte políticamente en el período de predominio radical, y en la lucha contra éste, los primeros pasos de la vida militar de Alsogaray transcurren durante la República conservadora. Será a partir de 1943 cuando empiecen a insinuarse transformaciones completas del panorama político argentino, con el resultado final de la irrupción del peronismo. Y es a partir de este, y sobre todo, de su caída, cuando

comenzamos a poseer noticias del activismo político de Alvaro Alsogaray³.

Tras el éxito del golpe de Estado contra Perón, en 1955, Alsogaray pasa a ocupar la subsecretaría de comercio con Lonardi, y después, con Aramburu, la cartera de Industria (durante seis meses). De la misma salió a causa de la complacencia del nuevo régimen con el sistema económico y social desarrollado por Perón (Alsogaray 1989: 24-25).

A partir de ese momento, la actividad de Alvaro Alsogaray tendrá dos líneas principales de acción. La primera, orientada a la formación de partidos de adscripción liberal. Aparte de la actual Unión de Centro Democrático, hay que mencionar la creación del Partido Cívico Independiente (fundado en 1956 y desaparecido en 1962 por los malos resultados electorales) y de la efímera Nueva Fuerza (fundada en 1971). De la primera experiencia organizativa es interesante retener que el PCI se opuso al gobierno de Frondizi, si bien, mientras duró el desempeño ministerial de Alsogaray (que retuvo a su pesar la presidencia del partido, aunque con un período de excedencia de dos años, es de suponer que en el ejercicio de tal función), defendió la política económica del gobierno. Experiencia interesante por que apunta algunos de los efectos no queridos que el ideologismo partidario puede arrastrar (en la medida, por ejemplo, en que se produzcan inevitables contrastes de la ideología con la política cotidiana)⁴ y por la posición peculiar de una organización cuyo líder participa en el gobierno sin hacerlo oficialmente su partido⁵.

La segunda, el desempeño de puestos gubernamentales en carteras de carácter económico. Aparte de la anteriormente citada, del 25 de junio de 1959 al 26 de abril de 1961, bajo la Presidencia de Frondizi, Alsogaray ocupó los ministerios de Economía y Trabajo. En 1962, durante el gobierno de Guido, desempeño el ministerio de Finanzas (seis meses). Desde 1989, es conocido su papel como asesor económico del Presidente Menem en materia de deuda externa (si bien el alcance de su asesoría bien puede desbordar esos cometidos específicos).

En total, Alsogaray ha ocupado cuatro carteras durante tres presidencias, y otros dos cargos económicos de importancia en otros dos mandatos. Cargos desempeñados durante el primer gobierno antiperonista de facto, durante la Presidencia de un candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente (Frondizi, victorioso gracias a los votos peronistas) y durante el breve intervalo del gobierno de Guido⁶. Del período de Frondizi (aquel del que Alsogaray se siente más satisfecho) es destacable la articulación de un profundo plan de estabilización, anterior al acceso de Alsogaray al cargo, con medidas orientadas a potenciar el desarrollo industrial, a fomentar la inversión extranjera y a controlar la inflación⁷. En el contexto de las administraciones económicas de la reciente historia argentina, la valoración emitida por Alsogaray sobre sus propias gestiones ministeriales (en la superación del modelo económico dirigista e inflacionario) es bastante contundente:

"Sólo durante los dos breves períodos en que me tocó dirigir la economía argentina (junio de 1959 a abril de 1961, y mayo de 1962 a diciembre del mismo año), se intentó, y en parte se logró, apartarse de ese regimen" (Alsogaray 1989: 25)⁸.

5.3. Liberalismo, economía y política en Federico Pinedo y Alvaro Alsogaray.

El desarrollo de un análisis de este tipo enfrenta, en este caso y en estas circunstancias, algunas dificultades referentes a la diferencia de campos abordados en los textos de los autores tratados. Así, por un lado, en el caso de Pinedo contamos con manifestaciones más que explícitas sobre toda la fase de la política argentina en la que él fue protagonista destacado. De Alsogaray, sin embargo, menudean los análisis generales y la exposición de los programas económicos idóneos en la coyuntura argentina, pero no se puede decir lo mismo de las cuestiones más estrictamente políticas. Es cierto que esa diferencia puede ser producto, a su vez, de la agravación crónica del problema económico, del hecho de que para Alsogaray, éste se haya vuelto "el eje en torno al cual giran casi todos los demás problemas" (Montenegro 1988: 12). Por este motivo, más que recorrer los distintos campos de atención de estos autores liberales especificando sus diferencias y similitudes, intentaremos componer un cuadro global a partir de los trazos, aislados o abundantes, que podamos hallar.

5.3.1.Liberalismo y economía.

Ya se ha señalado avanzado que no es posible hallar textos homologables sobre tales cuestiones. Por un lado, la narración del Pinedo de los años 40 nos presenta una perspectiva económica técnica y ortodoxa, la cual no necesariamente va unida a la ideología liberal⁹. Tal ortodoxia se aprecia en la constante preocupación por el déficit, la inflación y la eficacia en el manejo del presupuesto (apreciables, por ejemplo, en los reproches que dirige a los radicales) (Pinedo 1946: 128) y en la valoración de la obra económica del gobierno de Justo (Pinedo 1946: 130). Y el carácter no liberal de tal aproximación se aprecia en el elogio paralelo de la introducción del impuesto sobre los réditos (Pinedo 1946: 130) y en la consideración igualmente positiva de la creación de organismos de control económico y de intervención del Estado en la economía (Pinedo 1946: 132).

Es especialmente relevante la valoración que el propio Pinedo hace de las reformas que él mismo condujo. En este caso, se pueden encontrar incluso críticas radicales a las posturas antiintervencionistas, por ejemplo, en lo que se refiere a la regulación de la actividad bancaria (Pinedo 1946: 162). La frase siguiente bien puede sintetizar la perspectiva que entonces sostenía Pinedo:

"Resultado de todo esto fue que liquidada la crisis y contando con los nuevos institutos que entonces se crearon, el país apareció con una organización bancaria moderna, vigorosa y eficiente que une los ahorros populares al amparo de una legislación previsoras, y permite reunir elementos financieros suficientes para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas del país, cuando esa es la tarea conveniente, al mismo tiempo que crea los resortes necesarios para frenar la indebida expansión cuando eso es lo que corresponde" (Pinedo 1946: 164).

Al mismo tiempo, muchos de los conceptos utilizados se muestran completamente ajenos a la ideología liberal, como por ejemplo, los de "masas trabajadoras"¹⁰, a las cuales es preciso proteger a través de múltiples mecanismos (Pinedo 1946: 133-36 y 145).

De forma que la necesidad de la intervención estatal afecta, por diferentes motivos, a todos los campos de la actividad económica. Ni siquiera se trata, en este caso, de que haya intervenciones "conformes a la libre evolución del mercado" (Alsogaray), sino de que éstas se realicen de acuerdo a los exigibles mecanismos de corrección técnica.

Por lo que se refiere a la obra producida ya como liberal, las precisiones de Pinedo abundan en las causas genéricas de la debacle económica argentina, vistas desde la perspectiva que las dos últimas décadas nos ofrecen sobre el camino emprendido en los 30. No es posible saber si sus posiciones económicas liberales eran ya defendidas con contundencia similar en épocas anteriores a la de la aparición de esta última obra, cuestión que sería de utilidad para valorar a que tipo de tendencias generales ha estado sometido el liberalismo argentino. Lo cierto

es que en esta última fase, las posiciones liberales adquieren una entonación marcadamente individualista. Este hecho se manifiesta de forma llamativa en las críticas a mecanismos integrados en la contabilidad económica nacional, como, por ejemplo, la balanza de pagos. De este modo, Pinedo rechaza la consideración del monto de las deudas individuales con el exterior como deudas de una nación con otra (Pinedo 1971: 522-23). Ahora la ideología liberal gira hacia posiciones atomistas y anticomunitarias, por utilizar el calificativo entonces empleado por Pinedo y hoy en boga (Pinedo 1971: 523).

Como luego veremos, la hostilidad hacia cualquier veleidad dirigista es mucho más marcada en este el último Pinedo que en Alsogaray. Cualquier género de "tutela del 'pueblo soberano' por un cónclave de sabios" aparece descalificado¹¹.

En el caso de Alsogaray asistimos a un recorrido (pese a la orientación tal vez idéntica de éste) y a una configuración argumental distintas. En primer lugar, su acceso primero a la vida pública se hace desde la asunción de posturas económicas genéricamente liberales. Y en segundo término, la calidad de su liberalismo ha sido, si lo comparamos con el del Pinedo ya adscrito a esa corriente, distinta. Para mostrarlo, iremos desde el tratamiento de la última cuestión (el carácter del liberalismo que sostiene) al de la primera (su evolución ideológica).

Por lo que se refiere a la configuración de la doctrina económica liberal en Alsogaray, esta parece integrar, por lo menos hasta los años 70, motivos y objetivos cercanos a los del

desarrollismo (Gallo 1986: 30). Aun partiendo de posiciones claramente liberales, algunas propuestas parecen apartarse de las tesis principales de lo que se considera el liberalismo clásico. Dejando de lado el cariz social que se pretende dar a la nueva economía de mercado, es significativo que Alsogaray, en 1971, se manifieste en favor de la planificación estatal imperativa en determinados sectores (entre los que se encuentran, por ejemplo, determinados servicios públicos) o señale la necesidad de que ciertas actividades productivas estén en manos del Estado (Alsogaray 1972; recogido en Gallo 1986: 130). Hay otras tesis que confirman posibles "intercambios" con modelos ideológicos diferentes. Así, por ejemplo, al Estado compete establecer marcos proyectivos destinados a orientar la futura evolución del mercado. Además, en contra de lo que posteriormente se defenderá con mucha intensidad, la propiedad (pública o privada) de las empresas no será el factor más importante, sino la inserción de tales empresas en el mercado (Alsogaray 1972; recogido en Gallo 1986: 132).

Pero es tal vez en la consideración de la necesidad (y los requisitos) de la industrialización, donde la adopción de tesis procedentes de campos ideológicos distintos al del liberalismo clásico se hace más marcada. Dos frases de Alsogaray pueden apoyar la afirmación anterior:

"Todo país debe aspirar a una mayor industrialización. Por regla general dicha industrialización requerirá, en los momentos iniciales, un cierto grado de proteccionismo" (Alsogaray 1972; recogido en Gallo 1986: 133).

Hay varios aspectos que hacen plausible la tesis de la introducción de elementos procedentes de otros campos ideológicos en el discurso liberal. El primero es ese que define las que deben ser aspiraciones de todo país. Desde una perspectiva atomista o individualista radical (de la intensidad de la que ha sido percibida en el último Pinedo), una consideración de este tipo carece de sentido. En primer lugar, en cuanto supone la existencia de aspiraciones económicas (específicas) comunes a todos los ciudadanos integrantes de una misma comunidad política (o nación), las cuales, obviamente, sólo pueden ser interpretadas y definidas a través del proceso político vigente, esto es, por el Gobierno. Por otra parte, a esa perspectiva se añade la consideración de que la industrialización es un fin que debe perseguirse políticamente. Sabemos que en sus formulaciones más coherentes, el liberalismo se caracteriza por anteponer, en la determinación de las normas de la vida social, la Justicia a cualquier concepción del bien común. En esa medida una concepción como la arriba recogida, se acerca a corrientes de carácter no estrictamente liberal. Finalmente, a esos "trade-offs" con corrientes diversas se debe la defensa de un cierto proteccionismo en los inicios del proceso industrializador.

Por otra parte, existen algunas muestras de la permanencia de posiciones como las apuntadas en Alsogaray. Así, por ejemplo, en su estudio Estructura y política industrial argentina, redactado en 1981 con el fin de presentarlo al gobierno militar que había de suceder al del general Videla, se encuentran frases

de implicaciones muy similares:

"La industrialización del país constituye un objetivo de alta prioridad a cuya consecución deben aplicarse esfuerzos y estímulos especiales" (Alsogaray 1989: 120)¹².

También a propósito del proteccionismo se puede hallar una cierta continuidad, como, por ejemplo, cuando se alude a la necesidad de mantener aranceles iniciales (en este caso únicos) que protejan a la industria en las condiciones actuales. Del mismo modo, se mantiene la necesidad de establecer y garantizar un claro y definido escenario industrial futuro para que los empresarios puedan orientarse (Alsogaray 1989: 47)¹³.

En este terreno, las diferencias con Pinedo son obvias. En este último, el desarrollo será simplemente el producto de la libertad y la iniciativa privadas. Sea o no imprescindible la industrialización, lo que las experiencias argentina y australiana muestran, argumenta Pinedo, es que no se precisa de ninguna actividad por parte del Estado, orientadora o de otro tipo, para conseguir el crecimiento económico¹⁴.

A pesar de ello, se puede encontrar algún rasgo común en la evolución ideológica de Alsogaray y Pinedo que es revelador de las tendencias a que ha estado sometido el liberalismo argentino. Se ha visto como el Alsogaray de los primeros 70 se manifestaba en favor de la intervención directa del Estado en el terreno económico, hasta el punto de llegar a defender la planificación y la propiedad estatal de determinadas empresas (al tiempo que se desvalorizaba la cuestión de la titularidad pública o privada de las mismas en favor de la mayor importancia

de su inserción en un marco mercantil) (Gallo 1986: 131-32). El Alsogaray de los 80, sin embargo, mantiene posiciones liberales más radicales en este terreno. Prueba de ello son sus manifestaciones constantes en favor de

"la transferencia ... al sector privado de todas las empresas y actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios que hoy se encuentran indebidamente en manos del Estado" (Alsogaray 1989: 44)¹⁵.

Si antes se consideraba la posibilidad de que el Estado no sólo interviniese de algún modo en la vida económica, sino de que participase directamente en ésta a través de la absorción de sectores productivos estratégicos, en los 80, las nacionalizaciones realizadas en el medio siglo precedente obtendrán un juicio descalificador (Alsogaray 1989: 25). Ese tránsito de un liberalismo que mantiene conexiones con un cierto nacionalismo económico o con el desarrollismo (al que luego se criticará muy duramente) (Alsogaray 1989: 26) a otro de carácter más resuelto, podría ser entendido como manifestación, como en el caso de Pinedo, de la radicalización o profundización de las ideas liberales en la Argentina. Se pueden aventurar diversas razones, de desigual peso, que hagan comprensible ese proceso. La primera, y tal vez más consistente, radica en la confluencia de la fijación de la economía argentina en la crisis y del resurgir mundial de las estrategias liberales de superación de la crisis económica de los 70. Del mismo modo que los diferentes desarrollos político-estatales, a partir al menos de la Revolución Francesa, han podido ser leídos gracias a la

consideración de la influencia que ha tenido en ellos la percepción, por las elites políticas, de cuales eran las estrategias de mayor éxito (aplicadas en el entorno) de respuesta a los problemas del desarrollo y al aumento de la potencia (económica o militar)¹⁶. En la medida en que son numerosos los intentos de superación de la misma fallidos (y en que los no aplicados en la Argentina se han visto desacreditados), el liberalismo, a pesar de su débil arraigo político en la Argentina, ha visto aumentar su capacidad de persuasión social, tanto entre los ciudadanos como entre los representantes de estos. Y si "interna" radica en la creciente autoconfianza de sus representantes y en la necesidad experimentada de sacar todas las conclusiones de sus principios básicos (es eso lo que hace inteligible la aparición, por minoritaria que sea, de tendencias bien predisuestas hacia el anarcocapitalismo o, en otro caso, hacia las manifestaciones más radicales del liberalismo clásico).

5.3.2. Política criolla.

El título de este epígrafe no pretende definir ningún rasgo característico de la política argentina de este siglo. El mismo Pinedo se encarga de poner en entredicho toda posición que achaque los problemas de la vida política a "imperfecciones" englobables bajo el calificativo de criollas (Pinedo 1946: 21). Por otra parte, es revelador que no haya en Pinedo ninguna valoración de la importancia del presidencialismo en la

conformación de un sistema de partidos y de una vida política tan inadecuados a su juicio.. La expresión no tiene otro fin que el de aludir a la sorprendente y mal vista evolución que la política argentina tomaría conforme se realizaba la apertura del orden político oligárquico. En el mismo Pinedo se puede percibir una suerte de nostalgia de un orden político que no llegó a cuajar. Los elogios a Justo, al margen de las puntuales coincidencias que pudiera permanecer en el terreno económico, denotan la preferencia por un debate sustantivo sobre políticas concretas, en vez de una continua disputa en torno a las manipulaciones electorales y la moralidad de los adversarios (Pinedo 1946: 18). En ese sentido, incluso el socialismo y el obrerismo aparecen ante Pinedo como más funcionales al orden republicano que un radicalismo del que está ausente toda vocación reformista (Pinedo 1946: 28 y 64-65).

La entrada de Justo en el Parlamento representa la posibilidad de un debate político entre fuerzas políticas homogéneas que representen programas políticos alternativos e ideologías definidas y soportes sociales coherentes. Fuerzas que, tal vez, deban acercarse a posiciones centristas para obtener mayorías, o bien, contar con el apoyo de partidos menores situados entre las mismas.

Varias alusiones respaldan esta lectura. La primera es la misma pregunta planteada por Pinedo, en cuya respuesta descalifica el recurso a "la política criolla". La segunda es la vuelta del revés de los que el considera factores negativos de la política argentina del momento:

"esa falta de programas concretos en los partidos y esa agrupación heterogénea en las mismas entidades partidarias, de personas de ideas diferentes y de intereses encontrados" (Pinedo 1946: 21).

Y la última es la elogiosa referencia de la aparición de Pinedo en el Congreso, contrapunto positivo a la política habitual en la República.

El que el problema de la peculiaridad de la política argentina aparezca en el primer plano de la obra de Pinedo tiene la virtud de conducirnos directamente a la pregunta por el modelo de inserción política del liberalismo en la Argentina. En este sentido, es importante retener que estos dos autores liberales han jugado un papel político de importancia en la Argentina: no sólo han sido ideólogos o intelectuales liberales, sino políticos y economistas que han desempeñado cargos importantes en algunas coyunturas.

En el caso de Pinedo ya se ha indicado cual fue su trayectoria ideológica. También, que la fase política de la que procede fue muy diferente de la que afrontará Alsogaray. En primer lugar, por el tipo de vida política a la que accede. Y en segundo lugar, debido al papel que le toca cumplir en los años treinta. Un elemento que conviene retener aquí, es que Pinedo participó, en los años treinta, en la conformación de la política del régimen antiradical. Y lo hizo desde posiciones políticamente no dominantes (el Partido Socialista Independiente), aunque con una clara proclividad conservadora y antipersonalista. En cierto modo, participó en la última fase de predominio liberal-conservador, y tal vez sea este uno de los

factores que explique el que las posiciones a las que luego se fue orientando fuesen tan impermeables a compromisos ideológicos. Donde Pinedo presenta el modelo de desarrollo económico de finales del XIX y principios del XX como alternativa pura y simplemente superior al del último medio siglo, Alsogaray introduce modificaciones de distinto cometido. La percepción de Alsogaray de las dificultades que la Argentina posterior a Perón impone a un discurso continuista dentro del liberalismo puede ser uno de los fundamentos de esa variación. Pese a su posición no central, en términos partidarios, dentro del régimen de los 30, Pinedo podrá desarrollar tareas gubernamentales dentro de un régimen que reproducía rasgos importantes del orden liberal- conservador y que, en esa medida, era altamente afín al modelo político al que Pinedo se había venido orientando desde los años veinte. Alsogaray vivirá una fase totalmente distinta, y los regímenes en los que participe tendrán, bien un carácter provisional (la autodenominada Revolución Libertadora, el gobierno de Guido), bien un origen y unos componentes, políticos e ideológicos, completamente diversos (el desarrollismo, victorioso gracias a los votos peronistas).

Se ha mostrado visto de que tipo son algunas de las adaptaciones realizadas por Alsogaray en el discurso liberal. Además, debemos consignar la introducción de conceptos como el de economía social de mercado o las reivindicaciones de la conformidad del nuevo liberalismo con la doctrina social de la Iglesia. Ambos giros van estrechamente ligados, aunque no cabe

deducir que la consideración de la pertinencia de una acción social o benefactora por parte del Estado responda a motivaciones más estratégicas que ideológicas. Por otra parte, y esto es relevante, tal acción (sobre la que se especifica muy poco o nada) parece siempre ir ligada a las necesidades que ha de crear el tránsito rupturista hacia una economía predominantemente mercantil (Gallo 1986: 135)¹⁷.

No hay adaptaciones de semejante magnitud en Pinedo, y en esa diferencia ha de tener también importancia el hecho de que su actividad política, tras la irrupción peronista, no haya sido comparable ni a la del primer Pinedo ni a la de Alsogaray. Se trata, por un lado, de las intervenciones ministeriales de este último. Y por otro, de su continúa actividad política, expresada, entre otras cosas, en la formación de los tres partidos políticos de adscripción ideológica liberal ya citados¹⁸. Esta última actividad habla de la constante búsqueda de canales de representación política del liberalismo y de su voluntad de jugar un rol directo en la política y la vida electoral. En la actividad política el acercamiento hacia posiciones no estrictamente liberales podría encontrar su razón de ser, si bien ,en este punto, son necesarias ciertas matizaciones. Especialmente, porque, pese a las distintas modulaciones y la efectiva profundización del liberalismo, Alsogaray no se habría significado, hasta hace poco, por su flexibilidad política, sino, a juicio de los observadores, por un modelo de argumentación rígido, tanto por lo que se refiere a sus centros de atención como en los modos de presentación

pública del programa político.

En esa medida, pareciera que la estrategia elegida hubiese sido la de la flexibilidad ideológica y la rigidez política. No obstante, a pesar de las adaptaciones, no parece que las opciones vecinas a la de Alsogaray se viesan, hasta la última fase, impregnadas por las propuestas y la ideología de los partidos de aquel (ver Gallo 1986: 31). Además, el modelo o referente político que Alsogaray siempre ha tenido en cuenta ha partido de la base de intervenir en la definición de las líneas maestras de la economía argentina a través de terceros. Se puede, en primer lugar, citar la continua referencia, en sus artículos y trabajos, a la tareas que Roueff y Erhardt desempeñaron respectivamente en Francia y la República Federal de Alemania. Esa proyecto, ligado a la percepción de la debilidad del arraigo de la ideología liberal en la Argentina desde los años treinta, se traduce en la práctica y la teoría de la participación en gobiernos de distinta coloración ideológica. Aparte de los casos citados (Aramburu, Frondizi, Guido, Menem), se pueden mencionar otros ejemplos de interés. En primer término, los ofrecimientos de planes económicos a gobiernos de facto, como el del general Viola, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional o el del general Onganía¹⁹.

Esa proclividad arbitrista²⁰ se hará más patente cuando Alsogaray sugiera, en 1973, la posibilidad (no la probabilidad) de que se iniciase el tránsito hacia una economía de mercado (en formas "alejadas absolutamente del viejo capitalismo y liberalismo") bajo un regimen peronista (La Nación, 23 de mayo

de 1973). Ante el mayor adversario político del liberalismo argentino desde los años cuarenta, Alsogaray no renuncia a la tarea de convicción y presentación del necesario plan de salvación económica.

En términos generales, se puede sostener la hipótesis de la relación de algunos componentes fundamentales de la posición de Alsogaray (las adaptaciones que tienden a establecer lazos con mundos ideológicos no liberales, y la dependencia de un modelo de inserción política orientado en buena medida a definir las transformaciones económicas argentinas bajo gobiernos regidos por fuerzas políticas distintas de la liberal) con la situación ideológica y política de la Argentina del último medio siglo. En Pinedo, por contra, el liberalismo mantiene características más decimonónicas, y en esa medida, más conservadoras. Ya se ha aludido a la simpatía del Pinedo de los años treinta por las fuerzas conservadoras²¹, pero más significativo aquí es el discurso ideológico del último Pinedo. Pues en él, el modelo jurídico-económico de la época de apogeo del liberalismo argentino es presentado como la alternativa al vigente en los años 60 y 70; prácticamente, como edad de oro que debe servir de guía para el accionar gubernamental. Ese es el nudo argumental de La Argentina, su posición y su rango en el mundo. Como Pinedo señala en el epílogo, recogiendo las palabras de su padre, "La memoria es el númen benéfico que me revela la senda del bien" (1971: 665).

En ese modelo de argumentación, las transacciones ideológicas que realiza Alsogaray carecen de sentido. Y no es

posible desligar una posición de ese tipo del marco político e ideológico en el que Pinedo iniciaría y desarrollaría su actividad política²².

Pinedo señala que "mira con persistencia al pasado" (1971: 665.), y esa referencia da pie también para retomar la peculiar singladura del liberalismo argentino, en lo que a su relación con el conservadurismo se refiere. Pues la Argentina aparece como una sociedad en la que el pasado, ese factor que con el orden social constituye el punto de referencia fundamental de los conservadores, aparece dotado de caracteres inequívocamente liberales (aunque oligárquicos). Como Pinedo señala, "la Argentina era de los países más típicamente representativos del orden capitalista", en el que la estructura social "presentaba menos vestigios o resabios del pasado" (1971: 566). Es por eso que el conservadurismo podrá, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países europeos, ser liberal. Ese fue el desarrollo peculiar que, por comparación a los países europeos (con la excepción parcial del Reino Unido), permitió una fluida comunicación entre los estratos sociales que suelen ser asociados (en la investigación sociológica) a posiciones conservadoras, y la ideología liberal²³. Será en el período de entreguerras cuando el signo de esa convergencia entre constituciones conservadoras e ideología liberal comience a alterarse.

Otro de los puntos de engarce de Pinedo con el conservadurismo reside en las proclividades elitistas de su pensamiento. Las descalificaciones al gobierno de Yrigoyen no

están exentas de reproches por haber desdeñado éste el "juicio de los mejores" o por haber encumbrado a los "elementos más inferiores de la sociedad" (Pinedo 1946: 40)²⁴.

No es ajena a ese elitismo (en el que acaso pueda percibirse una reacción, si no nacionalista, si de "exhaltación nacional") (Pinedo 1946: 195; 1971: 671) la lectura que Pinedo realiza de los orígenes de las dificultades de la República. Pues éstas fueron ligadas, a su juicio, a un proceso demasiado rápido de desprendimiento del poder por el viejo patriciado (Pinedo 1946: 669; 1971: 195). Aquí, uno cree percibir los rasgos de un cierto liberalismo: aquel de tipo moderantista, que, sin perder por ello sus rasgos liberales, se acerca al conservadurismo a causa de su respeto por la tradición y de sus precauciones frente a los cambios sociales bruscos.

Pinedo puede representar una de las últimas expresiones de esa relación fluida con el conservadurismo. Los liberales posteriores deberán, bien establecer relaciones con mundos ideológicos distintos, ligados o no al conservadurismo (como la Iglesia, en el primer caso), bien rearticular un modelo liberal diferente, más distante del conservadurismo y más comprometido en la extensión de las propuestas liberales a campos antes vedados a éstas, en lo que se refiere, por ejemplo, al aumento de las capacidades contractuales privadas. Por lo que se refiere a Alsogaray, su insistencia, más marcada antes de los años 80, en desentenderse del viejo liberalismo es la mejor prueba de los cambios políticos experimentados y de la percepción de la dificultad de operar en ese marco con esquemas ortodoxos.

5.3.3. Orden republicano y liberalismo.

La mayor dificultad para valorar esta cuestión reside en la intensidad tan diversa con que este problema aparece analizado en estos autores. Por una parte, la cuestión de la vuelta a un orden constitucional sin restricciones aparece constantemente en Pinedo. A menudo, obviamente, en su obra de los años cuarenta, cuando la cuestión de la integración de los radicales no antipersonalistas en el sistema político juega un papel crucial. En parte porque Pinedo lee siempre la situación en clave de apertura (controlada) del sistema político a los radicales (por tanto, con algunas similitudes con el proceso que tenía lugar a principios de siglo). La preocupación por las garantías constitucionales (Pinedo 1946: 168) y por el retorno a un orden civil sin amagos militares (Pinedo 1946: 73 y 103) es constante en los años cuarenta. Perspectiva que se traduce en la indeterminación con la que se afronta el golpe de Estado contra Yrigoyen o la integración de los radicales. En el primer caso, si bien se justifican las motivaciones de los que expulsaron a Yrigoyen de la Presidencia, los riesgos que tal interrupción trajo consigo (el primero de ellos, la apertura de un ciclo dominado por la irrupción de salvadores providenciales), son claramente expuestos (Pinedo 1946: 73). El párrafo finaliza con una serie de preguntas a las que no se da luego respuesta explícita. Sin embargo, las mismas consideraciones finales del texto parecen respaldar más un juicio negativo del golpe (Pinedo 1946: 168)²⁵.

La evolución política orientará a Pinedo hacia una lectura crítica de los efectos de la caída de Yrigoyen. Por otra parte, la integración de los radicales es presentada también como un problema de gran importancia, en tanto afectaba a la legitimidad del regimen de los treinta. Pinedo argumenta que la eficacia del gobierno no podía sustituir la legitimación otorgada por el sufragio popular. Para describir, a renglón seguido, el fundamento de las prácticas electorales fraudulentas: evitar el acceso al gobierno de los radicales (a causa de su incompetencia) (1946: 165). Creo que aquí la valoración crítica de las practicas gubernamentales (y por tanto, del propio regimen), es aún más nítida.

Treinta años despues persiste una preocupación semejante (es decir, capital) por el retorno de la vida republicana. Para el último Pinedo, el retorno a las instituciones republicanas es una tarea urgente cuyo afrontamiento no puede esperar a la solución por el gobierno de facto de los problemas de la República (1971: 671). Por lo que respecta a Alsogaray, como se ha indicado arriba, el problema político e institucional aparece subordinado al económico. Incluso, en algunas ocasiones, la economía llega a aparecer como la esencia de la vida social. Según Alsogaray, en 1989:

"la alternativa está entre intentar la prolongación de un sistema autoritario (que en la actualidad se presenta bajo forma aparentemente democrática) o implantar un verdadero sistema liberal" (1989: 92; también 21-22).

Las frases anteriores, al margen de la lectura que se pueda hacer de sus probables implicaciones en la legitimación del sistema político, apuntan (enmarcadas en un discurso que aborda en su mayor parte cuestiones económicas) a la separación de lo que es democrático (es de suponer que los mecanismos electorales y representativos) frente a lo que es autoritario (el dirigismo y el estatismo, que limitan las libertades contractuales, en sus aspectos económicos fundamentalmente). Puesto que el conjunto del texto no alienta la comprensión de lo aparente en los términos que propone la fenomenología, sino en los derivados del uso común del vocablo, se puede deducir que el orden político (democrático) posee entidad secundaria (o derivada) respecto al orden económico (autoritario).

Puede ayudar a comprender esa perspectiva la convergencia de factores diferentes. En primer lugar, la gravedad de la situación económica en que se ve inmerso el país (tanto más grave cuanto que ni siquiera puede ser equiparada a una situación de estancamiento). Unida esta a la debilidad de las fuerzas políticas de orientación liberal, la primacía conferida a la recuperación económica argentina no resulta chocante. Además, mientras que Pinedo sí que ha vivido (y se ha formado en él) el orden republicano conservador, Alsogaray inicia y desarrolla su vida política en un ciclo de crisis crónica de las instituciones republicanas. Estos factores pueden ayudar a entender esa diferencia. No obstante, no creo que ésta pueda ser reducida a aquellos. Por último, es interesante no perder de vista que la preocupación de Pinedo por el retorno a la

democracia liberal va unida al cuidado por las cuestiones referentes a la cultura política democrática. Ya se ha aludido a las recurrentes muestras de respeto del autor hacia las voluntades de otros actores sociales (Pinedo 1971: 562). Además, ese cuidado se traduce en la crítica de la cultura política predominante (caracterizada por la valoración de la intransigencia y la denigración de los acuerdos) y el rechazo a las políticas de exclusión o de conformación de uniones sagradas tendentes a la polarización del país (Pinedo 1946: 138-40 y 184). No he encontrado nada semejante en Alsogaray²⁶.

5.4. Liberalismo y crisis social.

El análisis de los textos de Pinedo y Alsogaray despierta algunos interrogantes acerca de las relaciones entre el liberalismo, el conservadurismo y el conflicto y la crisis social.

Tales interrogantes afectan a la relación de la ideología liberal con el conflicto y la crisis sociales, entendiendo estos en sentido lato: por tanto, no necesariamente referidos a pugnas entre agregados sociales (inteligibles en su relación diferencial con el mundo ideológico, económico, geográfico, lingüístico ,etc) sino, también, como fenómeno hallable allá donde reglas (habituales y necesarias) de desenvolvimiento de la vida social se vean erosionadas. El conflicto será tanto más grave cuanto más afecte ese proceso a los fundamentos mismos de la vida social, sin embargo, su sola existencia, ni significa la

quiebra de tal o cual forma de sociedad, ni prefigura una evolución necesaria. En términos generales, esta visión mantiene ciertas similitudes con (y presupone a) la de los neoconservadores norteamericanos.

Una primera entrada para abordar la cuestión es el trato que los Pinedo y Alsogaray dan a estas cuestiones. En el primero, el intento de hallar explicación a los conflictos existentes en la Argentina no provoca la aparición de un proyecto específico destinado a contenerlo. En Alsogaray se puede encontrar, por un lado, una preocupación (que figura en lugar secundario) por algunos fenómenos integrables dentro de las categorías antes descritas (1989: 45) y por otro, adaptaciones del discurso liberal que mantienen relación con los desajustes económicos que pudieran acompañar al programa de reordenamiento económico (1989: 56) o con el acercamiento a tendencias vecinas pero diferenciadas (algunas corrientes relacionadas con el cristianismo social o el conservadurismo social, por ejemplo). Sin embargo, tampoco existe una preocupación prioritaria por ese tipo de cuestiones. Puesto que esa es una de las diferencias de aproximación entre el liberalismo y el conservadurismo (en las distintas variantes de éste), se intentará presentar la visión de Pinedo (más desarrollada que la de Alsogaray) en torno a la crisis de la sociedad liberal en la Argentina, apuntando algunas de las diferencias que separan al pensamiento liberal del conservador a propósito de estas cuestiones. En un epígrafe posterior me detendré específicamente en la visión conservadora de la

cuestión. Ambas secciones están, por lo tanto, conectadas.

Por lo que se refiere a Pinedo, en los años cuarenta éste no plantea como problema la relación entre sociedad liberal y conflicto social. A pesar de ello, es obvia la necesidad que los protagonistas del régimen del treinta sentían de autolegitimarse frente a la ciudadanía. Y en buena medida, esa necesidad se tradujo en una profusa tarea de desarrollo de los mecanismos protectivos del Estado frente a ciertos sectores sociales. (Por ejemplo, indemnizaciones por despidos, inicio del seguro social, reconocimiento como personas jurídicas de las asociaciones de trabajadores, establecimiento del sábado inglés, la amnistía para los infractores del enrolamiento o a los detenidos por delitos políticos y militares o una vasta campaña de edificación popular) (Pinedo: 133 y 136). Queda claro que los gobernantes argentinos optaron por intervenir en la vida económica y social, en un clima de malestar económico y en previsión de males mayores ("violencia callejera", "demagogia destructora e inepta" e ideas disolventes "que malas cabezas pretendían introducir del extranjero" (Pinedo 1946: 139). Es significativo que el Pinedo de los setenta vuelva a esa fase aludiendo al proceso por el que "se fue haciendo perceptible una sensación de malestar económico y resentimiento social", el cual, en combinación con ideas procedentes de la Europa de entreguerras, conduciría a la experiencia peronista (1971: 561).

Por tanto Pinedo presenta la evolución posterior de la sociedad argentina como el resultado de la confluencia la crisis social con las ideologías de mayor éxito en aquellos años, las

cuales presentaban modelos alternativos de organización de la sociedad que se querían más adecuados para resolver las cuestiones del orden social y el crecimiento económico (Pinedo 1971: 563)²⁷.

Simultáneamente, Pinedo intenta relacionar tal crisis con causas objetivas o como el señala, con una pretendida inoperancia del régimen liberal. La misma comparación con los Estados Unidos tiene por finalidad ver que motivos impidieron la continuación de un desarrollo liberal. No hay una respuesta definida a esa cuestión, al menos en lo que se refiere a las causas del malestar social al que antes se ha aludido. En buena medida, porque se intenta relacionar el conflicto (Pinedo habla de antagonismos) con el nivel de vida de los asalariados (esa es la razón de la fácil integración de estos últimos en la vida política norteamericana, en la explicación que recoge Pinedo) (1971: 567-68). Pues las condiciones económicas de los trabajadores argentinos resultaban, en términos comparativos, bastante buenas. El capítulo que aborda estas cuestiones se cierra sin esbozar una propuesta alternativa a la rechazada por Pinedo de la "inoperancia del régimen liberal". Y cuando se pasa al análisis de la Argentina de los primeros setenta, se niega la existencia de tensiones sociales de importancia debido a la alta movilidad social (1971: 669). A renglón seguido se presenta la profundización de los rasgos liberales de aquella sociedad como la alternativa capaz de solucionar los graves problemas existentes.

5.4.1. Orden social y crítica conservadora del liberalismo.

A fin de percibir más claramente algunas de las características del liberalismo (o liberal-conservadurismo) argentino, es conveniente tener en cuenta que diferencias separan a esta corriente ideológica de las corrientes más nítidamente conservadoras. Las páginas que siguen reflejan algunas de las características de las desavenencias ideológicas y filosófico-políticas entre el conservadurismo y el liberalismo clásico. Las mismas mantienen una relación directa con las peculiaridades del liberalismo argentino.

Creo que las posiciones descritas en el último capítulo son bastante ilustrativas para comprender algunas de las diferencias de la ideología liberal con el conservadurismo²⁸. Por distintos motivos, éste parece desconfiar de la yuxtaposición entre sociedad compuesta por individuos que intercambian entre si y Estado neutral (que ni entra a juzgar las opiniones individuales ni, en sus versiones deontológicas, propone concepción alguna del bien)²⁹.

En primer lugar, si consideramos la cuestión en términos históricos, se percibe la relación entre la aparición con fuerza de nuevos fenómenos de conflicto social y cierta derivación desde el liberalismo al conservadurismo. Sin perjuicio de que en casos como el de Burke se pueda hallar algún rasgo semejante, creo que es la experiencia del XIX la más indicativa en este sentido. Pues la pérdida de pujanza de la ideología liberal y la aparición del movimiento cartista fueron, como ha mostrado

Macpherson a propósito de Stuart Mill (1981: 60), procesos paralelos.

Esa relación se hace más consistente, a mi juicio, una vez se considera el caso argentino. Pues la existencia (en el incierto marco político de los años treinta) de conflictos (internos y externos) de importancia pudo ser decisiva para el abandono de la ideología liberal por sectores importantes de las constituencias antes liberal conservadoras (ver Gallo 1984: 22). Sólo en la década del ochenta podrá hablarse de una reconfiguración del mapa ideológico argentino favorable al liberalismo, y en este sentido, la evolución de algunos intelectuales desde posiciones conservadoras a otras liberales proporciona también alguna clave explicativa. Este es el caso, por ejemplo, del escritor Mariano Grondona, quien manifiesta haber partido de posiciones conservadoras (Grondona 1987: 7) para evolucionar progresivamente hacia el liberalismo. Algunas de las posiciones del primer Grondona aparecen en Marsal y Argent 1970; 456-57).

Estas reflexiones no indican que exista algún tipo de incompatibilidad entre la ideología liberal y el conflicto, sino a) el hecho de que éste no adquiere en sus análisis un papel remotamente semejante al que obtiene en las ideologías conservadoras, b) que el liberalismo considera los mecanismos clásicos de la sociedad liberal como suficientes para eliminar los fenómenos críticos y anómicos (confiando así en el desarrollo espontáneo de las relaciones sociales) y c) que sólo en coyunturas específicas y ante configuraciones igualmente

concretas de crisis social (esto es, no abordables a priori por una teoría general), no ha podido el liberalismo competir con las ideologías rivales³⁰.

Lo apuntado arriba sugiere cuales son algunos de los reproches que las distintas variantes del conservadurismo dirigen al liberalismo, ligados en buena medida a la lectura conservadora de las razones (y los riesgos) de crisis del orden social. Puesto que es imposible detenerse aquí en todos los motivos de esa crítica, recogeré sólo algunos, comunes a las distintas variantes conservadoras.

En general, los ideólogos conservadores han tendido a señalar que la configuración liberal de la vida social es, o bien irrealista, o bien peligrosa para el orden social. Y es peligrosa en la medida en que los individuos pasan a percibir sus relaciones entre sí, y sus relaciones con el Estado, como relaciones contractuales y de interés. En palabras de Hegel, el Estado queda entonces a expensas de la voluntad (y los caprichos) de los ciudadanos (Hegel 1975: 246-47). La destrucción del Estado y el terror revolucionario serían riesgos derivados de la fijación del origen contractual de la sociedad política.

El Estado liberal, se argumenta, permite que se desarrollen comportamientos que socavan el orden social. Además, en la medida en que aquel no reconozca ningún bien común³¹, alimentará la tendencia a la hiperjuridización y contractualización de todas las relaciones humanas, percibida por los conservadores como una "caída" moral, de la benevolencia

y el espíritu comunitario a la fría justicia (Sandel 1982: 30 y ss.)³², paso preñado de consecuencias negativas para los ciudadanos, que pueden vivir en una sociedad de mercado siempre que éste y sus correlatos (la autonomía individual, la determinación de la vida social por pactos y contratos) esten restringidos a ciertos ámbitos.

De forma tal que, en el orden arquetípicamente liberal los factores de cohesión social (la benevolencia, el patriotismo, la lealtad hacia el Estado o la consideración de cada derecho como una obligación) quedarían expuestos a un proceso erosivo más o menos rápido³³.

Igualmente, la no existencia de un bien común perseguido por el Estado y el carácter neutro de este último, argumentan los conservadores, facilita la aparición de grupos exteriores a aquel con voluntad de constituirse como comunidad política y que son, por tanto, embrión de oposiciones amenazantes.

En este sentido, el Estado neutro, que reconoce a los individuos la posibilidad de poseer cualquier opinión siempre que su conducta no atente contra las leyes daría alas a la generación y crecimiento de fenómenos anómicos (percibidos por los conservadores a menudo como enfermedades sociales) y a la quiebra de los fundamentos del orden social y estatal.

Creo que esas preocupaciones son comunes a las distintas manifestaciones del conservadurismo, pese a ser éstas muy variadas por virtud de las distintas historias nacionales. Así, para el conservador autoritario alemán Carl Schmitt, la configuración del Estado neutral (al que Heidegger denominaba

"Estado vacío"), emparentado con la doctrina hobbesiana, habría favorecido, en virtud de la inmanente supremacía de la "vida interior" (eso que el Estado neutral deja librado a la libertad de los individuos), la aparición de todas esas oposiciones que prepararon la crisis del Estado liberal y facilitaron el auge de los Estados totalitarios (Schmittt 1938: 95-96)³⁴.

En la visión "tory", ese riesgo sólo puede ser conjurado obligando a toda institución o grupo social con vocación de poder a ver reconocida su legitimidad a través de la gracia del Estado, que pasaría a integrarla en su seno (Scruton 1989: 184). Aquí el corporativismo es aceptado como mal menor³⁵. No importa, incluso, que contenga elementos económicos disfuncionales o rasgos de corrupción política. Pues la salvaguarda del orden social es una meta por encima de tales consideraciones (aunque sea al precio del atraso económico) (Scruton 1989: 178). También en este caso, la naturaleza humana lleva consigo el riesgo de la rebelión y la guerra civil (Scruton 1989: 178)³⁶.

Y del mismo modo en que la preservación del orden social puede exigir integrar dentro de la autoridad política instituciones no democráticas (Scruton), se hace necesaria una política estatal que module las diferencias sociales, apartando de la miseria a los estratos sociales inferiores³⁷, y que revista aquellas diferencias de un halo de trascendencia. Pues, en palabras de Scruton,

"if it were true that class distinctions were merely economic...then it would perhaps be true that in a wholly materialistic society (a society with no other myths than those engendered by money) class distinctions could at once translate themselves into open war" (Scruton 1989: 180)³⁸.

Se puede concluir, pues, que la perspectiva conservadora otorga una posición central en su discurso y en su práctica a todos los fenómenos que se perciben como ligados a la crisis social, y que en esa medida (aunque no sólo por esa razón), otorga al Estado un papel privilegiado en la neutralización de los que se entienden motivos de crisis. En este punto la discrepancia con el liberalismo es obvia. En primer término, porque este muestra confianza en la capacidad de una sociedad fundada en torno a la autonomía de los individuos y la limitación del poder para eludir o rebajar esos conflictos a niveles no perjudiciales. Y en segundo término, en sus formulaciones deontológicas (utilizando la expresión de Sandel), porque, sean cuales sean las posibilidades de crisis insertas en la sociedad, estas no pueden ser afrontadas vulnerando la autonomía y los derechos de los individuos. Creo que ese es uno de los factores que favoreció la crisis del liberalismo en coyunturas o ciclos históricos específicos (aunque no el único). Simétricamente, la funcionalidad que han mostrado las tesis económicas liberales para la superación de la crisis económica en las dos últimas décadas han reforzado al liberalismo, algunas de cuyas propuestas (aunque tal vez no suceda lo mismo con sus principios básicos) han llegado a ser absorbidas por formaciones de adscripción conservadora y socialdemócrata.

NOTAS

1. Aunque es imposible localizar con seguridad las razones últimas del "estilo político" de Pinedo, creo que es plausible la tesis de que se relacionan tanto de su procedencia de un mundo ideológico opuesto (aunque con algunos rasgos comunes) como con el hecho de que accediese a la política a través del debate ideológico universitario. Uno de los rasgos de tal estilo son las frecuentes manifestaciones de respeto a las opciones ideológicas adversarias, incluso cuando las mismas tienen vocación de reforma social (siempre que queden salvaguardadas ciertas reglas de juego básicas).

2. El hecho de que Pinedo sólo se orientase con rotundidad hacia el liberalismo una vez transcurridos sus principales periplos ministeriales (bajo la Presidencia de Guido sólo ocuparía el cargo durante dos semanas), limita la importancia de este último periodo a los fines de este análisis. A pesar de ello, el episodio ministerial con Guido y la colaboración con el gobierno de Frondizi (por ejemplo, en la creación de la SEGBA), son indicativos de un modelo de inserción del liberalismo en la política argentina cuyo máximo exponente ha sido Alsogaray.

3. El mismo Alsogaray señala, en una entrevista: "Empecé a actuar en política como subsecretario de comercio de Lonardi y a los dos meses pase a ser ministro de Industria de Aramburu" Tiempo Argentino, viernes 22 de marzo de 1985. Lo que es probable, en todo caso, es que su orientación antiperonista debía remontarse algo en el pasado.

4. Sobre esta cuestión, ver Gallo 1984: 14 y Mora y Araujo 1988: 134-36.

5. También es significativo que esos experimentos partidarios no llegasen a converger con otros de filiación más conservadora, en parte por la proclividad de estas fuerzas a la intervención del Estado en la economía. Ver, por ejemplo, la declaración de principios del Partido Federal, recogida en Mansilla 1983: 107.

6. Lo cual no debe conducir al observador externo a ver en él una suerte de Talleyrand.

7. El mismo debía disminuir las importaciones industriales y reequilibrar así la balanza de pagos. Asimismo, se perseguía atraer la llegada de capitales extranjeros (con resultados exitosos). En ese plazo, la inflación bajó del 113% al 0%. Según Alsogaray, "el breve experimento de economía social de mercado hecho durante ese periodo, y dentro de un poder político prestado, fue exitoso" (Montenegro: 1988: 43). Como contrapunto a la declaración de Alsogaray hay que añadir que algunos representantes conservadores (de la Federación Nacional de los Partidos de Centro) acusaron al gobierno de Frondizi "de falta de implementación en muchos anuncios de reducción del sector público" (Azaretto 1983: 136).

8. Poco se puede juzgar del último periodo ministerial de Alsogaray a causa de su escasa duración (seis meses). En el se diseñó un programa financiero de emergencia, se establecieron nuevos impuestos, se emitió un empréstito público a fin de pagar a los funcionarios públicos (empréstito parcialmente adquirido por particulares y parcialmente entregado a los funcionarios en sustitución del salario) y se devaluó la moneda, intentando restringir el mercado interno, eliminar la inflación y desalentar la sobreinversión en ciertos sectores económicos (Luna 1972: 150).

9. Ortodoxia económica que va inicialmente unida a la adscripción al Partido Socialista. Justo se distinguiría precisamente por su insistencia en la misma, especialmente en lo que se refería a los asuntos monetarios. Ver, por ejemplo Pinedo (1946: 116). Sobre el antiproteccionismo de Justo, ver también Pinedo (1946: 119).

10. Documento redactado por Pinedo, recogido en Pinedo (1946: 133 y 140).

11. Pinedo 1971: 526. Hay también algunas defensas de la intervención del Estado en la vida social. Sin embargo, las mismas son extremadamente genéricas, y no atenuan el liberalismo de aserciones como las arriba recogidas. Podrían ser interpretadas más como concesiones argumentales en la discusión ideológica que como efectivas veleidades intervencionistas. Ver también Pinedo 1971: 668.

12. Por otra parte, los propios proyectos legislativos del partido dirigido por Alsogaray, la Unión de Centro Democrático, reflejan la perspectiva arriba recogida. Ver el proyecto de ley de promoción industrial del 26 de abril de 1984, recogido en Alsogaray 1989: 137-42.

13. Ver también, a propósito la de promoción de las exportaciones industriales, Alsogaray 1989: 49.

14. Ver especialmente el capítulo séptimo en Pinedo 1971.

15. Aunque se puede argumentar que la frase se presta a la ambigüedad, creo que es obvio que el énfasis ha variado completamente respecto a décadas anteriores.

16. Ver Skocpol 1979. Creo que el auge del antiliberalismo en entreguerras, y el desligamiento respecto de este de parte de sus constituencias (conservadoras), en favor de posiciones de tipo nacionalista, corporativista o fascista, responde a un proceso formalmente semejante de percepción social (o intelectual) de las estrategias más exitosas de respuesta a la crisis económica y social. (La actitud, por ejemplo, de las ramas más consistentes del fascismo español hacia la revolución soviética y hacia la planificación estalinista, a la que se estudiaba en los 30 responde a un desarrollo de ese tipo Ver, de Ledesma Ramos Fascismo en España? y los artículos publicados en la revista La Conquista del

Estado).

17. Aquí, como en otros casos, el modelo alemán jugara un papel predominante.

18. Que por cierto, no fueron los únicos en los que colaboró Alsogaray. En 1965 fue candidato a diputado por el Partido Reconstrucción Nacional y en 1971 fundó el Movimiento Nacionalista Liberal, que luego pasaría a llamarse Nueva Fuerza (Doman y Olivera 1989:45 y 47).

19. Las palabras de Alsogaray sobre este último caso son bastante elocuentes: "Los militares no me pidieron ningún plan. Yo se los lleve". Tiempo Argentino, 22 de marzo de 1985.

20. En el sentido que se le daba al término en la España del siglo XVII: la tendencia a la constante presentación, por personalidades no directamente integradas en la cúpula del poder, de propuestas (generalmente económicas) que invirtiesen la crisis política y social (las cuales no siempre eran desdeñadas). Las similitudes son por tanto sólo formales, pero sirven para definir un modelo de actuación política. En parte, porque son indicativas de la debilidad de sus defensores, ya sea en los entresijos del Estado del Antiguo Regimen, ya en las modernas lides electorales.

21. En palabras de Pinedo, "era mucho más "pro-demócrata" que 'pro-personalista'" (Pinedo 1946: 175).

22. En cierta medida, ese mayor radicalismo de Pinedo podría servir de referente para las nuevas generaciones liberales, que además de formarse ideológicamente en un ambiente infinitamente menos hostil al que rodearía buena parte de la vida política de Alsogaray, han recuperado perspectivas liberales radicales (en una coyuntura internacional propicia).

23. Y que hace a menudo tan difícil, al menos para los observadores externos, deslindar las posiciones liberales de las conservadoras. El caso de Burke, a quien se ha considerado tanto liberal como conservador, es indicativo de esa dificultad aún teniendo en cuenta que, aunque en el Reino Unido del siglo XVII el orden existente es capitalista, éste no estaba exento de tradiciones precapitalistas. Ver MacPherson 1984: 9.

24. Elitismo que se hace patente en el fragor de la pugna ideológica contra el nacionalismo, cuando que se contraponen a los portadores de "apellidos que ilustraron varones venerables" a "elementos típicamente adventicios", "algunos con apellidos impronunciables en castellano". En ese sentido, parece que la pugna frente al nacionalismo se realiza en un terreno común a este, en el cual la fidelidad a las tradiciones nacionales es un argumento político de primera importancia. Por otra parte, Alsogaray distinguirá entre el buen nacionalismo y el mal nacionalismo, siendo aquel de medios y éste de fines. En declaraciones de Alsogaray, "seguramente

nosotros somos más nacionalistas que los nacionalistas" (Braun 1988: 68).

25. Cabe interpretar esa indecisión como la convivencia en Pinedo de dos enfoques (no equiparables a campos de problemas) de intelección de la crisis, (como en el caso de los científicos que trabajan de hecho con teorías alternativas, en el tránsito de la una a la otra). Ese proceso puede también seguirse en la historia ideológica.

26. Sólo en el rechazo a lo que ha podido aparecer como amagos de relajamiento del carácter exclusivamente representativo de la democracia republicana se pueden ver concomitancias con la posición de Pinedo. Sin embargo, las intervenciones de aquel tipo (protagonizadas por Alsogaray) y la Unión del Centro Democrático, insisten más en la no vulneración de las que se entiende son constricciones constitucionales. No conllevan un planteamiento crítico (y mucho menos autocrítico, como es el caso de Pinedo, en la medida en que revisa su actuar político separando errores de aciertos) en torno a la cultura política argentina.

27. También cuando se refiere a Yrigoyen da gran importancia Pinedo a los esquemas ideológicos. En el caso del político radical, su "falta de conocimientos suficientes" le habría impedido traducir sus simpatías por los estratos bajos de la sociedad en un programa político homogéneo (Pinedo 1946: 44).

28. En las líneas siguientes sólo recojo las críticas conservadoras al liberalismo a propósito de la cuestión social, en buena medida, porque me parece plausible sostener la relación entre el modo en que aparece esa cuestión en el liberalismo y el conservadurismo y las dificultades que la ideología liberal ha atravesado en determinados ciclos históricos. Una visión global de las diferencias entre conservadurismo y liberalismo puede encontrarse en Hayek (1975: 417-430) y en Gallo (1984: 11 y ss).

29. En la medida en que los principios rectores de la vida social se derivan, en primer término, de la libertad y la autonomía de los individuos, a los cuales la justicia debe asegurar protección. Es por eso que para Rawls, "Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que incluso el bienestar general de la sociedad como un todo no puede atropellar" (Rawls 1985: 19-20). La posición liberal en esta cuestión puede ser seguida, por ejemplo, en algunas manifestaciones de Alberto Benegas Lynch (h.). Ver Braun 1988: 108 y 133.

30. Una posición liberal clásica sobre estas cuestiones puede encontrarse en Mises (1977: 33).

31. Para Sandel, en el liberalismo deontológico "the right is derived independently from the good.... This foundational priority allows the right to stand aloof from prevailing values and conceptions of the good" (1982: 18).

32. En el hecho de que "we are now more entangled, but less attached, than ever before", radica para Sandel una de las claves para la comprensión de las falencias de la actual vida pública norteamericana (Sandel 1984: 94). (Es importante recordar aquí que el conservadurismo no va necesariamente reñido con un Estado económicamente poco intervencionista, especialmente en el caso norteamericano.)

Una expresión más rotunda, si cabe, de la animosidad conservadora contra la contractualización de la vida pública se puede percibir en el siguiente ejemplo de Roger Scruton:

"Not seeing birth as a part of fortune, a man might sue his parents for their lack of genetic control or lay blame for his deformity upon the doctor who refused to abort him. Do not think that these cases are fantastical. At this very moment they lie before American courts of law" (Scruton 1989: 174).

33. Así, Scruton señala sobre el liberalismo:

"it isolates man from history, from culture, from all those unchosen aspects of himself which are in fact the preconditions of his subsequent autonomy" (1989: 120).

34. Sustancialmente idénticas, aunque menos elaboradas, son las tesis de los tradicionalistas españoles. Según uno de estos, "Si el Estado se declaraba indiferente en esta materia [la educación], el libre juego de las ideas disolventes y la tolerancia de la herejía y el ateísmo minarían la unidad doctrinal y los cimientos de la sociedad". Recogido en Blinkhorn 1977: 73) Tanto Schmitt como Roger Scruton consideran disruptores el pluralismo político y la existencia de "poderes indirectos" (utilizando aquí la terminología de Schmitt) (Schmitt 1938: 113).

35. Las razones son similares, aunque no idénticas, en Hegel 1975: 242.

36. Sin embargo, el conservadurismo británico, a diferencia del continental, no llegará nunca a decantarse hacia una teología política de la contrarrevolución.

37.91. Según Scruton,

"Poverty and indigence are powers at large in the state. Not to relieve them is to foster resentment. It is to encourage a permanent and universal sense of the moral instability of the social order" (Scruton 1989: 183).

Hegel se muestra igualmente partidario de la existencia de mecanismos que atenuen las desigualdades producidas por el mercado. No obstante lo cual, percibe (mucho antes que los neoconservadores), la necesidad de medir los efectos morales de

esas restricciones sobre la sociedad civil. Pues "la subsistencia de los indigentes estaría asegurada sin ser proveida por el trabajo, situación que estaría en contra del principio de la sociedad civil y de la conciencia de sus miembros, de su autonomía y dignidad" (Hegel 1975: 237).

38. De modo que, para el conservador, se quiera o no, "the artifact of authority is one with the artifact of class".

6.La derecha liberal-conservadora a la salida de la dictadura militar.

6.1. Radicalismo, peronismo y derecha en la Argentina

En un marco político como el argentino, la definición precisa de los contornos de los partidos de la derecha se presenta como una tarea difícil. Esta dificultad está relacionada con la heterogeneidad política de los dos agrupamientos políticos más importantes (el peronismo y el radicalismo), con la presencia en ambos de sectores significativos que podrían ser asociados con lo que genéricamente se entiende por derecha.

Los sectores político-ideológicos de corte nacionalista, autoritario y corporativista han sido representados tradicionalmente por el peronismo (Mora y Araujo 1985: 96 y ss.). Además, lo que se ha denominado "conservadurismo popular" ha encontrado en el peronismo un canal de representación importante. Con distintos matices, Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, los Saadi en Catamarca y Carlos Menem en La Rioja, encarnan la figura de los viejos caudillos conservadores.

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) obtuvo, desde la emergencia del peronismo, los votos de las capas sociales burguesas y de los adversarios del peronismo y el corporativismo. En ese sentido, sirvió, de una forma u otra, de canal de representación de lo que se puede considerar un electorado de referencia central para cualquier opción derechista. Como han mostrado diversos análisis, la coalición electoral que apoyó a Alfonsín en las elecciones presidenciales

de 1983 puede ser caracterizada, en atención a los orígenes sociales de sus integrantes y a las preferencias políticas de éstos, como de centro-derecha (Mora y Araujo 1985: 102-104; González Esteves y Llorente 1985: 45).

Debido pues a la complejidad de la representación de sectores sociales y grupos ideológicos, parecería difícil fijar los contornos de la derecha argentina a fin de evaluar el impacto sobre su fuerza de ciertos factores sociopolíticos.

Ahora bien, la ubicación social y política de los grupos del autodenominado centro, y el mismo hecho de que tales grupos hayan visto crecer su fuerza electoral y política notablemente entre 1983 y 1989, permite hablar de partidos de derecha con presencia significativa en las pugnas electorales y en los distintos ámbitos institucionales, así como emprender análisis políticos y electorales sobre los mismos. Un aspecto decisivo de este resurgir de opciones nítidamente derechistas entre 1983 y 1989 reside en el hecho de que las "clases altas" argentinas han pasado a tener una articulación electoral y partidista mucho más consistente de la que las caracterizó en el pasado. Este hecho confiere cierta importancia al análisis de las características de estos partidos por lo que se refiere a sus bases de apoyo sociales y territoriales, sus orientaciones programáticas y su comportamiento político. Estas cuestiones adquieren especial interés en el contexto de la evolución histórica de los conflictos políticos en la Argentina. Pues gracias al impacto electoral de estas fuerzas en la década de 1980 es posible evaluar cuales han sido las continuidades y

transformaciones experimentadas por la derecha liberal-conservadora y el sistema de partidos argentino desde la emergencia de los primeros conflictos políticos modernos a la actualidad.

Como se ha indicado arriba, la recuperación democrática en la Argentina ha supuesto una considerable variación por lo que hace a la articulación de la derecha y a su impacto en el sistema de partidos y en el conjunto de la vida política. Este hecho se ha reflejado en la significativa presencia de opciones marcadamente liberal-conservadoras (relativamente heterogéneas en la combinación de estos dos atributos programáticos) en los comicios argentinos entre 1983 y 1989. Así, mientras que en las elecciones a diputados de 1983 la derecha sobrepasó el 10% de los votos en sólo tres distritos electorales (Corrientes, Jujuy y Capital Federal), en las de 1989 sobrepasó ese umbral en doce distritos. Del mismo modo, si bien en las elecciones de 1983 la derecha sólo superó el 20% de los votos en Corrientes, en las de 1989 sobrepasó ese límite en siete distritos (además de Corrientes, Tucumán, Capital Federal, Salta, Chubut, Jujuy y Mendoza) (Gallo y Thomsen 1990: 4; Alcántara Sáez 1989: 289-290).

6.2. Características comunes de los partidos de derecha en Argentina.

El paisaje de la nueva derecha liberal-conservadora es heterogéneo en la medida en que está constituido por

formaciones políticas diferenciadas, la mayoría de las cuales son provinciales y "provincialistas". Sin embargo, hay varios factores que unifican a tales formaciones. Por lo que se refiere a su ubicación en los conflictos políticos y electorales, tales formaciones se caracterizan por los vínculos de sus dirigentes respecto a los regímenes militares y por el hecho de que todas ellas han valorado la posibilidad (y optado en numerosos casos por ella) de construir alianzas electorales con la Unión del Centro Democrático (UCEDE), la formación liberal-conservadora más articulada a nivel nacional (Mora y Araujo 1991: 136).

Esta ubicación de los partidos provinciales en los conflictos políticos va ligada a las orientaciones de estos grupos en los terrenos político y económico. En el primero, las mismas se han caracterizado por sus proclividades autoritarias, por su apoyo a aquellos elementos de poder que aparecen como garantes conservadores de la estabilidad de la sociedad. De ahí que los gobiernos militares contasen habitualmente con el apoyo de dirigentes políticos procedentes de este campo político-ideológico. En el terreno económico, estos grupos se han caracterizado por sus demandas antiestatistas, antidistribucionistas y favorables a la desregulación, un hecho que no es desmerecido por las contradicciones que puede presentar su actuación política en este terreno. Esta última orientación fue sostenida con especial vigor por la UCEDE desde 1983 a 1989. La cercanía de las formaciones provinciales que se consideran aquí a este último partido es indicativa de su

comunidad fundamental de puntos de vista.

Finalmente, tanto los aspectos inmediatamente políticos como las demandas articuladas por estos grupos son claramente indicativos de su posición conservadora o liberal-conservadora si se prefiere. Esas trayectorias y esas demandas pueden ser encontradas sin duda en diversos sectores sociales, pero son los núcleos de representación prioritaria de las organizaciones conservadoras (las "clases altas") los que se ligan con mayor consistencia y contiguidad a tales orientaciones¹. Esto es confirmado por los resultados electorales de las organizaciones liberal-conservadoras en determinadas áreas del país. Especialmente, los análisis de Gallo y Thomsen (1990) han mostrado como la Alianza del Centro (y anteriormente la UCEDE) obtienen sus mejores resultados en las zonas más acomodadas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia del mismo nombre. Es revelador que la Alianza del Centro, que resultó la tercera fuerza más votada en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones a diputados de 1989 (con un 21.76% de los votos), fuese la opción más votada en la zona burguesa y "señorial" de este mismo distrito, la zona norte, con un 31.82% de los votos emitidos en las elecciones a diputados de 1989 ². Estas características sociales de la derecha argentina se aprecian con igual claridad cuando se analiza el nivel socioeconómico de sus diputados.

A fin de comprender mejor algunas de las características del mapa de la derecha argentina en el período que va de 1983 a 1989, es conveniente tener presente la evolución de esta

franja del espectro político después del primer período peronista. Las páginas siguientes abordan la historia de las formaciones políticas que existieron en la fase que va de la primera etapa peronista a la experiencia democrática abierta en 1983.

6.3.La articulación de las opciones liberal-conservadoras tras la conclusión de la primera experiencia peronista.

6.3.1.Intentos de articulación política liberal-conservadora anteriores al "Proceso de Reorganización Nacional" (1955-1976).

6.3.1.1.Iniciativas lideradas por Alvaro Alsogaray.

a. El Partido Cívico Independiente.

El primer intento de articulación liberal-conservadora liderado por Alvaro Alsogaray tras el derrocamiento del gobierno peronista, en 1955, tiene lugar en 1957, durante la presidencia del general Pedro Eugenio Aramburu. En aquel momento, sectores políticos liderados por Alvaro Alsogaray (que era ministro de industria de Aramburu) iniciaron la construcción de una fuerza que se presentase a las elecciones de 1957. La fuerza que surgió de tales iniciativas fue el Partido Cívico Independiente (PCI), de la que fue elegido presidente Alvaro Alsogaray. El PCI obtuvo en las elecciones de

1957 un escaso número de votos (86.442) y un escaño de diputado (Mansilla 1983: 134).

Otro aspecto significativo de los inicios del PCI reside en la actitud que Alvaro Alsogaray tomó respecto al partido que él mismo presidía tras ser llamado por el presidente Frondizi para ocupar a la vez los ministerios de Trabajo y Economía en 1959 (cargos que ocuparía hasta abril de 1961). Pues, una vez elegido, Alsogaray presentó su renuncia como presidente del PCI, renuncia que el partido no aceptó y transformó en una "licencia" por dos años (Mansilla 1983: 134).

La orientación del PCI fue claramente conservadora, y los ejes centrales de su discurso fueron el antiperonismo, el anticomunismo y la lucha contra la inflación y contra las políticas internacionales "tercermundistas". Es asimismo relevante la rapidez con que tal partido pasó del apoyo relativo al gobierno de Frondizi (en el que participó Alsogaray) a una oposición desleal o semi-leal, como se refleja en su negativa a participar en las elecciones de 1962 a fin de deslegitimar al gobierno.

Con posterioridad al derrocamiento de Frondizi, el PCI perdería su escasa fuerza electoral al tiempo que Alsogaray conseguía para sí de nuevo la cartera de Economía bajo la presidencia de José María Guido en 1962. En 1962, debido a que el PCI no alcanzó el tres por ciento de los votos válidos en los últimos comicios a los que concurrió, los organismos electorales argentinos vedaron al PCI la posibilidad de concurrir como tal fuerza a los procesos electorales inmediatos

(Mansilla: 136).

b. Nueva Fuerza.

En 1971, líderes políticos de extracción liberal-conservadora intentan articular una formación política que participase en los procesos electorales que sucediesen al régimen autoritario todavía vigente. En dicho intento de articulación de partido político colaboraron, además de Alvaro Alsogaray, el mismo general Aramburu, así como prominentes políticos procedentes de la tradición conservadora bonaerense, como era el caso de Emilio Hardoy y de Julio Cueto Rúa (Azaretto 1989: 149; Mansilla 1983: 136). Dichos intentos culminaron en la creación de Nueva Fuerza (NF), la cual encontró el apoyo de organizaciones conservadoras, como la juventud de la Unión Conservadora o los demócratas de Entre Ríos. En último término, grupos conservadores como los demócratas de Capital Federal, los conservadores de Entre Ríos, La Rioja y Jujuy, y buena parte de los conservadores de Buenos Aires se decantaron por apoyar la fórmula presidencial postulada por NF (Chamizo-Ondarts) (Azaretto 1989: 149). Sin embargo, antes de que tuvieran lugar las elecciones, los líderes conservadores Hardoy y Cueto Rúa se desligaron del nuevo partido a causa de sus desavenencias con Alvaro Alsogaray, al que achacaban el deseo de controlar personalmente a NF (Azaretto 1989: 149).

A pesar de conseguir introducir una pequeña cuña en las

filas del conservadurismo, NF obtuvo unos resultados electorales especialmente pobres en las elecciones de marzo de 1973 (un 1.97%), en las que se impuso la fórmula Cámpora-Solano Lima (Mansilla 1983: 137). A las siguientes elecciones presidenciales, en las que Perón obtendría un abrumador triunfo, NF ni siquiera concurreó.

Las razones de tan sonoro fracaso se hallan principalmente en el éxito relativo de una opción conservadora rival, la Alianza Popular Federalista, que articuló a buena parte de los grupos conservadores provinciales así como a otros partidos de tradición centrista, como el Partido Demócrata Popular. En las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la Alianza Popular Federalista obtuvo una 14,9% de los votos (Balestra y Osona 1983: 222). Por los orígenes sociales de su voto (González Esteves y Llorente 1985: 47-49) y por sus orientaciones políticas, la APF puede ser considerada como el beneficiario real de la mayor parte de los votos potenciales de NF.

6.3.1.2. Otras iniciativas de construcción de una coalición conservadora.

a. Alternativas conservadoras durante la proscripción del peronismo.

Una de las alternativas derechistas más importantes del periodo que sucedió a la primera experiencia peronista fue la de la Federación de Partidos de Centro. Esta federación tenía

sus orígenes inmediatos en el Congreso Nacional de Partidos de Centro que tuvo lugar en 1958. En la construcción de tal alternativa colaboraron el Partido Demócrata de Buenos Aires, el Partido Conservador de Buenos Aires, el Partido Demócrata de Córdoba, el Demócrata Conservador de la Capital Federal, el Partido Demócrata de Mendoza, el Demócrata Liberal de San Luis, el Demócrata de Jujuy, el Demócrata Conservador de Catamarca, el Demócrata de Entre Ríos, la Unión Provincial de Salta, y los partidos demócratas de La Rioja y Santiago del Estero (Hardoy 1983: 117). Posteriormente, el Partido Autonomista de Corrientes se adheriría a esta misma federación.

Por consiguiente, la Federación de Partidos de Centro agrupaba a los partidos del viejo tronco demócrata y conservador. La misma concurrió a las elecciones presidenciales de 1963 obteniendo un pobre resultado (medio millón de votos). Sin embargo, la FPC conquistó los gobiernos provinciales de Mendoza, Corrientes y San Luis.

La pobreza del resultado de la FPC es explicada parcialmente por la presentación de otra candidatura derechista liderada por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), que presentaba como candidatos a presidente y vicepresidente al propio Aramburu y a un líder del Partido Demócrata Progresista (Horacio Thedy) respectivamente (Hardoy 1983:123). Esta última candidatura obtuvo una cifra muy superior de votos (un millón trescientos mil) aunque no pasó del tercer lugar, por detrás de las dos ramas de la Unión Cívica Radical.

b. La Alianza Popular Federalista de Francisco Manrique.

En 1972 se constituyó, en torno a la candidatura presidencial de Francisco Manrique (ministro de Bienestar Social durante la presidencia del general Lanusse) la Alianza Popular Federalista (APF). La APF integró la mayor parte de las organizaciones conservadoras de la Argentina³, así como a otras fuerzas provinciales no procedentes del tronco conservador, como era el caso del Movimiento Popular Jujeno, la Vanguardia Federal de Tucumán y el Movimiento Federalista Pampeano⁴.

La APF presentó a Francisco Manrique como candidato a presidente de la República y a Rafael Martínez Raymonda, del Partido Demócrata Progresista, como candidato a vicepresidente. Esta fórmula obtuvo un notable éxito político, al recibir el 14,9% de los votos en las elecciones presidenciales de marzo de 1973. Asimismo, la APF obtuvo la segunda plaza en los distritos de Santa Fe, Tucumán, Salta, Catamarca y La Pampa (Martínez Raymonda 1983: 115).

En las elecciones de septiembre de 1973, en las que triunfó la candidatura de Perón, la APF obtuvo un 12,19% de los votos. Tras estas segundas elecciones, el candidato presidencial de la APF intentó transformar la coalición de partidos que lideraba en una formación política estable estructurada al nivel nacional. Se puede considerar fracasada tal iniciativa en sus propósitos iniciales, al desligarse de ella las organizaciones conservadoras y, fundamentalmente, la mayoría de los partidos provinciales, los cuales no estaban

interesados en diluir su personalidad política regional en una fuerza de tipo nacional (Balestra y Ossona 1983: 222).

De resultas de este proceso de disgregación surgieron, en 1973 el Partido Federal, liderado por Francisco Manrique (Manrique 1983: 38-39) y, en diciembre de 1974, una organización coordinadora de los partidos provinciales, la Fuerza Federalista Popular (FUFPEPO) en la cual se agruparon la mayoría de las organizaciones políticas provinciales y conservadoras⁵.

6.4. La Alianza Popular Federalista como antecedente de la Alianza del Centro

Por la naturaleza de las fuerzas políticas que la integraban, por los apoyos sociales que encontró en provincias y Capital Federal y por el porcentaje de votos que obtuvo, la APF presentaba ciertas similitudes con la Alianza del Centro de las elecciones de 1989. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre estos dos fenómenos electorales que conviene señalar. La APF tenía una orientación mucho más abiertamente federalista que la Alianza de Centro. Esta orientación federalista se reflejaba en los contenidos de su programa electoral, algunas de cuyas líneas rectoras eran "la reversión del proceso de concentración y la liberación del interior del sistema metropolitano", el "traslado de la capital federal al interior del país", la "restitución a las provincicas de los recursos impositivos absorbidos indebidamente por el Estado Nacional",

la "revisión del sistema vigente de coparticipación federal" y la "reafirmación del dominio provincial sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos" (Manrique 1983: 25).

Ideológicamente, la APF no se situaba en el campo del neoliberalismo y su programa se caracterizaba por su vaguedad doctrinaria. Su candidato presidencial (Manrique) consideraba el "solidarismo" (Manrique 1983: 45) el principio ideológico rector de un proyecto que debía diferenciarse tanto del "individualismo egoísta" como del "socialismo esclavizante" (Manrique 1983: 48). Tanto por su orientación federalista como por su adscripción "solidarista", la APF se encontraba más cerca que la Alianza del Centro de los ochenta del conservadurismo provincial y popular. En otro orden de cosas, la Alianza del Centro reflejaba una articulación distinta entre las fuerzas derechistas. En primer lugar, puesto que estaba liderada por un partido (la UCEDE) cuya principal base política y electoral se encontraba en Capital Federal y, más marginalmente, en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, puesto que esta fuerza articuladora tenía una orientación distinta, de carácter neoliberal. En tercer lugar, mientras que la APF consiguió articular a la mayor parte de los partidos provinciales, la Alianza del Centro no tuvo semejante suerte. Si bien esta última alianza consiguió el apoyo de importantes fuerzas políticas provinciales, otras muchas quedaron fuera de ese proyecto y se agruparon en la Confederación Federalista Independiente. Las diferencias entre estos dos proyectos políticos se reflejaron también en la

hostilidad de parte de los partidos provinciales a Alvaro Alsogaray (Mansilla 1983: 151).

6.5.Las características principales de la articulación de las fuerzas de la derecha tras la primera experiencia peronista. Los principales factores de sus divisiones.

La trayectoria de las fuerzas liberal-conservadoras argentinas con anterioridad a la nueva fase democrática se ha caracterizado por la fragmentación de los intentos de articulación organizativa. Esta articulación ha respondido a la existencia de conflictos de importancia entre los potenciales organizadores de la derecha. Tales conflictos han tenido que ver con características tales como la estructura política de la organización articuladora y las orientaciones programáticas de sus iniciadores. Así, ciertos intentos de articulación se caracterizaron por estar orientados a la construcción de un partido político nacional. Estos intentos estaban marcados por partir del centro político de la nación (fundamentalmente Capital Federal). Otra característica notoria de los mismos era su énfasis en las cuestiones económicas y su orientación ortodoxa en este terreno. Cuestiones como el federalismo ocupaban lugares muy secundarios en esos intentos. El principal hilo conductor de estas iniciativas de construcción partidista fue Alvaro Alsogaray, como se ha mostrado en las páginas anteriores.

Otras iniciativas, por el contrario, tenía una estructura

confederal desde su inicio. Se caracterizaban, antes que por definir una alternativa política unificada, por articular agrupaciones provinciales de forma muy laxa. La Federación de Partidos de Centro que concurrió a las elecciones de 1963 o la Alianza Popular Federalista de las de 1973 representan este segundo modelo. En el mismo, uno de los principales ejes de intervención política consistía en la representación de las élites políticas provinciales en la vida política nacional y en la reforma de la estructura territorial del Estado.

Además, en el seno de este segundo grupo de alternativas políticas existía una línea de demarcación entre las vertientes más populistas y las más nítidamente conservadoras. Las primeras, conocidas bajo la etiqueta de "conservadurismo popular", se caracterizaban por su mayor pragmatismo político, su apertura hacia el peronismo y por una posición menos ortodoxa en el terreno económico. Un representante notable de esta corriente fue Vicente Solano Lima (Hardoy 1983: 114; Azaretto 1983: 130-132), quien llegaría a acompañar a Héctor Cámpora en las elecciones de 1973 como candidato a vicepresidente. Cercana a este polo se puede considerar también a la Alianza Popular Federalista liderada por Francisco Manrique. El entramado programático de esta alternativa (el federalismo y el "solidarismo") la separan del tipo de opción defendida por líderes como Alsogaray. Por otra parte, ejemplo del segundo tipo de conservadurismo provincialista (más cerrado y menos populista) fue la Federación de Partidos de Centro que concurrió a las elecciones de 1963.

La existencia de estas dos líneas de división dentro de la derecha argentina no era accidental, sino que respondía a los conflictos sociopolíticos en los que esas formaciones políticas (y los grupos sociales que representaban) se inscribían. Estos conflictos se referían, en primer lugar, a la articulación del Estado argentino y a la representación de las élites políticas provinciales de orientación conservadora en la vida política nacional. Esta tensión hundía sus raíces en la historia argentina del siglo pasado y, más recientemente, en la transformación del sistema político argentino impuesta por la emergencia del radicalismo. En segundo lugar, estas divisiones en el interior de la derecha remitían al conflicto sobre el modelo económico y social, conflicto en el que las posiciones neoliberales y conservadoras populares eran muy diferentes. Finalmente, este conflicto se relacionaba directamente con las divergencias existentes en este campo político respecto a la actitud hacia el peronismo.

En general, las posiciones federalistas, conservadoras populares, y aperturistas frente al peronismo estuvieron ligadas entre sí, de forma semejante a lo que sucedió con las posiciones neoliberales, no provincialistas y marcadamente antiperonistas. En último término, la existencia de estas divisiones en el interior del campo político de la derecha limitaron decisivamente sus posibilidades de articular alternativas políticas con alguna continuidad, lo que no quita para que, en unas u otras elecciones, alguna de las opciones emergentes ocupase una posición electoral claramente dominante

dentro de este campo.

6.6.Las relaciones de las fuerzas políticas de la derecha con el gobierno militar (1976-1983).

La trayectoria de las fuerzas conservadoras y provinciales tras la instauración de la dictadura militar en 1976 (autodenominada Proceso de Reconstrucción Nacional) se caracterizó en la mayoría de los casos por la cooperación y por la definición de "una identidad estrechamente ligada al Proceso" (Mansilla 1983: 78) y, en especial, a la corriente más aperturista del régimen militar, representada por el general Viola. Así, las fuerzas conservadoras agrupadas en la FUFEPO y en la agrupación Línea Popular, el PDP y el PF dieron la bienvenida a la instauración del régimen militar en 1976 y apoyaron tanto la política económica como la "lucha contra la subversión" desarrollada tras 1976 (Mansilla 1983: 80; González Bombal 1989: 73 y ss.). La FUFEPO apoyó la política de apertura a la sociedad desarrollada durante la presidencia de Viola (1981), orientada a la preparación de una salida electoral encabezada por los partidos aliados al régimen militar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta estrategia era diferente de la sostenida por otros sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales promovieron la caída de Viola en 1981 con vistas a un nuevo cierre represivo del régimen y a la preparación de una alternativa electoral directamente organizada por las Fuerzas Armadas (Mansilla 1983: 83 y ss.).

El pase de Galtieri a la presidencia y posteriormente la derrota en la guerra de las Malvinas quebraron cualquier posibilidad de transición a la democracia controlada por los militares. En este escenario, los partidos provinciales y conservadores no pudieron obtener ni protagonismo ni réditos políticos. Una vez producida la transición, los partidos provinciales fueron incapaces de articular una opción electoral de ámbito nacional, no obstante lo cual siguieron cosechando, en tanto fuerzas locales, resultados significativos. El intento más sólido de articulación política a nivel nacional hubo de proceder de personas que, a pesar de su adscripción derechista, habían permanecido relativamente separadas de las maniobras políticas del régimen militar que finalizó en 1983. Alvaro Alsogaray y la UCEDE que él lideró fueron los iniciadores de la recuperación liberal-conservadora en los ochenta.

6.7. La formación de la Unión del Centro Democrático (UCEDE).

Los orígenes inmediatos de la UCEDE se remontan al año 1982, cuando al calor de la relativa apertura política primero, y del fiasco militar en las Malvinas después, comienzan a tener lugar conversaciones políticas orientadas a la creación de un partido liberal-conservador (Mansilla 1983: 136-37). De tales conversaciones surgiría la iniciativa de reunir a personas de similares orientaciones programáticas en lo que se denominó el Encuentro Nacional Republicano. En tales reuniones, presididas

por Alberto Benegas Lynch y Alvaro Alsogaray, participaron el Partido Nacional de Centro, el Partido Demócrata de la Capital Federal, el Partido Demócrata de Buenos Aires y el Partido Conservador de Buenos Aires. Este encuentro no dió lugar a la formación de ningún partido político que reuniese a todos sus integrantes (Mansilla 1983: 137).

A pesar de ello, algunas de las fuerzas participantes en el Encuentro dieron los primeros pasos encaminados a la formación de un partido político. El Movimiento Liberal Argentino (liderado por Tomás Villafañe Tapia), el Partido Nuevo Orden Social (de Francisco Siracusano) y el Movimiento Nacionalista Liberal (de Alvaro Alsogaray) formaron una organización política denominada primero Unión Republicana, y después Unión del Centro Democrático (UCEDE). La primera comunicación interna de este partido se produjo en julio de 1982⁶. En ella se señalaba que, a pesar de su autodefinición liberal, los integrantes de la UCEDE renunciaban a tal denominación a causa del desprestigio en que el gobierno militar y, en particular la política económica de Martínez de Hoz, habían sumido a esta etiqueta ideológica por un lado, y de la hostilidad de la Iglesia Católica hacia el liberalismo por otro.

La misma comunicación situaba al nuevo partido en el ámbito del liberalismo y manifestaba el propósito de la nueva formación de dirigirse a todos aquellos ciudadanos que no se inscribían en los campos políticos del radicalismo, el peronismo o la izquierda. Los promotores de la UCEDE estimaban

que el voto nuevo de la población juvenil (unos cuatro millones) reunía en buena medida tales características, y que el porcentaje total de los no inscritos en ningún campo partidista podía ascender al cincuenta por ciento de la población argentina.

Llama desde el inicio la atención el hecho de que los fundadores del nuevo partido diesen por históricamente agotada la tradicional polarización entre peronistas y antiperonistas, previendo la descomposición de los primeros en varios partidos políticos (dos como mínimo, al predecir la decantación de la fracción más radical del peronismo hacia el marxismo) y la desarticulación definitiva del campo antiperonista, dividido entre los partidos provinciales, la UCR y todo un sector por organizar políticamente.

Otro aspecto que se desprende del primer texto de la UCEDE es la inexistencia de mensajes específicos orientados hacia los simpatizantes de la UCR, entre los cuales siempre se ha hallado una importante veta liberal (que luego ha pasado a representar Angeloz). Todo un sector empresarial y agropecuario que puede sintonizar con muchos de los postulados del neoliberalismo y frente al que la UCEDE no diseñó una política de atracción específica.

Finalmente, el análisis realizado por la UCEDE consideraba como una tarea crucial y factible la construcción de una organización liberal-conservadora. La razón de ello estribaba en la existencia en el electorado argentino de preferencias económicamente antiestatistas y políticamente conservadoras que

no habían sido canalizadas por los dos grandes partidos argentinos.

6.8.Las elecciones de 1983 y sus factores políticos determinantes.

En términos de los resultados del centro-derecha, las elecciones de 1983 se caracterizaron por la inexistencia de alternativas nacionales de esta orientación. Sólo la UCEDE consiguió desbordar el ámbito exclusivamente provincial. Sin embargo, a excepción de la Capital Federal, donde obtuvo un 8.7 % de los votos, sus resultados fueron nímios, superando el 1% tan sólo en la provincia de Buenos Aires (Gallo y Thomsen 1992: 144-145). Como antes se reseñó, esta debilidad inicial del centro-derecha se vinculaba con el decantamiento del voto moderado hacia el radicalismo en 1983.

Por lo que se refiere al conjunto de las fuerzas derechistas, éstas sólo obtuvieron resultados reseñables en Corrientes (35.8%) y Jujuy (16,2%).

Por consiguiente, los resultados de la derecha en las elecciones a diputados de 1983 se caracterizaron por su pobreza general y su falta de articulación. Esta debilidad se explica por un conjunto de factores. En primer lugar, el radicalismo logró capitalizar el miedo de las clases altas a un eventual triunfo peronista. En segundo lugar, la experiencia de la dictadura militar fue desestabilizadora para los partidos provinciales en varios sentidos. Las tensiones vinculadas a la

conclusión del régimen militar neutralizaron los intentos organizativos que, en previsión de una apertura controlada, los partidos provinciales habían conseguido trabar (a través de las coordinadoras políticas mencionadas más arriba). Además, como las declaraciones de la UCEDE a propósito de la elección de una etiqueta política reflejan, la experiencia militar había sido tan nefasta en sus distintas vertientes que las fuerzas que cooperaron con ella de forma más explícita fueron electoralmente penalizadas.

Los factores que determinaron la debilidad de la derecha en las elecciones de 1983 son específicos a esta coyuntura histórica pero también reveladores de las constricciones generales que han pesado con fuerza sobre estos partidos. En primer lugar, el sistema presidencial favorece claramente la polarización de la sociedad y debilita a terceras opciones. No es este un fenómeno singular en la historia argentina. Tanto en las elecciones de 1928 como en las de 1946, por poner dos ejemplos de especial relevancia histórica, los partidos conservadores fueron subsumidos por una alternativa u otra (a veces dependiendo de las provincias) en la competición electoral⁷. Por otro, la especial vinculación de estas fuerzas con los regímenes militares ha tendido a perjudicarlas en el terreno electoral.

Finalmente, los pobres resultados electorales de la derecha en 1983 brinda menos posibilidades a un análisis que compare la fuerza de la derecha en las distintas provincias. Es por esto que la comparación interprovincial de los resultados

se basará en las elecciones de 1989.

6.9.La recreación de la alternativa liberal-conservadora.

Como antes se vió, los pobres resultados de la derecha en 1983 tuvieron mucho que ver, además de con la secular division de este campo político, con el legado de la última dictadura militar. Conforme transcurrieron los años ochenta, un conjunto de factores facilitaron el resurgir de las opciones liberal-conservadoras. Tales factores atenuaron el impacto negativo del denominado Proceso de Reorganización Nacional sobre la popularidad de las opciones de derecha. Además, dichos factores favorecieron la creación de alternativas conservadoras de caracter nacional.

6.9.1.La crisis del modelo económico y el fortalecimiento de la derecha durante los años ochenta.

Un primer factor que incidió en la recuperación de la derecha durante la década de 1980 fue la combinación entre la intensidad de la crisis económica y la incapacidad del gobierno de Alfonsín para superarla. La crisis fue decisiva porque hacía patente el agotamiento del modelo económico imperante, con distintos matices, desde los años 40 de este siglo. Un modelo caracterizado por el peso extraordinario del Estado en la vida económica y por su orientación proteccionista. Este modelo desarrollista se reveló absolutamente fallido en la nueva fase

democrática, como los episodios hiperinflacionarios y el estancamiento económico mostraron.

Como es bien sabido, en la década de 1970, la que algunos autores han dado en llamar "matriz Estado-céntrica" (Cavarozzi 1991)⁸, entró en varios países sudamericanos en una profunda crisis. Tal crisis generó, especialmente de parte de regímenes autoritarios como el argentino y el chileno, programas económicos orientados a la construcción de un nuevo marco económico.

En el caso argentino, la naturaleza de las medidas puestas en marcha por la dictadura, en combinación con la crisis de la deuda externa, situaron a la economía argentina en una posición de extrema precariedad⁹. Para percibir la magnitud de la crisis a inicios de la década de 1980 basta tener en cuenta algunos indicadores. Así, en 1983 la deuda externa global de la Argentina equivalía al 41% de su Producto Interior Bruto (Minsburg 1991: 125), la inflación anual era de tres dígitos y el PIB se hallaba un 6% por debajo del de 1981 (Lewis 1990: 478)

Inicialmente, el gobierno de Alfonsín intentó afrontar la crisis económica sin renunciar a caracteres centrales del sistema socioeconómico argentino. El resultado fue la agudización de la crisis, cuya expresión más notoria fue la tasa de inflación alcanzada en abril de 1985 (más del 1.000%), que precipitó, ese mismo mes, el anuncio de una "economía de guerra" por parte de Alfonsín. La nueva política económica de 1985 se concretó en el denominado Plan Austral, diseñado por el

nuevo ministro de economía, J. Sourrouille. El Plan Austral perseguía disminuir la inflación y reequilibrar las distintas magnitudes económicas. Uno de los ejes del mismo consistía en rebajar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos, finalidad con la que se establecieron controles de precios y salarios, se prometió reducir el déficit público y se redujeron aranceles proteccionistas. Es importante tener en cuenta que las bases teóricas del programa económico no eran ni ortodoxas ni neoliberales. En las mismas, la inflación no era explicada tanto en función del exceso de demanda como a partir de las expectativas de los actores económicos, los cuales tenderían ajustar los precios no simplemente en función de la demanda sino también de sus expectativas, construidas bajo una inflación continua¹⁰. Es por esto que, además de afrontar la crisis fiscal del Estado, el gobierno se inclinó por la congelación de precios y salarios (Bresser Pereira 1992: 59).

Después de éxitos iniciales en la lucha contra la inflación, el plan económico naufragó, debido a la incapacidad presidencial para atajar, con reformas estructurales, la crisis fiscal del Estado (Bresser Pereira 1992: 46). En 1989, el último año de la presidencia de Alfonsín, el PIB descendía en un 4,4% y la inflación rondaba el cinco mil por ciento anual. En toda la década de 1980 el PIB descendió en un 13,5% (Waisman 1992: 229).

Por consiguiente, el gobierno radical se mostró incapaz de enderezar la economía del país. Probablemente, más que a la aproximación heterodoxa del equipo económico, tal incapacidad

se debió a la combinación de una serie de factores, como las constricciones institucionales afrontadas por el gobierno (que carecía de mayoría en el parlamento)¹¹ y la falta de determinación en la continuación de las reformas de que hizo gala el ejecutivo (Palermo 1990; Alcántara 1988). Fuesen cuales fuesen las causas de esa incapacidad, la experiencia económica de los ochenta, con sus duros episodios hiperinflacionarios y con el fracaso de los proyectos heterodoxos, fortaleció necesariamente, en el terreno ideológico y electoral, a los defensores de las aproximaciones neoliberales radicales a la solución de la crisis. Un partido como la UCEDE, cuyo líder pasaba por ser el máximo defensor de la economía de mercado y de las reformas liberalizadoras sin contemplaciones, pudo sacar buen partido del hastío de la población con respecto a los problemas económicos y de las dificultades del radicalismo para dar satisfacción a esas demandas de soluciones definitivas a la inestabilidad económica. En este terreno, la naturaleza del programa de la UCEDE era también muy beneficiosa para su crecimiento electoral. Pues las medidas radicales que proponía se caracterizaban por su contundencia y ejemplaridad (el "shock de confianza" de que hablaba Alsogaray) y por la centralidad del déficit público y la inflación en las mismas. De tal forma que lo que en otros momentos constituyó una debilidad insalvable para las alternativas liberal-conservadoras se convirtió, a finales de la década de 1980, en una de las causas de su capacidad de atracción.

El abrupto incremento de los votos a la UCEDE tras el

fracaso de las políticas de reforma heterodoxa impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín es indicativo del impacto de la crisis sobre el auge de la derecha. Así, es revelador que la UCEDE pasase en Capital Federal, en las elecciones a diputados, de un 10,4% en 1985 a un 18,2% en 1987 (Gallo y Thomsen 1992: 145). Ese cambio de orientación del electorado se debió, por un lado, al retorno de los votos liberal-conservadores, obtenidos por Alfonsín en las condiciones excepcionales de 1983, a opciones derechistas, y, por otro, al aumento de las actitudes privatizadoras y antiestatistas en la opinión pública argentina (Mora y Araujo 1991: 88-89).

En particular, la incapacidad del Radicalismo para afrontar exitosamente la crisis económica benefició a la UCEDE. Como se ha mostrado en el capítulo dedicado a las transformaciones ideológicas del liberalismo argentino, el líder de la UCEDE, Alvaro Alsogaray, se ha caracterizado por su posición (crecientemente radicalizada) favorable a la transformación de la economía argentina en una dirección ortodoxa y neoliberal. Es por esto que la UCEDE ha podido recoger, inicialmente, los mayores beneficios del agotamiento del modelo "Estado-céntrico". Es revelador a este respecto que la crisis económica, además de fortalecer al centro derecha, favoreciese a la UCEDE dentro de esta última. Así, en la Capital Federal, el voto para la UCEDE pasó de un 10,4% en 1985 a un 18,2% en 1987 y a un 22% en 1989 ¹². Mientras tanto, el resto de la fuerzas de la derecha evolucionaban en Capital Federal de una forma mucho más desigual, pasando de un 7,6% en

1985 a un 2,1% en 1987 y a un 7,1% en 1989 (Gallo y Thomsen 1992: 143-142).

Por consiguiente, el deterioro del modelo económico, añadido a la ineficacia del gobierno de Alfonsín en el tratamiento de la crisis, favorecieron extraordinariamente las posibilidades de la derecha y, dentro de ésta, de la UCEDE.

Cuadro 1. Evolución del voto de la Alianza del Centro/UCEDE en las elecciones a la Cámara de Diputados entre 1983 y 1989 (en tantos por ciento). (Extraídos de Gallo y Thomsen 1992: 145).

	<u>1983</u>	<u>1985</u>	<u>1987</u>	<u>1989</u>
Capital Federal	8,7	10,4	18,2	22,0
Buenos Aires	1,1	4,0	6,3	9,9
Catamarca	-	-	0,9	1,0
Córdoba	0,3	3,6	4,2	7,6
Corrientes	-	-	2,0	1,6
La Rioja	-	-	0,5	1,3
Entre Ríos	0,3	4,0	3,5	8,2
Jujuy	-	-	1,0	1,4
Mendoza	0,2	0,9	0,7	20,5
Salta	-	-	-	2,3
San Juan	0,5	2,8	7,7	7,1
San Luis	0,2	1,4	6,4	3,9
Santa Fe	0,3	2,0	2,3	9,2
S.del Estero	-	0,6	0,7	0,8
Tucumán	0,5	3,0	1,5	1,4

6.9.2.La conformación de alianzas nacionales conservadoras.

Los resultados electorales de la UCEDE en Capital Federal son significativos porque, por primera vez en el último medio siglo, la derecha conseguía, en elecciones sin fraude ni proscripciones, resultados de importancia en este distrito.

También, porque estos resultados en Capital Federal allanaban el camino para articular, sobre la base de un partido nacional y no provincialista, a las fuerzas de la derecha. En esta medida, el nuevo escenario político facilitó también las condiciones para la constitución de alianzas entre la UCEDE y otros partidos y para que las fuerzas que no quisiesen integrarse, por distintos motivos, en dicha alianza, se viesan igualmente impelidas a constituir acuerdos interprovinciales. Es por esto que en los años ochenta se asistió a la emergencia de la Alianza de Centro (que concurrió ya a las elecciones a diputados de 1985), liderada por la UCEDE e integrada en las elecciones de 1989 por el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, el Partido Demócrata de Mendoza y el Partido Demócrata Progresista y, por otro, de la Confederación Federalista Independiente, cuyos integrantes concurrieron a las elecciones de 1989 respaldando la candidatura del radical Angeloz a la presidencia y de Cristina Guzmán, representante del MPJ, a la vicepresidencia. La CFI estaba integrada entre otros por el Movimiento Popular Jujeco, el Partido Renovador de Salta y el Movimiento Popular Catamarqueño, partidos que concurrieron bajo tal etiqueta a las elecciones de 1989¹³.

La conformación de estas dos alianzas es además indicativa de las tensiones características del centro-derecha argentino en los últimos decenios. Tal espacio político engloba, por una parte, un ala más centrada en torno a los elementos programáticos conservadores y, en la actualidad, neoliberales. Así, la UCEDE y los partidos agrupados en la Concentración

Demócrata se han caracterizado por su posición favorable a las políticas económicas y sociales ortodoxas y por su hostilidad hacia cualquier aspecto que recordase prácticas populistas. Por contra, otros sectores del centro-derecha han girado en mayor medida en torno a la defensa de los intereses provinciales. En este sentido, estos grupos han tenido posiciones mucho menos militantes en el terreno económico, al tiempo que han sido mucho más abiertos a trabar alianzas electorales con peronistas o radicales. Este es el caso, por ejemplo, del Movimiento Popular Jujeno y del Bloquismo de San Juan. Por consiguiente, las alianzas trabadas con motivo de las elecciones presidenciales de 1989 han consagrado organizativamente esta diferencia permanente en el campo de la derecha. Tal división se relaciona igualmente con el hecho de que los dos partidos mayores de la Argentina (y especialmente el radicalismo) han podido representar a sectores críticos del electorado de la derecha (especialmente las clases altas).

6.9.3.Los ejes de la intervención política de la UCEDE.

6.9.3.1.Economía.

Si hay un terreno que ha centrado los análisis, propuestas y debates articulados desde el seno de la UCEDE éste es sin duda el de la sustitución del modelo económico desarrollista e intervencionista por uno regido por el mercado¹⁴. Esa propuesta de transformación del sistema socioeconómico

argentino a través de una "revolución pacífica" (UCEDE 1989: 13) se ha fundamentado en lo que la UCEDE denomina "pensamiento liberal moderno" (UCEDE 1989: 1 y ss). Ya en su propuesta electoral de 1983, la UCEDE insistía en "reemplazar el actual sistema cultural y socio-económico **dirigista e inflacionario...** por un sistema basado en la **libertad en todos los campos, en la estabilidad monetaria y en el libre juego de las fuerzas del mercado**"¹⁵. En la propuesta electoral de las elecciones de 1989, el tono empleado y las medidas defendidas eran del mismo cariz. En esta última, la reforma socioeconómica consistiría en "abolir el Estado Comerciante y el Estado Industrial" y en "abrir los grandes campos de la actividad económica a los particulares" (UCEDE 1989: 9-10). De tal forma que "el Estado sólo intervendrá en ellas para preservar el juego del mercado y subsidiariamente para complementar la acción privada cuando resulte indispensable" (UCEDE 1989: 10)¹⁶. Esta orientación neoliberal (que ciertamente integra matices procedentes de otras corrientes ideológicas) se ha expresado igualmente en la labor parlamentaria de los líderes de la UCEDE. De forma similar a otros casos, en los que determinados conceptos prestan el marco práctico y simbólico que ha de solucionar todos los problemas existentes¹⁷, el retorno al mercado garantizará la supresión de los aspectos más nocivos del sistema económico argentino.

Por lo que se refiere a la puesta en marcha del programa económico de la UCEDE, este siempre ha girado, en consonancia con las doctrinas profesadas por su fundador, Alvaro Alsogaray,

en torno al denominado "shock de confianza" (Alsogaray 1989: 33 y ss.), promovido por un paquete de medidas orientadas a la disminución drástica del papel económico del Estado, la eliminación del déficit y la liberalización de los mercados¹⁸. Según Alsogaray, producido tal shock, los capitales retornarán a la Argentina, las tasas de interés caerán, los empresarios volverán a invertir, la economía se recuperará y el desempleo desaparecerá, siguiendo una lógica que este mismo político considera "irrebatible" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15 de mayo de 1985, pp.575-576). El desarrollo de este programa requeriría, aparte de las consiguientes medidas técnicas, de una adecuada "oportunidad política" y de "personas creíbles" (Ibid.: 576). Es aquí donde los líderes de la UCEDE, o más exactamente, el ingeniero Alsogaray, habrían de desempeñar un papel decisivo¹⁹.

En general, la lucha por la transformación del sistema socioeconómico argentino ha ocupado una posición central en la actividad económica de la UCEDE. La orientación del programa económico ha permanecido relativamente constante, salvo en lo que se refiere a cuestiones coyunturales: la solución a los problemas económicos de la Argentina pasaría por el shock de confianza, un producto de las medidas de choque orientadas a revertir la posición económica preponderante del Estado y a eliminar los principales desajustes económicos (como el déficit público y la inflación) mediante la liberalización y la privatización. La UCEDE, o más exactamente su líder, Alvaro Alsogaray, se han caracterizado por proponer con continuidad (y

sin flexibilidad argumentativa) un programa simple e inteligible de transformación del sistema que atacaría con radicalidad factores centrales de la crisis. Este hecho ha permitido a la UCEDE crecer conforme recetas económicas alternativas (de signo heterodoxo) fracasaban durante la década de 1980.

6.9.3.2.La cuestión militar.

Las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas han sido el otro eje fundamental de la política argentina durante el inicio de la actual fase democrática. Como es sabido, las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas durante el régimen militar (1976-1983) alcanzaron niveles desconocidos en la reciente historia argentina²⁰. La llegada a la presidencia de Raúl Alfonsín, cuyo programa había girado en torno a la defensa de los derechos humanos y de la democracia, abrió el camino a la revisión por las instituciones civiles de los actos de violencia cometidos por militares en el régimen autoritario. La forma en que se produjo esa revisión, cuyo primer paso fue la derogación de la ley de autoamnistía promulgada por los militares, generó a su vez conflictos entre el poder civil y los militares de intensidad creciente que el Ejecutivo se mostró incapaz de controlar²¹. A su vez, la incapacidad del Ejecutivo para controlar tales conflictos determinó la sucesiva transformación de las normas jurídicas destinadas a revisar el

comportamiento de los militares en lo que estos últimos denominaron la "guerra antisubversiva".

La actitud de la UCEDE en este terreno merece cierta atención. Si en un principio marcó sus distancias frente a los militares al aprobar la derogación de la ley de autoamnistía, cuando el desprestigio de estos últimos estaba en punto más algido, posteriormente la UCEDE fue definiendo una posición cada vez más cercana a las demandas militares.

Esa defensa de la acción militar se hizo ya patente en cuando el gobierno radical formuló la "Ley de Punto Final" (1986), destinada a poner un límite temporal a los procesos contra militares y, más claramente, con motivo de la promulgación de la Ley de Obediencia Debida, en 1987. En los debates sobre esta última Alvaro Alsogaray llamaba a reconocer que en la Argentina existió una guerra antisubversiva. Más revelador aún es el argumento de que, puesto que tal guerra no era convencional, requería el desarrollo de una "metodología específica", una metodología que no estaba sujeta por principios que valen para otros tipos de guerra²². Ese acercamiento a las posiciones de las Fuerzas Armadas, por encima de los ataques a aspectos como la usurpación del poder civil, la política económica y la guerra de las Malvinas, pasaba por el reconocimiento de la bondad de la tarea antisubversiva, por el cese de los ataques contra las Fuerzas Armadas alentados por el gobierno y por la devolución a estas últimas de su capacidad de combate, en parte, por si pudiese plantearse de nuevo una "guerra antisubversiva"²³.

En general, la UCEDE ha adoptado posiciones conservadoras en materia de política militar. Ha apoyado crecientemente la acción represiva de las Fuerzas Armadas durante el "Proceso", mostrándose favorable a la implicación militar en tareas de seguridad interior. Estas actitudes son indicativas de las orientaciones políticamente conservadoras de los líderes de la UCEDE. Al mismo tiempo, tales orientaciones promilitares son expresivas de las demandas de orden social y autoridad, de las cuales las Fuerzas Armadas aparecen como última salvaguarda, que caracterizan a los grupos sociales representados por la UCEDE.

NOTAS

1. Sobre la importancia de la vinculación entre las clases sociales altas y los partidos políticos en la determinación de la orientación sociopolítica de tales grupos ver Gibson 1992: pp.10-23.
2. La zona norte de Capital Federal incluye las circunscripciones de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta y Barrio Norte (Gallo y Thomsen 1990: 9). Es igualmente revelador que ya en las elecciones de 1985 y 1987 la UCeDe había sido la fuerza mas votada en Belgrano, Recoleta y Barrio Norte.
3. Entre las organizaciones que se integraron a la APF se contaban la Unión Conservadora de Buenos Aires; la Unión Provincial y el Partido Popular de Córdoba; la Unión Provincial de Salta, la Unión Popular y el Partido Demócrata Liberal de San Luis, así como el Partido Demócrata Progresista al nivel nacional (Manrique 1983: 21).
4. Sobre el origen de estas fuerzas, ver Balestra y Ossona 1983: 181 y ss.
5. La FUFEPO estaba compuesta, entre otros partidos, por el Movimiento Federalista Pampeano, el Partido Demócrata de Córdoba, el Partido Demócrata de Mendoza, la Vanguardia Federal, el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, el Movimiento Popular Jujefío, la Unión Provincial de Salta y el Partido Bloquista de San Juan. Participó como observadora en la emergencia de la FUFEPO la Unión Conservadora de Buenos Aires (Balestra y Ossona 1983: 224-225; Mansilla 1983: 68 y ss.).
6. Recogida en Mansilla 1983: 138 y ss.
7. Es por esto que si una de las fuerzas principales se presentase dividida las perspectivas de las fuerzas del centro cambiarían radicalmente (Fraga 1990: 22).
8. Los rasgos genéricos de la "matriz estado-céntrica" radicarían en "la industrialización sustitutiva, la economía cerrada o semicerrada, la regulación estatal de los mercados y el patrón de inflación 'moderada'" (Cavarozzi 1991: 94).
9. Sobre las relaciones entre la política económica de Martínez de Hoz y la crisis económica subsiguiente ver Jorge Schvarzer 1986.
10. Como señala Bresser Pereira "When inflation is chronically over 5 per cent a month, a series of informal and formal indexation systems are bound to appear as a result of economic agents' struggle to protect their relative share of income. As economic agents index their prices to some index of past inflation, raising them in a phased way, it becomes difficult to curb inflation... Informal indexation makes inflation rigid, autonomous

of demand, inertial" (Bresser Pereira 1992: 58-59).

11.Los condicionantes políticos e institucionales del gobierno radical entre 1983 y 1987 y la relación de éstos con la evolución electoral son analizados detalladamente en Alcántara 1988.

12.Observese que el mayor aumento del voto ucedista tuvo lugar con posterioridad a la crisis del Plan Austral (1986-1987).

13.No se integraron en ninguna de las citadas fórmulas el Bloquismo de San Juan, la Fuerza Republicana de Tucumán, la Unión Provincial de Salta y el Partido Demócrata Liberal-Movimiento Popular Provincial de San Luis.

14.Como Alsogaray ha señalado, "el tema económico es el más importante" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 22 y 23 de agosto de 1985, p.3786).

15.Citado en Mansilla 1983: 155.

16.Ciertamente, se puede objetar que la propuesta de la UCD presenta deslices intervencionistas desde el punto de vista de una perspectiva ortodoxamente neoliberal, en la medida en que se orienta por definiciones que reconocen un espacio a la intervención estatal que va más allá del que caracteriza al Estado vigilante (como la denominada "Economía social de mercado", en la cual se incluirían ciertos niveles asistenciales orientados hacia individuos carentes de todo recurso). Ello no afecta sin embargo a la adscripción de este grupo al campo neoliberal, como es manifiesto por la orientación marcadamente antidesarrollista y antiproteccionista del mismo.

17.De forma semejante a como la doctrina corporativista se convirtió durante los años treinta en ideal capaz de proveer solución a los retos (conceptuados entonces como sociales antes que como económicos) percibidos por la derecha española. También en aquel caso, en el marco de un campo de problemas percibido como dominante (el de lo social entonces; Montero 1977: 10-15) se despliegan respuestas específicas a estos últimos (Montero 1977: 14-15) que en aquel caso se orientaban hacia modelos corporativistas (Montero 1977: 59 y ss.). En todo caso, tales respuestas son percibidas como igualmente capaces de eliminar los problemas dominantes definidos/confrontados por un grupo sociopolítico determinado en una coyuntura específica.

18.Igualmente indicativa de la posición política de la UCEDE es la reticencia con que se abordan los recortes presupuestarios en materias como defensa, y enseñanza privada (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 22 y 23 de agosto de 1985, p. 3789).

19.La integración de Alsogaray al equipo económico de presidente Carlos Menem es buena muestra cuales serían las personalidades en condiciones de salvar esa insuficiente confianza de los mercados en la clase política argentina.

20.Según el informe de la CONADEP, la cifra de desaparecidos durante el régimen militar fue de alrededor de las nueve mil personas.

21.Sobre la evolución de tales relaciones y de la posición del gobierno radical ver Verbitsky 1987.

22.En esta línea, Alvaro Alsogaray indicaba que "ésta no fue una guerra convencional.Esta guerra todavía no tiene normas y reglas universalmente aceptadas, porque recién comienza a librarse en el mundo...De manera que quienes tuvieron que diseñar la estrategia y la metodología no contaban con normas a las que ajustarse...No estoy defendiendo los excesos y las aberraciones. Estoy señalando cuál es el problema que se planteó" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 4 y 5 de junio de 1987, p.1810). Independientemente de otras consideraciones sobre la consistencia ética y lógica de estos argumentos, es preciso tener en cuenta que sólo una parte de la represión practicada por las Fuerzas Armadas recayó sobre las organizaciones violentas. Ver el informe sobre la desaparición de personas de la CONADEP a este respecto.

23.Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 4 y 5 de junio de 1987, pp.1810-1812. En el mismo sentido, es interesante que la entonces diputada María Julia Alsogaray transmitiese al Ministro de Defensa su inquietud ante la situación del capitán Astiz (cuya fama ha trascendido las fronteras argentinas), el cual no había sido ascendido a pesar de haber quedado absuelto en virtud de la Ley de Obediencia Debida (La Prensa, 10 de noviembre de 1988). María Julia Alsogaray se ha caracterizado igualmente por defender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior (Montenegro 1988: 76-77).

7. La élite de la UCEDE. Una mirada a sus parlamentarios (1983-1989).

Una forma de aproximarse a la naturaleza política de la derecha argentina consiste en analizar algunos de los aspectos de su liderazgo político. En las páginas que siguen se hace un breve sumario de ciertas características de los líderes parlamentarios de la UCD durante el período 1983-89. El propósito de este sumario no es desarrollar un análisis general de la élite parlamentaria de la derecha, sino tan sólo mostrar algunos caracteres centrales de la representación parlamentaria de la UCEDE durante estos últimos años.

A continuación figuran los diputados ucedistas (la UCEDE careció de representación en el Senado) durante los períodos parlamentarios bianuales que van de 1983 a 1991¹.

Tabla 1. Diputados de la UCEDE en cada período bianual.

<u>1983-85</u>	<u>Distrito</u>
ALSOGARAY, Alvaro	Capital Federal
MANNY, José Juan	Capital Federal
<u>1985-87</u>	
ALSOGARAY, Alvaro	Capital Federal
ALSOGARAY, María Julia	Capital Federal
CLERICI, Federico	Buenos Aires
<u>1987-89</u>	
ALBAMONTE, Alberto	Capital Federal
ALSOGARAY, Alvaro	Capital Federal
ALSOGARAY, María Julia	Capital Federal
CLERICI, Federico	Buenos Aires
DURAÑONA Y VEDIA, Francisco de	Buenos Aires
IBARBIA, José María	Buenos Aires
SIRACUSANO, Hector	Capital Federal

<u>1989-91</u>	<u>Distrito</u>
AGUADO, Jorge	Capital Federal
ALBAMONTE, Alberto	Capital Federal
ALSOGARAY, Alvaro	Capital Federal
DALESIO DE VIOLA, Adelina	Capital Federal
DURAÑONA Y VEDIA, Francisco de	Buenos Aires
GARCIA CUEVA, Ignacio S.	Buenos Aires
HERRERA, Luis	Capital Federal
IBARBIA, José María	Buenos Aires
SIRACUSANO, Hector	Capital Federal
ZAMORA, Federico	Buenos Aires

Tabla 2. Diputados de la UCEDE entre 1983 y 1991 según año de elección y mandato.

	AÑO DE ELECCION			
	<u>1983</u>	<u>1985</u>	<u>1987</u>	<u>1989</u>
ALSOGARAY, Alvaro (*)	1983-87		1987-91	
MANNY, José Juan	1983-85			
ALSOGARAY, María Julia		1985-89		
CLERICI, Federico		1985-89		1989-93
ALBAMONTE, Alberto G.			1987-91	
DURAÑONA Y VEDIA, Fco. de			1987-91	
IBARBIA, José María			1987-91	
SIRACUSANO, Hector			1987-91	
AGUADO, Jorge				1989-93
DALESIO DE VIOLA, Adelina				1989-93
GARCIA CUEVA, Ignacio S.				1989-93
HERRERA, Luis				1989-93
ZAMORA, Federico				1989-93

(Los diputados cuyo nombre y mandato figura en negrita fueron elegidos por Capital Federal. El resto lo fue por la provincia de Buenos Aires).

Como se aprecia, la Unión de Centro Democrático sólo consiguió representación parlamentaria por los distritos de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Téngase en cuenta que estos dos distritos enviaron, en 1983, 95 de los 254 diputados con los que cuenta la Cámara de Diputados, esto es, un 37% de los integrantes de esta cámara. En especial, el

grueso de la representación parlamentaria de la UCEDE ha procedido siempre de la Capital Federal. Más concretamente, Capital Federal proporcionó a la UCEDE el 100% de su representación parlamentaria en el período 1983-85, el 67% entre 1985 y 1987, el 57% entre 1987 y 1989 y, finalmente, el 60% de 1989 a 1991.

Este hecho es aún más revelador si se tiene en cuenta que el aporte de este último distrito a la Cámara de Diputados es bastante reducido: 25 diputados de los 254 de que consta ésta última². Si se toman Capital Federal y provincia de Buenos Aires en su conjunto, Capital Federal envía un 26% de los diputados que estos dos distritos poseen en la Cámara de Diputados. La proporción que la UCEDE obtiene en Capital Federal respecto a su total en estas dos áreas es claramente superior en todos los casos, aunque haya declinado a lo largo de esta fase.

Estas características son consistentes con la incapacidad de la UCEDE para trascender el ámbito del gran Buenos Aires y, sobre todo, para alcanzar relevancia fuera de su lugar de máxima presencia, la Capital Federal. Los fundamentos de esta limitación se hacen más claros si se observan las características ocupacionales y profesionales de los parlamentarios de la UCEDE. En este caso, el análisis se limita a los diputados que este partido tuvo entre 1983 y 1989.

A continuación figuran los nombres de los diputados de la UCEDE durante este período (un total de ocho), así como una descripción de sus estudios y sus principales ocupaciones

económicas y profesionales³.

Tabla 3. Estudios y actividades de los diputados de la UCEDE entre 1983 y 1989.

	<u>Estudios Superiores</u>	<u>A c t i v i d a d</u>
<u>empresarial</u>		
ALBAMONTE, A.	Comerciales	Sí
ALSOGARAY, A.	Militares, ingeniería, economía	Sí
ALSOGARAY, M.J.	Ingeniería, economía	Sí
CLERICI, F.	Economista	Sí
DURAÑONA, F.	Abogado	Sí
IBARBIA, J.M.	Abogado/Economista	No consta
MANNY, J.J.	Administrador agrario	Sí
SIRACUSANO, H.	Químico	Sí

Como revela la tabla que figura arriba la práctica totalidad de los diputados de la UCEDE desarrollan actividades empresariales de algún tipo. En segundo lugar, todos los diputados han cursado estudios universitarios (aunque no es seguro que hayan sido concluidos en el caso de Alberto Albamonte) y, en algunos casos, han prolongado esos estudios, especialmente en materias económicas, en los Estados Unidos. Estos son los casos de María Julia Alsogaray y José María Ibarbia. Es significativo, en este sentido, que cinco de estos ocho diputados hayan desarrollado estudios de economía, y otros dos, estudios claramente conectados con esta disciplina (como Albamonte y Manny). Sin embargo, sólo José María Ibarbia y, de forma indirecta, Alvaro Alsogaray, pueden ser considerados economistas profesionales. Aquel enseña y escribe sobre economía. Es revelador, además, que las tareas profesionales sus tareas docentes se desarrollen, al menos parcialmente, en

instituciones de clara adscripción ideológica (como la fundación ESEADE)⁴.

Estas características resaltan la centralidad de la economía en la ocupaciones e intereses principales de los diputados de la UCEDE. Esa ocupación se desarrolla además sobre la base de su adscripción, más o menos clara, a las posiciones neoliberales. Estas características se vinculan obviamente a la centralidad que, en el programa político de la UCEDE, ha tenido la transformación de marco socioeconómico argentino en una dirección neoliberal.

Las ocupaciones empresariales hacen igualmente patente la adscripción de estos diputados a las clases altas del área de Buenos Aires. Téngase en cuenta además, que algunos de estos diputados se sitúan con claridad en las franjas más pudientes de dichos sectores sociales. Estos son los casos de los Alsogaray (en parte a través de sus vinculaciones con la élite política del país desde los años cincuenta, a partir de los cuales Alvaro Alsogaray ha venido desempeñando tareas de muy alta responsabilidad), de Federico Clerici, de Francisco de Durañona y Vedia y de José J. Manny.

Estas características son significativas si las comparamos a las del resto de los diputados argentinos. Por ejemplo, de los 127 diputados que entraron en esta cámara en las elecciones de 1987, el 42% tenía la abogacía como su ocupación principal, mientras que el porcentaje de empresarios industriales y agrícolas era del 5% (De Riz y Feldman 1990: 86). En el caso de la UCEDE, sólo dos de los ocho diputados han desarrollado

estudios de abogacía.

Más reveladora es la abrumadora presencia de empresarios en las filas de la UCEDE. Incluso si excluyésemos de éstos a aquellos con otras ocupaciones significativas, y tal vez predominantes (como los Alsogaray), los cinco diputados (de ocho) dedicados preferentemente a la actividad empresarial siguen situando a los líderes parlamentarios de la UCEDE como claros representantes de los sectores empresariales de las clases altas de Buenos Aires.

Esa adscripción a las clases altas del área de Buenos Aires ha ido asociada al desempeño de tareas de representación política y corporativa, a veces durante regímenes de facto. Ya se ha visto cuan extensa es la experiencia de Alvaro Alsogaray en la dirección de los asuntos económicos del país (fue Ministro durante las presidencias de Aramburu, Frondizi y Guido, y embajador en los Estados Unidos durante la de Onganía). En las líneas que siguen se explicitan algunos de los cargos desempeñados por los diputados de la UCEDE con anterioridad a la asunción de la presidencia por Carlos Menem.

Diputados que desempeñaron cargos oficiales durante la última dictadura militar:

ALSOGARAY, María Julia:

1977: Ministra Consejera de la Secretaría de Comercio ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

1981-83: Ministra Consejera Económica en la Embajada Argentina en Uruguay.

DURAÑONA Y VEDIA, Francisco:

1976-77: Consultor de la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa.

1978-81: Asesor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, siendo autor de textos de leyes agrarias.

1981: Subsecretario de Justicia en el área de asuntos legislativos.

Presidente de la Comisión de Ordenamiento Legislativo.

1983: Ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Diputados que han desempeñado tareas de representación corporativa.

CLERICI, Federico:

1976-81: Presidente de la Asociación de Dirigentes de Empresa y Comercialización.

1982-84: Presidente de la Cámara de Industria de Higiene y Tocador.

DURAÑONA Y VEDIA, Francisco:

1984-88: Director de la Federación del Azúcar y el Alcohol

1984-88: Director de la Cámara Argentina de Comercio.

MANNY, José J.:

1980-81: Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Por consiguiente, la élite parlamentaria de la UCEDE se caracteriza por la relevancia de su posición económica, política y social. Por una parte, algunos de sus integrantes han participado, a distintos niveles, en puestos de importancia política, en los casos que se recogen aquí, durante el régimen militar que duró de 1976 a 1983. Por otra, entre los parlamentarios de la UCEDE se encuentran destacados representantes del mundo empresarial en el terreno corporativo e institucional.

En su conjunto, las características que se reseñan arriba muestran bien claramente que la élite parlamentaria de la UCEDE está compuesta por integrantes de la burguesía de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. La élite parlamentaria de la UCEDE se caracteriza igualmente por el hecho de que parte de sus integrantes han desempeñado importantes tareas en la representación institucional del mundo empresarial, así como cargos económicos de alguna significación en el Estado. Estas características son a su vez indicativas de los grupos sociales preferentemente representados por la UCEDE, así como de la centralidad que las reformas económicas neoliberales han ocupado dentro del programa de la UCEDE.

7.1. La élite parlamentaria de la UCEDE en comparación con la de otros partidos de la derecha.

Gibson ha señalado (1992) que existen importantes discontinuidades entre la burguesía del área de Buenos Aires y la de las restantes áreas del país. En el marco propuesto por Gibson, esas desigualdades se han relacionado de manera característica con la diferente inserción de unos y otros actores sociales en el sistema político. De forma que, mientras que las burguesías del interior necesitaron organizar partidos políticos, la de Buenos Aires operó en el seno de privilegiados canales de representación corporativa por un lado, y de manera directa a través del Estado (dependiendo de los regímenes políticos presentes). Los datos anteriores revelan que los integrantes de la UCEDE se ajustan de forma clara a las hipótesis de Gibson respecto a la burguesía de Buenos Aires. No es posible presentar con idéntica claridad cuales son las características del conjunto de las derechas provinciales por lo que respecta a su élite política, pues se carece de datos relativos a la totalidad de sus representantes. Si que es posible presentar, a modo de ejemplo, las características principales de los representantes de dos de las fuerzas de la Alianza de Centro, el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes y el Partido Demócrata Progresista, cuyo ámbito de influencia se limita prácticamente a la provincia de Santa Fe. Si se toma a los diputados Rafael Martínez Raymonda, Enrique Muttis y Alberto Natale (todos ellos del PDP) y Nicolás Garay y Carlos

L. Tomasella (del PAL de Corrientes), se aprecia que, salvo Enrique Muttis, que es profesor de Historia en la Universidad Católica de Santa Fe, el resto de estos parlamentarios son abogados y, en algún caso (como Alberto Natale), juristas. En ninguno de estos casos constan las tareas empresariales como ocupación relevante de los parlamentarios. Es interesante, por el contrario, que todos estos parlamentarios tienen un perfil característico de políticos profesionales, que han empezado a desarrollar tareas políticas en sus respectivas provincias desde su juventud, pasando a menudo por las juventudes de sus respectivos partidos en cargos dirigentes (como en los casos de Natale, Garay y Tomasella), ocupado bancas de diputados en los parlamentos provinciales (Tomasella, Garay) o de concejal en sus respectivas ciudades (Natale, Muttis), a diferencia de lo que sucede con los diputados de la UCEDE. Los políticos provinciales se caracterizan también por haber poseído igualmente buenas relaciones con el Proceso de Reorganización Nacional (1976-83), como se muestra en la Intendencia protagonizada durante este período por Natale (en Rosario) o en el cargo de Embajador en Italia que desempeñó Martínez Raymonda. Sin embargo, sus posiciones han sido diferentes en este terreno a las de la élite de la UCEDE (menos económicas y más provinciales). Además, carecen de la experiencia de representar instituciones económicas a diferencia de algunos de los diputados de la UCEDE.

En general, estas características revelan que la naturaleza de los líderes de la UCEDE y la de los líderes de

algunos partidos provinciales es bien distinta. Los primeros tienen una inserción mucho más definida y profunda en el mundo empresarial (y en especial en su cúspide). Su perfil político está además mucho más orientado a tareas económicas, del mismo modo que lo están sus estudios y ocupación. Por contra, los diputados de los partidos regionales tienen un perfil más característico de los políticos profesionales cuya carrera está signada por su pertenencia a un partido político, más que por su inserción económica o las tareas de dirección y gestión desempeñadas en el mismo Estado.

NOTAS

1. La Cámara de Diputados, integrada por 254 diputados, se renueva por mitades bianualmente.
2. Para estos datos, ver De Riz y Feldman (1990).
3. Estos datos han sido extraídos de los currícula de cada diputado que posee la oficina del bloque parlamentario de la UCD.
4. La Escuela de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) es una institución privada orientada a la formación de profesionales en el campo de la economía y las ciencias sociales. Su orientación ideológica es de claro signo liberal clásico (o liberal-conservador). En especial, la escuela austriaca de pensamiento económico y social, cuyos principales representantes han sido Mises y Hayek, ejerce una influencia decisiva sobre dicha institución. ESEADE publica una revista semestral sobre temas económicos, políticos y sociales (Libertas) en la que se publican artículos de importantes autores liberales.

8. Neoliberalismo y periferización territorial. El conservadurismo en las elecciones parlamentarias de 1989.

En las páginas siguientes se señalan los factores causales que se considera han podido tener un impacto más relevante en el éxito de las formaciones conservadoras en la Argentina. Posteriormente, se aplican las técnicas booleanas utilizadas en la primera parte de esta investigación a las elecciones de 1989. Como en la primera parte de esta investigación, tales técnicas permiten, sobre la base de ciertas hipótesis teóricamente fundamentadas, seleccionar y descartar la influencia de ciertas variables en los resultados electorales de la derecha argentina. No aspiran, sin embargo, a determinar la relación cuantitativa que existe entre las distintas variables que se analizan aquí.

Como en la primera parte de esta tesis, se intentan mostrarr algunos de los factores que hay condicionado las diferencias en el peso electoral de la derecha en las elecciones argentinas. En este caso, debido a la diferente estructura de competencia electoral (polarizada por peronistas y radicales) los resultados que se analizan son los de las elecciones parlamentarias en vez de los de las presidenciales. En particular, se han tomado las elecciones a diputados de 1989 por ser éstos los comicios en los que la derecha ha conseguido presentarse de una forma más articulada en el ámbito nacional. También, porque sus resultados en las mismas (y en particular en las elecciones a diputados) han sido los mejores de la reciente fase democrática. Este hecho permite discernir con mayor claridad el diferente peso de la derecha en unas y otras provincias. Ciertamente, un análisis pormenorizado de los

resultados electorales durante el período en cuestión es necesario para corroborar las tesis que se generen en esta investigación. Ello no obstante, las elecciones de 1989 pueden poner a prueba algunas explicaciones de la fuerza electoral de la derecha en las distintas provincias y servir de útil contraste con los procesos electorales de principios de siglo. Tengase en cuenta además que los resultados electorales de la derecha han variado durante la década de 1980 de una forma bastante regular, y que, por tanto, todas las provincias han evolucionado de forma pareja a lo largo de estos años. Por lo demás, esta investigación no pretende explicar las magnitudes específicas del voto conservador, sino la presencia de un caudal electoral significativo con esta orientación. Por lo tanto, las diferencias cuantitativas son consideradas aquí de una forma limitada.

En este caso, se ha tomado como umbral significativo el del 20% de los votos válidos emitidos en las elecciones de 1989 a la Cámara de Diputados. Tal umbral (presente también en Gallo y Thomsen 1993) distingue aquellas provincias en las que los partidos conservadores y provinciales han obtenido un caudal de voto significativo de aquellas caracterizadas por la irrelevancia política del centro-derecha. Tales provincias son también aquellas en las que el centro-derecha obtiene representación en la Cámara de Diputados¹. La opción por las elecciones parlamentarias se debe a que en estas la polarización característica de los regímenes presidencialistas es menos rotunda. Por otra parte, a fin de establecer

comparaciones con las situaciones vividas por las provincias en la primera mitad del siglo XX, se han analizado sólo aquellas provincias que ya existían antes del aumento de su número durante la primera fase peronista.

Cuadro 1. Voto para la derecha en las elecciones a diputados de 1989 (tantos por ciento del voto en cada provincia)².

Tucumán (*)	42,6
Corrientes	41,6
Capital Federal	29,1
Salta	28,4
San Juan	22,1
Jujuy	22,1
Mendoza	21,0
Buenos Aires	12,9
Córdoba	12,4
Santa Fé	10,1
San Luis	9,2
Entre Ríos	8,2
Sant. del Estero	1,9
La Rioja	1,3
Catamarca	1,0

(*) Figuran en negrilla aquellas provincias en las que la presencia electoral de la derecha se ha considerado significativa (más del 20% de los votos emitidos).

En las partes que siguen, se explicitan algunos de los factores relacionados con el vigor electoral del centro-derecha argentino. Tales factores son, bien de carácter político-institucional, bien de carácter social y económico. Debido a las transformaciones experimentadas por la sociedad argentina, variables que antes se consideraron potencialmente importantes han sido dejadas de lado aquí. Así, la estructura de propiedad

agrícola no ha sido considerada aquí debido a la notable reducción de la población activa empleada en tareas agrícolas³. La reducción de las tasas de analfabetismo y su relativa homogeneización territorial disminuyen también la capacidad de discriminación ofrecida por esta variable (Frediani 1982: 176). Finalmente, el control de los gobiernos provinciales no puede haber tenido la importancia que se le adjudicaba en la primera fase democrática, en la que el fraude era una característica habitual en los comicios.

8.1. Factores políticos y organizativos.

8.1.1. Continuidad en la organización del centro-derecha.

Buena parte de los distritos en los que se producen resultados significativos del centro-derecha se caracterizan por la presencia continua de relevantes organizaciones conservadoras y provinciales. Estos son los casos de Jujuy, San Juan, Mendoza, Salta y Corrientes. En ellos, el éxito de las fuerzas conservadoras a partir de 1983 se ha producido sobre la base de los partidos conservadores y provinciales previos.

Otros distritos, sin embargo, han proporcionado resultados notables a la derecha a pesar de no poseer organizaciones conservadoras tradicionales. Estos son los casos de Tucumán, Salta y Capital Federal. Sin embargo, sólo en esta última la inexistencia de continuidad organizativa en la derecha ha ido unida a su continua debilidad electoral. Por contra, en Tucumán

y en Salta diversas organizaciones provinciales y derechistas han obtenido, en distintos momentos, resultados electorales significativos .

Por lo que respecta a Capital Federal, parece que en ésta la combinación entre una intensa crisis económica y el agotamiento definitivo del modelo económico desarrollista, en un contexto económico e ideológico favorable a políticas ortodoxas y neoliberales, ha jugado un papel más significativo que en el resto de los distritos electorales. Por un lado, el partido liberal-conservador dominante en Capital Federal, la UCEDE, ha articulado el discurso económico más beligerante en contra del Estado desarrollista e intervencionista. La credibilidad de su mensaje ha sido reforzada por haber sido su líder, Alvaro Alsogaray, un permanente defensor de políticas orientadas a reforzar el peso del mercado en la economía y a establecer un modelo económico abierto al exterior. Este tipo de mensaje ha calado más fácilmente en un contexto como el de la Capital Federal por varias razones. Por una parte, se trata de un distrito caracterizado por la sobrerrepresentación de las clases altas y de nuevas clases medias (diferentes de las clases medias tradicionales que Linz analizara en el caso español) (Linz 1966)⁴. Por otra parte, es Capital Federal un área en la que el voto para las opciones muy ideologizadas, sean éstas de izquierda o derecha (Gallo y Thomsen 1992), ha sido siempre muy superior al del resto del país. En ambos sentidos, la lógica política que afecta al comportamiento electoral de los votantes capitalinos es claramente distinta a

ss.) . Tras el surgimiento del peronismo la Defensa Provincial

la del resto del país, circunstancia de la que se ha beneficiado una organización de corte neoliberal como es la UCEDE.

En cuanto a Tucumán, la fortaleza de la Fuerza Republicana del general Bussi mantiene una cierta relación con la existencia de opciones conservadoras provinciales anteriores⁵. El general Bussi fue inicialmente candidato en 1983 en las listas de la Defensa Provincial Bandera Blanca (Página 12, 15 de mayo de 1989), partido del que luego se apartaría a causa de sus disensiones con su principal dirigente. La Defensa Provincial es un partido de origen conservador surgido en la década de 1920. Tal partido, que obtuvo resultados notables en la ciudad de Tucumán durante aquellos años (siendo elegido alcalde de la misma su fundador Juan Luis Nougués), se caracterizó desde su inicio por su identificación con lo que se denominó "conservadurismo popular", así como por una posición eminentemente provincialista (Balestra y Ossona 1983: 132 y ss.). Tras el surgimiento del peronismo la Defensa Provincial pasó a ocupar una posición política marginal (obteniendo, por ejemplo, el sexto lugar en las elecciones de 1973) (Balestra y Ossona 1983: 136).

A pesar del declive de la Defensa Provincial, Tucumán continuó poseyendo significativas fuerzas provinciales. En particular, durante la década de 1970 surgió una nueva fuerza política de origen radical intransigente y frondizista, un sector del radicalismo que se caracterizó por su capacidad para integrar sectores liberal-conservadores (Lattuada 1987: 104).

Tal partido (la Vanguardia Federal) obtuvo la segunda plaza en las elecciones presidenciales de 1973 (con un 14.6%), concurriendo a tales elecciones en el seno de la Alianza Popular Federalista. Dicha fuerza política se integró luego a la antes mencionada FUFEPO, de la que sólo se desligó con el retorno a la democracia en 1983 (Balestra y Ossoña 1983: 193-94).

Por consiguiente, Tucumán presenta una tradición significativa de organizaciones de centro-derecha y provincialistas. Sin embargo, tal tradición no se ha caracterizado por la continuidad organizativa.

Salta presenta ciertas características comunes con Tucumán. En ambos casos, existe una cierta tradición de organizaciones conservadoras y provinciales. En 1973 la Alianza Popular Federalista obtenía el segundo lugar en las elecciones presidenciales. En tal candidatura se agrupaban varios partidos provinciales, entre los que se encontraba la Unión Provincial (Manrique 1983: 21), continuadora de la tradición conservadora en la provincia (Balestra y Ossoña 1983: 99). La base de la fuerza liberal-conservadora en Salta durante la nueva fase democrática ha procedido, sin embargo, del Partido Renovador de Salta, formación que ha recibido la mayoría de los votos provincialistas y conservadores. Así, en las elecciones de 1989 recibió un 20% de los votos para las presidenciales y un 24,5% de los votos para diputados nacionales⁶. En tales elecciones, el Partido Renovador concurrió integrado dentro de la Confederación Federalista Independiente y apoyó, por tanto, la

candidatura de Angeloz y Guzmán a la presidencia y vicepresidencia respectivamente (Fraga 1990: 30).

En términos generales, Tucumán y Salta son dos casos en los que la estabilidad de los conflictos políticos ha ido asociada a la existencia de organizaciones que los reflejan, pero no a la continuidad histórica de tales organizaciones⁷.

Las provincias mencionadas en primer lugar (Jujuy, San Juan, Mendoza, y Corrientes), sí se caracterizan, por una notable continuidad de sus organizaciones políticas regionales. Estas organizaciones son el Movimiento Popular Jujeño (MPJ) en Jujuy, el Bloquismo en San Juan, el Partido Demócrata en Mendoza, el Partido Renovador en Salta y, finalmente, el Pacto Autonomista Liberal (PAL) en Corrientes.

De estas fuerzas, el PAL de Corrientes, el Partido Renovador en Salta y el Partido Demócrata de Mendoza tienen claros orígenes conservadores. Por contra, el Movimiento Popular Jujeño y el Bloquismo de San Juan proceden de sucesivos desgajes del tronco radical. El Movimiento Popular Jujeño surgió en la década de 1960 como una escisión de la Unión Cívica Radical Intransigente (la rama liderada por Frondizi), aglutinando sectores políticos de distintas procedencias en torno a un programa provincialista y federalista (Mansilla 1983 b: 126-27).

El MPJ fue así otra de las fuerzas originadas en las "escisiones de sectores liberal-conservadores que anteriormente integraban la UCRI frondizista" (Lattuada 1987: 105). Téngase en cuenta que el frondizismo fue capaz de incorporar políticos

de orientación conservadora en el propio gobierno, entre los cuales figuraba el mismo Alvaro Alsogaray.

Como se recogió arriba, el MPJ fue una de las fuerzas integrantes de las alianzas federalistas que se conformaron durante la década de 1970 y que mantuvieron estrechas relaciones con el régimen militar iniciado en 1976.

En cuanto al Bloquismo de San Juan, éste surgió en 1920 de resultas de una escisión de la Unión Cívica Radical. A diferencia del resto de los partidos considerados aquí, el Bloquismo se caracterizó desde su inicio por sus inclinaciones populistas y transformadoras, hasta el punto de que se lo ha llegado a considerar como una suerte de antecedente del peronismo. Este solo hecho aconseja precaución a la hora de integrar al Bloquismo dentro de las fuerzas de la derecha. Sin embargo, su implicación en los conflictos políticos nacionales lo han situado a menudo al lado de las organizaciones conservadoras. Así, el Bloquismo apoyó a la coalición antiyrigoyenista y conservadora en 1928. Más recientemente, el Bloquismo lideró la Alianza Republicana Federal que, alentada por el general Lanusse, entonces Presidente de la República, concurrió a las elecciones de 1973 (Balestra y Ossona 1983: 161). Posteriormente, el Bloque se integró en la antes mencionada Fuerza Federalista Popular y, a partir de 1976, apoyó al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Es interesante recordar, a este respecto, que el máximo dirigente del Bloquismo fue nombrado embajador en la URSS en 1978, y posteriormente, gobernador de San Juan durante la presidencia

del general Galtieri.

En cuanto al Partido Demócrata de Mendoza, éste representa como pocos la continuidad con las viejas fuerzas conservadoras. Participó en los principales intentos de rearticulación conservadora nacional durante los años sesenta y setenta, y se relacionó fluidamente con los sucesivos regímenes militares (Mansilla 1983a: 154 y ss.). En 1989 representaba, con el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, la fuerza política más vinculada al viejo conservadurismo y, a la vez, más estable organizativa y electoralmente. Así, en las elecciones presidenciales de marzo de 1973 obtuvo un 22% del voto emitido en Mendoza, apoyando a la Alianza Republicana Federal, alentada por Lanusse. Posteriormente, en las elecciones de 1989 recuperó, dentro de la Alianza de Centro, su anterior caudal electoral al recibir un 20.5% de los votos en las elecciones a diputados en Mendoza (Gallo y Thomsen 1992: 145).

El Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, compuesto por el Partido Autonomista y el Partido Liberal de Corrientes, se caracteriza, entre el resto de las fuerzas provinciales, por su larga historia y su continuidad electoral y organizativa. El Partido Autonomista es heredero de la sección correntina del antiguo Partido Autonomista Nacional que marcó la historia argentina a finales del siglo pasado. Por su parte, el Partido Liberal se remonta al periodo de predominio liberal y unitario que se desarrolló en la Argentina a partir de mediados del siglo XIX. A pesar de la dureza de los conflictos que enfrentaron a ambos partidos durante el siglo pasado, tanto

liberales como autonomistas compartían una naturaleza política conservadora y vinculaciones con las clases altas correntinas (Balestra y Ossoña 1983: 75). Tales fricciones entre autonomistas y liberales fueron suavizadas por la aparición de un adversario común: el radicalismo (Balestra y Ossoña 1983: 81). Esa situación promovió la constitución de candidaturas conjuntas de autonomistas y liberales a partir de la primera fase democrática en la Argentina (1916-1930). Tal alianza ha continuado en vigor desde los sesenta a la actualidad con escasas oscilaciones. Por lo tanto, el Pacto Autonomista Liberal constituye, con el Partido Demócrata de Mendoza, la entidad conservadora de mayor solera y continuidad en la Argentina. Es revelador también que, en las alianzas alternativas promovidas en el campo del centro-derecha en los últimos 20 años, el PDM y el PAL se hayan unido en la misma propuesta. Tal fue el caso de la Alianza Republicana Federal formada en 1973 con el apoyo del entonces presidente Lanusse y, durante la década de 1980, de la Alianza de Centro liderada por la UCEDE. Este hecho indica que ambas formaciones se encuentran, dentro de las tensiones que han opuesto a las distintas vertientes del centro-derecha, en posiciones ideológicas y políticas muy semejantes, más cerca del liberalismo-conservador tradicional que del denominado conservadurismo popular.

A diferencia de lo que sucede en San Juan, Corrientes, Mendoza y Jujuy, en los distritos de Tucumán, Salta y Capital Federal la existencia de una cierta tradición de voto

conservador desde de la década de 1970 no ha ido asociada a la presencia de partidos políticos estables⁸.

8.1.2.Fuerza conservadora durante la primera fase democrática (1916-1930) y en la emergencia del peronismo.

Ciertas zonas en las que la derecha se mostró fuerte durante la primera fase democrática y en las elecciones de 1946 no se caracterizaron posteriormente por una tradición de partidos conservadores. Aun así, es posible arguir que tradiciones de conflicto precedentes, en las que actores relevantes de las provincias se han posicionado al lado del conservadurismo, pueden haber facilitado el éxito de formaciones de esta orientación. De ser esto así, se podría hablar de la estabilización de clivajes políticos a partir de las características de las oposiciones políticas en las que los conservadores argentinos se situarían⁹. En el cuadro siguiente se muestran las provincias en las que los conservadores obtuvieron resultados significativos en las elecciones de 1916, 1928 y 1946¹⁰.

Si comparamos las elecciones de 1989 con las de 1928 y 1946, observamos algunos cambios notables. En primer lugar, tres de las ocho provincias en las que el conservadurismo tuvo una presencia relevante tanto en 1928 como 1946 (Catamarca, Entre Ríos y San Luis) no muestran importantes resultados para la derecha en las elecciones de 1989. Por otra parte, dos

distritos en los que el conservadurismo obtuvo históricamente pobres resultados (Tucumán y Capital Federal) han proporcionado un fuerte apoyo a la derecha en las elecciones de 1989.

Cuadro 2. Fuerza conservadora en procesos electorales.

	<u>1916</u>	<u>1928</u>	<u>1946(*)</u>	<u>1989</u>
TUCUMAN	0	0	0	1
CORRIENTES	1	1	1	1
CAP.FEDERAL	0	0	0	1
JUJUY	1	1	1	1
MENDOZA	0	1	1	1
SALTA	1	1	1	1
SAN JUAN	1	1	1	1
BUENOS AIRES	1	0	0	0
CATAMARCA	1	1	1	0
CORDOBA	0	0	1	0
ENTRE RIOS	0	1	1	0
LA RIOJA	1	1	0	0
SAN LUIS	1	1	1	0
SANTA FE	0	0	1	0
S.DEL ESTERO	0	1	0	0

(*) Para las elecciones de 1946 se han considerado como significativos los resultados del Partido Demócrata que superaron el 15% de los votos emitidos. En el resto de los casos se retoman los umbrales utilizados en los capítulos de esta tesis referidos a cada uno de estos procesos electorales. Como en los análisis precedentes, 1 indica presencia comparativamente significativa de la derecha y 0 ausencia de la misma.

La ausencia de relación que se señala arriba existe también si se toma en cuenta que en dos (San Luis y Catamarca) de las seis provincias en las que los conservadores obtuvieron muy buenos resultados en 1916, 1928 y 1946 (San Juan, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Salta y San Luis), los resultados de la derecha en 1989 han sido muy poco relevantes.

Estas cifras indican que no existe una relación directa entre la fuerza del centro derecha durante la primera mitad de este siglo y en las elecciones de 1989. Dos factores pueden dar cuenta de esta falta de relación. Por un lado, transformaciones en las características económicas y sociales de las provincias en cuestión. Por otro, el hecho de que el peronismo se mostró capaz, en determinadas provincias, de cooptar a buena parte de las élites conservadoras precedentes (Tcach 1990).

Es posible que, en aquellas provincias en las que ese proceso tuvo lugar de una forma más acabada, las élites conservadoras pasasen a actuar dentro del espacio peronista en vez de a través de organizaciones políticas autónomas. Lamentablemente, las investigaciones sobre la relación del peronismo con el viejo conservadurismo tienen aún un carácter fragmentario. Por tanto, no es posible determinar que papel jugaron las mismas en la continuidad de organizaciones políticas conservadoras.

Sí es posible, sin embargo, mostrar cuales son las características (en términos socioeconómicos y organizativos) de aquellas provincias en las que la derecha es fuerte. Este análisis mostrará al menos si existen factores alternativos que expliquen los resultados del centro derecha en la década de 1980.

Por los motivos que se han señalado más arriba, no se introducido directamente la variable referida a la pujanza de los conservadores en la primera mitad de siglo. Por contra, se ha optado por introducir la variable referida a la continuidad

de las organizaciones políticas provinciales, una cuestión diferente de la que se refiere al peso electoral de tal orientación en su conjunto. Esta inclusión de los partidos se relaciona con el hecho de que, independientemente del peso electoral de la derecha, la continuidad de partidos (o "etiquetas") específicos ha tenido que favorecer el mantenimiento de identidades conservadoras y provinciales en las provincias. En consonancia con lo que se dijo en el apartado sobre la continuidad organizativa del centro derecha, se ha considerado que las provincias en las que existe clara continuidad organizativa en el caso del centro-derecha son Corrientes, Mendoza, Jujuy y San Juan. El resto de los distritos tiene cierta tradición de voto de derecha, pero la misma no ha sido canalizada por partidos estables.

8.2. Condición territorialmente periférica de las provincias.

El análisis de los resultados electorales de la primera fase democrática mostró que las fuerzas conservadoras fueron más vigorosas en las áreas económicamente periféricas. Estas provincias eran periféricas no sólo económica sino también territorialmente. Por contra, la mayor productividad económica del país se daba en el área integrada por Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, provincias caracterizadas por su contigüidad espacial. En el análisis de las elecciones de 1928 se argumentó que ambos aspectos (atraso económico y

carácter periférico) pudieron afectar a la vez la fuerza de los conservadores en las distintas provincias. Los partidos conservadores habían estado ligados a un sistema que proporcionaba amplia autonomía política a las élites provinciales y que permitía a éstas incidir en la política nacional a través de mecanismos consensuales que sobrerrepresentaban precisamente a las áreas más atrasadas. Las características del radicalismo (su naturaleza nacional y los mecanismos mayoritarios que impuso en el sistema político) permitieron a las élites conservadoras obtener caudales electorales superiores en aquellas áreas que, además de poseer ciertas características sociales, podían sentirse amenazadas por el partido de Yrigoyen.

A lo largo del siglo el conservadurismo argentino ha experimentado un proceso de creciente provincialización, de tal forma que los contenidos localistas de su propuesta política se han hecho cada vez más dominantes. Por este motivo, se puede esperar que esas características que permiten a las formaciones políticas desarrollar demandas periféricas exitosas han podido jugar con mayor fuerza relativa en décadas recientes. En especial, el carácter territorialmente periférico ha podido convertirse en condición necesaria (aunque no suficiente) de la fuerza de las opciones conservadoras provinciales. En este sentido, el atraso económico no habría sido ya la fuerza decisiva en la explicación del voto conservador sino que, más bien, la distancia respecto al centro del país (una distancia que no es sólo territorial sino también cultural), articulada

en nuevas formas con el desarrollo social y económico, habría podido facilitar el apoyo social a las opciones conservadoras.

Para comprobar la validez de estos argumentos, en el análisis que sigue se ha dividido a las provincias en centrales y periféricas. Las primeras constituyen un área caracterizada por su cercanía al Gran Buenos Aires, su contigüidad espacial y su integración tradicional en la economía agroexportadora. Más concretamente, esta zona estaría integrada por Capital Federal, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Las provincias periféricas que ya existían en la primera fase democrática argentina son Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis. Siete de estas diez provincias lindan con países vecinos. Las tres provincias que carecen de frontera son Santiago del Estero, San Luis y Tucumán.

Para los propósitos de este estudio, es importante analizar la forma en que las dimensiones territoriales del conflicto político que se presentaron a principios de siglo se han manifestado en la Argentina contemporánea. Es importante comprobar de que forma el territorio se ha articulado con la economía y con las tradiciones políticas en la configuración del mapa electoral de la derecha argentina, si ha habido transformaciones radicales del marco político a este respecto o si se pueden apreciar fenómenos relativos de fijación y estabilización de clivajes territoriales. Las formas en que ha podido evolucionar esta articulación son esbozadas en el apartado siguiente.

8.3. Factores socioeconómicos.

8.3.1. Desarrollo económico de las provincias.

En los análisis desarrollados a propósito de la fuerza de las opciones conservadoras en las elecciones de 1916 y 1928 se observó que el grado relativo de desarrollo económico era decisivo en la explicación de la fuerza de tales opciones políticas. Este hecho podría hacer suponer que en la década de 1980 tal factor estructural ha podido seguir jugando un papel relevante a este respecto, de tal forma que las regiones más atrasadas habrían proporcionado la principal fuente de apoyo a la derecha provincial. En especial, el atraso económico va vinculado a la presencia de relaciones de mayor dependencia política y social de parte de las clases bajas respecto a las élites económicas. Esta situación de dependencia política y social es fuertemente mitigada, como una larga veta de literatura sociológica ha subrayado (especialmente a partir de Marx), por el desarrollo y extensión de formas económicas puramente capitalistas. En sociedades en las que estas últimas formas se han convertido en dominantes, la desigualdad de los recursos sociales y políticos está mucho más dispersa que en las sociedades tradicionales (Dahl 1971: 86-87), de tal forma que la subordinación económica no es necesariamente acompañada por la subordinación política¹¹.

Así, en el análisis de los resultados electorales de 1916

y 1928 se consideraba que, en aquel caso, el peso de la variable atraso económico iba no sólo ligado a la facilidad del control político por parte de las élites políticas y sociales, a partir del análisis de la combinación del efecto de la variable atraso con variables de otro tipo (como la orientación de los poderosos gobiernos provinciales y el tipo de estructura de propiedad agraria) sino, asimismo, a la existencia de tensiones sociopolíticas entre el centro y la periferia.

En este caso, si se diese una vinculación directa entre atraso y voto conservador sería legítimo deducir, inicialmente, que estos dos factores de divisiones políticas han operado en modo semejante durante la década de 1980. En otro caso, sería posible argumentar que nuevos factores (como las tradiciones organizativas) han podido desempeñar un papel más relevante a este respecto.

Otra posibilidad sería que en determinados casos el atraso económico no se mostrase tan relevante como a principios de siglo al tiempo que el peso de la derecha en regiones antes atrasadas siguiese siendo especialmente importante. En ese caso sería posible defender la hipótesis de que el atraso que el atraso de tales regiones en épocas precedentes moldeó ciertos aspectos de su estructura política y partidista y, en ese sentido, continuaría teniendo importancia en la medida en que habría generado en el pasado tales características. Este peso sería concebible por tanto en la forma de una relación de causalidad entre atraso a principios de siglo y fuerza conservadora actual (ciertamente probabilística) mediada por

otras variables intervinientes. Esto es, si el atraso hubiese dado lugar a fenómenos sociopolíticos que han podido tener una lógica de desarrollo histórico propia. Ciertos factores políticos (como la cristalización y continuidad de las opciones políticas conservadoras) podrían haber vinculado atraso precedente y fuerza actual de la derecha. Por consiguiente, esta hipótesis sería reforzada si las provincias que hubiesen tenido un importante caudal de voto conservador en la primera mitad del siglo hubiesen conservado una significativa presencia electoral de tal orientación independientemente de su evolución económica. Sin embargo, como se avanzó en el apartado anterior, no ha sido tal el caso, existiendo provincias en las que los conservadores fueron fuertes a principios de siglo y de las que prácticamente han desaparecido del mapa electoral y otras en las que su nivel de fuerza ha mejorado en términos relativos en el panorama nacional.

Por otra parte, el hecho de que provincias claramente atrasadas, como Catamarca y La Rioja, carezcan de partidos de centro derecha fuertes indica que esta sola variable no explica la presencia de tales formaciones. Este hecho muestra que son otras las relaciones que existen entre nivel económico y comportamiento político y electoral. En particular, si se sacan todas las consecuencias de las hipótesis que se desbrozaron en la primera parte (referidas a la importancia de los conflictos entre el centro y la periferia en el comportamiento electoral argentino) se puede aventurar la idea de que es más bien la combinación entre el carácter geográficamente periférico de las

provincias con ciertos niveles de desarrollo lo que facilita las posibilidades de las formaciones conservadoras y provinciales.

La forma cambiante en que se han articulado desarrollo económico, clivajes políticos y comportamiento electoral se relaciona con el modo en que se ensamblaron los conflictos que se configuraron a principios de siglo (radicales frente a conservadores primero y yrigoyenistas frente a antiyrigoyenistas después) y el surgimiento del reto peronista. A inicios de siglo, el conservadurismo encontró sus puntos fuertes en las provincias argentinas más atrasadas, al tiempo que se mostró incapaz de decantarse en una estructura partidista nacional y estable. Posteriormente, el peronismo creó una tensión principal en la que la posición del conservadurismo era menos clara que a principios de siglo. Ello se expresó en el hecho de que parte de las élites conservadoras (sin duda las más proclives al nacionalismo autoritario) se integraron en el peronismo, mientras que aquellos sectores centralmente preocupados por los potenciales riesgos que la movilización peronista de las masas obreras (en las zonas urbanas) traía consigo, se integraron en las filas del antiperonismo. Debido a ello, el conservadurismo experimentó un proceso combinado de fragmentación y debilitamiento. En este contexto, la tendencia natural consistió en el fortalecimiento de la dimensión periférica del conservadurismo. Con la palabra fortalecimiento no me refiero tanto al hecho de que el conservadurismo se encastilló en una cierta periferia (cosa que

sucedió en buena medida), sino al peso creciente de los aspectos más provincialistas en el mismo. Un peso que se expresó igualmente en la provincialización definitiva de sus partidos políticos, lejos definitivamente del Partido Autonomista Nacional de finales del siglo pasado y del Partido Demócrata Nacional de la década de 1930.

El hecho de que los factores territoriales hayan adquirido un peso creciente en la configuración del mapa conservador argentino hace que las relaciones entre desarrollo económico y conflictos políticos sean distintas de las esperadas a comienzos de siglo. A partir de un cierto momento, los factores que facilitan la existencia de movimientos periféricos son tan importantes o más que los que se asocian al éxito del conservadurismo a secas. Y en este sentido, ya no es posible esperar que las áreas más atrasadas se vuelquen a favor de los conservadurismos periféricos. Pues, como una extensa literatura ha mostrado (especialmente Gourevitch 1987: 199 y ss.), la existencia de movimientos en las periferias territoriales no se da comúnmente en las zonas más atrasadas de los marcos nacionales, sino más bien al contrario. En el caso argentino, el desarrollo desproporcionadamente superior del área central, compuesta por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, elimina la posibilidad de encontrar periferias políticas más desarrolladas que el centro. Sin embargo, es bien posible que en estas nuevas condiciones un nivel excesivo de atraso inhiba el desarrollo de agrupaciones conservadoras.

Cuadro 3. Producto bruto por habitante (expresado en pesos corrientes) (Frediani 1982: 164).

Capital Federal	16.895,5
Mendoza	860,2
Buenos Aires	834,4
Santa Fe	774,9
Córdoba	706,7
Tucumán	540,4
Entre Ríos	512,5
San Juan	502,1
Salta	502,1
Corrientes	492,7
San Luis	490,6
Jujuy	443,1
La Rioja	300,9
Catamarca	261,1
S.Estero	254,3

(*) En negrita figuran aquellas provincias en las que el porcentaje de votos para los partidos provinciales y conservadores sobrepasó, en las elecciones al Congreso de 1989, el 20%.

En consistencia con estas reflexiones (y con la orientación de provincias como La Rioja y Catamarca), en el esquema booleano que se presentará luego se han considerado especiales aquellas provincias en las que el nivel de desarrollo socioeconómico no alcanza un determinado nivel, a fin de calibrar como es el atraso de ciertas áreas periféricas incide en la fuerza conservadora. A partir de los datos accesibles, se han considerado muy atrasadas aquellas provincias en las que el producto por habitante era inferior al de los 400 pesos por habitante) (Frediani 1982: 164). Téngase en cuenta que sólo tres provincias (Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se sitúan claramente por debajo de tal

umbral). El resto de las regiones periféricas lo sobrepasan con nitidez.

8.3.2. Nivel cultural de las poblaciones provinciales.

Es probable que la movilización electoral de las opciones de la derecha se vea afectada por determinadas características culturales de la población. En el análisis de las elecciones de principios de siglo se analizó el presumible impacto de las tasas de analfabetismo sobre las posibilidades electorales de la población, un análisis que apuntó que esta última variable no tenía una incidencia significativa sobre el voto conservador. Debido al desarrollo educativo y cultural general que media entre aquella época y los años ochenta, en este caso se ha prestado atención a factores que pueden reflejar la posibilidad, por parte de los partidos provinciales, bien de controlar, bien de movilizar a los electores. La posibilidad de controlar a los electores vendría dada más bien por el bajo nivel cultural de la población, mientras que la posibilidad de movilizarlos electoralmente en defensa de las reivindicaciones provincialistas sería reforzada por un alto nivel cultural. En la primera visión, los partidos conservadores y provinciales se beneficiarían del bajo nivel cultural de la población. En la segunda, por el contrario, esta última variable afectaría positivamente (si el modelo que se ha ido esbozando es correcto, en aquellas territorialmente periféricas) a los resultados electorales de la derecha.

pública del programa político.

En esa medida, pareciera que la estrategia elegida hubiese sido la de la flexibilidad ideológica y la rigidez política. No obstante, a pesar de las adaptaciones, no parece que las opciones vecinas a la de Alsogaray se viesan, hasta la última fase, impregnadas por las propuestas y la ideología de los partidos de aquel (ver Gallo 1986: 31). Además, el modelo o referente político que Alsogaray siempre ha tenido en cuenta ha partido de la base de intervenir en la definición de las líneas maestras de la economía argentina a través de terceros. Se puede, en primer lugar, citar la continua referencia, en sus artículos y trabajos, a la tareas que Roueff y Erhardt desempeñaron respectivamente en Francia y la República Federal de Alemania. Esa proyecto, ligado a la percepción de la debilidad del arraigo de la ideología liberal en la Argentina desde los años treinta, se traduce en la práctica y la teoría de la participación en gobiernos de distinta coloración ideológica. Aparte de los casos citados (Aramburu, Frondizi, Guido, Menem), se pueden mencionar otros ejemplos de interés. En primer término, los ofrecimientos de planes económicos a gobiernos de facto, como el del general Viola, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional o el del general Onganía¹⁹.

Esa proclividad arbitrista²⁰ se hará más patente cuando Alsogaray sugiera, en 1973, la posibilidad (no la probabilidad) de que se iniciase el tránsito hacia una economía de mercado (en formas "alejadas absolutamente del viejo capitalismo y liberalismo") bajo un régimen peronista (La Nación, 23 de mayo

Cuadro 4. Circulación de periódicos cada mil habitantes

(Fedriani 1982: 178).

Capital Federal(*)	99
Mendoza	70
Santa Fé	60
Buenos Aires	52
Córdoba	45
Tucumán	44
S.Estero	38
Salta	36
San Juan	33
San Luis	33
Entre Ríos	32
Corrientes	14
Jujuy	11
Catamarca	7
La Rioja	4

(*) En negrita figuran las provincias en las que los partidos conservadores superan el 20% de los votos.

A este respecto, se han considerado muy atrasadas a las provincias con un nivel de circulación de periódicos inferior a a la media de circulación de periódicos en las provincias periféricas (25,7 por cada mil habitantes). Por consiguiente, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Corrientes son provincias de significativo atraso cultural no llegando ninguna de ellas a una tasa de circulación de periódicos de 15 por cada mil habitantes. Téngase en cuenta que Catamarca y La Rioja son las dos provincias con un menor nivel de circulación de periódicos (7 y 4 por cada mil habitantes respectivamente). Por otro lado, el resto de las provincias supera los 30 ejemplares por cada mil habitantes.

8.4. Políticas públicas durante los gobiernos militares.

Finalmente, se podría argumentar que el peso de la derecha en las distintas provincias se ha relacionado con las políticas desarrolladas por los gobiernos militares hacia las mismas. Como se sabe, las tales políticas fueron diseñadas e implementadas en colaboración con las élites de algunos partidos de la derecha provincial. Si esta visión fuese acertada, los favores otorgados por los militares a las élites conservadoras provinciales habrían beneficiado notablemente las posibilidades políticas de estas últimas. Hay que recordar que los partidos provinciales colaboraron directamente con el régimen militar. Además, en aquellas provincias en las que el éxito de la derecha no ha ido asociado a la continuidad directa de los partidos provinciales, tales éxitos han sido liderados en buena medida por exgobernadores de la época de la dictadura, como es el caso de Bussi en Tucumán y Ulloa en Salta.

En este terreno, hay que tener en cuenta que el denominado Proceso de Reorganización Nacional, iniciado en 1976, no benefició financieramente al conjunto de las provincias. El régimen militar incrementó en 1980 los fondos de la llamada "preparticipación" (porción del presupuesto que se destinaba a determinados organismos estatales previamente al reparto de aquel entre el Estado central y los gobiernos provinciales). De tal forma que estos últimos vieron casi reducido a la mitad el tanto por ciento de los recursos presupuestarios obtenidos del Estado.

Cuadro 5. Coparticipación federal entre 1976 y 1984 (en tantos por ciento). (Datos extraídos de Peñalva et al. 1989: 179).

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>
Gob.prov.	50,5	50,5	50,5	50,5	45	25,8	27,5	21,8
Gob.nac.	46,5	46,5	46,5	46,5	41,7	26,6	24,6	19,4
Prev. social					7,7	38,3	35,5	43,7
FONAVI (*)					2,6	6,3	9,4	12,1
FDR	3	3	3	3	3	3	3	3

(*) FONAVI: Fondo Nacional de la Vivienda. .

De forma que, en términos generales, el régimen militar no favoreció a las élites conservadoras a través del aumento de los recursos recibidos por los gobiernos provinciales. Antes bien, la posición económica de los mismos se hizo mucho más precaria como consecuencia de la gestión militar.

Esta orientación de la distribución territorial del gasto por el régimen militar no excluye la posibilidad de que este último favoreciese claramente a determinadas provincias en la orientación de los recursos económicos. A su vez, se podría aventurar que en las provincias receptoras de tal tratamiento especial las élites conservadoras habrían visto sensiblemente mejoradas sus posibilidades electorales.

En especial, durante el Proceso se mantuvo el status especial de las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, así como del Territorio de Tierra de Fuego (Peñalva et al. 1989: 196 y 199)¹². Como consecuencia de tales regímenes especiales, el Estado orientó hacia estas áreas inversiones especiales. Asimismo, el Gobierno federal otorgó subsidios y exenciones a las industrias que se establecían en

tales provincias.

Así pues, tampoco parece existir relación entre la orientación de recursos a determinadas provincias y el apoyo alcanzado por las opciones de la derecha. Pues, dos de las tres provincias beneficiadas por tal sistema (La Rioja y Catamarca) han carecido de fuerzas conservadoras significativas en las elecciones de 1989. Sólo en San Juan se combinan fuerza del centro-derecha y tratamiento preferencial por los gobiernos militares. Sin embargo, la fuerza del Partido Bloquista es previa a la del gobierno del Proceso. Además, la mayoría de las áreas en las que la derecha fue fuerte carecieron de un tratamiento especial de tal tipo. La escasa relación entre tal tratamiento especial y la presencia de la derecha puede apreciarse en la siguiente tabla.

Cuadro 6. Presencia electoral de la derecha en 1989 y régimen económico durante el Proceso en las provincias periféricas.

Régimen ec. en el Proceso	Presencia de la derecha	
	<u>Relevante</u>	<u>Irrelevante</u>
Preferente	San Juan	La Rioja San Luis Catamarca
Normal	Mendoza Tucumán Salta Jujuy Corrientes	S.del Estero

Aparentemente, pues, parecería existir justamente la relación contraria, habiendo inhibido el tratamiento económico especial las posibilidades de la derecha en estas áreas. No existe ninguna base que haga pensar que una relación de tal tipo puede existir. Más bien, se está ante una vinculación indirecta entre las dos variables que figuran en esta tabla. Pues, como se sugirió en apartados anteriores, lo que bien puede suceder es que el desarrollo socioeconómico favorezca la existencia de partidos conservadores y de centro derecha en las provincias periféricas. Al mismo tiempo, sería la debilidad del desarrollo de ciertas provincias lo que les permitió obtener recursos preferentes de origen federal. Desde esta perspectiva, el desarrollo socioeconómico habría afectado a la vez a las posibilidades de la derecha provincial y a las políticas regionales de los militares, no existiendo vinculación directa entre estas dos últimas variables. Por estos motivos, el esquema de la verdad que se presenta más abajo no toma en cuenta la variable de la que trata este apartado.

8.5.El análisis booleano de la fuerza electoral de la derecha en las elecciones de 1989.

Esquema de verdad de la fuerza de las opciones conservadoras en las elecciones a diputados de 1989¹³.

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>
TUCUMAN	0	0	0	0	1	1
CORRIENTES	1	0	0	1	1	1
CAPITAL FEDERAL	0	1	0	0	0	1
SALTA	0	0	0	0	1	1
SAN JUAN	1	0	0	0	1	1
JUJUY	1	0	0	1	1	1
MENDOZA	1	0	0	0	1	1
BUENOS AIRES	0	0	0	0	0	0
CORDOBA	0	0	0	0	0	0
SANTA FE	1	0	0	0	0	0
SAN LUIS	0	0	0	0	1	0
ENTRE RIOS	0	0	0	0	0	0
SANTIAGO DEL E.	0	0	1	0	1	0
LA RIOJA	0	0	1	1	1	0
CATAMARCA	0	0	1	1	1	0

- A Presencia electoral significativa y continuada de las organizaciones del centro derecha.
- B Sobrerrepresentación de sectores sociales altos (Rubio 1982: 139).
- C Atraso económico.
- D Subdesarrollo cultural (expresado a través de la circulación de periódicos) (Fedriani 1982: 178).
- E Posición geográficamente periférica de las provincias.
- G Fuerza del centro-derecha (más del 20% de los votos en ~~h~~ elecciones a diputados en 1989).

Las expresiones asociadas a una presencia significativa de la derecha son las siguientes:

aBcde	Capital Federal
AbcdE	Mendoza, San Juan
AbcDE	Corrientes, Jujuy
abcdE	Tucumán, Salta

Estas expresiones se pueden combinar según el método ya expresado:

AbcdE con AbcDE da AbcE

AbcdE con abcdE da bcdE

Por lo tanto, aBcde+AbcE+bcdE engloba todos los casos en los que se producen resultados significativos de la derecha. La primera expresión de esta combinación se refiere exclusivamente a la Capital Federal. En ella, como se ha sugerido anteriormente, el peso comparativamente superior de las clases altas y medias altas permite explicar, en el contexto del desplazamiento de estos grupos hacia las posiciones de corte neoliberal (defendidas especialmente por la UCEDE), la importante presencia de la derecha.

Las otras expresiones cubren al resto de los casos. La primera se refiere a aquellos distritos de carácter periférico, en los que hay partidos provinciales estables, en los que no se da la sobrerrepresentación de las capas sociales altas y donde se presenta un notable atraso económico. La tercera expresión da cuenta de aquellas provincias de carácter periférico, no extremadamente atrasadas, en las que las clases altas no están sobrerrepresentadas y en las que no se produce un extremo

subdesarrollo cultural.

En primer lugar, llama la atención el hecho de que cinco de los seis casos en los que se dan relevantes resultados conservadores son provincias de carácter periférico. Es igualmente significativo el que estas cinco provincias no pertenezcan al grupo de provincias periféricas más atrasadas. En tercer lugar, carece de importancia la variable referida al peso de las clases altas. De hecho, esta última variable simplemente da cuenta del caso relativamente anómalo de la Capital Federal. Finalmente, es interesante que en la segunda combinación nos hallemos ante provincias con organizaciones provinciales estables y que en la tercera tales provincias posean un nivel cultural (al menos en lo que respecta al indicador que se toma en cuenta aquí) alto. Las respectivas ausencias y presencias de estas dos variables bien pueden derivarse de algún tipo de relación entre las mismas. Esto es, en los casos en los que existen organizaciones de centro-derecha estables, los factores que facilitan la movilización del electorado son menos importantes que allí donde tales tradiciones organizativas no son tan fuertes.

Es revelador revisar también los casos en los que no se presentan resultados relevantes de la derecha a fin de explicar los fracasos de ésta. Abajo se presentan las expresiones que acompañan a estos últimos casos.

abcde (Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos)

abCDE (Catamarca y La Rioja)

abCdE (S.Estero)

Abcde (Santa Fe)

abcdE (San Luis)

A su vez, estas expresiones se pueden simplificar de las siguientes maneras.

abcde con Abcde da bcde

abcde con abcdE da abcd

abCdE con abcdE da abdE

abCDE con abCdE da abCE

De tal forma que $bcde+abcd+abdE+abCE$ da cuenta de todos los casos en los que el centro-derecha no consigue resultados relevantes en las elecciones de 1989. Esto es, la derecha no obtuvo resultados relevantes en aquellas circunscripciones en las que las clases altas no estaban sobrerrepresentadas en los casos de 1) las provincias no periféricas caracterizadas bien por la inexistencia de atraso económico y cultural (bcde), bien por la inexistencia de atraso cultural y de tradiciones partidistas estables (abcd) y 2) en las provincias periféricas en las que se conjugaban bien inexistencia de tradiciones partidistas estables e inexistencia de atraso cultural (abdE) o bien inexistencia de tradiciones partidistas estables y atraso económico (abCE).

Con excepción de San Luis, las expresiones que dan cuenta de la irrelevancia de los resultados de la derecha son consistentes con las que explican su presencia significativa. Dejando de lado el caso de la Capital Federal, todos los casos en los que la derecha tiene algún éxito son provincias territorialmente periféricas. Ahora bien, la condición

periférica es condición necesaria, pero no condición suficiente de la relevancia de la derecha. En primer lugar, un nivel mínimo de desarrollo económico es preciso para que la derecha obtenga buenos resultados electorales. De forma que en casos como Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca la derecha no tiene representación notable a pesar de ser estas provincias claramente periféricas. Es más, en estas tres provincias los porcentajes de la derecha no sólo no llegan al 20% de los votos, sino que ni siquiera se acercan al 5% de los votos, situándose estas tres provincias entre las cuatro provincias con menor porcentaje de voto para la derecha (Gallo y Thomsen 1992: 144). Es importante tener en cuenta que en estas tres provincias el peronismo superó el 50% de los votos emitidos. Concretamente, el justicialismo obtuvo el 53,4% de los votos en Catamarca, el 66,3% en La Rioja y el 65,6% en Santiago del Estero¹⁴.

Algunos de los factores que facilitan el vigor de las opciones conservadoras provinciales mantienen relación con variables socioeconómicas. En las líneas que siguen se sugieren algunas variables de origen socioeconómico con previsible impacto en el tema que se estudia aquí.

En términos del desarrollo socioeconómico de las provincias, el extremado atraso de ciertas áreas limita la extensión de determinados grupos sociales (como las nuevas clases medias). Este hecho no se relaciona sólo con los niveles de renta de tales provincias, sino también con los tipos de ocupación predominante y, como ha sido apuntado anteriormente,

con el desarrollo cultural de la población. Además, el atraso se relaciona con menores posibilidades para la movilización del electorado por opciones políticas menores. Las bajas tasas de lectura de periódicos son indicativas del acceso limitado en ciertas provincias a la información política y, consiguientemente, de la mayor dificultad de construir alternativas políticas autóctonas sobre una base social de este tipo.

No es posible dar una idea precisa de los contornos de cada grupo social en las provincias argentinas. Ello requeriría conocer cual es la posición de los individuos que las habitan en una multitud de planos, y no tan sólo en términos de sus ámbitos de ocupación, tipos de ingreso y nivel salarial¹⁵. Sí que es posible, a partir de la información disponible, avanzar algunas hipótesis a propósito de las características sociales de las provincias argentinas consistentes con las líneas argumentales que se desarrollan aquí. A continuación figuran varios cuadros que reflejan las características ocupacionales de las provincias argentinas.

Cuadro 7. Ocupación de la población económica activa (en tantos por ciento). (Porcentajes hallados a partir de los datos presentados en Ekboir et al. 1990).

	Tot. (miles)	I		II		III		IV	
		ASAL.	AUT.	EMPR.	TR.FAM.	U	R	U	R
Capital Federal	1.198	72	-	18	-	9	-	1	-
Buenos Aires	4.060	69	5	17	2	5	-	2	-
Córdoba	862	56	11	16	7	5	1	2	2
Santa Fé	869	58	10	17	5	5	1	2	2
Corrientes	195	50	18	12	9	3	1	2	5
Entre Ríos	292	50	17	13	11	3	1	2	3
Catamarca	60	48	23	10	11	2	1	1	4
Jujuy	124	59	19	12	4	2	1	1	2
Salta	203	55	19	14	5	3	1	1	2
S.del Estero	162	44	24	11	9	2	-	2	7
Tucumán	303	54	21	13	4	3	1	2	2
La Rioja	49	52	21	10	9	2	1	1	4
Mendoza	417	49	23	14	5	4	1	1	2
San Juan	147	52	21	14	4	3	1	2	2
San Luis	73	55	19	12	7	3	1	1	2

I: Asalariados

II: Trabajadores autónomos o "cuentapropistas".

III: Empresarios.

IV: Familiares sin remuneración fija.

U: Urbano.

R: Rural.

Cuadro 8. Población ocupada en los sectores rural y urbano (en tantos por ciento). (Porcentajes hallados a partir de los datos presentados en Ekboir et al. 1990).

	<u>Total(miles)</u>	<u>Urbano</u>	<u>Rural</u>
Capital Federal	1.198	100	-
Buenos Aires	4.060	93	7
Santa Fé	869	82	18
Córdoba	862	79	21
Jujuy	124	74	26
Salta	203	73	27
Tucumán	303	72	28
San Juan	147	71	29
San Luis(*)	73	71	29
Mendoza	417	68	32
Corrientes	195	67	33
Entre Ríos	292	68	32
La Rioja	49	65	35
Catamarca	60	61	39
S.del Estero	162	59	41

(*) Figuran en negrita las provincias territorialmente periféricas sin representación conservadora significativa en las elecciones parlamentarias de 1989.

Se puede apreciar por tanto que las tres provincias que figuran a la zaga en el porcentaje de la población urbana son también aquellas provincias periféricas en las que los partidos conservadores y provinciales carecen de representación electoral significativa. Con las reservas impuestas por la menor fuerza conservadora en la provincia de San Luis, la ordenación anterior refuerza la idea de que este tipo de partidos es más fuerte en las provincias periféricas más desarrolladas y con más población urbana. Antes se mencionaba que el mayor peso de estos partidos en las provincias periféricas más desarrolladas podía tener que ver con la vinculación existente entre estos partidos y el desarrollo de

las capas sociales medias y medias altas urbanas. La tabla que se adjunta a continuación no es inconsistente con esta suposición. En este caso, las provincias periféricas a la zaga en la proporción de trabajadores autónomos y empresarios carecen de partidos provinciales significativos.

Cuadro 9. Tanto por ciento de trabajadores autónomos y empresarios ocupados en el sector urbano sobre el total de la población ocupada.

Capital Federal	27
Buenos Aires	22
Santa Fé	22
Córdoba	21
Mendoza	18
San Juan	17
Salta	17
Entre Ríos	16
Tucumán	16
San Luis	15
Corrientes	15
Jujuy	14
S.del Estero	13
Catamarca	12
La Rioja	12

Finalmente, otro aspecto que puede haber influido la suerte de las opciones conservadoras y provinciales radica en el mayor papel del Estado en las economías regionales más atrasadas. Esto se debe a la combinación del desarrollo de políticas de reequilibrio regional con la reducida población de las provincias más atrasadas. Esta combinación de factores otorga al Estado un desproporcionado peso relativo en las provincias periféricas. Así, en las cuatro provincias

periféricas en las que no hay partidos provinciales y conservadores relevantes, más del 40% de los asalariados trabajaban en 1980 para el sector público (Palomino 1987: 118)¹⁶. Obviamente, este es uno de los hechos que ayuda a explicar la debilidad de la derecha en San Luis, a pesar de poseer esta provincia ciertas características semejantes a las de provincias como Salta y Tucumán (en términos de niveles de renta o indicadores de desarrollo cultural).

Esto no indica, sin embargo, que la orientación política que es dominante en el terreno nacional pueda asegurarse, gracias a las políticas de reequilibrio regional, resultados políticos favorables en las zonas más atrasadas. Antes se vió como el hecho de que los militares desarrollasen tales políticas con respecto a ciertas provincias no aseguró resultados significativos para sus principales aliados políticos, los partidos provinciales conservadores. Del mismo modo, como indican los resultados de los peronistas que se han mencionado arriba, el radicalismo, gobernante hasta 1989, fue notoriamente incapaz de obtener resultados electorales positivos en esas mismas provincias. Por consiguiente, más que en la manipulación de los trabajadores públicos por parte del gobierno central, es en la combinación entre la dependencia política y económica respecto al Gobierno federal y el atraso social y económico de estas áreas donde pueden hallarse las razones de la debilidad de las opciones provinciales y conservadoras. Se puede argumentar, en ese sentido, que los grupos sociales que apoyan a los conservadurismos provinciales

tienen un peso limitado en tales provincias. Al mismo tiempo, la extraordinaria dependencia respecto al gobierno nacional crea tal vez oportunidades más limitadas para el desarrollo de políticas de reivindicación provincialista¹⁷.

Puesto en términos más amplios, lo que los contrastes interprovinciales revelan es que los partidos provinciales son fuertes en las provincias periféricas que a) alcanzan índices más elevados de desarrollo socioeconómico y que b) dan muestras de poseer sociedades civiles más autónomas respecto al Estado y más articuladas. Los niveles de renta y de desarrollo cultural, el peso de los sectores urbanos y dentro de éstos de las capas sociales medias y medias altas y la inserción del Estado en las economías regionales son factores articulados entre sí que han favorecido la fuerza de las opciones conservadoras y provinciales. En su conjunto, aquellas provincias periféricas en las que la sociedad civil es más fuerte poseen partidos provinciales, mientras que aquellas en las que un conjunto de circunstancias ha limitado, comparativamente, el desarrollo de esta última, carecen de tales partidos. Los indicadores de desarrollo socioeconómico tomados en cuenta reflejan de un modo u otro la pujanza de la sociedad civil¹⁸.

Es importante reseñar, finalmente, que la importancia de la sociedad civil en los territorios periféricos parece mucho mayor que la de la existencia de continuidad en las organizaciones políticas de la derecha. Como se puede observar, en dos provincias periféricas que carecen de tal característica

parece jugar un papel significativo en la pujanza electoral de

(como Tucumán o Salta) los conservadores obtienen excelentes resultados electorales. Lo mismo puede decirse, para 1989, de la Capital Federal. Ahora bien, por lo que se refiere a las provincias periféricas, las expresiones producidas por el análisis booleano ($AbcE + bcdE$) sugieren que la inexistencia de tradiciones partidistas no es importante cuando los dos indicadores socioeconómicos seleccionados indican ausencia de atraso, mientras que si éstos apuntan en distintas direcciones (o, si realizásemos un análisis de tipo cuantitativo, cuando los indicadores de desarrollo socioeconómico tienen valores intermedios), la existencia de tradiciones partidistas sí que parece jugar un papel significativo en la pujanza electoral de la derecha en 1989.

Es posible imaginar, a la luz de estas combinaciones, que la tradición de continuidad en los partidos puede ser más significativa en las áreas periféricas de desarrollo más bajo, mientras que en aquellas en que tal desarrollo es comparativamente más alto (como Mendoza y Tucumán) la existencia de tal tradición no es tan relevante.

8.6. Conclusiones.

En su conjunto, la comparación de las características de las provincias argentinas indica que los partidos conservadores han obtenido sus mejores resultados en 1989 en Capital Federal (por un partido de vocación nacional) y en las provincias periféricas que reunían ciertas características socioeconómicas y políticas. Los resultados de la UCEDE en Capital Federal reflejan evoluciones sociopolíticas complejas que, sin ser privativas de esta ciudad, sí que se presentan en ella con una intensidad inigualada en otras áreas del país. La crisis fiscal del Estado y de todo el modelo de desarrollo económico autocentrado (expresadas en los episodios de hiperinflación) han confluído con un elevado peso social de las clases medias altas y clases altas y con un ambiente social y cultural más propicio al neoliberalismo (encarnado por la UCEDE) que el del resto de la Argentina. Estas transformaciones se han combinado además con la orientación del radicalismo, el principal receptor de los votos de esos sectores sociales, hacia posiciones de centro-izquierda. En esta coyuntura, las posibilidades para un partido como la UCEDE eran excelentes.

Por otra parte, la derecha ha sido fuerte en provincias territorialmente periféricas que cumplían ciertas características. Ello quiere decir, en primer lugar, que en el área geográfica y socioeconómicamente central del país (provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) la derecha ha sido comparativamente débil. Por lo que se refiere a las

provincias periféricas, en ellas la derecha (integrada por partidos provinciales y, secundariamente, por la UCEDE) ha obtenido resultados relevantes en provincias en las cuales el desarrollo socioeconómico era, en el contexto de las zonas periféricas, relativamente alto (Mendoza, Tucumán, Salta, San Juan)¹⁹. Es en los casos en los que los indicadores socioeconómicos se encontraban en una posición intermedia, donde la existencia de una tradición de organizaciones políticas estables (Corrientes y Jujuy) se ha revelado imprescindible para la derecha. Por contra, en las sociedades periféricas más atrasadas, la derecha ha obtenido resultados irrisorios (Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca), no acercándose en ellas siquiera al cinco por ciento de los votos²⁰.

Estos hechos indican que, en la nueva fase democrática, el éxito de los conservadurismos provinciales se ha conjugado con el desarrollo socioeconómico antes que con el atraso. Las razones de ello no pueden ser establecidas con nitidez todavía debido a la ausencia de material empírico que informe de las características sociales, económicas, ideológicas y actitudinales del electorado conservador en las distintas provincias argentinas. Se puede avanzar, tentativamente, que esta coincidencia tiene que ver con las mejores posibilidades que el desarrollo económico y cultural brindan a la movilización periférica (provincialista) por parte de los partidos provinciales, los cuales, por circunstancias del desarrollo histórico argentino, han sido básicamente

conservadores. Estas mejores posibilidades de movilización tienen que ver con los mayores recursos económicos y culturales de ciertas sociedades provinciales, así como con la mayor extensión de ciertos grupos sociales (sectores urbanos y, muy probablemente, de las clases medias y altas dentro de éstos). Finalmente, el nivel de dependencia de tales provincias respecto a la intervención estatal ha podido favorecer las posibilidades de los partidos conservadores provinciales. En aquellas provincias extraordinariamente dependientes (por razón del mayor peso del Estado en sus reducidas economías), los grupos sociales susceptibles a la movilización provincialista y conservadora han sido menores. En este sentido, se puede conjeturar también que la capacidad de presión tales provincias respecto al Estado es mucho más reducida y que, por lo tanto, la atracción de los programas conservadores provincialistas es también más reducida.

NOTAS

1. Además de en las provincias en las que la derecha rebasa el 20% de los votos, esta orientación política obtiene actas de diputados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé. Los porcentajes obtenidos por estas formaciones en estas dos provincias son sin embargo claramente inferiores (de un 12,9% en Buenos Aires y de un 10,1% en Santa Fé), debiéndose su acceso a la Cámara de Diputados al mayor tamaño de ambos distritos electorales.

2. Estas cifras reproducen las que Gallo y Thomsen consignan para los partidos de centro-derecha, con las excepciones de San Juan, donde se han añadido los votos recibidos por el Partido Bloquista (15%) y Tucumán, donde se han añadido los de la Fuerza Republicana de Bussi (34,6%).

3. Muestra de ello es el hecho de que el tanto por ciento de la población activa ocupado en el sector agropecuario pasase del 28% en 1947 al 15% en 1980 (Palomino 1987: 37).

4. Son numerosos los indicadores que reflejan el desnivel económico entre Capital Federal y el resto del país. Esos indicadores se refieren al nivel de ingresos (el más alto de la Argentina) (Rubio 1982: 139), al producto por habitante (cerca de 20 veces superior a la media nacional) (Frediani 1982: 164) y al tamaño de las clases empresariales (ver tabla de ocupaciones más abajo).

5. Ezequiel Gallo y Esteban Thomsen no incluyen al partido de Bussi dentro su estudio sobre la evolución electoral de las fuerzas de la derecha. Esta perspectiva es perfectamente consistente cuando se pretende analizar la evolución de algunas fuerzas de la derecha sobre la base de su estricta afinidad ideológica. Desde esta perspectiva, partidos de orientación tan claramente autoritaria como la Fuerza Republicana de Bussi no tienen porque ser analizados en un estudio sobre la evolución electoral del centro-derecha. Sin embargo, cuando se intenta establecer las relaciones entre un conjunto de variables (económicas, políticas e institucionales) y la debilidad o fuerza de las alternativas genéricamente conservadoras, ciertas cuestiones ideológicas, de indudable importancia en otros aspectos, pueden ser dejadas temporalmente de lado. Es por eso que este análisis incluye, entre los partidos tratados, a la Fuerza Republicana del Tucumán y al Bloquismo de San Juan, diferente también este último del conservadurismo tradicional argentino, aunque por otros motivos.

6. En las elecciones de 1983 a diputados el Partido Renovador de Salta recibió el 7,24% de los votos, el 5,78% en las presidenciales y el 16,65% en las elecciones a gobernador (Urqueni 1983: 49).

7. Sobre la diferencia entre la estabilidad de las fracturas políticas y la estabilidad del voto a partidos específicos ver el capítulo cuarto de Bartolini y Mair 1990.

8. En las elecciones presidenciales de marzo de 1973 la derecha sobrepasó el 20% de los votos en los distritos de Capital Federal y Tucumán (Cantón 1986: 265-269), pero los partidos que recibieron ese caudal de voto eran distintos de los que lo hicieron en 1989.

9. Como señalan Bartolini y Mair (1990), es preciso distinguir entre clivajes y oposiciones políticas. En el análisis de estos dos autores, los clivajes o fracturas poseen elementos empíricos (su base social, definida en términos socio-estructurales), normativos (que incorporan valores y creencias articulados en una identidad específica y, finalmente, organizativos y de comportamiento político. Estos últimos elementos incluirían las instituciones y organizaciones "que se desarrollan como parte del clivaje" (Bartolini y Mair 1990: 215). En esta visión, que se comparte en esta investigación, el concepto de clivaje se refiere a aquellas oposiciones que combinan los tres aspectos antes mencionados. Como se puede observar, la existencia de clivajes va unida aquí, por un lado a las múltiples implicaciones de los mismos y, por otro, a su continuidad histórica. En estos dos sentidos, el clivaje implica aquí "a form of closure of social relationships" (Bartolini y Mair 1990: 216).

10. Sobre los resultados de las elecciones de 1916 y 1928 ver partes anteriores de este estudio. Para las elecciones de 1946 se ha tomado como punto de referencia los resultados del Partido Demócrata Nacional, el cual agrupaba a todas las organizaciones conservadoras provinciales. Abajo se consignan los resultados de tal partido en tantos por ciento del voto en las provincias en las que se presentó a las elecciones. (Estadísticas extraídas de Félix Luna 1973).

Capital Federal	-
Buenos Aires	6
Catamarca	27,8
Córdoba	18
Corrientes	38
Entre Ríos	17,5
Jujuy	19
La Rioja	7
Mendoza	15,4
Salta	15,4
San Juan	20
San Luis	34
Santa Fé	20,4
S. del Estero	-
Tucumán	3.4

Estas cifras indican que el conservadurismo tuvo una fuerte presencia en Corrientes (38%), San Luis (34%) y Catamarca (27,8%), una presencia estimable en Santa Fé (20,4%), San Juan (20%), Jujuy (19%), Córdoba (18%), Entre Ríos (17,5%), Mendoza y Salta (15,4%)

y no estuvo prácticamente presente en Buenos Aires, Tucumán, Capital Federal y Santiago del Estero.

11. Esta descripción no implica que las relaciones precapitalistas vayan necesariamente acompañadas por la hegemonía ideológica de las clases altas rurales. Puede encontrarse una crítica del concepto de hegemonía ideológica (con especial referencia al campesinado) en Scott (1985) (especialmente en el capítulo 8). Un análisis de los factores que pueden promover posiciones conservadoras en las clases bajas puede encontrarse en Lipset (1970: 203 y ss.).

12. Tales regímenes especiales continuaban la atención pública preferente destinada a las provincias de La Rioja, Catamarca y San Luis, consagrada en el Acta de Reparación Histórica que fue firmada por el gobierno federal y las mencionadas provincias en agosto de 1973. La razón de ser de este tratamiento especial residía en el especial atraso económico de estas áreas.

13. Como en los anteriores esquemas de verdad, la presencia de un fenómeno es consignada como 1 y su ausencia como 0. Además, en el proceso de transformación de las combinaciones de variables, la ausencia de un fenómeno es designada con letra minúscula y su presencia con letra mayúscula.

14. El justicialismo obtuvo el 47,3% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales en el ámbito nacional. La media de votos recibida por el Frente Justicialista en las elecciones a diputados, en cada provincia, fue del 45,5% de los votos.

15. Sobre este punto son de interés las observaciones de Pierre Bourdieu en "Social Space and the Genesis of Classes" (Bourdieu 1990: 229 y ss.).

16. Los porcentajes de trabajadores ocupados en el sector público sobre el total de los asalariados de cada provincia son los siguientes (Palomino 1987: 118).

Catamarca	51%
La Rioja	50
San Luis	45
S. Estero	41
Corrientes	37
Entre Ríos	36
Jujuy	34
Salta	33
San Juan	32
Tucumán	31
Córdoba	30
Santa Fé	28
Mendoza	27
Cap. y G.B.A.	24

Téngase en cuenta que provincias como Catamarca, La Rioja y San Luis se caracterizan por su escasa población. Así, por ejemplo, el número de votantes de las dos primeras provincias no llegaba, en 1983, a los cien mil, mientras que el de San Luis era de ciento veinte mil. Por contra, el resto de las provincias se acercaba (Jujuy) o superaba los doscientos mil votantes (todas las demás).

17. Este hecho tiene poco de sorprendente en perspectiva comparada. Si se traslada la mirada al sur de Europa, y salvando todas las distancias oportunas, se observa que los movimientos periféricos más pujantes no se desarrollan en zonas de especial atraso económico, sino más bien todo lo contrario. Basta pensar en los casos catalán y vasco en España o en la emergencia de las ligas regionales en el norte italiano. Un análisis sobre el impacto de las diferencias económicas en la emergencia de movimientos regionalistas puede encontrarse en Gourevitch (1987: 199 y ss.).

18. Se ha considerado que la sociedad civil está constituida por mercados, asociaciones voluntarias y una esfera pública al margen del control directo del Estado (Pérez Díaz 1993: 57). En ese sentido el nivel de renta de las provincias, el peso del Estado en sus economías, la presencia de capas sociales medias y altas, y el desarrollo cultural inciden directamente sobre el rango de autonomía de la sociedad civil respecto al Estado.

19. Estas son las cuatro provincias más desarrolladas de la Argentina periférica considerada aquí, como la tabla siguiente muestra.

Nivel de desarrollo de las provincias argentinas (Base Capital Federal=100, 1979) (Frediani 1982: 180).

Mendoza	65,9
Tucumán	63,3
Salta	60,4
San Juan	60,3
San Luis	59,6
Corrientes	57,9
S.del Estero	56,2
La Rioja	56
Jujuy	54,1
Catamarca	54

20. Como se mencionó antes, en la provincia de San Luis se esperaba una mayor presencia de la derecha a partir de las regularidades enunciadas arriba. La derecha tuvo en dicha provincia resultados claramente superiores a los de las tres áreas más atrasadas (cerca del 10%) pero también claramente inferiores a los de las restantes provincias periféricas.

9. CONCLUSIONES .

A lo largo de esta investigación se han analizado las principales características del conservadurismo argentino en dos periodos históricos. En el primero, que se prolonga básicamente de 1889 a 1930, los grupos políticos conservadores tuvieron que luchar con una organización política de masas de notable éxito electoral: el radicalismo. Esa disputa entre conservadores y radicales fue históricamente decisiva en la medida en que moldeó algunos patrones de relación entre partidos políticos y grupos sociales y en que consagró un determinada forma de inserción política del conservadurismo en la política argentina. En este estudio se ha optado por prestar una especial atención a aquella coyuntura a fin de evaluar las transformaciones políticas de la derecha argentina desde aquella trascendental fase histórica.

En la fase democrática que se inició en 1983, la derecha reemprendió, tras un largo interregno de notable debilidad partidista, el camino hacia la reorganización de una alternativa liberal-conservadora nacional. Las diferentes formas en que se articuló la derecha en una y otra época (en los terrenos organizativo, territorial e ideológico) poseen un notable interés para el análisis de la política argentina. Por este motivo, en las páginas que siguen se repasa cuales han sido los cambios fundamentales experimentados por este vector sociopolítico. En especial, esta revisión pretende abordar, a la luz de los resultados de los análisis anteriores, de que forma han variado las relaciones entre partidos políticos, conflictos socioeconómicos y tensiones territoriales a lo largo

de este siglo.

9.1. La derecha argentina y los conflictos en torno al modelo socio-económico.

En el momento en que surgieron los primeros partidos políticos de masas en la Argentina, las oposiciones políticas no giraron en torno a modelos socio-económicos. La UCR no llegó a cuestionar, ni siquiera en su vertiente yrigoyenista (vinculada de manera especial a las clases bajas y medias bajas) el modelo económico agro-exportador. El radicalismo no se planteó en ningún momento el desarrollo de alguna suerte de industrialización sustituya de importaciones fundada en la extracción de recursos de la economía pampeana. Tampoco intentó esta corriente desarrollar una consistente política de reforma social y redistribución económica a través de la intervención del Estado.

En segundo lugar, la cuestión religiosa no despertó conflictos relevantes que afectasen a la emergencia de los partidos políticos modernos en la Argentina. Los conflictos entre la Iglesia y los "state-builders" argentinos habían tenido lugar antes de la emergencia de la UCR, y dejaron un escaso legado de confrontación social, en parte como consecuencia de la debilidad histórica de la Iglesia católica argentina. Por lo demás, el radicalismo tampoco planteó demandas de ningún tipo en este terreno y, por tanto, no favoreció el surgimiento de conflictos entre la Iglesia y los

grupos sociales más cercanos a ella, por un lado, y la UCR por otro.

Finalmente, el radicalismo no cuestionó, sino que más bien tendió a reforzar, el proceso de construcción nacional iniciado a finales del siglo XIX. La UCR no deslegitimó las instituciones nacionales y nacionalistas creadas a partir de esa fase histórica.

Estas características explican porqué los sectores sociales altos carecieron de incentivos suficientes para superar su desarticulación territorial mediante la construcción de una organización política nacional. La escasa relevancia de estas dimensiones en los conflictos políticos entre radicales y conservadores explica además porqué las fuerzas conservadoras confrontaron serios problemas a la hora de crear coaliciones electorales amplias. En especial, las clases medias de la región pampeana permanecieron indiferentes a las interpelaciones conservadoras.

Como se ha señalado en la primera parte de esta investigación, estas características generaron una situación en la que las clases altas no crearon organizaciones políticas estables, no desarrollaron una identidad partidista y simbólica bien definida en el ámbito nacional y no generaron un discurso ideológico en torno a la defensa del modelo agro-exportador que sirviese además para "generalizar" sus intereses en la creación de alianzas sociales con otros grupos amenazados, por unos u otros motivos, por alguna suerte de amenaza disruptora.

Un primer legado de esta situación fue la debilidad

general de la opción conservadora (en especial de la vinculada a la burguesía pampeana) en su lucha contra la transformación del modelo socio-económico puesto en marcha a partir del peronismo. Además, esa situación pudo afectar, aunque tal vez de modo menos directo, a la viabilidad de las instituciones democráticas en el largo plazo. La confianza de estos grupos en su capacidad de derrotar electoralmente al radicalismo primero y al peronismo después se fue haciendo cada vez más tenue.

De ahí que el recurso a la instauración de regímenes de limitada participación (con exclusión de los oponentes políticos) fuese tan común durante este siglo. No es necesario asumir íntegramente los supuestos de la escuela de la elección racional para convenir en que la lealtad de los actores políticos hacia la democracia está estrechamente vinculada con la probabilidad que esos mismos actores asignan a sus victorias futuras dentro de las instituciones democráticas¹. En el caso argentino, esta debilidad conservadora, que repercutió negativamente sobre la estabilidad de las instituciones democráticas, es en primer lugar un fruto del proceso de generación de los partidos políticos modernos.

La continuada debilidad de la derecha es fruto también de la forma en que las primeras fracturas políticas se articularon con el surgimiento del peronismo. Aunque no es este el tema de este estudio, conviene reconsiderar brevemente en que forma afectó la emergencia del peronismo a la inserción política de la derecha. Es esencial recordar, en este sentido, que la desarticulación de la potencial coalición conservadora alcanzó

su culminación gracias a las características esencialmente contradictorias del peronismo. El peronismo integró a buena parte de los representantes ideológicos y políticos de las clases altas argentinas. Como ha mostrado Waisman (1987), militares, intelectuales cercanos a la Iglesia, nacionalistas, y parte de los cuadros políticos conservadores creyeron ver en el corporativismo y el nacionalismo peronistas la solución a los riesgos de disrupción social acarreados presuntamente por el desarrollo industrial del país y el crecimiento de la clase obrera. Estos sectores sociales, poseedores de "capital político y simbólico" antes que de capital económico (Bourdieu: 1991), se desvincularon en buena medida de la burguesía pampeana en la década de 1940, a pesar de los lazos sociales que los unían con los grupos económicamente dominantes². Ese giro de sectores sociales vinculados a la representación del orden existente y, por tanto, a la hegemonía social de las clases altas (fundamentalmente de la burguesía pampeana), debilitó aún más la posición de estas últimas clases, las cuales tuvieron que apoyar a fuerzas políticas nada fiables para ellas (la UCR) en su intento de frenar el giro corporativista y nacionalista alentado por el peronismo. Es por esto que no es posible entender las transformaciones políticas argentinas si no se presta atención a la forma en que se articularon los conflictos políticos, económicos e ideológicos en la Argentina.

El peronismo dió lugar por tanto a una situación en la que el conservadurismo político se encontró atrapado entre dos

opciones políticas masivas (el peronismo y el radicalismo). En esa situación buena parte de las élites políticas conservadoras se movieron hacia un polo u otro dependiendo de un conjunto de motivos cuya complejidad no es posible reflejar aquí y sobre la que, por otra parte, se carece aún de investigaciones exhaustivas. Esa situación se puede caracterizar como de fraccionamiento político y territorial. En primer lugar, porque los proyectos políticos y económicos de las élites conservadoras devinieron contradictorios³. En segundo lugar, porque el fraccionamiento general de la derecha abrió el camino a la periferización del conservadurismo argentino.

9.2.Territorio y derecha a lo largo del siglo: del conservadurismo de las periferias al conservadurismo regionalista.

En el análisis de los procesos electorales de 1916 y 1928 se pudo apreciar como los grupos conservadores conseguían sus mejores resultados en las zonas periféricas y atrasadas del país. Ello se debía tanto a la incapacidad de estos grupos para obtener apoyos de las clases medias del área pampeana (un producto del tipo de conflicto que surgió en la Argentina), como a ciertas características específicas de las zonas argentinas menos desarrolladas, entre las que se podría incluir el tamaño y características de los grupos sociales y la capacidad de las élites locales para controlar políticamente a los votantes. En este sentido, la correlación entre atraso y

voto conservador era claramente significativa, como se mostró en el análisis de las elecciones de 1928.

Ahora bien, además de los factores sociales antes mencionados, es razonable sostener que las tensiones existentes entre el centro del sistema político, representado por las instituciones nacionales y en especial por la Presidencia, y las élites políticas periféricas, jugaron un papel especial ya en estas elecciones y por motivos que se detallaron en capítulos anteriores. Esta relación emergente entre conflictos territoriales y políticos se apreció en el apoyo de los populismos de San Juan y Mendoza a las candidaturas antirradicales en las elecciones de 1928. Además, esos conflictos facilitaron la continuada desarticulación conservadora. Las élites de esta orientación intentaron prolongar un sistema que les otorgaba una notable autonomía provincial frente al centro político, autonomía reflejada en la sobrerrepresentación de las provincias del interior en todo el proceso político argentino. Esa resistencia frente a la imposición del poder del centro (de base democrática y nacional) sobre las periferias conservadoras se realizó en buena medida sobre la base de una continuada desarticulación territorial. Esta desarticulación fue igualmente favorecida por la baja amenaza socio-económica planteada por el radicalismo. La incapacidad de superar esas tensiones de corte territorial se reflejó igualmente en un legado de fragmentación provincial y provincialista que llega hasta nuestros días. Sin embargo, las características con las que tal desarticulación se ha

presentado en la actual fase democrática son bien diferentes de las anteriores, como el análisis de las elecciones de 1989 ha intentado mostrar. A mi juicio, tales transformaciones indican un cambio fundamental en la naturaleza política y social de las derechas provinciales argentinas.

9.2.1. Una interpretación de las fracturas territoriales dentro del conservadurismo.

Recientemente, un estudio dedicado a analizar el conservadurismo argentino en el contexto latinoamericano (Gibson 1992) ha prestado especial atención a las tensiones entre el centro y la periferia a la hora de explicar la imposibilidad del conservadurismo argentino de construir una alternativa política unificada. En su análisis, tal tensión deriva, en primer lugar, de una divergencia de intereses económicos entre las burguesías pampeana y transnacional (las que predominan en el centro del país) y las burguesías del interior de la Argentina. A su vez, la desigual inserción de estos actores sociales en el sistema estatal ha hecho que, mientras que la burguesía central (agroexportadora y transnacional) estuvo representada políticamente a través del gobierno, o más exactamente, de los tecnócratas presentes en él (durante la mayor parte de los gobiernos postperonistas, a excepción del de Alfonsín), las burguesías del interior precisaron de organizaciones políticas para obtener algún tipo de representación política. Según Gibson, durante ciertos

periodos esa representación de las burguesías de la periferia en el sistema político se realizó a través del peronismo.

El estudio de Gibson tiene el interés de haber subrayado la centralidad de las tensiones territoriales en la conformación de la vida política argentina de este siglo. Además, su análisis ha localizado algunas de las diferencias estructurales que existen entre las clases sociales altas en la Argentina dependiendo de su ubicación territorial (tanto en relación con la economía como con el Estado). Básicamente, las burguesías del interior estarían interesadas en un modelo económico más autocentrado y proteccionista mientras que las de la zona pampeana favorecerían un modelo económico abierto. En este sentido, Gibson ha señalado una dualidad estructural crítica para entender la política conservadora argentina. Sin embargo, a mi juicio, esta visión pierde de vista importantes factores.

En primer lugar, tal teoría sobreestima el impacto político de las diferencias en los intereses económicos de las distintas burguesías. Ello es bien patente cuando Gibson localiza en este tipo de fractura las causas de la desunión conservadora de cara a las elecciones de 1916, presuntamente debida a la hostilidad de los conservadores bonaerenses y ugartistas hacia las veleidades intervencionistas del conservadurismo periférico encabezado por De la Torre (Gibson 1992: 75). Curiosamente, la candidatura de De la Torre (quien también era propietario agrario pampeano) era apoyada por nada menos que Julio Antonio Roca (hijo), el artífice de los

posteriores pactos Roca-Runciman que consagrarían el modelo agro-exportador y la relación económica especial con el Reino Unido. En aquel momento las divisiones en torno a las políticas económicas no jugaron ningún papel en la desunión conservadora.

Además, si tales diferencias se redujesen a los factores que Gibson enumera, las burguesías del interior habrían podido, bien insertarse sin ningún problema dentro del peronismo (cuyos contornos provinciales eran claramente conservadores, a diferencia de lo que sucedía en las grandes urbes del país), o bien tender hacia la creación de un partido conservador representativo del conjunto de las clases conservadoras del interior (con eventual presencia, aunque minoritaria, en el centro del país). Puesto que ninguna de estas alternativas cristalizó finalmente, hay que pensar que otros factores tuvieron un papel decisivo a la hora de modelar la orientación política de las clases altas del interior.

El hecho de que la fractura económica no fuese la única significativa se aprecia igualmente en la cooperación entre tales burguesías y sus principales intermediarios en ciertas áreas (los partidos provinciales) y el régimen militar (el "Proceso") que inició el ataque contra el modelo de desarrollo económico proteccionista y autocentrado.

Finalmente, la interpretación de Gibson es insuficiente en la medida en que no proporciona ningún criterio para explicar en que casos cabe esperar la existencia de partidos provinciales fuertes en la actual fase democrática y, en cuales otros, ese desenlace no es esperable. Claramente, hace falta

introducir otros elementos de juicio para explicar la fuerza provincial de estos actores políticos. En especial, es necesario tener en cuenta que los conservadurismos provinciales han experimentado una clara tendencia hacia la periferización y provincialización.

9.2.2. La periferización del conservadurismo tras el surgimiento del peronismo.

La transformación experimentada por el conservadurismo argentino se refleja en el hecho de que, en la fase democrática reciente, los partidos conservadores provinciales sólo han alcanzado cotas de voto significativo allí donde las condiciones socio-económicas y políticas son favorables a la emergencia de demandas de tipo provincial o, para emplear un lenguaje más común fuera de la Argentina, regional. Esto es, los partidos conservadores provinciales han conseguido un caudal de voto significativo únicamente donde han encontrado un nivel suficiente de desarrollo social y de autonomía de la sociedad civil respecto al Estado.

Estas características muestran que no es ya el atraso general de las provincias, sino precisamente el haber alcanzado un nivel de desarrollo socio-económico suficiente en cada región, lo que explica el éxito relativo del conservadurismo provincialista. Esta situación es marcadamente diferente de la que imperaba a principios de siglo, en la cual los resultados electorales de los conservadores fueron tanto mejores cuanto

más atrasadas eran las provincias. Esa transformación es reflejo de las características cada vez más marcadamente periféricas (o "regionalistas") de las fuerzas conservadoras provinciales. Además, estas características explican la importancia que estas fuerzas asignan a mantener su identidad específica (esto es, provincial) en el plano nacional. Aun insertándose en la arena política nacional, tales partidos han pasado a asumir un carácter marcadamente regional, en el que la defensa específica, en tono conservadorizante, de los intereses de las clases medias y altas locales se ha convertido en la clave de su actuación y viabilidad políticas.

Esta evolución puede ser interpretada a la vez como un repliegue ante la debilidad nacional del conservadurismo y como una transformación en la que las dimensiones territoriales del conflicto pasan a ser dominantes. En ambos sentidos, el grueso del conservadurismo argentino ha experimentado una marcada periferización. La complejidad de esta transformación se manifiesta en el carácter híbrido de los partidos conservadores provinciales, especialmente cuando se les compara a los partidos regionalistas europeos. Ello se debe en buena medida a la importancia muy inferior, en el contexto argentino, del "potencial étnico" distintivo de las provincias (Gourevitch 1987: 203; Esman 1977: 372). La Argentina se caracteriza por lo que se ha denominado un "espacio territorial dominante" (Rokkan y Urwin 1983: 180). En él, el centro controla el territorio en las dimensiones básicas de la diferenciación espacial (económica, cultural y política), circunstancia que ofrece

posibilidades muy limitadas a la contra-movilización de las provincias (Rokkan y Urwin 1983: 180; Esman 1977: 377). A pesar de ello, en aquellas provincias que superan un cierto nivel de desarrollo económico, los partidos provinciales conservadores han conseguido obtener resultados electorales significativos. El desarrollo de aquellas aptitudes y conocimientos que posibilitan la participación política y la presencia de recursos económicos orientables hacia la competición partidista son dos de los factores que posibilitan la movilización regional (Levi y Hechter 1985: 135). No es accidental, por tanto, que las áreas periféricas atrasadas no hayan podido desarrollar organizaciones provinciales relevantes.

Esa movilización periférica se desarrolla en buena medida en clave conservadora a causa de las circunstancias en las que emergieron los partidos políticos modernos en la Argentina. Como se recordará, una de las características de la experiencia radical consistió en su voluntad de desalojar a las élites conservadoras de sus baluartes provinciales y, al hacerlo, de asentar el poder del centro político y limitar la representación de cualquier fuerza conservadora provincial en instituciones como el Senado, en el que aquellas fuerzas se hallaban sobrerrepresentadas. Ese intencionado proceso de debilitamiento de las élites provinciales promovía la confrontación entre las mismas y el centro político. Creada esa confrontación, los actores políticos provinciales acabaron posicionándose, de una manera u otra, en un terreno político cercano al conservadurismo, por más que sus primeros orígenes

no tuviesen esa orientación (como sucedió en San Juan y Mendoza). Esto ayuda a explicar la creación de una suerte de afinidad electiva entre el conservadurismo y el provincialismo.

9.3. La fallida recreación de un liberal-conservadurismo de ámbito nacional y las perspectivas de la derecha argentina.

En las líneas anteriores se han resumido los motivos principales del éxito relativo de los conservadurismos periféricos y de su carácter específicamente provincialista. Esa explicación debe ser complementada por una revisión de la debilidad general del conservadurismo del área central.

Como ha señalado Gibson (1992), uno de los factores de la debilidad continuada del conservadurismo del área central reside en los privilegiados lazos existentes entre la burguesía pampeana y transnacional y el Estado argentino, vínculos en los que tecnócratas y economistas han desempeñado un papel crítico, gracias en parte a la recurrencia de los regímenes autoritarios.

A mi juicio, es necesario vincular esa relación especial entre el Estado y los sectores más elevados de la burguesía pampeana y bonaerense con otras consideraciones a fin de entender tanto la debilidad de los experimentos partidarios en esta área, como la resurgencia, muy limitada en el tiempo, de un intento de articulación nacional de corte liberal-conservador.

Un primer factor a tener en cuenta reside en la mayor

dificultad de los intentos conservadores en el área pampeana para movilizar a otros grupos sociales. La actitud de los sectores mejor situados de la burguesía es sin duda importante, pero no explica totalmente esa debilidad conservadora en Buenos Aires. A mi juicio, la misma tiene que ver, en primer lugar, con la forma en que los conflictos sociales, políticos y territoriales se articularon desde principios de siglo. Es decisiva en este sentido la incapacidad inicial de los conservadores de movilizar a las clases medias de este área debido a la inexistencia de una amenaza de corte revolucionario o claramente disruptor en términos sociales. Esa incapacidad contrasta con la de las zonas periféricas debido a que, como es esperable, en el área central las demandas provincialistas que sirvieron a las élites provinciales para engrosar su caudal electoral no podían tener arraigo.

En esas condiciones, el amplio polo del antiperonismo absorbió el caudal de los potenciales seguidores de una opción conservadora. Tiene esto que ver con el carácter amenazante que adquirió el peronismo en las áreas urbanas, en la medida en que su columna vertebral era obrera y sindical.

Esa situación sólo se transformó debido a la imbricación entre la crisis del Estado desarrollista y el fortalecimiento y radicalización de los proyectos ideológicos neoliberales. Gracias a esta combinación, el partido del sempiterno defensor de la reforma radical del Estado, el ingeniero Alvaro Alsogaray, pudo ganar creciente fuerza dentro del área de Buenos Aires. Ahora bien, como se ha mostrado anteriormente,

esa fuerza se restringió precisamente al ámbito territorial en el que la sobrerrepresentación de las clases altas y medias altas y el mayor calado del discurso ideológico neoliberal le brindaban excelentes oportunidades políticas.

La euforia neoliberal que acompañó al crecimiento de la UCEDE en el área de Buenos Aires facilitó el establecimiento de alianzas entre la UCEDE y ciertas formaciones provincialistas en la Alianza de Centro. No sirvió, sin embargo, para iniciar un proceso de organización política nacional, puesto que cada partido mantuvo su personalidad política propia.

Además, la absorción por el gobierno del Presidente Menem de aspectos centrales del programa neoliberal, por lo que se refiere a la desregulación y apertura de la economía, la privatización de compañías estatales y la lucha anti-inflacionaria, ha reducido notablemente el atractivo de la UCEDE. En el nuevo marco político, es el peronismo menemista quien mejor puede representar las demandas de los sectores sociales que antes votaron a la UCEDE. A esta circunstancia hay que unir la cooptación, por parte del gobierno de Menem, de buena parte de los cuadros políticos y técnicos del neoliberalismo argentino en general y de la UCEDE en particular (Gibson 1992: 327 y ss.).

Estas circunstancias constriñen notablemente las posibilidades futuras de la UCEDE y de eventuales experimentos políticos del mismo tipo. Una vez que el contexto específico que dió lugar al éxito ucedista ha desaparecido, tal partido debe volver a ocupar una posición marginal en el terreno

político. Sólo en dos escenarios podría la UCEDE recuperar el caudal político que poseyó en sus momentos más boyantes. En el caso, altamente improbable, de que se invirtiese la reforma económica emprendida por el gobierno Menem, la UCEDE o un partido similar tendría ciertamente posibilidades electorales. Algo semejante sucedería si la UCEDE consiguiese vincularse de manera específica a nuevas demandas de las clases altas y medias altas. Sin embargo, la naturaleza prácticamente monotemática del proyecto ucedista (liberalización económica) y la posibilidad de que los grandes partidos (peronismo y radicalismo) pasen a representar las demandas neoliberales, dificulta notablemente las perspectivas de la derecha bonaerense. Los resultados de los comicios de 1993, en los que la UCEDE cosechó un rotundo fracaso, son buena muestra de las dificultades afrontadas por esta fuerza política en el nuevo marco político. En tales elecciones, la UCEDE sólo pudo obtener uno de los 127 diputados elegidos. Es muy significativo que este partido no llegase al 5% de los votos ni en Capital Federal ni en la provincia de Buenos Aires, siendo el peronismo el principal beneficiario del voto favorable a la liberalización económica.

El fracaso de la UCEDE en su intento de construir una alternativa liberal-conservadora nacional contrasta con la persistencia de los partidos provinciales conservadores. Como se ha señalado antes, ese contraste indica el carácter central de los conflictos territoriales en la evolución de las fuerzas conservadoras provinciales.

La recreación del escenario socio-político argentino que está teniendo lugar desde la asunción de la Presidencia por Carlos Menem en 1989, ha transformado las posibilidades de las fuerzas conservadoras. Por un lado, la transformación del viejo clivaje en torno al modelo económico (con el nuevo papel asumido por el peronismo en este terreno) dificulta notablemente las posibilidades electorales de terceros partidos movilizados en torno a un programa neoliberal. Por otro lado, los factores políticos y económicos que subyacen a las fracturas territoriales no han experimentado transformaciones semejantes. De ahí que siga habiendo un espacio en el futuro para las opciones conservadoras provincialistas. En el nuevo contexto político nacional, los conflictos globales en torno al modelo económico han perdido la mayor parte de su vigor. De modo semejante, las luchas políticas y partidistas de ámbito nacional han perdido el carácter dramático y existencial que las caracterizó desde el surgimiento del peronismo. Es muy probable, que la pérdida relativa de importancia de los conflictos políticos y socio-económicos de ámbito nacional favorezca la persistencia de los conflictos de carácter territorial. Este escenario puede reforzar los caracteres más regionalistas del conservadurismo argentino.

NOTAS

1. En el análisis estratégico y racionalista de Przeworski, "compliance depends on the probability of winning within the democratic institutions" (1991: 30)

2. Como señala Bourdieu "The dominant class is the site of a struggle over the hierarchy of the principles of hierarchization. Dominant class fractions, whose power rests on economic capital, aim to impose the legitimacy of their domination either through their own symbolic production or through the intermediary of conservative ideologues, who never really serve the interests of the dominant class except **as a side effect** and who always threaten to appropriate for their own benefit the power to define the social world that they hold by delegation. The dominated fraction (clerics or 'intellectuals' and 'artists') always tends to set the specific capital, to which it owes its position, at the top of the hierarchy of the principles of hierarchization". (1991: 168, también 215-16).

3. En relación con la integración social de la clase obrera, la inserción política del peronismo y la apertura económica del país.

OBRAS CITADAS.

ALCANTARA SAEZ, Manuel (1988): "Elecciones y consolidación democrática en Argentina: 1983-1987", en Cuadernos de CAPEL, núm. 26 (Costa Rica: CAPEL).

----- (1989): "Democracia, alternancia y crisis en la Argentina", en Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm. 66, Octubre-Diciembre pp. 263-297).

----- (1989a): Sistemas Políticos de América Latina, Vol.1 (Madrid: Tecnos).

ALEN LASCANO, Luis C. (1986): Yrigoyenismo y antipersonalismo (Buenos Aires: Centro Editor de America Latina).

ALHADEFF, Peter (1986): "The Economic Formulae of the 1930's: a Reassessment", en G. DI TELLA y D.C.M PLATT (edits.), The Political Economy of Argentina: 1880-1946 (Houndmills y Londres: Macmillan).

ALLUB, Leopoldo (1974): "Industrialización, burguesía dependiente y democracia en Argentina, 1890-1930", en Revista Mexicana de Sociología, vol.36, n.2, 1974, pp.241-278.

----- (1980): "El colapso de la democracia liberal y los orígenes del fascismo colonial en Argentina", en Revista Mexicana d Sociología, vol.42, pp. 1105-1144.

ALONSO, Beatriz: La presidencia de Alvear (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983).

ALSOGARAY, Alvaro C. (1972): Bases para la acción política. Buenos Aires).

----- (1989): Bases liberales para un programa de gobierno (1989-1995) (Buenos Aies: Planeta).

ARECES, Nidia R. (1969): "La revolución de 1930" en A. CIRIA et al. La década infame (Buenos Aires: Carlos Pérez Editor).

AZARETTO, Roberto (1983): Historia de las fuerzas conservadoras (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).

BALESTRA, R. y J.L. OSSONA (1983): Qué son los partidos provinciales (Buenos Aires: Sudamericana).

BARTOLINI, Stefano (1990): "Tempo e ricerca comparata", en Rivista Italiana di Scienza Politica, año XX, n.3, diciembre, pp. 529-571.

----- y Peter MAIR (1990): Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stabilisation of European Electorates, 1885-1985 (Cambridge et al.: Cambridge University Press).

BLINKHORN, Martin (1977) "Cisma en el tradicionalismo (1876-1931)", en Historia 16. Año dos, núm. 13.

BOTANA, Natalio (1977): El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916 (Buenos Aires: Sudamericana, 1977).

----- et al. (1985): La Argentina electoral (Buenos Aires: Sudamericana).

BOURDIEU, Pierre (1990): Language and Symbolic Power (Cambridge: Harvard University Press).

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos (1992): "Economic reforms and economic growth: efficiency and politics in Latin America", en L.C. BRESSER PEREIRA, J.M. MARAVALL y A. PRZEWORSKI, Economic Reform in New Democracies: A Social-Democratic Approach (Cambridge: Cambridge University Press).

BRAILOVSKI, Antonio E. (1982): Historia de las crisis argentinas: 1880-1982 (Buenos Aires: Editorial de Belgrano).

BRAUN, Alberto (1988): El boom liberal (Buenos Aires: Astro).

BUNGE, Alejandro (1940): Una nueva Argentina (Buenos Aires: Guillermo Kraft).

CALVIÑO, Marta (1968): "Las contradicciones del Radicalismo durante la década infame", en L.A. ROMERO et alt., El Radicalismo (Buenos Aires: Carlos Pérez Editor).

CANTON, Darío (1968): Materiales para el estudio de la sociología política argentina (Buenos Aires: Instituto Di Tella).

----- (1986): El pueblo legislador. Las elecciones de 1983 (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina y Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales).

----- y José Luis MORENO (1970): "Bases sociales del voto radical en la Argentina de 1928/30", en Revista Latinoamericana de Sociología, vol.6, n.3.

----- (1972): "La experiencia radical (1916-1930)", en D. CANTON, J.L. MORENO y A. CIRIA, Historia argentina: la democracia constitucional y su crisis (Buenos Aires: Ed. Paidós).

CARO FIGUEROA, Gregorio (1970): Historia de la "Gente Decente" en el Norte Argentino (Buenos Aires: Ediciones del Mar Dulce).

CAVAROZZI, Marcelo (1976): Populismos y partidos de clase media: Notas comparativas (Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Documento CEDES/G.E.FLACSO/no.3).

----- (1986): "Political cycles in Argentina since 1955", en G. O'DONNELL, Ph. SCHMITTER y L. WHITEHEAD, Transitions from Authoritarian Rule: Latin America (Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press).

----- (1991): "Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina", en Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), núm. 74, Octubre-Diciembre 1991.

CHALMERS, Douglas A., Maria do Carmo CAMPELLO DE SOUZA y Atilio A. BORON (edits.) (1992): The Right and Democracy in Latin America (Nueva York et al.: Praeger).

CHILCOTE, Ronald H. (1981): Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm (Boulder, Col.: Westview Press).

CIRIA, Alberto (1972): "Crisis económica y restauración política (1930-1943)" en D.CANTON, J.L. MORENO y A. CIRIA, Historia Argentina. La democracia constitucional y su crisis (Buenos Aires: Paidós).

----- (1969): "Los partidos políticos durante la restauración conservadora (1930-1943)", en A. CIRIA et alt., La década infame Buenos Aires: Carlos Perez Editor).

COLLIER, Ruth Berins y David COLLIER (1991): Shaping the Political Arena (Princeton: Princeton University Press).

COLLIER, David (1991): "New Perspectives on the Comparative Method", en Dankwart A. RUSTOW y Kenneth Paul ERICKSON: Comparative Political Dynamics: Global Research Perspectives (Nueva York: Harper Collins Publishers).

CORNBLITT, Oscar (1975): "La opción conservadora en la política argentina", en Desarrollo económico, enero-marzo 1975.

CORTES CONDE, Roberto (1972): "Auge de la economía exportadora y vicisitudes del régimen conservador (1890-1916)", en E. GALLO y R. CORTES CONDE, Historia argentina: la república conservadora (Buenos Aires: Paidós).

DAHL Robert A. (1956): A Preface to Democratic Theory (Chicago: The University of Chicago Press).

----- (1971): Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven y Londres: Yale University Press).

DE RIZ, Liliana y Eduardo FELDMAN (1990): Guía del Parlamento Argentino (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert).

DEUTSCH, Sandra McGee (1986): Counterrevolution in Argentina, 1900- 1932: The Argentine Patriotic League (Lincoln y Londres: The University of Nebraska Press).

DIAZ ALEJANDRO, Carlos (1970): Essays on the Economic History of the Argentine Republic (New Haven y Londres: Yale University Press).

DI TELLA, Torcuato (1971): "La búsqueda de la fórmula política argentina" en Desarrollo Económico, núms.42-44, julio 1971-marzo 1972.

DOMAN, Fabián y Martín OLIVERA (1989): Los Alsogaray (Buenos Aires: Aguilar).

EKBOIR, Javier M., Raúl FIORENTINO y Liliana LUNARDELLI (1990): "La ocupación de la mano de obra rural en Argentina", en Desarrollo Económico, v.30, n. 119, octubre-diciembre, 1990.

ESCUDE, Carlos (1992): "Education, Political Culture, and Foreign Policy: The Case of Argentina", Duke-University of North Carolina Program in Latin American Studies Working Paper Series, n.4, October 1992.

ESMAN, Milton J. (1977): "Perspective on Ethnic Conflict in Industrialized Societies", en M.J.ESMAN (edit.), Ethnic Conflict in the Western World (Ithaca y Londres: Cornell University Press).

EVANS, Peter y John D. STEPHENS (1988): "Studying development since the sixties: the emergence of a new comparative political economy", en Theory and Society, núm. 17, pp.713-745.

FLORIA, Carlos Alberto y Cesar A.GARCIA BELSUNCE (1975): Historia de los Argentinos (Buenos Aires: Kapelusz).

----- (1988): Historia política de la Argentina contemporánea (1880-1983) (Madrid: Alianza Universidad).

FREDIANI, Ramón O. (1982): "Medición del desarrollo económico y social de las provincias argentinas" en AA.VV., La Distribución del Ingreso (Buenos Aires: Ediciones Macchi).

GALLO, Ezequiel (1976): Farmers in Revolt: The Revolutions of 1893 in the Province of Santa Fe, Argentina (Londres: The Athalone Press).

----- (1980): "Un quinquenio difícil: las presidencias de Carlos Pellegrini y Sáenz Peña (1890-1895)", en G. FERRARI y E. GALLO (comps.) La Argentina del ochenta al centenario (Buenos Aires: Sudamericana).

----- (1984): "Notas sobre el liberalismo clásico", en AA.VV., Liberalismo y sociedad. (Buenos Aires: Macchi).

----- (1986): La evolución del liberalismo argentino

(Madrid: Documentos de Trabajo, AIETI).

----- y Esteban F. THOMSEN (1992): "Electoral Evolution of the Political Parties of the Right: Argentina, 1983-1989", en CHALMERS, D.A. et al. 1992.

----- y Silvia SIGAL (1965): "La formación de los partidos políticos contemporáneos, La UCR (1891-1916)", en Torcuato S. DI TELLA et alia, Argentina, sociedad de masas (Buenos Aires: Eudeba).

GARCIA BACCA, David (1936): Introducción a la lógica moderna (Barcelona et al.: Labor).

GEORGE, Alexander L. y Timothy J. MCKEOWN (1985): "Case Studies and Theories of Organizational Decision Making", en Advances in Information Processing in Organizations, vol.2, pp. 21-58.

GERMANI, Gino (1955): Estructura social de la Argentina (Buenos Aires: Raigal).

GIBSON, Edward L. (1992): Conservative Parties and Democratic Politics: Argentina in Comparative Perspective (Columbia University. Tesis doctoral).

GOLDWERT, Marvin (1968): "The Rise of Modern Militarism in Argentina", en Hispanic American Historic Review, 48,n.2, mayo 1968, pp.184-205.

GOMEZ, Rosendo A.: "Intervention in Argentina, 1860-1930", en Inter-American Economic Affairs, vol.1, n.3, diciembre de 1947, pp. 55-73.

GONZALEZ, Martin Michel (1985): The Changing Constituency of the Unión Cívica Radical: 1914-1930 (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Tesis de Master).

GONZALEZ ARRILI, B. (1940): Vida de Lisandro de la Torre (Buenos Aires).

GONZALEZ BOMBAL, Inés (1989): El dialogo político: la transición que no fue (Buenos Aires: CEDES).

GONZALEZ ESTEVES, Luis e Ignacio LLORENTE (1985): "Elecciones y preferencias políticas en Capital Federal y Gran Buenos Aires", en Natalio BOTANA et al. (1985).

GOUREVITCH, Peter Alexander (1987): Paris and the Provinces: The Politics of Local Government Reform in France (Berkeley y Los Angeles: University of California Press).

GRONDONA, Mario (1987): Los pensadores de la libertad (Buenos Aires: Sudamericana).

HALPERIN DONGHI, Tulio (1993): "The Buenos Aires Landed Class and the Shape of Argentine Politics (1820-1930)", (mimeo).

HARDOY, Emilio (1983): Qué son los conservadores (Buenos Aires: Sudamericana).

HAYEK, Friedrich A. (1975): Los fundamentos de la libertad vol.1, (Madrid: Union Editorial).

HEGEL, Georg W. (1975): Filosofía del derecho (México: UNAM).

HOOPER, David y Kenneth WHYLD (1984): The Oxford Companion to Chess (Oxford y Nueva York: Oxford University Press).

HUNTINGTON, Samuel P. (1957): "Conservatism as an Ideology", en American Political Science Review, vol. 51, junio, pp. 454-473

IBARGUREN, Carlos (1969): La historia que he vivido (Buenos Aires: Eudeba).

JACKISH, Carlota (1990): Los partidos políticos en America Latina. Desarrollo, estructura y fundamentos programaticos. El caso argentino. (Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung y CIEDLA).

JAMES, Daniel: "Uncertain Legitimacy: The Social and Political Restraints Underlying the Emergence of Democracy in Argentina, 1890-1930", mimeo.

KRASNER, Stephen (1988): "Sovereignty: An Institutional Perspective", en Comparative Political Studies, vol. 16, pp.223-46.

LATTUADA, Mario J. (1987): Política agraria del liberalismo-conservador, 1946-1985 (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).

LEVI, Margaret y Michael HECHTER (1985): "A Rational Choice Approach to the Rise and Decline of Ethnoterritorial Parties", en Edward A. TIRYAKIAN y Ronald ROGOWSKI, New Nationalisms of the Developed West: Toward Explanation (Boston et al.: Allen & Unwin).

LEWIS, Paul H. (1990): The Crisis of Argentine Capitalism (Chapel Hill: The University of North Carolina Press).

LIJPHART, Arend (1971): "Comparative Politics and the Comparative Method", en American Political Science Review, vol.65, septiembre.

----- (1975): "The Comparable-Cases Strategy in Comparative Research", en Comparative Political Studies, vol.8, n.2, julio.

LINZ, Juan J. (1976): "Some notes toward a comparative study of fascism in sociological historical perspective", en W. LAQUEUR (edit.) Fascism: A Reader's Guide (Berkeley y Los Angeles: University of California Press).

----- (1978): The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown & Reequilibration (Baltimore: The Johns Hopkins University Press).

----- (1990): "The Perils of Presidentialism", en Journal of Democracy, vol.1, núm.1, pp.51-69.

----- y Amando DE MIGUEL (1966): "Within-Nation Differences and Comparisons: The Eight Spains", en Richard L. MERRITT y Stein ROKKAN (edits.), Comparing Nations: The Use of Quantitative Data in Cross-National Research (New Haven: Yale University Press).

LIPSET, Seymour Martin (1970): Revolution and Counterrevolution: Change and Persistence in Social Structures (Garden City: Anchor Books).

----- (1981): Political Man (Baltimore: The Johns Hopkins University Press).

----- y Stein ROKKAN (1967): "Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments" en S.M. LIPSET and S. ROKKAN (edits.) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (Nueva York y Londres: The Free Press).

LUKES, Steven (1974): Power: a Critical View (Londres: Macmillan).

LUNA, Félix (1972): De Perón a Lanusse (Barcelona: Planeta).

----- (1973): El 45 (Buenos Aires: Editorial Sudamericana).

MACPHERSON, C.B. (1981): La democracia liberal y su época (Madrid: Alianza Editorial).

----- (1984): Burke (Madrid: Alianza Editorial).

MALAMUD, Carlos (1992): "La acción parlamentaria de Lisandro de la Torre en la década de los 30" (artículo presentado al Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Los Angeles).

MANRIQUE, Francisco (1983): Qué es el Partido Federal (Buenos Aires: Sudamericana).

MANSILLA, César L. (1983): Las fuerzas del centro (Buenos

Aires: Centro Editor de América Latina).

----- (1983a): Los partidos provinciales (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).

MARCH, James G. y Johan P. OLSEN (1984): "The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life", en American Political Science Review, vol. 78, pp.734-49.

MARSAL, J.F. y M.J.ARGENT (1970): "The Right-wing Intelligentsia in Argentina: An Analysis of its Ideology and Political Activity", en Social Research, vol.37, núm.3.

MARSHALL, T.H. (1959): Class, Citizenship, and Social Development (Nueva York: Capricorn).

MARTINEZ RAYMONDA, Rafael (1983): Qué es el Partido Demócrata Progresista (Buenos Aires: Sudamericana).

MAZO, Gabriel del (1955): El Radicalismo (Buenos Aires: Raigal).

MERKX, Gilbert W. (1976): "Recessions and Rebellions en Argentina, 1870-1970", K.L. Remmer and G.W. Merckx: New Perspectives on Latin America: Political Conflict and Social Change (Nueva York: MSS Information Corporation).

MILL, James Stuart (1967): A System of Logic: Ratiocinative and Inductive (Toronto: University of Toronto Press).

MINSBURG, Naúm (1991): "La deuda externa, factor fundamental en la reestructuración de la economía argentina", en Osvaldo BARSKY y Arnaldo BOCCO (edits.) Respuesta a Martínez de Hoz (Buenos Aires: Imago Mundi).

MISES, Ludwig Von (1977): Liberalismo (Madrid: Unión Editorial).

MONTENEGRO, Nestor (1988): La alternativa liberal en la Argentina (Buenos Aires: Planeta).

MONTERO, José R. (1977): La CEDA. El catolicismo social y político en la II República (Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo).

MORA Y ARAUJO, Manuel (1985): "La naturaleza de la coalición alfonsinista", en Natalio BOTANA et al. (1985).

----- (1988): Liberalismo y democracia (Buenos Aires: Manantial).

----- (1991): Ensayo y error (Buenos Aires: Planeta).

MUSTAPIC, Ana María (1987): El Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires ante la intervención federal y la competencia democrática (mimeo).

NAGEL, Ernest (1960): "Some Issues in the Logic of Historical Analysis", en Patrick GARDINER (edit.), Theories of History (Glencoe, Illinois: The Free Press).

NUN, José (1969): Latin America: The Hegemonic Crisis and the Military Coup (Berkeley: Institute of International Studies).

O'DONNELL, Guillermo (1978): "State and Alliances in Argentina, 1956-1976", Journal of Development Studies 15, no.1 (Octubre), pp.3-33.

PAIGE, Jeffrey (1975): Agrarian Revolutions: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World (Nueva York y Londres: The Free Press).

PALERMO, Vicente (1990): "Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias de Argentina y Bolivia", en Desarrollo Económico, núm. 119, vol.30, octubre-diciembre de 1990.

----- (1990a): Federico Pinedo y la política económica argentina en la década de los treinta (Madrid: mimeo).

PALOMINO, Héctor (1987): Cambios ocupacionales y sociales en la Argentina. 1947-1985. (Buenos Aires: CISEA).

PINEDO, Federico (1946): En tiempos del la República, vol. 1 (Buenos Aires: Mundo Forense).

----- (1971): La Argentina. Su posición y su rango en el mundo, (Buenos Aires: Sudamericana).

----- (1983): "Testimonio", en F. PINEDO et al. La crisis de 1930. II. Testimonios (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina).

PIZZORNO, Alessandro (1977): "Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict", en C.CROUCH y A.PIZZORNO (edits.), The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1969 (vol.2) (Nueva York: Holmes & Meier).

----- (1988): "Los intereses y los partidos en el pluralismo", en S.BERGER (edit.), La organización de los grupos de interés en Europa Occidental: El pluralismo, el corporativismo y la transformación de la política, (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

PEÑALVA, Susana, Pedro PIREZ y Alejandro ROFMAN (1989):

"Centralización/descentralización del Estado en la Argentina", en Elsa LAURELLI y Alejandro ROFMAN (comps.) Descentralización del Estado. Requerimientos y políticas en la crisis (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert/Ediciones CEUR).

PEREZ DIAZ, Victor M. (1993): The Return of Civil Society: The Emergence of Democratic Spain (Cambridge et al.: Cambridge University Press).

POTASH, Robert A. (1969): The Army and Politics in Argentina 1928- 1945 (Stanford: Stanford University Press).

PRZEWORSKI, Adam (1991): Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge et al.: Cambridge University Press).

----- y Henry TEUNE (1970): The Logic of Comparative Social Inquiry (Nueva York: Wiley).

RAWLS, John (1985): Teoría de la Justicia (México: Fondo de Cultura Económica).

REMMER, Karen L. (1984): Party Competition in Argentina and Chile: Political Recruitment and Public Policy, 1890-1930 (Lincoln y Londres: University of Nebraska Press).

----- (1990): "Democracy and Economic Crises", en World Politics, n.42, pp. 315-335.

REULA, Filiberto (1969): Historia de Entre Ríos, tomo II (Santa Fe: Castellví).

ROCK, David (1975): Politics in Argentina, 1890-1930: The Rise and Fall of Radicalism (Cambridge: Cambridge University Press).

----- (1987): Argentina 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín (Berkeley y Los Angeles: University of California Press).

ROFMAN, Alejandro et al. (1987): Políticas estatales y desarrollo regional. La experiencia del Gobierno Militar en la región del NEA (1976-1981) (Buenos Aires: Ediciones CEUR).

ROKKAN, Stein (1990): "Towards a Generalized Concept of Verzuiling", en P. MAIR (edit.), The European Party System (Oxford et al.: Oxford University Press).

----- y Derek W. URWIN (1983): Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries (Londres et al.: Sage Publications).

RUBIO, Alberto (1982): "Distribución espacial del ingreso personal: el caso argentino (1980)" en AA.VV., La Distribución

del Ingreso (Buenos Aires: Ediciones Macchi).

RUESCHEMEYER, Dietrich, Evelyne HUBER STEPHENS y John D. STEPHENS (1992): Capitalist Development and Democracy (Chicago: The University of Chicago Press).

RUSTOW, Dankwart A. (1970): "Transitions to Democracy: toward a dynamic model", en Comparative Politics, vol.2, núm. 3, Abril.

SANCHEZ VIAMONTE, Carlos (1948): Historia Institucional de Argentina (México y Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

SANDEL, Michael (1982): Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: Cambridge University Press).

----- (1984): "The Procedural Republic and the Unencumbered Self", en Political Theory. Vol.12, núm.1, febrero.

RAGIN, Charles (1987): The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies (Berkeley et al.: The University of California Press).

SAFFORD, Frank (1985): "Politics, ideology, and society in post-Independence Spanish America", en Leslie BETHELL (edit.) The Cambridge History of Latin America (III). From Independence to c. 1870 (Cambridge: Cambridge University Press).

SARTORI, Giovanni (1976): Partidos y sistemas de partidos, 1 (Madrid: Alianza Editorial).

----- (1991): "Comparing and Miscomparing", en Journal of Theoretical Politics, vol.3, pp.243-258.

SCHMITT, Carl (1938): Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. (Hamburg: Hanseatische Verlagsgesellschaft).

SCHOULTZ, Lars (1983): The Populist Challenge: Argentine Electoral Behavior in the Postwar Era (Chapel Hill: University of North Carolina Press).

SCHVARZER, Jorge (1986): Las políticas económicas de Martínez de Hoz (Buenos Aires: Hyspamérica).

SCOTT, James C. (1985): Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven y Londres: Yale University Press).

SCULLY, Timothy R. (1992): Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth- and Twentieth Century Chile (Stanford, California: Stanford University Press).

SEARING, Donald: "Roles, Rules, and Rationality in the New Institutionalism", en American Political Science Review, vol. 85, n.4, Diciembre 1991.

SKOCPOL, Theda (1979): States and Social Revolutions (Cambridge: Cambridge University Press).

SMITH, Peter H. (1969): Politics and Beef in Argentina: Patterns of Conflict and Change (Nueva York y Londres: Columbia University Press).

----- (1974): Argentina and the Failure of Democracy: Conflict among Political Elites, 1904-1955 (Madison y Londres: The University of Wisconsin Press).

----- (1978): "The Breakdown of Democracy in Argentina", en J.J. LINZ y A. STEPAN (edits.), The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America (Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press).

TAYLOR, Carl (1948): Rural Life in Argentina (Baton Rouge: Louisiana State University Press).

----- (1988): "Propiedad y distribución de la tierra", en M. RAPOPORT (comp.), Economía e Historia: Contribuciones a la historia económica argentina (Buenos Aires: Tesis).

TCACH, César (1990): Una interpretación del peronismo periférico: el partido peronista de Córdoba (1945-1955). Buenos Aires: Documentos de Trabajo CEDES, n.54.

TEUNE, Henry (1975): "Comparative Research, Experimental Design, and the Comparative Method", en Comparative Political Studies, vol.8, n.2, julio.

TORRE, Juan Carlos (1989): "Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo", en Desarrollo Económico, n.112, Vol.28, enero-marzo, 1989.

UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO (1989). La solución es liberal: Plataforma electoral-la propuesta al país.

URQUENI, Jorge H. (h.) (comp.) (1983): Estadísticas Electorales: Argentina 1983 (Buenos Aires: Libros y Editores del Polígono SRL).

VERBITSKY, Horacio (1987): Civiles y militares (Buenos Aires: Contrapunto).

VILLANUEVA, Javier (1975): "Economic Development", en M. FALCOFF y R.H. DOLKART, Prologue to Perón: Argentina in Depression and War, 1930-1943 (Berkeley et al.: University of California Press).

WACQUANT, Loic J.D. (1993): "Making Class: The Middle Class(es) in Social Theory and Social Structure", en Scott G. MCNALL et al. Bringing Class Back In (San Francisco et al.: Westview Press).

WAISMAN, Carlos (1987): Reversal of Development in Argentina. Postwar Counterrevolutionary Policies and Their Structural Consequences (Princeton, NJ.: Princeton University Press).

----- (1992): "Argentina's Revolution from Above: State Economic Transformation and Political Realignment", en Edward C. EPSTEIN (edit.), The New Argentine Democracy: The Search for a Successful Formula (Westport y Londres: Praeger).

WALTER, Richard J. (1985): The Province of Buenos Aires and Argentine Politics, 1912-1943 (Cambridge: Cambridge University Press).

WEBER, Max (1971): "'Objectivity' in Social Science", en M. BRODBECK (comp.) Readings in the Philosophy of Social Sciences (Nueva York: Macmillan y Collier-Macmillan).

----- (1990): "The Advent of Plebiscitarian Democracy", en P. MAIR (edit.), The West European Party System (Oxford et al.: Oxford University Press).